

PACÍFICO INVISIBLE

LA COLOMBIA QUE NADIE QUIERE VER

William Ballesteros Possu
Jose Evelio Aguiño Borja
Carlos David Aguiño Mosquera



Editorial
Universidad de Nariño

èditorial
Universidad de **Nariño**

PACÍFICO INVISIBLE

La Colombia que nadie quiere ver

PACÍFICO INVISIBLE

La Colombia que nadie quiere ver

editorial

Universidad de **Nariño**

Ballesteros Possú, William

Pacífico invisible: la Colombia que nadie quiere ver / William Ballesteros Possú, José Evelio Aguiño Borja, Carlos David Aguiño Mosquera – San Juan de Pasto : Editorial Universidad de Nariño, 2026

359 páginas: Tablas

Incluye referencias bibliográficas p. 339 - 357 y reseña de los autores p. 337 - 338

ISBN: 978-628-7864-75-7 Impreso

ISBN: 978-628-7864-76-4 Digital

DOI: <https://doi.org/10.22267/lib.udn.066>

1. Pacífico colombiano – Aspectos socioeconómicos 2. Desarrollo económico inclusivo 3. Biodiversidad y recursos no aprovechados 4. Desarrollo sostenible 5. Pacífico colombiano – Conflictos territoriales 6. Minería 7. Pacífico colombiano – Comunidades – Abandono estatal. I. Aguiño Borja, José Evelio II. Aguiño Mosquera, Carlos David

330.98651 B191p – SCDD-Ed. 22



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1974



Universidad de Nariño
ACREDITADA EN ACTA CALIDAD
REGISTRADA EN MINISTRO - 19800111-01-2021

SECCIÓN DE BIBLIOTECA

PACÍFICO INVISIBLE: LA COLOMBIA QUE NADIE QUIERE VER

© Editorial Universidad de Nariño

© William Ballesteros Possu

Jose Evelio Aguiño Borja

Carlos David Aguiño Mosquera

ISBN Digital: 978-628-7864-76-4

ISBN Impreso: 978-628-7864-75-7

DOI: <https://doi.org/10.22267/lib.udn.066>

Corrector de estilo: Ricardo Erazo Mera

Diseño y Diagramación:

Alejandra Daniela Garzón Rodríguez

Contacto: alejandragarzon023@gmail.com

Liseth Alejandra Motta Realpe

Contacto: lizalejamotta@gmail.com

Fecha de publicación: Mayo de 2026

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de su Autor o de la Editorial Universidad de Nariño.

PRÓLOGO

En el corazón de Colombia se encuentra el Pacífico, una región donde selvas, ríos y océano conviven con culturas ancestrales que han resistido siglos de olvido. Allí, entre el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la biodiversidad desbordante y la creatividad de sus pueblos deberían ser un emblema de prosperidad; sin embargo, la historia la ha relegado a la periferia del desarrollo.

Este libro invita a mirar al Pacífico con respeto y admiración, no como un territorio problema, sino como un espacio de dignidad y oportunidades. Detrás de cada estadística de pobreza hay comunidades que han sabido transformar la adversidad en resiliencia: pescadores que sostienen su economía con prácticas sostenibles, mujeres que lideran procesos colectivos, jóvenes que innovan y guardianes del territorio que mantienen viva la memoria cultural.

El propósito de estas páginas es tender un puente entre el análisis crítico y la voz de sus protagonistas. Aquí se abordan los desafíos violencia, exclusión estructural, abandono estatal, pero también las soluciones que emergen desde la educación, la economía solidaria, la defensa ambiental y las prácticas ancestrales. El Pacífico no pide compasión, exige alianzas justas que reconozcan el valor de su gente y de sus ecosistemas.

Más que un diagnóstico, este libro es una herramienta de transformación. Nos recuerda que los manglares, las mingas y el currulao son más que símbolos culturales: son expresiones de resistencia y brújulas de futuro. Lo que ocurre en el Pacífico interpela a todo el país y ofrece lecciones para el mundo en un tiempo donde la justicia social y la sostenibilidad son urgencias compartidas.

Bienvenidos a un recorrido que busca visibilizar las luchas y esperanzas de una región extraordinaria. Que estas páginas inspiren a reconocer al Pacífico colombiano no como periferia, sino como el corazón palpitante de un nuevo horizonte nacional.

PRESENTACIÓN

El libro *Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie Ve* es una obra que ilumina los rincones más olvidados y, paradójicamente, más ricos en diversidad cultural y natural del país: el Pacífico colombiano. Sus autores, William Ballesteros Possu, Jose Evelio Aguiño Borja, y Carlos David Aguiño Mosquera conjugan rigor académico con un estilo narrativo accesible, ofreciendo una mirada integral y profunda de las dinámicas sociales, económicas y ambientales que definen esa región. Desde su título, el libro interpela al lector a cuestionar su percepción del Pacífico, y lo invita a descubrir una Colombia que muchas veces ha permanecido al margen del desarrollo nacional.

El texto se estructura en capítulos que abordan desde la historia invisibilizada de la región hasta su potencial como laboratorio de sostenibilidad global. Cada sección está respaldada por un marco teórico robusto que incluye la teoría de la dependencia, la justicia ambiental y el capital social, mostrando cómo esos enfoques pueden articular soluciones a los retos históricos que enfrenta la región. Este trabajo, además de un análisis crítico, se convierte en una hoja de ruta para transformar el Pacífico en un eje de desarrollo inclusivo y sostenible.

En el corazón de este libro están las comunidades afrodescendientes e indígenas que, con su riqueza cultural y prácticas ancestrales, desafían las narrativas que las han reducido a víctimas. Los autores resaltan cómo esas comunidades han sido guardianas de su territorio y de conocimientos que son claves en la lucha contra el cambio climático. Desde las mingas hasta las

iniciativas de pesca sostenible, el libro demuestra cómo el Pacífico es mucho más que un territorio; es una lección viva de resiliencia y sostenibilidad.

Un aspecto destacable de *Pacífico Invisible* es su capacidad para conectar lo local con lo global. Los desafíos del Pacífico, como el impacto del cambio climático y la violencia estructural, son temas de relevancia internacional. A través de ejemplos concretos, el libro muestra cómo las soluciones desarrolladas en esa región pueden servir de modelo para abordar problemas similares en otras partes del mundo. De esta manera, el Pacífico deja de ser una periferia para convertirse en un actor central en las discusiones en desarrollo sostenible.

La narrativa está salpicada de datos contundentes que ilustran la complejidad del Pacífico. Por ejemplo, el libro destaca que esa región alberga el 25 % de la biodiversidad del país y más del 50 % de sus manglares, pero enfrenta índices de pobreza multidimensional superiores al 50 %. Contraste entre riqueza natural y pobreza estructural que sirve como punto de partida para cuestionar las políticas públicas y la distribución de recursos en Colombia.

En el ámbito educativo, *Pacífico Invisible* denuncia la desconexión entre los currículos escolares y las realidades locales, pero propone una educación que integre saberes ancestrales con tecnología moderna. Los autores muestran cómo iniciativas educativas innovadoras pueden romper los ciclos de exclusión, que empeoran a las comunidades en la construcción de un futuro diferente. Ese enfoque educativo es transformador y susceptible de ser replicado en otras regiones marginadas del mundo.

El libro también brinda un homenaje a los líderes comunitarios, quienes, a pesar de enfrentar amenazas constantes, continúan luchando por sus derechos y por el futuro de sus territorios. Sus voces y experiencias están presentes en cada capítulo, al recordarle al lector que el cambio

real comienza desde las bases. Los autores invitan a los actores estatales y privados a trabajar en alianzas con esas comunidades, y a reconocerlas como protagonistas del desarrollo.

El capítulo dedicado a la bioeconomía y el ecoturismo es especialmente revelador. Aquí, los autores presentan casos exitosos de sostenibilidad económica que combinan conservación ambiental con generación de ingresos. Ejemplos que refuerzan la idea de que el desarrollo del Pacífico no requiere caridad, sino inversión inteligente y respetuosa con las dinámicas locales.

La obra cierra con un llamado a la acción e insta a los lectores a involucrarse en la transformación del Pacífico desde sus respectivas áreas de influencia, ya sea desde la investigación, el activismo o la inversión; Pacífico Invisible deja claro que todos tienen un papel que desempeñar en ese proceso. Los autores subrayan que la visibilidad del Pacífico no es solo un acto de justicia, sino una necesidad para el desarrollo integral de Colombia.

En definitiva, *Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie Ve* no es solo un libro; es un manifiesto, una herramienta de cambio y un puente entre las realidades locales del Pacífico y el escenario global. Su lectura informa, inspira, moviliza y transforma. Es una obra imprescindible para quienes buscan entender y actuar acerca de los desafíos y oportunidades de una de las regiones más fascinantes y resilientes del mundo.

CONTENIDO

Prólogo	6
Presentación.....	8
1. Introducción	15
2. Marco teórico.....	19
Teoría de la dependencia	20
Teoría de la modernización crítica	22
Teoría de la justicia ambiental.....	25
Teoría de la gobernanza participativa	27
Teoría del capital social.....	29
3. Metodología	39
4. Resultados y discusión	43
 <i>CAPÍTULO 01</i>	
<i>Región invisibilizada.....</i>	<i>43</i>
4.1.1. Narrativas históricas y su exclusión	43
4.1.2. La falta de infraestructura y servicios básicos	55
4.1.3. Estereotipos asociados a la región	64
 <i>CAPÍTULO 02</i>	
<i>Exclusión y abandono.....</i>	<i>75</i>
4.2.1. Análisis de políticas públicas fallidas	75
4.2.2. Impacto del abandono estatal en las comunidades	97
4.2.3. Las voces silenciadas en el pacífico	120

CAPÍTULO 03

<i>Riquezas naturales</i>	134
4.3.1. Biodiversidad y recursos no aprovechados	134
4.3.2. La minería y su impacto en el medioambiente.....	151
4.3.3. Perspectivas económicas desde los recursos naturales	173
4.3.3.1 <i>Conservación Ambiental como Pilar del Desarrollo Sostenible</i>	184
4.3.3.2 <i>Desarrollo Económico Inclusivo</i>	187
4.3.3.3 <i>Fortalecimiento Social y Gobernanza Comunitaria</i>	189
4.3.3.4 <i>Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas</i>	191
4.3.3.5. <i>Educación para Transformar: El Rol de la Educación en el Desarrollo del Pacífico Colombiano</i>	193
4.3.3.6 <i>Construyendo un Futuro de Esperanza</i>	195

CAPÍTULO 04

<i>Resiliencia social</i>	198
4.4.1. Estrategias de organización comunitaria.....	198
4.4.1.1. <i>La Salud Comunitaria y el Papel Transformador de las Parteras Tradicionales</i>	201
4.4.1.2. <i>La Seguridad Alimentaria como Pilar de Resiliencia en el Pacífico Colombiano</i>	203
4.4.1.3. <i>Cultura y Resiliencia en el Pacífico: Construyendo Identidad y Desarrollo</i>	205
4.4.1.4. <i>Liderazgo Femenino como Motor de Transformación en el Pacífico Colombiano</i>	207
4.4.2. Solidaridad en tiempos de crisis.....	209
4.4.2.1. <i>Economía Solidaria: Un Pilar de Resiliencia Comunitaria</i>	211
4.4.3. Pobreza Multidimensional y Desigualdad Estructural	213
4.4.4. Proyectos liderados por jóvenes	216

CAPÍTULO 05

<i>Conflictos territoriales</i>	219
4 5.1. La disputa por tierras y recursos.....	219

4.5.2. Impacto del narcotráfico en el territorio	225
4.5.2.1 Cooperación Internacional como Eje Transformador en el Pacífico Colombiano	228
4.5.2.2. La Conectividad Digital como Motor de Transformación Regional.....	230
4.5.2.3. Fortaleciendo la Justicia para Combatir el Narcotráfico	231
4.5.2.4. Educación Transformadora: “Un Camino hacia la Resiliencia y el Desarrollo en el Pacífico Colombiano”	239
4.5.3. Conflictos ambientales y resistencia local.....	241

CAPÍTULO 06

Líderes silenciados	246
4.6.1. Líderes comunitarios perseguidos.....	246
4.6.2. Movimientos sociales y su impacto.....	248
4.6.2.1. Impacto de los Movimientos Sociales en el Cambio Político y Social.....	251
4.6.2.2. Reconstrucción de la memoria colectiva	254

CAPÍTULO 07

El camino hacia la visibilidad.....	257
4.7.1. Estrategias para poner al Pacífico en el mapa	257
4.7.1.1. Estrategias de Visibilidad Territorial	259
4.7.1.2. Participación política y fortalecimiento institucional	261
4.7.1.3. Innovaciones en salud y bienestar social.....	264
4.7.1.4. Plataformas Digitales para el Comercio Sostenible.....	266
4.7.1.5. Ecosistemas de Startups Rurales.....	269
4.7.1.6. Creación de una Marca Región: Posicionando al Pacífico Colombiano en el Escenario Global.....	273
4.7.1.7. Estrategias de Visibilidad Económica	275
4.7.1.7.1 Desarrollo de la Economía Azul Sostenible.....	276
4.7.1.7.2. Turismo Comunitario y Sostenible: Un Motor para el Desarrollo del Pacífico	278
4.7.1.7.3. Zonas Francas de Innovación Azul.....	279

4.7.1.7.4. Centros de Innovación en Bioeconomía para el Desarrollo	281
4.7.1.7.5. Atracción de Inversión Nacional e Internacional: Transformando el Pacífico Colombiano.....	283
4.7.1.7.6. Infraestructura Verde y Conectividad Digital: El Camino Hacia la Sostenibilidad del Pacífico.....	285
4.7.1.7.7. Centros de Innovación y Emprendimiento Comunitario	287
4.7.1.7.8. Desarrollo Empresarial y Emprendimientos Sostenibles en el Pacífico Colombiano.....	290
4.7.1.8. Estrategias de Visibilidad Cultural	292
4.7.1.8.1. Circuitos Culturales y Creativos.....	292
4.7.1.9. Estrategias de visibilidad en la educación	294
4.7.1.9.1. Educación para la Innovación y el Liderazgo Comunitario	295
4.7.1.9.2. Academias de liderazgo Afro Indígena.	297
4.7.1.9.3. Red de Escuelas Fluviales para el Desarrollo Integral.....	299
4.7.1.8. Estrategias de Visibilidad Ambiental.....	301
4.7.1.8.1. Centros de Excelencia en Resiliencia Climática.....	302
4.7.1.8.2. Desarrollo de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) para la Rentabilidad y la Sostenibilidad.....	305
4.7.1.8.3. Programa de Certificación de Productos de Origen Pacífico.....	307
4.7.1.8.4. Cosechas de Esperanza: Bancos de Alimentos, un Camino hacia la Dignidad y la Sostenibilidad en el Pacífico Colombiano.....	310
5. Agradecimientos	321
6. Apreciaciones finales	324
7. Conclusiones.....	331
8. Recomendaciones.....	333
9. Sobre los autores	337
10. Referencias Bibliográficas	339

1. INTRODUCCIÓN

Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie Ve es una obra que abre un portal a una región profundamente incomprendida y vital para el futuro de Colombia. Desde sus primeras páginas, los autores invitan al lector a sumergirse en un análisis interdisciplinario que combina historia, cultura, economía y medioambiente para exponer tanto los desafíos como las oportunidades que presenta el Pacífico colombiano. Esa región, que alberga más del 50 % de los manglares de Colombia y contribuye con el 25 % de la biodiversidad nacional, no solo enfrenta problemas estructurales, sino que también emerge como un espacio de posibilidades transformadoras. ¿Cómo puede una nación que busca la equidad y la sostenibilidad ignorar una región tan estratégica?

El recorrido histórico del libro lleva a comprender cómo el Pacífico ha sido marginado por políticas públicas centralistas desde el siglo XIX. Esas decisiones, marcadas por la falta de inversión en infraestructura y servicios básicos, han perpetuado ciclos de pobreza que afectan a millones de personas. A pesar de ello, el texto destaca cómo las comunidades han encontrado maneras de resistir y reinventarse. “La historia del Pacífico no es solo de abandono, sino también de resiliencia”, afirman los autores. Ese análisis histórico sienta las bases para entender la deuda histórica del país con la región y la necesidad de un cambio estructural.

La riqueza cultural del Pacífico ocupa un lugar central en la obra. Las tradiciones musicales como el currulao, las danzas tradicionales y los saberes ancestrales, además, de ser expresiones de identidad, también son herramientas de resistencia. Los autores subrayan que esa riqueza ha sido sistemáticamente invisibilizada en las narrativas nacionales. Pese a

eso, afirman, “La cultura del Pacífico no es una reliquia del pasado; es una promesa para el futuro”. Esta reflexión plantea una pregunta clave, ¿cómo integrar esta diversidad cultural en la narrativa nacional sin comprometer su autenticidad y raíces comunitarias?

El análisis ambiental del libro refuerza la importancia del Pacífico como un actor global en la lucha contra el cambio climático. Sus manglares, que cubren más de 300.000 hectáreas, son un sumidero de carbono esencial y protegen a las comunidades costeras de inundaciones y tormentas, pero, esas riquezas naturales están constantemente expuestas a amenazas, debido a la minería ilegal, la deforestación y los megaproyectos extractivistas. Los autores plantean que el Pacífico debe ser visto como un laboratorio de sostenibilidad. “La biodiversidad del Pacífico no solo es una riqueza nacional; es un recurso para el planeta”. Ese enfoque conecta los desafíos locales con las prioridades globales.

En el ámbito educativo, el texto presenta un análisis detallado de las brechas que perpetúan la exclusión en el Pacífico. Las escuelas carecen de recursos básicos y los currículos educativos están desconectados de las realidades locales. No obstante, el libro destaca ejemplos inspiradores de proyectos que integran tecnología con saberes ancestrales para transformar la educación en la región. “La educación no es solo un derecho; es la clave para romper los ciclos de pobreza”. Este capítulo resalta la urgencia de diseñar políticas educativas que atiendan las necesidades del presente, pero que también empoderen a las generaciones futuras.

El componente económico del libro aborda tanto las limitaciones como las oportunidades del Pacífico. Los autores destacan sectores como la bioeconomía y el ecoturismo como motores potenciales de desarrollo sostenible. Un ejemplo concreto son las cooperativas de pescadores que han integrado prácticas sostenibles con mercados globales, al generar ingresos sin comprometer los ecosistemas. “El Pacífico no necesita caridad; necesita

inversión inteligente y sostenida”. Dicho análisis económico presenta un diagnóstico y una hoja de ruta para el desarrollo inclusivo de la región.

La violencia estructural que afecta al Pacífico es analizada con rigor, y evidencia cómo el abandono estatal ha facilitado el narcotráfico, los conflictos armados y los desplazamientos forzados. A pesar de ello, los autores no se limitan a describir esas problemáticas, sino que proponen soluciones prácticas, como la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los liderazgos locales. “La paz en el Pacífico no será posible sin justicia social y equidad en la distribución de recursos”. Este enfoque conecta la seguridad con el desarrollo, y subraya que ambos son inseparables.

El protagonismo de la juventud en el Pacífico es otro de los temas más esperanzadores del libro. Los jóvenes, a través de iniciativas culturales, artísticas y económicas, están liderando un cambio que desafía las narrativas de victimización. Proyectos como colectivos artísticos y emprendimientos sociales demuestran su capacidad transformadora. “La juventud del Pacífico es el presente que construye el futuro”. Este énfasis en el liderazgo juvenil inspira y también subraya la importancia de canalizar recursos para potenciar su impacto.

El papel de las mujeres en la preservación del tejido social y cultural del Pacífico es destacado como esencial para el desarrollo de la región. Desde liderar procesos comunitarios hasta resistir las dinámicas de violencia, las mujeres han demostrado ser pilares fundamentales. Por ello, el libro enfatiza que las políticas públicas deben garantizar una mayor equidad de género. “El futuro del Pacífico será sostenible solo si las mujeres tienen un lugar central en su construcción”. Este análisis visibiliza sus aportes y subraya la necesidad de fortalecer su participación.

El cierre del libro es un llamado contundente a transformar el Pacífico en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Los autores exponen los

problemas, e igualmente proponen una hoja de ruta concreta que incluye alianzas entre el Estado, las comunidades y el sector privado. “El Pacífico no necesita más promesas; necesita acciones concretas”. Este mensaje final interpela al lector, y lo posiciona como un posible agente de cambio.

En esencia, *Pacífico Invisible* no es solo un análisis crítico, sino una invitación a reimaginar el desarrollo de una región crucial para Colombia y el mundo. Con una narrativa que combina datos contundentes y reflexiones humanas, el libro no deja espacio para la indiferencia. Su lectura amplía la comprensión acerca del Pacífico y desafía al lector a actuar. ¿Estamos listos para responder a este llamado y construir un futuro en el cual el Pacífico deje de ser invisible?

2. MARCO TEÓRICO

El marco teórico de Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie quiere Ver se fundamenta en la necesidad de explicar las dinámicas complejas que configuran la realidad del Pacífico colombiano desde perspectivas multidimensionales. Ese enfoque permite desentrañar las estructuras históricas y contemporáneas que han mantenido a esa región en los márgenes del desarrollo, mientras también resalta sus resistencias, potencialidades y posibilidades de transformación.

Para comprender esas dinámicas, el marco teórico se construye a partir de cuatro teorías fundamentales que ofrecen herramientas analíticas y explicativas. En primer lugar, la teoría de la dependencia analiza las relaciones económicas y políticas desiguales que perpetúan la subordinación de las regiones periféricas, como el Pacífico, frente a los centros de poder nacional e internacional. Ese enfoque permite explorar cómo la explotación de recursos naturales y la falta de inversión en infraestructura han contribuido a perpetuar el subdesarrollo de dicha región.

En segundo lugar, la teoría de la gobernanza participativa resalta el protagonismo de las comunidades locales en la toma de decisiones y la gestión territorial. Desde los consejos comunitarios hasta las mingas colectivas, esa teoría permite visibilizar cómo las prácticas ancestrales y los liderazgos locales han sido esenciales para resistir el abandono estatal y construir alternativas de desarrollo inclusivo y sostenible.

Por otra parte, la teoría de la justicia ambiental pone en evidencia las desigualdades en la distribución de los impactos ambientales y las crisis climáticas. En el contexto del Pacífico, esa perspectiva permite

entender cómo las actividades extractivistas, el cambio climático y las políticas públicas insuficientes han agravado las condiciones de vida de sus comunidades, mientras desarrollan estrategias innovadoras de resiliencia y conservación.

Finalmente, la teoría del capital social invita a reflexionar acerca de la importancia de las redes de cooperación y confianza en la región. A través de prácticas colectivas como la pesca sostenible, las asociaciones de mujeres y las mingas, esa teoría destaca cómo las comunidades han utilizado su capital social para enfrentar las adversidades y generar oportunidades, incluso en medio de condiciones de exclusión estructural.

El marco teórico proporciona un análisis crítico de las problemáticas que enfrentan las comunidades del Pacífico colombiano, y también señala caminos para su transformación. Al entrelazar esas teorías, se construye una base sólida que guía la reflexión de las causas, consecuencias y posibilidades de cambio en esa región históricamente invisibilizada.

TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

La Teoría de la Dependencia, marco analítico elaborado por autores fundamentales como Dos Santos (2002) y Cardoso & Faletto (2002), proporciona una perspectiva sólida para entender cómo las relaciones económicas desiguales entre centros y periferias perpetúan el subdesarrollo. En el contexto del Pacífico colombiano, esta óptica es clave para analizar cómo su vasta riqueza natural y cultural ha sido históricamente explotada y descapitalizada para beneficio de actores y centros de poder externos, mientras las comunidades locales permanecen en condiciones de pobreza estructural. Según Cardoso & Faletto (2002), estas dinámicas no son incidentales, sino estructurales, arraigadas en modelos económicos extractivistas que perpetúan la desigualdad y la dependencia.

El libro *Pacífico Invisible* detalla cómo el Pacífico ha sido sistemáticamente relegado en las políticas económicas nacionales, un fenómeno que

encaja perfectamente en las ideas centrales de la Teoría de la Dependencia. Por ejemplo, la minería ilegal y la explotación de recursos naturales en la región han priorizado históricamente los intereses del mercado global y de los centros de poder, mientras que las comunidades locales enfrentan los impactos ambientales y sociales. Este tipo de dependencia no solo empobrece económicamente a la región, sino que también limita su capacidad para construir un desarrollo sostenible. En esta clave, Restrepo (2010) subraya que las políticas de titulación colectiva de tierras en el Pacífico se vieron obstaculizadas por el conflicto y la presión extractiva, lo cual confirma cómo las dinámicas de dependencia se anclan en la disputa por el control territorial y la subordinación económica.

Además, la falta de infraestructura y acceso a servicios básicos mencionada en el libro refuerza las barreras estructurales de la dependencia. El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023) indica que solo un estimado del 15 % de las vías del Pacífico están pavimentadas, lo que dificulta críticamente la integración económica y social de la región con el resto del país. Esa situación no es un accidente, sino una clara manifestación del centralismo que caracteriza la economía colombiana y que encaja en el patrón de la dependencia: al no invertir en la conectividad de la periferia, el centro asegura que el Pacífico siga siendo un proveedor de recursos primarios y no un competidor económico plenamente integrado, tema recurrente en los análisis del libro.

Para superar esas dinámicas, *Pacífico Invisible* propone alternativas que se alinean con los principios de la teoría de la dependencia, como la promoción del desarrollo endógeno. Cardoso & Faletto (2002) argumentan que el fortalecimiento de capacidades locales y la reducción de la subordinación a los mercados externos son esenciales para romper el ciclo de la dependencia. Iniciativas como las cooperativas de pesca sostenible descritas en el libro son ejemplos concretos de cómo las comunidades del Pacífico pueden liderar modelos económicos inclusivos y respetuosos con el medioambiente.

Sin embargo, el cambio estructural necesario para transformar la realidad del Pacífico no puede lograrse sin enfrentar las dinámicas globales que perpetúan la dependencia. En este marco, la perspectiva de la Ecología Política es indispensable: como advierte Martínez-Alier (2022a), el cambio climático y las crecientes demandas del mercado internacional aumentan la presión sobre regiones periféricas con alta biodiversidad, como el Pacífico colombiano, intensificando los conflictos ecológicos distributivos. El libro destaca, de manera acertada, que la integración de esas comunidades en la planificación y gobernanza es crucial no solo para enfrentar estos desafíos ambientales, sino para revertir la deuda ecológica histórica que el centro tiene con el territorio, asegurando así un desarrollo sostenible y justo.

En última instancia, la Teoría de la Dependencia ofrece un marco poderoso para comprender y transformar las dinámicas económicas que han marginado históricamente al Pacífico colombiano. Al visibilizar la forma en que las estructuras extractivas se articulan con el centro global, el libro *Pacífico Invisible* se convierte en un contundente llamado a la acción. Exige tanto un cambio profundo en la gobernanza local y en los patrones de inversión, como un replanteamiento radical de las relaciones globales que perpetúan las desigualdades. La superación del subdesarrollo en el Pacífico pasa, necesariamente, por la ruptura con las ataduras de la dependencia.

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN CRÍTICA

La teoría de la modernización crítica cuestiona los modelos de desarrollo que imponen dinámicas globales en contextos locales, al ignorar las particularidades culturales y socioeconómicas. En el caso del Pacífico colombiano, esta teoría permite analizar cómo los proyectos de infraestructura y desarrollo económico han marginado a las comunidades, priorizando intereses externos. Como advierte Escobar (2010), esta forma de “modernización extractivista” perpetúa desigualdades y socava las bases culturales y ambientales de las regiones periféricas. El libro *Pacífico*

Invisible expone ejemplos concretos de cómo la modernización tradicional ha fracasado en el Pacífico, pues proyectos como la construcción de vías y puertos se han diseñado para facilitar el comercio internacional, ignorando las necesidades locales.

El fracaso de la modernización tradicional se evidencia en el desequilibrio de la inversión. Análisis recientes indican que, históricamente, una proporción dominante de los recursos destinados al desarrollo en el Pacífico ha priorizado sectores extractivistas, mientras que la inversión en infraestructura social básica, como salud y educación, ha sido insuficiente. Esta persistencia de un enfoque centralista que prioriza la extracción sobre el bienestar social refuerza las barreras estructurales de la dependencia, tal como lo ha documentado el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023) en su diagnóstico sobre la desigualdad regional.

Un aspecto clave de la modernización crítica es la necesidad de integrar las voces locales en los procesos de desarrollo. La literatura sobre la gestión territorial en Colombia subraya que las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico poseen un profundo conocimiento de su territorio que es esencial para diseñar modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles. Prácticas como las mingas y los consejos comunitarios ofrecen un marco para construir infraestructuras que respeten tanto el entorno natural como las dinámicas sociales. El libro enfatiza que la modernización no debe ser sinónimo de homogenización. Las políticas de desarrollo deben reconocer y fortalecer las prácticas económicas locales (pesca artesanal, agricultura tradicional) en lugar de sustituirlas, avanzando hacia un modelo que valore la diversidad cultural como su principal activo estratégico.

Además, el libro enfatiza que la modernización no debe ser sinónimo de homogenización. Las políticas de desarrollo en el Pacífico han intentado imponer modelos externos, ignorando las particularidades culturales y económicas de la región. Esta imposición ha generado una fuerte

resistencia y también ha debilitado las bases económicas locales, como la pesca artesanal y la agricultura tradicional. Como propone Sachs (1996), la modernización crítica debe reconocer que el desarrollo es una ideología estandarizadora; por lo tanto, es vital fortalecer las prácticas endógenas y el conocimiento local en lugar de sustituirlas, pues son estas las que definen la identidad, la resiliencia y la sostenibilidad del territorio.

La teoría de la modernización crítica también subraya la importancia crítica de la sostenibilidad ambiental en cualquier modelo de desarrollo que se pretenda justo. En el Pacífico, la explotación indiscriminada de recursos ha llevado a la degradación de ecosistemas únicos, como los manglares, lo que constituye un conflicto ecológico distributivo. *Pacífico Invisible* aboga por un enfoque que integre la conservación ambiental como un eje central del desarrollo. Este enfoque, enmarcado en la ecología política latinoamericana (Hincapié, 2022), sostiene que la sostenibilidad no solo es éticamente necesaria, sino también económicamente viable a largo plazo, ya que asegura la permanencia de los servicios ecosistémicos y previene la deuda ecológica que impacta la productividad futura.

Finalmente, el libro sugiere que la modernización crítica debe ser concebida como un proceso bidireccional y de aprendizaje global, en la cual las dinámicas globales y las élites centrales tienen la obligación de aprender de las prácticas locales. En ese sentido, el Pacífico colombiano puede y debe convertirse en un laboratorio viviente para modelos de desarrollo que integren de manera indisoluble la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el profundo respeto cultural. Este enfoque transformador no solo beneficia a las comunidades del litoral al asegurar su dignidad, sino que ofrece lecciones valiosas y urgentes para otras regiones del mundo que enfrentan la crisis de un modelo de desarrollo fallido. El Pacífico, por lo tanto, no es la periferia de Colombia, sino la vanguardia de la sostenibilidad global.

TEORÍA DE LA JUSTICIA AMBIENTAL

La Teoría de la Justicia Ambiental proporciona un marco ineludible para analizar la profunda inequidad que vive el Pacífico colombiano. Nuestro análisis confirma que la explotación de recursos y la contaminación del territorio no son fenómenos al azar: afectan de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Esta es una doble carga que socava la dignidad, pues, como argumenta Martínez-Alier (2002a), estas comunidades no solo cargan con los impactos destructivos del extractivismo (el racismo ambiental), sino que se les niega sistemáticamente el acceso a los beneficios económicos generados. Este es un conflicto ecológico distributivo que exige una justicia reparativa y el reconocimiento del valor intrínseco de sus territorios.

El libro *Pacífico Invisible* ilustra cómo las dinámicas extractivistas, la minería ilegal y la tala de manglares han devastado ecosistemas críticos, afectando los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades locales. La deforestación y la contaminación de los ríos no solo destruyen la biodiversidad, sino que también socavan la salud de las comunidades, exacerbando las condiciones de pobreza. Estas prácticas reflejan lo que Acosta (2012) describe como la ecología política del extractivismo, donde las regiones históricamente marginadas asumen los costos ambientales y la deuda ecológica, sin recibir beneficios. De hecho, la Corte Constitucional de Colombia (2016), al dictar la Sentencia T-622, reconoció que la actividad minera ilegal en la cuenca del Río Atrato ha generado graves afectaciones a la salud y a la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, elevando este conflicto ambiental a la categoría de violación de Derechos Fundamentales.

Un aspecto clave de la teoría de la justicia ambiental es la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones ambientales. En el Pacífico, los consejos comunitarios han liderado iniciativas para

conservar los manglares y proteger los recursos hídricos, para demostrar que las soluciones locales son fundamentales al enfrentar los problemas ambientales globales. Para Molina (2014), es fundamental que el Estado provea los mecanismos necesarios para involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el hábitat y los recursos naturales con los que cohabitan en sus localidades. Asimismo, la gobernanza ambiental se concibe desde el orden local, ya que presenta una fuerte facilidad para crear tejido social en simbiosis con el medio ambiente. Es por ello que, como hallazgo de su estudio, Pérez-Niño (2021) propone que estas iniciativas promueven la sostenibilidad y el fortalecimiento de la identidad cultural y la cohesión social de las comunidades. Además, el fortalecimiento de la sociedad civil es vital para participar en estos mecanismos en representación de los intereses de la naturaleza, pues la gobernanza ambiental requiere la interacción de instituciones gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil. Molina (2014) destaca que los actores sociales utilizan herramientas de concertación y negociación para fortalecer la gobernanza en el país.

El Pacífico colombiano, con su extraordinaria biodiversidad y vastos recursos naturales, tiene el potencial innegable de convertirse en un modelo de sostenibilidad ambiental. El libro *Pacífico Invisible* destaca cómo la integración de las prácticas ancestrales de manejo del territorio, como la pesca artesanal y el uso sostenible de los bosques, ofrece soluciones innovadoras a los desafíos ambientales. Sin embargo, para que estas prácticas se traduzcan en un modelo de desarrollo sostenible y endógeno, es crucial superar la invisibilidad estadística de sus poblaciones. Tal como señalan López y Traldi Simoni (2025), la falta de inclusión de los pueblos afrodescendientes en los censos y las encuestas nacionales representa un desafío estructural que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas efectivas y asignar los recursos necesarios, obstaculizando el empoderamiento real de estas comunidades para liderar el cambio territorial.

Así mismo, la teoría de la justicia ambiental resalta la importancia de la educación y la sensibilización para promover un cambio cultural hacia la sostenibilidad. Integrar la educación ambiental en las escuelas y programas comunitarios es esencial para construir una ciudadanía consciente y comprometida con la conservación. En el contexto colombiano, Flórez-Yepes (2015) subraya que la educación se constituye en una fortísima herramienta para el desarrollo de una conciencia ecológica y el fomento de prácticas sostenibles en tiempos de crisis ambiental. El libro sugiere que estas estrategias deben ser una prioridad en el Pacífico, no solo para enfrentar las crisis ambientales actuales, sino para garantizar un futuro más equitativo y sostenible.

TEORÍA DE LA GOBERNANZA PARTICIPATIVA

La gobernanza participativa enfatiza la necesidad de incluir a las comunidades locales en la toma de decisiones para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible. El libro *Pacífico Invisible* resalta cómo esta teoría se materializa en las prácticas comunitarias del Pacífico colombiano, especialmente, a través de los consejos comunitarios afrodescendientes, que actúan como mecanismos de resistencia frente a la explotación y el abandono estatal. De Castro y Meisel (2018) sostienen que la gobernanza ambiental en América Latina requiere la inclusión activa de la sociedad civil y el análisis de las políticas públicas en contextos de descentralización, donde la participación de los actores locales es esencial para el manejo de los recursos y la generación de un desarrollo con pertinencia territorial.

El libro *Pacífico Invisible* destaca que los consejos comunitarios protegen los derechos territoriales, a la vez que lideran iniciativas para la conservación ambiental y la cohesión social. Borges-Huanca et. al (2024) sostienen que estas estructuras representan un modelo de gobernanza adaptativa que integra los saberes ancestrales y las estrategias modernas para gestionar los recursos y enfrentar amenazas externas, como la minería

ilegal y la deforestación. Este enfoque permite que las comunidades sean protagonistas no solo en la planificación y ejecución de proyectos que afectan su territorio, sino que consolida los procesos de defensa territorial comunitaria como un pilar fundamental para la construcción de paz ambiental en el país.

Sin embargo, el libro *Pacífico Invisible* también subraya los desafíos que enfrentan esas formas de gobernanza, como la falta de recursos y el constante acoso a los líderes sociales. La violencia sistemática contra líderes del Pacífico no solo pone en riesgo a individuos, sino que también debilita las estructuras comunitarias y perpetúa la marginalización. Durán (2009), por ejemplo, destaca cómo el debate de intereses entre los grupos étnicos y los actores privados en áreas protegidas, sumado a la reclamación de soberanía sobre el territorio, va en contra de un modelo adecuado de ejercicio de la gobernanza ambiental. En este contexto, los obstáculos evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades locales mediante la formación técnica y el acceso a financiación adecuada.

El papel de la gobernanza participativa en el Pacífico se extiende más allá de la gestión de recursos. Arocha (1999) señala que estas prácticas son fundamentales para preservar la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes e indígenas, al integrar elementos como la música, la danza y la espiritualidad en los procesos de toma de decisiones territoriales. Este enfoque holístico es esencial para construir un desarrollo que sea no solo económicamente viable, sino también culturalmente significativo y arraigado. La defensa del territorio se convierte, así, en la defensa de una forma de vida que entrelaza la autonomía política con el acervo simbólico del grupo étnico.

El Pacífico colombiano se distingue por haber desarrollado formas de gobernanza territorial que son un ejemplo de resiliencia y sostenibilidad. Un ejemplo clave de ello es la gestión comunitaria de los manglares,

una práctica que combina la conservación ambiental con el desarrollo económico a través de la pesca sostenible. Estas iniciativas demuestran el poder de la autonomía local. La geógrafa Hoffmann (2007), al analizar las innovaciones y dinámicas étnicas en la región, argumenta que los territorios colectivos otorgados a las comunidades negras funcionan como espacios de experimentación política donde las comunidades construyen nuevas formas de relación con el Estado y el mercado. Por lo tanto, el libro aboga por la institucionalización de esas prácticas, al integrarlas en políticas públicas que reconozcan y fortalezcan los liderazgos locales. El éxito de estas estrategias depende de la capacidad de esas innovaciones territoriales para influir en los procesos políticos del orden nacional, asegurando que la voz y la experiencia del Pacífico sean valoradas en la construcción del futuro de Colombia.

TEORÍA DEL CAPITAL SOCIAL

La Teoría del Capital Social ofrece una óptica poderosa para analizar las dinámicas internas del Pacífico colombiano. Desde la perspectiva de Bourdieu (1986), el capital social no es solo una cuestión de buena voluntad cívica, sino un recurso estratégico que se adquiere a través de la pertenencia a un grupo y de redes de relaciones duraderas. Estas redes de confianza y cooperación dentro de una comunidad son esenciales para promover el desarrollo económico y social, especialmente donde el capital económico es escaso. En el caso del Pacífico colombiano, esta teoría es particularmente relevante debido al papel central que desempeñan las estructuras comunitarias, los Consejos Comunitarios y las organizaciones de base en la vida cotidiana. Como afirma Bourdieu (1986), el capital social es la suma de los recursos reales o potenciales que se obtienen de la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Esta capacidad de las comunidades para organizarse y movilizar sus redes para la pesca sostenible, la defensa del territorio o la minga es lo que el libro *Pacífico Invisible* resalta como

una fortaleza inherente de la región: un activo que les permite enfrentar la exclusión y resolver colectivamente problemas comunes.

La Teoría halla una de sus manifestaciones más elocuentes en las prácticas ancestrales de trabajo colectivo del Pacífico. El libro describe cómo la minga y otras formas de cooperación, como el “cambio de mano”, reflejan la riqueza del capital social en la región, en cuanto esas actividades fortalecen los lazos comunitarios y permiten a las comunidades afrontar desafíos como la falta de infraestructura o recursos estatales. Para el antropólogo colombiano Restrepo (2004), estas sólidas redes de reciprocidad e intercambio que se circunscriben a las redes parentales y vecinales son fundamentales, ya que permiten la producción directa o el acceso a recursos necesarios. Así, estas prácticas de trabajo colectivo son una manifestación concreta de cómo el capital social no solo genera identidad, sino que también produce soluciones efectivas y sostenibles, permitiendo a las comunidades afrodescendientes afrontar la marginación estructural y resistir la presión de las lógicas económicas meramente monetarias.

Al respecto, el libro *Pacífico Invisible* señala que el capital social en la región, a pesar de su histórica resiliencia, enfrenta amenazas constantes, como la violencia y el desplazamiento forzado, que debilitan las redes de cooperación. El sociólogo Valencia-Gutiérrez (2012), heredero de la tradición de análisis de *La Violencia* en Colombia de Guzmán, Fals Borda y Umaña, argumenta que el conflicto actual es un síntoma de una “frágil configuración de lo público” que ha persistido por décadas. Esta precariedad institucional en el Pacífico se manifiesta en la ausencia de mecanismos de regulación y mediación en las relaciones sociales. Según Valencia-Gutiérrez (2012), la violencia, exacerbada por actores armados y economías ilegales como el narcotráfico y la minería, desarticula las comunidades y erosiona la confianza, que es la base fundamental del capital social. Al carecer de una autoridad estatal reconocida, las confrontaciones quedan “abocadas a su propia suerte”, lo que imposibilita la acción colectiva y destruye el tejido social que las mingas y la cooperación ancestral se esfuerzan por mantener.

Otro aspecto importante de esta teoría, con gran potencial de aplicación en el Pacífico, es su capacidad para promover el desarrollo económico y social desde la base. James Coleman (1988), en su definición funcional del concepto, enfatiza que el capital social es un recurso invaluable para los actores, ya que las redes facilitan el acceso a recursos y oportunidades, especialmente en contextos de exclusión. En el Pacífico, las cooperativas de pescadores, las asociaciones de mujeres y las juntas de acción comunal descritas en el libro son ejemplos perfectos de cómo las comunidades han utilizado el capital social para generar ingresos y mejorar su calidad de vida, incluso ante la ausencia histórica de apoyo estatal. Estas redes cerradas y densas, al generar confianza y obligaciones mutuas, suplen la falta de capital físico o humano, permitiendo a sus miembros acceder a canales de información, compartir riesgos y emprender proyectos colectivos que, de otra forma, serían inviables.

Además, el libro *Pacífico Invisible* resalta el papel central del capital social como una estrategia de conservación ambiental en el Pacífico. El vínculo profundo que las comunidades tienen con su territorio se traduce en prácticas sostenibles, pero esta gestión solo es necesaria porque el Estado no cumple su rol. El sociólogo Valencia-Gutiérrez (2012), en su análisis sobre la persistencia del conflicto, diagnostica la “frágil configuración de lo público” en el país, señalando que la autoridad legítima del Estado no es reconocida en muchas zonas, lo que deja a las relaciones sociales sin mecanismos de regulación y mediación. Ante este vacío institucional en la gobernanza ambiental, el capital social de la comunidad emerge como un mecanismo de supervivencia colectiva: iniciativas como la pesca artesanal y la gestión comunitaria de los manglares son ejemplos de cómo la confianza y las redes locales se activan para preservar el ecosistema y fortalecer el tejido social, supliendo de facto la ausencia de la autoridad para la conservación.

La teoría del capital social no es solo un diagnóstico de la resiliencia local, sino una hoja de ruta para la acción estatal. El libro aboga por que

estas redes de reciprocidad y confianza sean apoyadas y amplificadas por políticas públicas que las reconozcan y fortalezcan formalmente. Los académicos Fung y Wright (2003), pioneros en el concepto de Gobernanza Participativa Empoderada, plantean que las instituciones pueden y deben desempeñar un papel clave al facilitar el acceso a recursos y crear espacios para la participación comunitaria que realmente tengan poder de decisión. En este sentido, Pacífico Invisible aboga por un enfoque de desarrollo que valore y potencie el capital social del Pacífico como una herramienta esencial para superar la exclusión histórica. La clave no está en que el Estado “ayude” a las mingas, sino en crear marcos institucionales que permitan a estas estructuras comunitarias (cooperativas, consejos comunitarios) articular sus prácticas de capital social en el orden nacional, construyendo así un futuro sostenible desde el empoderamiento legítimo.

La exclusión histórica del Pacífico colombiano está profundamente enraizada en la construcción etnocéntrica y centralista de la narrativa nacional que ha privilegiado históricamente a las regiones andinas como el centro del desarrollo cultural y económico de Colombia. Este proceso ha relegado a la región del Pacífico a un papel marginal, donde su rica biodiversidad y su compleja herencia cultural afrodescendiente han sido sistemáticamente invisibilizadas. Esta omisión no es casual, sino que, como lo desarrolla Nancuante-Benavente (2022) en su análisis sobre los currículos y los imaginarios oficiales, responde a una dinámica de poder que impone una visión hegemónica de nación. Al no integrar la perspectiva y el conocimiento de los pueblos del Pacífico en la historia oficial, se perpetúan desigualdades estructurales y un desconocimiento profundo de las realidades locales, lo que justifica de manera simbólica el abandono estatal.

La narrativa dominante ha ignorado sistemáticamente la contribución del Pacífico a la formación del país, minimizando sus aportes históricos (como el oro durante la Colonia) y relegando expresiones culturales

como el currulao y las mingas al ámbito folclórico. Esta invisibilidad es una estrategia de poder que se extiende hasta la guerra. El antropólogo Restrepo (2004) es contundente al señalar que la dimensión étnica de las dinámicas de la guerra y la violencia en el Pacífico colombiano ha sido sistemáticamente invisibilizada en las narrativas y análisis que circulan en los medios de comunicación masivos en el país. Esta doble negación la del aporte económico histórico y la de la vulneración específica de los pueblos perpetúa una exclusión estructural y un desconocimiento profundo de las realidades locales, impidiendo que el Pacífico sea visto como un territorio con capacidad de resistencia y poder político.

La construcción de esas narrativas ha tenido un impacto directo en las políticas públicas, que han sido diseñadas desde un enfoque centralista. Este modelo ha priorizado las necesidades de las regiones andinas, dejando al Pacífico con una inversión insuficiente en infraestructura y servicios sociales (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023). Como resultado, los índices de pobreza multidimensional en el Pacífico superan el 50 %, evidenciando las consecuencias de esta marginación (Defensoría del Pueblo, 2024).

Los estereotipos han jugado un papel importante y pernicioso en la exclusión del Pacífico. Representaciones que asocian a la región con el atraso, la violencia y la precariedad han desalentado la inversión, limitado las oportunidades y, por ende, profundizado las brechas de desarrollo. Pero el impacto es más profundo: estas percepciones refuerzan el racismo estructural que subyace a la invisibilidad histórica. El antropólogo Rojas (2020) argumenta que tales estereotipos, al simplificar la complejidad social y cultural de las comunidades afrodescendientes e indígenas, afectan la “autoestima colectiva” y el sentido de valía de sus habitantes. Es decir, las representaciones no solo justifican el abandono estatal y la falta de inversión, sino que también generan un daño inmaterial al transformar la diferencia en desigualdad, impactando la capacidad de agencia de las comunidades.

La exclusión histórica del Pacífico colombiano no solo se mantiene por la omisión de narrativas, sino por la ineficacia real de las políticas públicas diseñadas para la región. La narrativa dominante ha ignorado la contribución del Pacífico a la formación del país y ha relegado sus expresiones culturales al folclor. Sin embargo, cuando el Estado interviene, a menudo lo hace de manera superficial. La antropóloga Martínez (2019), en su etnografía sobre la política pública afrodescendiente en Cali, constata la “eficacia simbólica de las ceremonias públicas en tanto actos de teatralización de lo oficial”. Es decir, la exclusión persiste porque el diseño e implementación de las políticas se convierten en un proceso negociado que tiene más de puesta en escena que de transformación estructural. Esta dinámica de poder perpetúa las desigualdades y un desconocimiento profundo, al no permitir que las voces y las estructuras de gobernanza del Pacífico (como los Consejos Comunitarios) incidan genuinamente en las decisiones que buscan romper el ciclo del olvido.

Es crucial reconocer que las narrativas históricas moldean la percepción de la región e influyen en las políticas que la afectan. Incluir las historias del Pacífico en el discurso oficial, valorando sus aportes y reconociendo sus estructuras de gobierno, podría fomentar una mayor inversión en proyectos sociales y culturales. El antropólogo Restrepo (2016), en su análisis sobre los estudios afrocolombianos, refuerza esta postura al argumentar que el desafío actual es ir más allá de la simple inclusión: se requiere un cambio epistémico que reconozca los saberes del Pacífico como una fuente de conocimiento legítimo. Este enfoque es la clave para la reconciliación nacional, necesaria en un país con tantas brechas territoriales, pues implica integrar al Pacífico no solo en el mapa, sino en la conciencia y la teoría social de la nación.

En síntesis, la exclusión histórica y narrativa del Pacífico perpetúa desigualdades y limita el potencial de desarrollo de la región. Es fundamental reformular esas narrativas para integrar al Pacífico como un actor central en la historia y el futuro de Colombia.

El abandono estatal ha tenido consecuencias devastadoras para el desarrollo integral del Pacífico colombiano. La falta de inversión en infraestructura y servicios básicos ha profundizado las desigualdades sociales y económicas en la región. El DNP (2023), establece que solo el 15 % de las vías en el Pacífico están pavimentadas, lo que limita la movilidad y el acceso a mercados.

La ausencia de infraestructura tiene un impacto directo y grave sobre los servicios educativos y de salud en el Pacífico colombiano. En el ámbito educativo, muchas escuelas operan en condiciones precarias, con instalaciones insuficientes y acceso limitado a tecnología, lo que perpetúa un ciclo de exclusión y limita las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones (Ministerio de Educación Nacional, 2023). Esa situación reduce la calidad de la educación impartida y afecta la retención escolar, especialmente en las zonas rurales.

En el sector salud, la realidad no es menos alarmante. El 40 % de las comunidades rurales carece de acceso a atención primaria, una carencia que se traduce en el agravamiento de enfermedades prevenibles y en una mayor vulnerabilidad ante emergencias sanitarias (Ministerio de Salud, 2023a). Ese contexto refleja un abandono sistemático que pone en riesgo la vida de las personas y perpetúa las desigualdades regionales. Una inversión sostenible en infraestructura educativa y sanitaria es urgente para romper los ciclos de exclusión y garantizar condiciones mínimas de bienestar.

La desconexión digital es otro obstáculo significativo que afecta profundamente el desarrollo integral del Pacífico colombiano. Solo el 25 % de las áreas rurales de la región tienen acceso a internet, lo que limita considerablemente las oportunidades en educación virtual, telemedicina y comercio electrónico (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2023). Ese aislamiento tecnológico margina a las comunidades de los avances globales y perpetúa las desigualdades

intergeneracionales, al privar a los jóvenes de herramientas educativas modernas. Además, la falta de conectividad digital afecta directamente la capacidad de las comunidades para participar en mercados globales y aprovechar los beneficios del comercio electrónico, hecho que limita su competitividad.

Incluso, la brecha digital obstaculiza el acceso a servicios básicos innovadores como la telemedicina, que podría ser una solución viable para contrarrestar la falta de infraestructura hospitalaria en la región. Al carecer de conectividad, las comunidades rurales enfrentan barreras en el acceso a la salud y se ven limitadas en su capacidad para generar proyectos de desarrollo sostenible basados en tecnologías de información y comunicación (TIC). Así, abordar esa desconexión digital es crucial para reducir las disparidades sociales y promover un crecimiento inclusivo en el Pacífico colombiano.

Las políticas públicas diseñadas desde un enfoque centralista han fracasado sistemáticamente en abordar las necesidades específicas del Pacífico. Programas universales como “Salud para Todos” o iniciativas educativas masivas no consideran las particularidades culturales, sociales ni geográficas de la región, lo que refleja una profunda falta de perspectiva contextual en su diseño. Esta desconexión entre las iniciativas gubernamentales y las realidades locales subraya, como demuestran Revelo-Rebolledo y García-Villegas (2018) en su análisis sobre la debilidad institucional en la periferia, la incapacidad del Estado central para “convertir la ley en vida y la política en hecho”. Ante este fracaso institucional, la solución no es más centralización, sino adoptar enfoques como el de la gobernanza adaptativa, que permite una mayor flexibilidad en la implementación de políticas y considera las especificidades culturales y ambientales de cada región, asegurando que el Estado se adapte al territorio y no al revés.

La corrupción también ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo del Pacífico. Proyectos de infraestructura en Tumaco, Guapi y

Buenaventura han sido empañados por sobre costos y desvío de recursos, dejando a las comunidades sin acceso a servicios esenciales (Transparencia por Colombia, 2023). Ese fenómeno puede entenderse desde la perspectiva de las teorías de gobernanza corrupta, que explican cómo la captura de recursos por élites políticas y económicas perpetúa ciclos de desigualdad y exclusión. Igual, la falta de transparencia y supervisión efectiva en la ejecución de proyectos debilita la confianza de las comunidades en las instituciones estatales, al exacerbar la fragmentación social y la marginalización.

La falta de un enfoque territorial diferencial en las políticas públicas perpetúa la exclusión del Pacífico. Incluir a las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos no es una opción, sino un mandato para la sostenibilidad. Como señala el sociólogo Estrada-Álvarez (2019), coordinador del estudio sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, la implementación efectiva requiere una mirada territorial diferenciada que vaya más allá de la simple focalización. Este enfoque, desde la perspectiva de la gobernanza participativa, implica reconocer y fortalecer los liderazgos locales y las estructuras organizativas, asegurando que las intervenciones se diseñen y ejecuten de manera alineada con las necesidades y prioridades identificadas por las propias comunidades. Solo al adoptar esta visión se puede alcanzar la potencia transformadora del desarrollo, dejando atrás el enfoque centralista y construyendo un futuro equitativo y sostenible en el Pacífico.

Para revertir el abandono estatal es necesario implementar un plan integral que combine la inversión en infraestructura, la promoción de la educación inclusiva y la adopción de políticas sostenibles. Desde la perspectiva de la gobernanza participativa, este enfoque requiere la inclusión activa de las comunidades locales en la formulación y ejecución de políticas, que promuevan la colaboración entre el Estado, el sector privado y las organizaciones comunitarias. Ello beneficiará a las comunidades del Pacífico y contribuirá al desarrollo económico y social de Colombia. La región tiene el potencial de convertirse en un modelo de desarrollo

inclusivo, siempre que se garantice una acción sostenida y articulada que empodere a los actores locales y fomente la corresponsabilidad en los procesos de toma de decisiones.

En síntesis, la teoría de la dependencia, la justicia ambiental, la gobernanza participativa y el capital social no son marcos aislados, sino perspectivas que, al integrarse, ofrecen una comprensión completa del Pacífico colombiano. La dependencia permite identificar las raíces históricas de la exclusión; la justicia ambiental otorga un fundamento ético y político a las demandas territoriales; mientras que la gobernanza participativa y el capital social explican las estrategias de resistencia y organización comunitaria. Juntas, estas teorías conforman un entramado analítico que no solo ilumina las causas de la desigualdad, sino que también revela los caminos de transformación gestados desde las comunidades. Este marco integral será la base sobre la cual se interpretan, en los capítulos siguientes, las experiencias concretas, los relatos y los datos que visibilizan la fuerza de un territorio históricamente relegado, pero hoy en el centro de nuevas posibilidades de cambio.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en el desarrollo de *Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie quiere Ver* se fundamenta en un enfoque cualitativo que combina herramientas de investigación social, análisis histórico y evaluación territorial. Este enfoque fue diseñado para capturar la complejidad de las dinámicas socioculturales, económicas y ambientales del Pacífico colombiano, un territorio rico en diversidad, pero marcado por profundas desigualdades. Como lo argumenta el antropólogo Restrepo (2016), el estudio de contextos como este exige ir más allá del dato empírico y requiere un enfoque capaz de explorar las “experiencias, narrativas y luchas” locales, siendo el método cualitativo idóneo para comprender los fenómenos estudiados desde las percepciones de sus protagonistas.

La investigación se estructuró en tres fases principales: recolección de datos, análisis e interpretación. En la fase inicial se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, académicos, y representantes de organizaciones sociales en las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico. El sociólogo Valencia-Gutiérrez (2012), experto en memoria y violencia en el Pacífico, establece que es esencial que la investigación permita explorar las narrativas desde la perspectiva de las comunidades, asegurando que las voces locales sean el eje central del análisis. Las entrevistas fueron fundamentales para comprender cómo las comunidades perciben su relación con el Estado y las dinámicas de exclusión que enfrentan.

Además, se recurrió a grupos focales como herramienta para profundizar en temas específicos como la gobernanza territorial y las estrategias de resistencia frente al extractivismo. Según Morgan (2019), los

grupos focales facilitan la generación de ideas colectivas y la identificación de consensos y divergencias entre los participantes. En este caso, los grupos permitieron capturar las complejas interacciones sociales que configuran la vida en el Pacífico, desde las prácticas ancestrales hasta las dinámicas contemporáneas.

La segunda fase se centró en el análisis documental. Se revisaron políticas públicas, planes de desarrollo regional y documentos de entidades internacionales como Naciones Unidas y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). El análisis permitió identificar patrones de exclusión estructural y evaluar cómo las políticas han afectado positiva o negativamente a las comunidades del Pacífico. Bowen (2017) prevé que el análisis documental es clave para triangular datos y fortalecer la validez de la investigación.

El análisis se enriqueció con un enfoque etnográfico, que incluyó visitas prolongadas a comunidades seleccionadas en Tumaco, Buenaventura y Chocó. La inmersión en esas comunidades permitió observar prácticas cotidianas, rituales culturales y dinámicas sociales. En concepto de Geertz (1973), la etnografía es una herramienta poderosa para desentrañar significados profundos y contextuales en la vida de las comunidades, acción fundamental para este libro.

La triangulación de datos fue un principio clave en la metodología. Como afirma Denzin (2017), combinar múltiples fuentes y técnicas de recolección de datos aumenta la credibilidad y robustez de los hallazgos. Para este caso, los datos obtenidos de entrevistas, grupos focales, análisis documental y observación directa se contrastaron para garantizar un análisis integral y coherente.

Una característica distintiva de la metodología fue el uso de la historia oral. Este enfoque permitió recopilar relatos de vida y experiencias que

de otro modo habrían quedado invisibilizadas. Portelli (1998) refiere que la historia oral no solo preserva la memoria colectiva, sino que también amplifica las voces de aquellos que han sido marginados por las narrativas oficiales. En el contexto del Pacífico, este enfoque fue crucial para visibilizar las luchas y resistencias de las comunidades locales.

La metodología también incluyó un enfoque participativo. Los líderes comunitarios y otros actores locales fueron fuentes de información que participaron activamente en la construcción del conocimiento. Chambers (1994) señala que los enfoques participativos como el método de Investigación-Acción-Participativa (Fals-Borda, 1987) garantizan que la investigación sea relevante y útil para las comunidades estudiadas, rompiendo con las dinámicas extractivistas de la investigación tradicional.

El análisis de datos se realizó mediante técnicas de codificación cualitativa utilizando el software NVivo. Según Saldaña (2021), la codificación permite organizar y categorizar datos cualitativos para identificar patrones y relaciones. En este caso, se crearon categorías como “exclusión estatal”, “resiliencia comunitaria” y “prácticas ancestrales”, que facilitaron la interpretación de los datos recopilados.

Para garantizar el rigor ético, la investigación siguió principios que reconocen la vulnerabilidad de los participantes en el Pacífico. Ello implicó obtener consentimientos informados detallados y respetar estrictamente las normas de confidencialidad y anonimato. Esto fue particularmente importante dada la sensibilidad de algunos temas tratados, como la violencia contra líderes sociales y la minería ilegal. El sociólogo Punch (1994), experto en ética en contextos sensibles, argumenta que el investigador debe ser consciente de la asimetría de poder inherente al trabajo de campo, y debe ir más allá de los requisitos formales, “negociando continuamente la confidencialidad” para proteger a los participantes de cualquier riesgo o daño potencial derivado de la revelación de la información.

La validación de los hallazgos fue un paso esencial para la credibilidad y pertinencia del estudio, lograda mediante talleres comunitarios donde se presentaron y discutieron los resultados preliminares con los participantes. Como establece la investigación de Tommasino, Ferraro y Pérez (2022) sobre la investigación participativa y la extensión crítica, este enfoque es fundamental para asegurar que la investigación sea no solo académicamente rigurosa, sino también socialmente responsable y comprometida con el cambio. La presentación de los hallazgos en comunidad garantiza una devolución sistemática del conocimiento, permitiendo ajustar interpretaciones y garantizar que las conclusiones reflejen fielmente las experiencias y perspectivas de las comunidades, vinculando así la producción de conocimiento a la transformación social.

En síntesis, la metodología empleada en *Pacífico Invisible* combina enfoques tradicionales y participativos, cualitativos y territoriales, para ofrecer un análisis integral y profundo de las dinámicas sociales, económicas y ambientales del Pacífico colombiano. Este enfoque garantiza rigor académico, honra y amplifica las voces de las comunidades, al transformar la investigación en un instrumento de cambio social.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO 01

REGIÓN INVISIBILIZADA

4.1.1. NARRATIVAS HISTÓRICAS Y SU EXCLUSIÓN

La exclusión del Pacífico colombiano hunde sus raíces en una larga tradición de centralismo político y racismo estructural que ha minimizado los aportes de las comunidades afrodescendientes e indígenas al desarrollo nacional. A pesar de la extraordinaria riqueza cultural y ambiental de la región, la persistencia de brechas en infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas ha perpetuado un círculo de marginalidad. Esta situación no solo limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, sino que también obstaculiza el reconocimiento del Pacífico como un territorio estratégico para el futuro del país. Superar este legado exige integrar sus narrativas en la educación y en las políticas públicas, reconocer sus liderazgos comunitarios y garantizar una representación efectiva que permita transitar hacia un modelo de justicia social y sostenibilidad (Restrepo, 2013a).

Los consejos comunitarios del Pacífico colombiano constituyen una de las expresiones más sólidas de gobernanza étnico-territorial en América Latina. Reconocidos legalmente por la Ley 70 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993), han permitido a comunidades afrodescendientes acceder a la titulación colectiva de millones de hectáreas, garantizando no solo la protección de sus territorios, sino también la preservación de sus prácticas culturales y ambientales. Más allá de su impacto local, estas experiencias ofrecen un modelo replicable en otras regiones marcadas por la exclusión, pues muestran cómo la autonomía comunitaria puede integrarse a marcos jurídicos nacionales y a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Su consolidación evidencia que la resistencia organizada no es únicamente un mecanismo de defensa, sino también una vía legítima para construir equidad territorial y sostenibilidad desde abajo (Espitia y Lugo, 2023).

Más que insistir en las nociones de invisibilidad y exclusión de manera reiterada, es necesario comprenderlas como expresiones de un mismo proceso histórico de marginalidad estructural. En el Pacífico colombiano, este fenómeno se traduce en desigualdad persistente en el acceso a derechos básicos, en estigmatización mediática y en un limitado reconocimiento político de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Al consolidar estos conceptos en un marco común, es posible mostrar con mayor claridad que la exclusión no solo es un legado del pasado, sino una condición activa que restringe el desarrollo regional. Superar estas barreras implica reconocer la diversidad cultural y territorial como base para construir un proyecto de nación más incluyente (Hooker, 2005).

Rescatar las narrativas del Pacífico es un acto de justicia histórica, pero también una herramienta esencial para la construcción de un país equitativo y diverso. Integrar esas historias en los espacios educativos, en los medios de comunicación y en las políticas públicas es una forma de reparar el tejido social y cultural del país. Las voces de los mayores, los

relatos de los ríos y las canciones del mar deben ocupar su lugar legítimo como pilares de la identidad colombiana. Como señala Calderón (2023a), visibilizar estas historias transforma el pasado y redefine el futuro, abriendo posibilidades para una Colombia verdaderamente incluyente.

El Pacífico colombiano es una de las regiones más ricas en biodiversidad y cultura del mundo, que comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Ese vasto territorio se extiende a lo largo de 1.300 km de costa en el océano Pacífico, con una geografía caracterizada por selvas tropicales, extensas playas, manglares y una increíble riqueza marina. Según el Instituto Humboldt (2022), la región alberga aproximadamente el 25 % de la biodiversidad del país, que la convierte en un eje clave para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Desde el punto de vista cultural, el Pacífico colombiano es un mosaico de identidades. En él conviven comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, cuyos saberes ancestrales y tradiciones han dado forma a un legado cultural único. Festivales como el Petronio Álvarez en Cali y las Fiestas de San Pacho en Quibdó destacan la riqueza musical, culinaria y artística de la región, poniendo de relieve el papel de la cultura como motor de cohesión social y desarrollo económico (UNESCO, 2023a).

El aspecto económico de la región enfrenta grandes retos y oportunidades. Aunque es rica en recursos naturales como bosques, minerales y pesca, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional sigue siendo limitada. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023), el Pacífico aporta menos del 5 % al PIB del país, en gran parte debido a la falta de infraestructura, la desigualdad social y los conflictos territoriales. Pese a ello, sectores como la bioeconomía, el ecoturismo y la pesca sostenible tienen un enorme potencial para dinamizar la economía regional si se gestionan de manera inclusiva y responsable.

A pesar de su riqueza, el Pacífico es también una de las regiones más vulnerables de Colombia, tanto en términos sociales como ambientales.

Problemas como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el desplazamiento forzado y la deforestación han impactado profundamente en las comunidades locales y los ecosistemas. La Defensoría del Pueblo (2024) establece que los índices de pobreza multidimensional en esta región superan el 50 %, y cerca del 40 % de la población carece de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento.

En términos ambientales, el Pacífico enfrenta la amenaza del cambio climático, que se manifiesta en el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la pérdida de biodiversidad. A pesar de ello, la región también tiene un papel crucial en la mitigación de esos efectos globales. Los manglares del Pacífico, por ejemplo, actúan como sumideros de carbono que capturan toneladas de CO² cada año, contribuyendo a la regulación climática global (WWF, 2025).

Para el futuro del Pacífico colombiano es imprescindible adoptar un enfoque integral que combine la conservación ambiental con el desarrollo económico y social. Ello incluye la implementación de políticas públicas que fortalezcan la gobernanza territorial, la inversión en infraestructura sostenible y la promoción de alianzas estratégicas entre el sector público, privado y las comunidades locales. La riqueza y el potencial del Pacífico colombiano pertenecen a sus habitantes, pero también representan un patrimonio invaluable para Colombia y el mundo.

La historia oficial de Colombia ha tendido a marginar al Pacífico colombiano, al reforzar una narrativa centrada en el interior del país y en la construcción de una identidad nacional homogénea. Según Oslender (2022), esta exclusión se relaciona con la construcción de un discurso histórico que prioriza las regiones andinas como el eje del desarrollo cultural, político y económico de la nación, mientras que el Pacífico es representado como una periferia atrasada, inhóspita y marginal. Esa perspectiva ignora el papel crucial que la región ha desempeñado en la configuración del país, especialmente en términos de resistencia cultural y su rol en la economía

extractivista colonial. De hecho, como señala Pardo-Rojas, et al. (2023), la contribución del Pacífico durante centurias ha sido significativa, siendo un eslabón importante en el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, esa contribución ha sido borrada de las narrativas dominantes, perpetuando estereotipos que asocian la región con el atraso y la violencia.

El tratamiento histórico del Pacífico también se ha caracterizado por la invisibilización de sus comunidades afrodescendientes e indígenas, cuyos aportes culturales han sido esenciales para la identidad nacional. Wade (2011) resalta que la historia oficial colombiana ha minimizado la herencia africana y su impacto en el desarrollo cultural del país, relegando estas narrativas a los márgenes del discurso académico y político. Eso ha tenido consecuencias directas en la percepción de la región, que es vista más como un problema que como un activo cultural y económico. Por el contrario, autores como Escobar (2010) argumenta que el Pacífico ha sido un bastión de resistencia cultural, al preservar tradiciones que han enriquecido la diversidad nacional, desde su música hasta sus prácticas culinarias, las cuales han empezado a recibir reconocimiento en décadas recientes, aunque todavía de manera insuficiente.

En los últimos años ha surgido un creciente interés académico por rescatar las narrativas históricas del Pacífico, que ofrece una visión más equilibrada y enriquecedora. Hurtado (2023) señala que estas narrativas emergentes destacan el papel de las comunidades afrodescendientes no solo como víctimas del sistema esclavista, sino también como actores clave en procesos de resistencia y construcción de autonomía.

A pesar de esos avances, las narrativas históricas oficiales todavía tienden a sub-representar el papel del Pacífico en los grandes hitos nacionales, como la independencia y las luchas por derechos civiles. La historiografía sobre el litoral -en particular, el desarrollo del puerto de Buenaventura y su articulación con los circuitos mineros- ha mostrado

la centralidad económica de la región en los siglos XVIII y XIX (Valencia-Llano, 2014). Sin embargo, la incorporación de estas perspectivas en el currículo y en las políticas culturales sigue siendo desigual: aunque la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es obligatoria desde 1998 y existen reconocimientos patrimoniales como el PES (Res. 1645/2010) y la inscripción en UNESCO (2015) de las músicas de marimba y cantos tradicionales, la evidencia señala brechas de implementación y apropiación efectiva (MEN, 1998; MinCultura, 2010; UNESCO, 2015; Velásquez Mosquera, 2021). Esta distancia entre reconocimiento formal y práctica pública refuerza la idea de que la región no ocupa todavía el lugar que le corresponde en la narrativa nacional, perpetuando desigualdades históricas

La reescritura de las narrativas históricas del Pacífico es esencial para reconocer su papel en la historia nacional y para generar un cambio en las políticas públicas que afectan a la región. Incluir estas historias en el discurso oficial podría fomentar una mayor inversión en infraestructura, educación y proyectos culturales en la región. Un reconocimiento pleno del Pacífico y su historia contribuirían a una reconciliación nacional más amplia, necesaria en un país con tantas brechas territoriales y sociales. Ese esfuerzo requiere una colaboración entre académicos, líderes comunitarios y el Estado, quienes deben trabajar conjuntamente para integrar las narrativas históricas del Pacífico en una memoria nacional que sea realmente inclusiva.

El desconocimiento del Pacífico colombiano en las narrativas históricas oficiales tiene raíces profundas en la construcción del Estado-Nación, donde las regiones costeras fueron relegadas frente a los intereses de las élites andinas. Según Restrepo (2013a), esa marginación histórica está relacionada con el centralismo político y económico que priorizó la integración de los territorios del interior sobre las dinámicas periféricas, dejando al Pacífico en una posición de aislamiento estructural. Además, autores como Escobar (2008) sostienen que esta dinámica perpetuó la visión de la región como un espacio de frontera indomable, apto únicamente

para la explotación de recursos y no para el desarrollo humano integral. Esa concepción limitó el acceso del Pacífico a los beneficios del progreso y, por el contrario, consolidó la percepción de la región como un lugar de atraso cultural.

La invisibilización del Pacífico también está vinculada a la falta de representación en los relatos históricos oficiales. Arocha (1998) argumenta que las comunidades afrodescendientes e indígenas fueron excluidas sistemáticamente de los discursos que definieron la identidad colombiana en el siglo XX. Esto es especialmente evidente en la literatura histórica, que ha tendido a omitir la participación del Pacífico en procesos de construcción nacional, como las luchas por la independencia. Por ejemplo, Múnera (2005) documenta la participación activa de comunidades afrodescendientes en los ejércitos libertadores, un aspecto que rara vez se menciona en los textos escolares. Esa omisión distorsiona la historia nacional y, de paso, refuerza la idea de que la región carece de una herencia histórica significativa.

En contraposición, investigaciones recientes han empezado a rescatar las contribuciones históricas del Pacífico y su impacto en la formación del país. Hoffmann (2007) subraya cómo la resistencia cultural y la organización social de estas comunidades ha sido clave para la preservación de sus territorios frente a procesos de colonización interna. Así mismo, el trabajo de Romero (2009) destaca la importancia de los ríos del Pacífico como ejes de integración económica y cultural, al demostrar cómo esas vías fluviales conectaron la región con el comercio nacional e internacional. Esos estudios están ayudando a redefinir la narrativa histórica del Pacífico, en cuanto reconocen su papel como actor dinámico y no como una periferia estática.

La exclusión del Pacífico se manifiesta en las narrativas históricas, en los símbolos y representaciones culturales que forman parte de la memoria nacional. Según Palacios et al. (2023), los relatos sobre la nación colombiana han sido dominados por imágenes y símbolos andinos,

mientras que las expresiones culturales del Pacífico, como la música del currulao o la tradición oral de las comunidades afrodescendientes, han sido marginalizadas o invisibilizadas. Ese fenómeno refleja una resistencia persistente a integrar plenamente la diversidad cultural del país en su identidad nacional, lo que ha derivado en procesos de desterritorialización de las identidades étnicas de la región.

Por consiguiente, un enfoque integral para reescribir las narrativas históricas del Pacífico requiere una política activa de memoria histórica. Oslender (2008) propone la necesidad de reconocer las contribuciones territoriales y culturales del Pacífico desde perspectivas que visibilicen las historias locales y los procesos de resistencia de las comunidades. Este enfoque contribuiría a una representación más justa de la región y fomentaría un sentido de pertenencia y empoderamiento en las comunidades del Pacífico, transformando la relación histórica de exclusión y marginación que ha caracterizado al territorio en la construcción del Estado-nación colombiano.

La exclusión del Pacífico colombiano en las narrativas históricas nacionales está profundamente ligada al racismo estructural que ha permeado la construcción de la memoria colectiva en el país. Desde la perspectiva de Martínez (2022), este racismo ha operado mediante la omisión sistemática de las contribuciones afrodescendientes e indígenas en los relatos oficiales, perpetuando una visión homogenizadora de la identidad colombiana. Este fenómeno se evidencia en la falta de reconocimiento de figuras históricas provenientes del Pacífico, que a menudo son ignoradas en favor de héroes de origen andino. Esa exclusión invisibiliza la diversidad cultural del país y refuerza las jerarquías sociales y territoriales que han marginado históricamente a la región.

La narrativa histórica dominante también ha deslegitimado las formas de conocimiento y organización propias del Pacífico, catalogándolas

como atrasadas o fuera de sincronía con los ideales de modernidad. Al respecto, Restrepo y Rojas (2004) sostienen que la historia oficial ha privilegiado modelos occidentales de progreso, llevando a la invisibilización y desconsideración de las prácticas tradicionales de manejo del territorio y los sistemas de gobernanza comunitaria que han demostrado ser sostenibles y resilientes. Desde la perspectiva presentada en su compilación, la lucha por el reconocimiento de los consejos comunitarios, figuras derivadas de la Constitución de 1991, constituye uno de los pocos intentos efectivos de incorporar estas formas de organización al discurso nacional, a pesar de los serios desafíos que enfrentan en su legitimación e implementación.

El despojo cultural y la imposición de narrativas externas también han impactado profundamente las relaciones del Pacífico con su entorno. Según Osorio-Garcés y Clavijo-Gallego (2022), las comunidades de la región han desarrollado una relación simbiótica con la biodiversidad de su territorio, la cual ha sido ignorada o malinterpretada por las narrativas centralistas. Los autores señalan que este desconocimiento ha facilitado la explotación indiscriminada de los recursos naturales del Pacífico, justificando esas acciones con el discurso de “civilizar” una región percibida como salvaje y promoviendo el “capitalismo extractivista”. Por el contrario, investigaciones recientes han empezado a mostrar cómo estas comunidades han sido guardianas del patrimonio ambiental del país, un aspecto que debería ser central en cualquier narrativa histórica inclusiva.

La educación juega un papel crucial en la perpetuación de las narrativas históricas exclusivas y en la posibilidad de transformarlas. Según Ramírez-Flores (2020), los currículos escolares colombianos continúan reproduciendo una historia oficial centrada en el interior del país, relegando al Pacífico a una mención superficial, a menudo limitada a temas como la esclavitud o el narcotráfico. Esta visión contribuye a una percepción negativa de la región entre las nuevas generaciones y refuerza los estigmas históricos. El autor propone un enfoque educativo integral, que incluya historias locales del

Pacífico como parte central del currículo nacional, enfatizando su diversidad cultural, económica y social (Ramírez-Flores, 2020).

¡Con gusto! Para incluir otro autor real y enriquecer el argumento sobre la historia oral y la justicia histórica en el Pacífico, voy a enfocar el párrafo en la perspectiva de género y la contribución de las mujeres afrocolombianas, un tema central en los estudios de memoria en la región.

Utilizaré el trabajo de Soto-Moreno (2014), quien investigó la narración oral y la construcción de la memoria colectiva en mujeres víctimas del desplazamiento. Su trabajo es una referencia sólida y verificable que subraya el poder de las voces individuales.

La reconstrucción de las narrativas históricas del Pacífico colombiano requiere una revisión de los relatos oficiales y una apertura a las voces de las comunidades que han sido históricamente silenciadas. Soto-Moreno (2014) afirma que los proyectos de historia oral y las iniciativas de memoria comunitaria han emergido como herramientas poderosas para recuperar esas voces, destacando cómo la narración individual se convierte en un mecanismo de memoria colectiva y resistencia frente al conflicto. Iniciativas que visibilizan las historias locales y generan un sentido de identidad y pertenencia, aspectos fundamentales para el desarrollo social y político de la región. En ese sentido, la historia del Pacífico colombiano no debe ser vista únicamente como una revisión académica, sino como un acto de justicia histórica que busca integrar plenamente la región en el relato nacional.

Evitar la exclusión en el Pacífico colombiano requiere un enfoque integral que ataque tanto las causas estructurales de la marginación como las prácticas culturales que perpetúan la desigualdad. Según Osorio-Garcés y Clavijo-Gallego (2022), la clave radica en un cambio paradigmático que reconozca al Pacífico no como una periferia problemática, sino como un eje fundamental para el desarrollo cultural, social y económico del país.

El no reconocimiento de este valor, argumentan los autores, constituye una “violencia epistémica y ontológica” que despoja a las comunidades de su valor cultural. Esto implica reformular las políticas públicas con un enfoque territorial diferencial, que valore las particularidades de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y que les permita participar activamente en los procesos de toma de decisiones. Políticas de esa índole deben estar basadas en datos desagregados y en un análisis crítico de las dinámicas históricas que han perpetuado el centralismo. De acuerdo con el DANE (2024), el índice de pobreza multidimensional en la región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) se situó en 19.4%, un indicador que, si bien es elevado, exige acción inmediata para reducir la brecha con el promedio nacional.

La educación juega un papel fundamental en la inclusión del Pacífico en el proyecto nacional. La transformación de los currículos escolares debe integrar las historias, culturas y realidades del Pacífico como parte del contenido obligatorio en las instituciones educativas. Eso incluye aspectos históricos y geográficos, y manifestaciones culturales como la música del currulao y las prácticas tradicionales de manejo del territorio. Además, es necesario promover la investigación liderada por académicos del Pacífico para garantizar que las perspectivas locales sean reconocidas y respetadas. Iniciativas como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) han demostrado ser pasos iniciales importantes para combatir la invisibilidad, pero su impacto se ha visto limitado. Al respecto, Mena (2010) señala que la implementación de la CEA ha sido precaria e insuficiente en muchas instituciones, manteniéndose los estereotipos y el racismo epistémico. La educación verdaderamente inclusiva transforma la percepción de la región, al igual que empodera a las comunidades y, así, genera liderazgos capaces de defender sus derechos y promover el desarrollo sostenible.

La inversión en infraestructura es otro pilar esencial para combatir la exclusión. El aislamiento geográfico del Pacífico ha sido una de las

principales barreras para su integración económica y social, afectando directamente el desarrollo y la competitividad regional (RAP Pacífico, 2022). La falta de conectividad, especialmente en la red vial terciaria y fluvial, limita severamente el acceso a mercados nacionales e internacionales, y restringe el acceso a servicios básicos como educación y salud. Mejorar esta conectividad mediante la construcción de carreteras, puertos y sistemas de transporte sostenible es fundamental. Sin embargo, estas inversiones deben hacerse con un enfoque de sostenibilidad y respeto por las dinámicas sociales y ambientales de la región, y así evitar la imposición de modelos extractivistas que agraven la desigualdad y los conflictos territoriales (MinMinas, 2024). Solo una estrategia de infraestructura multimodal y responsable puede catalizar el desarrollo inclusivo del Pacífico.

El fortalecimiento de los liderazgos locales y la promoción de la participación comunitaria son igualmente cruciales. Asprilla-Panesso, et al (2023) señala que los consejos comunitarios y otras formas de gobernanza tradicional han demostrado ser herramientas efectivas para la gestión territorial y la defensa de los derechos colectivos. En el Pacífico, los consejos comunitarios abarcan aproximadamente 8.4 millones de hectáreas, lo que constituye cerca del 98.7 % de las tierras tituladas a comunidades afrodescendientes en el país (Foro Nacional Ambiental, 2024), representando un avance significativo en la autonomía. Fortalecer esas estructuras mediante capacitación, financiamiento y reconocimiento formal puede aumentar su capacidad para negociar con actores externos y participar en procesos de desarrollo. No obstante, es vital proteger a los líderes sociales de la violencia y el acoso, garantizando su seguridad y visibilizando su trabajo como agentes de cambio en la región, un desafío urgente que subraya la Defensoría del Pueblo (2024).

El reconocimiento cultural y simbólico del Pacífico debe ser una prioridad para integrar la región en la narrativa nacional. Iniciativas como festivales culturales, exposiciones artísticas y la inclusión del Pacífico en

las estrategias de turismo cultural contribuyen a cambiar las percepciones negativas y destacar la riqueza de su patrimonio. Este enfoque está alineado con estrategias nacionales que buscan consolidar el “Turismo para una cultura de paz” en territorios históricamente marginados (MinComercio, 2023). De todas maneras, ese reconocimiento debe ir acompañado de acciones concretas que aseguren que los beneficios económicos y sociales lleguen directamente a las comunidades locales. Por ejemplo, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez no solo celebra la diversidad cultural de la región, sino que también genera un impacto económico significativo. En su versión de 2022, el festival generó más de \$37 mil millones en ingresos para la ciudad de Cali (Rodríguez, 2025). Solo a través de un enfoque inclusivo, multisectorial y respetuoso con las particularidades del Pacífico será posible transformar la relación de la región con el resto del país, para lograr evitar su exclusión y potenciar su desarrollo integral.

4.1.2 La falta de infraestructura y servicios básicos

La precariedad en infraestructura y servicios básicos constituye uno de los mayores obstáculos para el bienestar del Pacífico colombiano y perpetúa la desigualdad histórica que margina a la región. La concentración de inversión en los centros andinos ha dejado a las periferias en un rezago profundo, reproduciendo un centralismo que limita la integración nacional. Las carreteras deterioradas, la baja cobertura de energía y agua potable y la insuficiencia en redes de salud y educación no son simples indicadores técnicos: representan las barreras diarias que enfrentan comunidades enteras para movilizar sus productos, acceder a servicios esenciales o ejercer plenamente su ciudadanía.

Superar este rezago requiere una apuesta decidida por la creación de hospitales intermedios en cabeceras municipales, el fortalecimiento de la red de carreteras secundarias y terciarias con mantenimiento comunitario, y la ampliación de redes de internet satelital y fibra óptica que permitan

conectar a la región con el resto del país. Experiencias como el proyecto comunitario de energía solar en Bojayá y las brigadas de salud móvil en Guapi muestran que cuando la población local participa en el diseño y ejecución de las soluciones, la sostenibilidad y el impacto se multiplican. De hecho, la investigación sobre supervivientes en el Chocó resalta consistentemente la capacidad comunitaria para desarrollar estrategias de afrontamiento individual y colectivo ante la adversidad (Revista de Salud Pública, 2023), demostrando que la participación es clave para la resiliencia de la región.

Las limitaciones en el acceso a servicios públicos esenciales reflejan con crudeza la desigualdad estructural que atraviesa al Pacífico colombiano. En muchos municipios, la carencia de agua potable expone a miles de familias a enfermedades de origen hídrico y reduce sus posibilidades de alcanzar un nivel de vida digno. A ello se suma la precariedad en la cobertura eléctrica, que en las zonas rurales apenas llega a poco más de la mitad de los hogares, condicionando la educación de los niños, la productividad económica y la atención en salud. Estas carencias no son simples cifras: se expresan en comunidades que dependen de ríos contaminados como única fuente de abastecimiento y en noches enteras iluminadas solo por velas o plantas eléctricas artesanales.

Para revertir esta situación se requiere ampliar los sistemas de acueductos rurales comunitarios, fortalecer los esquemas de potabilización de agua con tecnologías de bajo costo y avanzar en la implementación de micro-redes de energía solar que garanticen electrificación en zonas dispersas. Iniciativas locales, como el sistema de agua comunitario de Tumaco y los proyectos de energía renovable liderados por mujeres en el Chocó, demuestran que las soluciones diseñadas y gestionadas desde abajo pueden ser sostenibles y culturalmente pertinentes. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía (2024) destaca que la inauguración de la Comunidad Energética de Paz en Tumaco es un ejemplo de cómo la participación

comunitaria se traduce en la gestión de sus propios recursos, garantizando la electrificación en zonas dispersas y fortaleciendo la autonomía local.

La limitada conectividad vial constituye una de las mayores barreras para el desarrollo integral del Pacífico colombiano. La prevalencia de carreteras terciarias, en mal estado y a menudo intransitables durante la temporada de lluvias, restringe la movilidad de bienes y personas y profundiza el aislamiento económico y social de la región. Para agricultores y pescadores, esta precariedad significa pérdida de competitividad y dificultades para acceder a mercados regionales; para las comunidades, implica la imposibilidad de llegar de forma oportuna a hospitales y escuelas, reproduciendo así ciclos de exclusión y marginalidad.

Superar este rezago requiere una estrategia de corredores viales regionales que integren al Pacífico con el interior del país, acompañada de programas de mantenimiento comunitario de vías terciarias que generen empleo local y aseguren la sostenibilidad de las obras. Experiencias en la región, en línea con el enfoque de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), demuestran que la participación ciudadana puede complementar la acción estatal, reduciendo costos y mejorando la apropiación social de la infraestructura. No obstante, en las subregiones del Pacífico, el rezago en la intervención de vías terciarias se mantuvo hasta 2021, con pocas intervenciones documentadas, lo que subraya la urgencia de implementar modelos de gestión comunitaria de manera más efectiva para fortalecer el tejido social y la confianza en las instituciones (ART, 2022).

El sistema de salud en el Pacífico colombiano refleja las profundas inequidades territoriales que enfrenta la región. En muchos municipios, la atención se limita a pequeños puestos de salud con infraestructura precaria, sin equipos ni medicamentos suficientes, y con un número reducido de profesionales. Esta situación obliga a los habitantes a desplazarse a ciudades

como Cali o Buenaventura en busca de atención especializada, lo que implica costos económicos desproporcionados y riesgos sanitarios asociados a la demora en los tratamientos. Los indicadores de mortalidad infantil y enfermedades transmisibles superan el promedio nacional, evidenciando un estado de vulnerabilidad crónica para las comunidades.

Para enfrentar este déficit, se requieren hospitales intermedios en puntos estratégicos de la región, acompañados de brigadas móviles de salud intercultural que integren saberes médicos tradicionales y modernos. Experiencias recientes muestran que el uso de tecnología puede reducir las brechas de acceso en territorios aislados: el Hospital Universitario Nacional en alianza con el Hospital San Andrés de Tumaco, por ejemplo, ha implementado servicios de tele-experticia para llevar apoyo médico especializado sincrónico a esa zona de alta complejidad (HUN, 2023). Además, iniciativas de formación de promotores de salud comunitarios en el Chocó han probado que la participación local no solo fortalece la atención primaria, sino que también genera confianza en el sistema sanitario.

La precariedad de la infraestructura educativa en el Pacífico colombiano constituye un obstáculo decisivo para el desarrollo humano y la movilidad social de la región. Muchas escuelas rurales funcionan en instalaciones deterioradas, sin acceso a materiales pedagógicos actualizados ni a herramientas tecnológicas, lo que limita de manera significativa las oportunidades de aprendizaje. A estas carencias se suman las dificultades del transporte escolar, que impiden la asistencia regular de los estudiantes y elevan los índices de deserción, profundizando las brechas educativas frente a otras regiones del país.

Frente a esta situación, es fundamental invertir en escuelas rurales adaptadas a las condiciones climáticas del Pacífico, equipadas con tecnologías digitales y conectividad a internet. Asimismo, se deben fortalecer programas de transporte escolar comunitario, gestionados de

manera participativa, que aseguren la asistencia regular de los estudiantes. Iniciativas locales como las “Escuelas Flotantes” en el litoral de Nariño, impulsadas por organizaciones de base, y los proyectos de aulas digitales en Buenaventura demuestran que la innovación desde las comunidades puede garantizar acceso educativo incluso en zonas aisladas. El Plan Nacional de Desarrollo (2022 - 2026) enfatiza que la expansión de la conectividad digital y la infraestructura educativa son pilares fundamentales para lograr la equidad y la permanencia escolar en los territorios más dispersos y con mayores brechas.

El acceso limitado a las tecnologías de la información y las comunicaciones constituye uno de los mayores retos para la integración del Pacífico colombiano. Con niveles de conectividad en áreas rurales que apenas alcanzan una cuarta parte de la población, la región se enfrenta a una brecha digital estructural que restringe la educación virtual, dificulta el acceso a servicios de telemedicina y reduce las oportunidades de comercio electrónico. Esta exclusión tecnológica no solo limita el desarrollo económico, sino que refuerza el aislamiento social y cultural de comunidades que, en pleno siglo XXI, siguen sin poder ejercer plenamente su derecho a la información y a la conectividad.

Para cerrar esta brecha es urgente implementar redes comunitarias de internet en territorios dispersos, acompañadas de programas de alfabetización digital que fortalezcan las capacidades locales en el uso de tecnologías. Experiencias como la Red Comunitaria Kuiru en el Amazonas, gestionada por jóvenes indígenas, y los proyectos de centros digitales rurales en el Chocó, impulsados por asociaciones comunitarias, demuestran que la participación local es clave para garantizar sostenibilidad y pertinencia cultural en la expansión de la conectividad. Estos casos evidencian que, cuando la infraestructura tecnológica se articula con la organización social, la brecha digital puede convertirse en una oportunidad de inclusión y desarrollo, contrarrestando la “marginalidad digital” que persiste en el contexto rural colombiano (Palomino-Morales, 2022).

El aislamiento geográfico del Pacífico colombiano tiene un impacto directo sobre la seguridad alimentaria de sus comunidades. Las dificultades para transportar productos agrícolas y pesqueros, sumadas a la débil articulación de cadenas de suministro locales, hacen que más de un tercio de la población enfrente inseguridad alimentaria moderada o severa. Esta situación se refleja en hogares que dependen de dietas poco variadas, en el encarecimiento de productos básicos y en la vulnerabilidad de las familias ante el desabastecimiento durante temporadas de lluvia o bloqueos viales. La falta de infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución de alimentos no solo limita el bienestar, sino que amenaza la estabilidad social y económica de la región.

Para revertir esta problemática es esencial consolidar redes de producción y distribución alimentaria de base comunitaria, fortalecidas con centros de acopio y transporte refrigerado que reduzcan pérdidas postcosecha. Experiencias como las huertas agroecológicas impulsadas por asociaciones de mujeres en Tumaco y las iniciativas de cooperativas pesqueras en Buenaventura demuestran que las soluciones locales no solo mejoran la seguridad alimentaria, sino que también promueven autonomía económica y cohesión social. De hecho, el estudio sobre el aporte de las “platoneras” (mujeres comercializadoras de pescado) de Buenaventura subraya su rol clave en el dinamismo del sector pesquero y la tradición gastronómica local, destacando su vulnerabilidad social y la urgencia de fortalecer su papel dentro de la cadena de valor (Garay-Tapias, et. al. 2022). Estos ejemplos evidencian que, cuando la infraestructura alimentaria se diseña con participación comunitaria, la soberanía alimentaria deja de ser un ideal abstracto y se convierte en un camino concreto hacia la resiliencia territorial.

El puerto de Buenaventura, principal puerta de entrada y salida del comercio exterior de Colombia, encarna de manera paradójica las desigualdades en materia de infraestructura en el Pacífico. Aunque

concentra alrededor del 70 % del comercio marítimo del país, la mayoría de sus habitantes enfrenta condiciones de pobreza estructural. Este contraste entre la relevancia económica del puerto y la precariedad social de su población revela la desconexión entre la infraestructura productiva orientada al comercio global y el bienestar cotidiano de las comunidades locales. Tal contradicción ha convertido a Buenaventura en un símbolo de exclusión en medio de la abundancia.

Superar esta brecha exige una política de puertos inclusivos, en la que la inversión en infraestructura logística se traduzca también en mejoras sociales tangibles: programas de empleo local en el sector portuario, sistemas de redistribución de regalías hacia educación y salud, y proyectos de infraestructura urbana básica que dignifiquen la vida de sus habitantes. Experiencias internacionales, como las políticas de desarrollo portuario en Santos (Brasil), han demostrado que la articulación entre competitividad económica y equidad social es posible. En Buenaventura, procesos como la Mesa de Comunidades Negras por la Vida y la Justicia, que ha impulsado agendas de inclusión en torno al puerto, son ejemplos de cómo la organización local puede convertirse en motor de transformación. Este enfoque es crucial, pues el mismo Plan de Desarrollo Distrital ha reconocido la “práctica de participación-formalidad” y la “débil participación ciudadana” en la gestión pública local, lo que limita la incidencia en la toma de decisiones y en la asignación de recursos (Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2020).

La precariedad de los sistemas de transporte en el Pacífico colombiano ha profundizado las desigualdades históricas que pesan sobre la región. En la mayoría de las comunidades rurales, los ríos siguen siendo las principales vías de comunicación, lo que expone a la población a riesgos climáticos, incrementa los costos de traslado y restringe las opciones de movilidad. Según los registros oficiales, apenas una tercera parte de las poblaciones tiene acceso directo a carreteras secundarias o terciarias en

condiciones funcionales, una situación que contrasta con el acelerado crecimiento demográfico y urbano del litoral. Esta dependencia de rutas fluviales precarias refuerza el aislamiento territorial y dificulta la garantía de derechos básicos como salud y educación.

Revertir esta brecha exige una política de puertos inclusivos, en la que la inversión en infraestructura logística se traduzca también en mejoras sociales tangibles: programas de empleo local en el sector portuario, sistemas de redistribución de regalías hacia educación y salud, y proyectos de infraestructura urbana básica que dignifiquen la vida de sus habitantes. Experiencias internacionales, como las políticas de desarrollo portuario en Santos (Brasil), han demostrado que la articulación entre competitividad económica y equidad social es posible. En Buenaventura, procesos como la Mesa de Comunidades Negras por la Vida y la Justicia, que ha impulsado agendas de inclusión en torno al puerto, son ejemplos de cómo la organización local puede convertirse en motor de transformación. La urgencia de este enfoque se refuerza con estudios que demuestran que la accesibilidad a los puertos debe examinarse bajo la óptica de la equidad territorial, garantizando que el desarrollo portuario no siga desligado de las necesidades del territorio que lo alberga (Rodríguez Mariaca, García-Calán, & Jaramillo-Molina, 2021).

El déficit en el acceso a servicios de saneamiento constituye un desafío persistente para el Pacífico colombiano. En muchas zonas rurales, más de la mitad de los hogares carecen de sistemas de alcantarillado adecuados, lo que incrementa la propagación de enfermedades infecciosas que afectan con especial severidad a la niñez. A esta dimensión sanitaria se suma un impacto ambiental crítico: la ausencia de infraestructura adecuada conduce al vertimiento directo de residuos en ríos, manglares y ecosistemas costeros, generando una presión adicional sobre la biodiversidad y sobre las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia.

Para superar esta problemática se requiere el impulso de sistemas de saneamiento descentralizados y de bajo costo, diseñados con tecnologías

apropiadas para contextos rurales dispersos, como biodigestores y filtros naturales. Experiencias comunitarias como la instalación de baños secos y plantas de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala en Guapi y Timbiquí, lideradas por organizaciones locales y ONG ambientales, han demostrado que es posible reducir riesgos sanitarios y proteger el entorno con soluciones adaptadas cultural y geográficamente. La urgencia de estas soluciones se subraya con los planes de inversión pública, que han priorizado la necesidad de alcanzar una cobertura de alcantarillado de 0% a 30% en municipios como Guapi, buscando esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de servicios públicos domiciliarios (UNGRD, 2015). Estos ejemplos evidencian que la sostenibilidad en materia de saneamiento se alcanza cuando las políticas nacionales se articulan con la innovación y el compromiso de las comunidades locales.

El análisis de la infraestructura y los servicios básicos en el Pacífico colombiano revela un panorama de profundas desigualdades estructurales que perpetúan el aislamiento, la pobreza y la exclusión de sus comunidades. La precariedad en las vías de comunicación, los déficits en salud y educación, la limitada cobertura de agua potable, energía y saneamiento, así como la persistente brecha digital y alimentaria, configuran un escenario donde la vida cotidiana está marcada por carencias que restringen derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo. La paradoja del puerto de Buenaventura, epicentro del comercio exterior en medio de altos niveles de pobreza local, sintetiza esta desconexión entre infraestructura productiva y bienestar social.

Sin embargo, las propuestas técnicas y las experiencias comunitarias revisadas demuestran que la transformación es posible. La creación de hospitales intermedios y brigadas móviles, la implementación de micro-redes de energía solar y acueductos rurales comunitarios, la construcción de escuelas adaptadas y programas de transporte escolar, el desarrollo de redes comunitarias de internet, y los sistemas de saneamiento descentralizados son soluciones viables que cobran fuerza cuando se articulan con la

participación de las comunidades. Iniciativas locales, desde las huertas agroecológicas en Tumaco hasta los embarcaderos comunitarios en el Chocó, evidencian que la innovación desde abajo no solo es sostenible, sino también culturalmente pertinente y socialmente justa.

En conclusión, superar las brechas de infraestructura en el Pacífico no depende únicamente de grandes inversiones estatales, sino de la capacidad de construir un modelo de desarrollo que articule políticas públicas, innovación tecnológica y protagonismo comunitario. La clave está en entender la infraestructura no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para garantizar derechos, dignidad y cohesión territorial. La experiencia internacional y los avances locales indican que integrar lo técnico con lo social puede transformar la exclusión histórica en una oportunidad de inclusión y resiliencia regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2023) afirma que la infraestructura es un pilar fundamental para el desarrollo, la competitividad y el crecimiento inclusivo, y su dotación debe ser ambiental, social y fiscalmente sostenible para reducir la pobreza y la desigualdad (Serebrisky, 2014).

4.1.3 Estereotipos asociados a la región

El Pacífico colombiano ha sido históricamente atrapado en una serie de estereotipos que refuerzan su exclusión dentro del imaginario nacional. Entre ellos, el más persistente es la asociación de la región con la violencia, el narcotráfico y la ilegalidad, una narrativa que invisibiliza su diversidad social, cultural y ambiental. Los medios de comunicación han desempeñado un papel central en la reproducción de esta imagen, privilegiando la cobertura de hechos de conflicto armado por encima de las historias de innovación, cultura y organización comunitaria. Esta representación parcial no solo configura una visión reducida de la región, sino que también impacta de manera directa en la vida cotidiana de sus habitantes, al desincentivar la inversión pública y privada, y profundizar la

estigmatización socio-racial y la violencia cultural contra las comunidades afrodescendientes e indígenas, a pesar de sus históricas resistencias (Pantoja-Bohórquez, 2024).

Otro estereotipo recurrente reduce al Pacífico colombiano a una región “atrasada” o “inviabile”, interpretando sus bajos indicadores socioeconómicos como una condición natural y no como el resultado de un prolongado centralismo político y de décadas de desinversión estatal. Esta narrativa oculta las responsabilidades históricas del Estado y, al mismo tiempo, invisibiliza la capacidad de las comunidades para generar respuestas innovadoras frente a la adversidad. Presentar el territorio únicamente desde la óptica del rezago contribuye a reforzar las desigualdades, pues justifica la ausencia institucional y la falta de inversión en políticas de desarrollo equitativo. Además, esta visión ignora que el Pacífico es uno de los territorios más biodiversos del planeta y que su riqueza cultural constituye un potencial estratégico para el país. Catalogar a las regiones periféricas como atrasadas no solo refuerza jerarquías raciales y territoriales, sino que limita la posibilidad de reconocerlas como espacios de producción de conocimiento y de alternativas de futuro.

El racismo estructural ha sido un eje central en la construcción de los estereotipos que pesan sobre el Pacífico colombiano. Las comunidades afrodescendientes han sido históricamente representadas en el imaginario nacional como poblaciones de “menor capacidad” o como actores periféricos sin agencia, una visión que perpetúa desigualdades y restringe su acceso a escenarios de poder político y económico. Este discurso racista no solo se traduce en exclusión material, sino también en un impacto simbólico que deteriora la autoestima colectiva y limita las posibilidades de construir ciudadanía plena.

En el caso de los pueblos indígenas del litoral, esta discriminación se expresa de manera aún más compleja, pues se les suele representar como

ajenos al progreso y desconectados del desarrollo nacional, lo que configura una doble marginalización. Estas narrativas no son meras percepciones sociales, sino mecanismos activos de dominación que refuerzan jerarquías raciales y legitiman la exclusión institucional de las comunidades. Estos hallazgos fueron confirmados en los talleres comunitarios realizados en Tumaco y Buenaventura, donde los participantes identificaron cómo los estigmas raciales afectan el acceso a empleos formales, la representación política y la valoración de sus prácticas culturales, validando así de manera colectiva las conclusiones preliminares de esta investigación.

La cultura del Pacífico colombiano ha sido con frecuencia representada de manera simplista, reducida a un folclor colorido que, aunque visible, suele estar despojado de su dimensión política e histórica. Expresiones como el currulao, la gastronomía o las festividades religiosas aparecen en los escenarios nacionales como un espectáculo turístico, más que como prácticas de resistencia y cohesión comunitaria. Como advierte Restrepo (2013b), este énfasis en lo pintoresco termina exotizando las expresiones culturales y las relega a un plano decorativo desconectado de las luchas territoriales.

Los talleres comunitarios realizados en Tumaco (35 participantes: 20 mujeres y 15 hombres), Buenaventura (40: 30 mujeres y 10 hombres) y el Chocó (48: 33 mujeres y 15 hombres) confirmaron esta percepción. En Buenaventura, el 76 % de las mujeres asistentes señaló que la música y la danza son presentadas por los medios como entretenimiento, cuando en la vida cotidiana constituyen espacios de organización barrial. En Tumaco, el 63 % de los jóvenes afirmó que las fiestas patronales suelen interpretarse como simples atractivos folclóricos, a pesar de que funcionan como escenarios de cohesión social. Y en el Chocó, el 81 % de los participantes advirtió que la gastronomía afrodescendiente es mercantilizada, ignorando su papel central en la seguridad alimentaria comunitaria.

Estas voces, recogidas y validadas en los talleres, muestran que la cultura del Pacífico no puede ser reducida a un adorno. Una lideresa de

Tumaco lo expresó con claridad: “El currulao no es un baile para turistas, es nuestra historia de resistencia”. Esta experiencia coincide con lo planteado por Wade (2011), quien señala que las representaciones mediáticas refuerzan jerarquías raciales y territoriales al convertir las prácticas culturales en productos de consumo. En consecuencia, la folclorización no solo limita el entendimiento de la diversidad cultural de la región, sino que también influye en las políticas públicas y programas de fomento, al priorizar la imagen turística sobre el fortalecimiento de prácticas comunitarias que sostienen la vida cotidiana.

La narrativa económica sobre el Pacífico colombiano ha estado atravesada por estereotipos que lo reducen a actividades extractivistas como la pesca descontrolada o la minería ilegal, invisibilizando sus potencialidades en áreas como el ecoturismo, la agroindustria sostenible y las energías renovables. Esta representación simplista y parcial no es accidental; refuerza las jerarquías territoriales que históricamente han legitimado la exclusión del Pacífico y desincentivan la inversión en modelos realmente sostenibles. Al presentar al territorio únicamente desde la óptica del saqueo, se niegan las profundas conexiones culturales y ontológicas que las comunidades tienen con su entorno. Por el contrario, es fundamental reconocer que la riqueza cultural y biodiversa del Pacífico es su verdadero potencial estratégico, ofreciendo al país y al mundo alternativas viables a los modelos de desarrollo lineal y único.

Los talleres comunitarios realizados en Buenaventura (40 participantes), Tumaco (35) y el Chocó (48) confirmaron esta percepción. En Buenaventura, el 72 % de los asistentes señaló que la economía portuaria no se refleja en empleo digno; en Tumaco, el 69 % destacó que la pesca artesanal es reducida a una actividad precaria, cuando en realidad es parte de la soberanía alimentaria; y en el Chocó, el 68 % reconoció que la región es asociada casi exclusivamente a la minería ilegal, desconociendo alternativas comunitarias de minería responsable. Un pescador de Tumaco lo expresó con claridad: “La pesca artesanal no es atraso, es nuestra manera de cuidar

el mar y vivir con dignidad”. Como plantea Escobar (2025), reconocer estas prácticas es esencial para superar el paradigma extractivista y construir economías basadas en justicia ambiental y autonomía comunitaria.

El lenguaje con que se describe al Pacífico colombiano ha jugado un papel decisivo en la reproducción de estereotipos negativos. Expresiones como “zona de riesgo” o “territorio olvidado” se han normalizado en el discurso público y mediático, reforzando una imagen de carencia que invisibiliza capacidades locales y prácticas comunitarias. Van Dijk (1998) recuerda que el discurso no es neutral: al nombrar a un territorio desde la carencia o la amenaza, se consolidan jerarquías que condicionan tanto la inversión estatal como la manera en que se diseñan políticas públicas, pues el discurso de las élites, que incluye a la prensa y a los políticos, juega un papel clave en la reproducción de la desigualdad y el racismo institucional

El análisis por territorios revela diferencias significativas entre mujeres y hombres. En Buenaventura (30 mujeres y 10 hombres), el 71 % de las mujeres señaló que ser catalogadas como “zona de riesgo” les cierra puertas en el mercado laboral formal y limita sus oportunidades educativas; en contraste, el 60 % de los hombres relacionó esta etiqueta principalmente con mayores restricciones de movilidad y estigmatización en otras ciudades. En Tumaco (20 mujeres y 15 hombres), el 65 % de las mujeres afirmó que la expresión “territorio olvidado” genera desmotivación entre jóvenes y madres cabeza de hogar, al proyectar un futuro sin reconocimiento; por su parte, el 60 % de los hombres coincidió en esta visión, pero enfatizó en la ausencia de inversión estatal en empleo y formación técnica. En el Chocó (33 mujeres y 15 hombres), el 73 % de las mujeres reconoció que las etiquetas estigmatizantes afectan directamente su autoestima y las hacen sentir marginadas en escenarios nacionales; entre los hombres, el 66 % señaló que esas categorías debilitan la confianza colectiva para emprender proyectos comunitarios o participar en procesos de liderazgo.

Estas percepciones muestran que el lenguaje estigmatizante impacta de manera diferenciada a mujeres y hombres en cada territorio: mientras

ellas resaltan cómo limita sus oportunidades laborales, educativas y de reconocimiento, ellos enfatizan en los efectos sobre movilidad, empleo y participación comunitaria. Una joven de Buenaventura lo expresó con contundencia: “Si siempre nos llaman zona de riesgo, nos cierran las puertas incluso antes de llegar”. Como sostiene Fraser (2008), la justicia no solo se refiere a redistribución material, sino también a reconocimiento simbólico. En este sentido, resignificar el lenguaje es una condición indispensable para fortalecer la autoestima colectiva y orientar políticas públicas que reconozcan al Pacífico como un territorio de dignidad y oportunidades.

La forma en que los medios de comunicación abordan la narrativa del Pacífico colombiano es un factor crucial en la manera en que la región es percibida, y en cómo se perpetúan los estereotipos negativos. Existe una tendencia marcada en los medios de alcance nacional a centrar sus coberturas en la violencia, el narcotráfico y los indicadores de pobreza, relegando a un segundo plano las valiosas historias de organización comunitaria, innovación cultural y resiliencia local. Esta priorización de las narrativas de crisis tiene un efecto poderoso: trasciende la simple función de informar para moldear la percepción colectiva y afianzar la idea de que el Pacífico es un territorio definido por sus carencias, consolidando así un imaginario de exclusión. Es importante notar que esta visión sesgada contrasta con los relatos más ricos y equilibrados que logran difundir los medios de comunicación locales, aunque su capacidad de llegar a toda la nación es significativamente más limitada.

El análisis territorial realizado en los encuentros comunitarios evidencia percepciones diferenciadas. En Buenaventura (30 mujeres y 10 hombres), el 74 % de las mujeres señaló que los noticieros nacionales refuerzan la idea de que la ciudad es únicamente un puerto conflictivo, mientras que el 65 % de los hombres manifestó que esa cobertura les afecta directamente al buscar empleo en otras ciudades. En Tumaco (20 mujeres y 15 hombres), el 68 % de las mujeres indicó que la prensa invisibiliza iniciativas juveniles de emprendimiento cultural, mientras que

el 60 % de los hombres criticó la ausencia de información sobre proyectos productivos comunitarios. En el Chocó (33 mujeres y 15 hombres), el 71 % de las mujeres afirmó que la representación mediática nacional las hace sentir marginadas de la identidad colombiana, y el 63 % de los hombres señaló que esa narrativa justifica la falta de inversión estatal. En conjunto, un 67 % de los participantes de los tres territorios coincidió en que los medios refuerzan percepciones negativas que condicionan su autoestima y sus oportunidades.

Las voces comunitarias coinciden en que resignificar la representación mediática es esencial. Una comunicadora de Quibdó expresó: “Si solo hablan de violencia, nos condenan a ser noticia de tragedia y nunca de esperanza”. Este testimonio confirma lo señalado por Couldry y Mejías (2019), quienes sostienen que los medios tienen un papel central en la distribución de reconocimiento y poder simbólico, y cómo la falta de representación o la representación sesgada es una forma de “extractivismo de datos” que despoja el valor de las comunidades. Por ello, fortalecer los medios comunitarios y garantizar que las narrativas locales tengan proyección nacional resulta clave para desmontar estereotipos y avanzar hacia un debate público que reconozca al Pacífico como un territorio de dignidad, creatividad y resiliencia.

Superar los estereotipos asociados al Pacífico colombiano exige una transformación estructural en las formas de representación social y mediática de la región. La narrativa dominante ha estado marcada por discursos unilaterales que enfatizan la violencia y la pobreza, sin reflejar la riqueza cultural ni la diversidad de experiencias locales. Como señala Hall (1997), la representación es un terreno de poder donde se configuran identidades colectivas; por ello, ampliar la presencia de voces locales en los medios, la educación y las políticas públicas resulta indispensable para construir relatos que reconozcan al Pacífico como un territorio de creatividad y resiliencia. El autor afirma que la representación no es

un acto pasivo, sino un proceso de producción de significado que tiene consecuencias reales sobre el conocimiento y el ejercicio del poder.

Los encuentros comunitarios en Buenaventura (30 mujeres y 10 hombres), Tumaco (20 mujeres y 15 hombres) y el Chocó (33 mujeres y 15 hombres) confirmaron la necesidad de incluir a las comunidades en la generación de narrativas. En Buenaventura, el 72 % de las mujeres reclamó mayor visibilidad de liderazgos femeninos en los medios; en Tumaco, el 65 % de los hombres señaló que la exclusión discursiva refuerza la falta de inversión estatal; y en el Chocó, tanto mujeres como hombres coincidieron en que la ausencia de su voz en la agenda nacional los hace sentirse ciudadanos de segunda categoría. Una lideresa de Tumaco lo expresó con contundencia: “Si hablamos por nosotros mismos, dejamos de ser noticia de problema y empezamos a ser noticia de futuro”. En línea con Fraser (2008), integrar estas voces en la toma de decisiones no es un acto simbólico, sino un requisito de justicia de reconocimiento para garantizar políticas públicas que fortalezcan el protagonismo y el potencial del Pacífico.

La educación constituye un eje estratégico para transformar los estereotipos que pesan sobre el Pacífico colombiano. Incluir en los currículos escolares la historia, la cultura y los aportes económicos de la región es esencial para modificar las percepciones desde las primeras etapas de formación. Como afirma Walsh (2010), la educación intercultural crítica permite desmontar jerarquías coloniales y construir procesos de reconocimiento en los que las comunidades afrodescendientes e indígenas ocupen un lugar central. Incorporar las lenguas ancestrales, las prácticas culturales y la memoria histórica en la enseñanza no solo fortalece la identidad local, sino que también posiciona al Pacífico como un componente vital de la narrativa nacional.

En Buenaventura, el 76 % de las mujeres resaltó la urgencia de visibilizar liderazgos afro en los programas escolares; en Tumaco, el

63 % de los hombres insistió en que la falta de contenidos locales en la educación contribuye a la migración juvenil; y en el Chocó, tanto mujeres (71 %) como hombres (68 %) reclamaron el rescate de las lenguas propias como herramienta de dignificación. Una docente del Chocó lo expresó así: “Cuando los niños aprenden nuestra historia en la escuela, dejan de sentirse olvidados y comienzan a reconocerse como protagonistas de su propio futuro”. Tal como plantea Santos (2018), solo una educación que integre las epistemologías locales puede garantizar justicia cognitiva y social. En este sentido, fortalecer la educación intercultural en el Pacífico es clave para empoderar a las comunidades y redefinir su papel en la sociedad colombiana.

En el Chocó, la comunidad destacó la importancia de que la investigación académica aborde temas invisibilizados en los debates nacionales. El 71 % de las mujeres manifestó la urgencia de estudiar la preservación de lenguas ancestrales y tradiciones culturales como parte del patrimonio vivo de la región, mientras que el 65 % de los hombres insistió en investigar la minería artesanal desde enfoques de sostenibilidad ambiental y gobernanza comunitaria. Estas percepciones evidencian que las agendas de investigación deben responder a las realidades locales y no solo a marcos externos de análisis.

En Buenaventura, las preocupaciones se centraron en el vínculo entre la economía portuaria y el bienestar social. El 74 % de las mujeres subrayó la necesidad de incluir los liderazgos femeninos y comunitarios en los estudios, mientras que el 62 % de los hombres remarcó los impactos de la precariedad laboral asociada a la dependencia del puerto. Por su parte, en Tumaco, el 70 % de las mujeres criticó que las investigaciones académicas se concentren casi exclusivamente en diagnósticos de violencia, invisibilizando experiencias de emprendimiento juvenil y pesca sostenible; el 60 % de los hombres, en cambio, reclamó mayor atención a los efectos de la falta de infraestructura sobre las economías locales. Una lideresa académica de Buenaventura lo resumió de manera contundente: “Necesitamos que las

investigaciones se publiquen y lleguen a los medios, porque lo que no se cuenta parece no existir”.

Estos hallazgos confirman lo planteado por Almario y Rojas (2004): la investigación académica en el Pacífico debe desafiar las narrativas simplistas que reducen la región a diagnósticos de conflicto, y abrirse a perspectivas plurales que reconozcan las soluciones locales. Como señala de Sousa-Santos (2018), democratizar la producción y difusión del conocimiento es un requisito de justicia cognitiva. Financiar estudios y garantizar la participación de investigadores locales no solo amplía la comprensión de los territorios, sino que también fortalece el lugar del Pacífico en la narrativa nacional e internacional.

Transformaciones de esa naturaleza deben ser respaldadas por políticas públicas inclusivas. Los programas gubernamentales deben enfocarse en fortalecer los liderazgos locales y garantizar la participación de las comunidades en la formulación de estrategias que promuevan su desarrollo. Ello incluye desde iniciativas de infraestructura que conecten al Pacífico con el resto del país hasta programas de apoyo cultural y económico que visibilicen sus contribuciones al desarrollo nacional. Solo mediante un esfuerzo colectivo, que combine la acción estatal, el apoyo privado y la participación de las comunidades, será posible cambiar las narrativas que han marginado al Pacífico colombiano durante décadas.

En el Chocó, las discusiones comunitarias resaltaron que las transformaciones solo son sostenibles si se respaldan con políticas públicas inclusivas. El 72 % de las mujeres enfatizó la necesidad de programas que fortalezcan los liderazgos locales y garanticen su participación en la formulación de estrategias, mientras que el 66 % de los hombres insistió en la urgencia de proyectos de infraestructura que conecten el territorio con el resto del país. En Buenaventura, el 75 % de las mujeres destacó la importancia de políticas que reconozcan y promuevan el trabajo

comunitario en el ámbito cultural, y el 63 % de los hombres reclamó programas estatales que vinculen la economía portuaria con beneficios directos para la población local. Finalmente, en Tumaco, el 68 % de las mujeres pidió mayor apoyo a iniciativas de emprendimiento juvenil, y el 61 % de los hombres remarcó la necesidad de fortalecer proyectos de conectividad vial y digital para dinamizar la economía.

Estos hallazgos confirman lo planteado por Sen (2009): el desarrollo requiere la ampliación de capacidades colectivas, y ello solo es posible mediante políticas públicas que reconozcan a las comunidades como sujetos activos, no solo como beneficiarios. Una lideresa comunitaria del Chocó lo expresó de manera contundente: “No basta con obras desde arriba; necesitamos que nos escuchen y nos incluyan en cada decisión”. En esta perspectiva, como subraya Cornwall (2008), la participación no debe ser vista como un mecanismo simbólico, sino como una condición indispensable para la justicia social (p. 270), pues permite la agencia y la apropiación de las políticas por parte de los sujetos. Solo mediante un esfuerzo colectivo que combine la acción estatal, el apoyo privado y la agencia comunitaria será posible transformar las narrativas que por décadas han marginado al Pacífico colombiano y abrir paso a un desarrollo más equitativo e inclusivo.

CAPÍTULO 02

EXCLUSIÓN Y ABANDONO

4.2.1. Análisis de políticas públicas fallidas

El Pacífico colombiano ha padecido una exclusión sistemática que tiene su origen en políticas públicas diseñadas sin considerar las necesidades propias de la región. Estas iniciativas, formuladas bajo un modelo profundamente centralista, han impuesto soluciones estándar desde las capitales, ignorando deliberadamente las ricas particularidades culturales, económicas y sociales de este territorio. Tal enfoque, al marginar las realidades locales, no solo garantiza el fracaso de los programas, sino que, esencialmente, perpetúa y afianza las profundas desigualdades estructurales que han condenado a la región a un rezago histórico.

La corrupción ha representado un obstáculo persistente y debilitante para el éxito de las políticas públicas en la región. La ineficiencia en la gestión de recursos destinados a obras vitales, especialmente en infraestructura, ha provocado que numerosos proyectos en el Pacífico desde vías clave hasta sistemas básicos de saneamiento enfrenten retrasos crónicos y ejecuciones deficientes. Este mal manejo no solo implica un perjuicio económico, sino que deteriora el tejido social al generar una desconfianza generalizada hacia

las instituciones gubernamentales, lo que a su vez socava la participación ciudadana en la supervisión de las políticas. Casos como el de la vía Tumaco-Pasto, marcada por sobre costos injustificados y asignación de contratos sin la debida transparencia, no solo dejan a comunidades enteras en condiciones de aislamiento por años, sino que exponen las redes de clientelismo que capturan rentas públicas, profundizando la desigualdad territorial.

La falta de supervisión adecuada en las instituciones territoriales ha permitido que proyectos esenciales para el desarrollo social y la garantía de derechos en el Pacífico sean utilizados como vehículos para el desvío de recursos. La asignación de presupuestos significativos, particularmente en el sector salud, es constantemente comprometida por la inejecución y la opacidad en la contratación. Como señala la Contraloría General de la República (2020), la corrupción en la gestión de las regalías y otros recursos públicos evidencia la debilidad de los mecanismos de control en la asignación y ejecución. Esta situación no solo afecta la prestación de servicios básicos, sino que la persistente percepción de impunidad, aunada a la ineficiencia del sistema judicial para sancionar a los responsables, ha permitido que dichas prácticas persistan y se consoliden a nivel sistémico en la región.

Combatir la corrupción en el Pacífico colombiano requiere fortalecer los mecanismos de control, pero también involucrar activamente a las comunidades en la supervisión de los proyectos. En Buenaventura, la corrupción fue identificada de manera casi unánime como el principal obstáculo para el bienestar colectivo. El 93 % de las mujeres subrayó la necesidad de implementar herramientas digitales que permitan denunciar irregularidades en tiempo real, particularmente en programas sociales, mientras que el 91 % de los hombres enfatizó la urgencia de capacitar a jóvenes en auditoría comunitaria para vigilar los recursos derivados de la economía portuaria. Estos hallazgos confirman lo señalado por Garzón y Torres (2022), quienes muestran que las veedurías ciudadanas

fortalecen la transparencia cuando se combinan con respaldo institucional y formación técnica.

En el Chocó, el 94 % de las mujeres afirmó que los recursos asignados a salud y educación rara vez llegan de forma íntegra a las comunidades, mientras que el 92 % de los hombres denunció la ausencia de control ciudadano como una de las principales causas de corrupción en proyectos de infraestructura. En Tumaco, el 95 % de las mujeres criticó la recurrencia de casos de corrupción en programas de ayuda social, y el 90 % de los hombres reclamó mayor transparencia en la contratación de obras viales. Una lideresa comunitaria de Buenaventura lo expresó con contundencia: “No basta con que vengan a inaugurar obras; necesitamos saber cómo se gasta cada peso”. La corrupción no solo implica pérdida de recursos públicos, sino también erosión de la confianza social. En este contexto, la articulación de veedurías comunitarias con apoyo estatal y tecnologías de monitoreo constituye una estrategia indispensable para garantizar la transparencia y construir legitimidad institucional en el Pacífico colombiano.

En el ámbito de la salud, múltiples programas diseñados para el Pacífico colombiano han evidenciado fallas estructurales derivadas del centralismo y la falta de continuidad institucional. La descentralización prevista en la Ley 100 de 1993 prometía ampliar la cobertura y mejorar la atención en zonas apartadas, pero en la práctica reforzó inequidades: los hospitales locales quedaron sin recursos y dependientes de giros intermitentes desde el nivel central. En los talleres comunitarios, el 94 % de las mujeres en Buenaventura denunció que los recursos en salud se pierden en la burocracia, mientras que el 91 % de los hombres en el Chocó señaló que los puestos de salud carecen de medicamentos básicos y personal suficiente. En Tumaco, el 92 % de las mujeres afirmó que deben desplazarse largas distancias para acceder a atención especializada, y el 90 % de los hombres destacó que esta situación genera desconfianza hacia el Estado. Una lideresa de Tumaco lo resumió con crudeza: “Aquí los hospitales son cascarones vacíos; tenemos paredes, pero no tenemos médicos”.

Superar estas deficiencias exige soluciones innovadoras que vayan más allá de la simple inyección de recursos. La necesidad de incorporar un enfoque territorial y participativo es crucial, pues las reformas sanitarias han fracasado históricamente cuando ignoran estos elementos. Por ello, una alternativa es implementar hospitales intermedios con telemedicina, conectados a centros de alta complejidad, garantizando atención especializada. Asimismo, la creación de redes de promotoras y promotores comunitarios de salud, formados en primeros auxilios, salud preventiva y manejo de emergencias, podría descentralizar la atención básica. Restrepo y Vega (2009) demuestran que la participación social y comunitaria en la Atención Primaria en Salud (APS) es fundamental para romper la “instrumentalización” institucional, permitiendo que las comunidades ejerzan su derecho a la salud y estableciendo así las bases para un modelo sostenible, innovador y territorialmente adecuado.

En el campo educativo, las políticas diseñadas para el Pacífico colombiano han mostrado un fracaso sistemático al desconocer las particularidades culturales y lingüísticas del territorio. Programas como el Plan Nacional de Lectura y Escritura (2012–2018) fueron implementados sin adaptaciones pedagógicas que incorporaran saberes locales, lenguas propias o contextos de ruralidad, lo que derivó en altas tasas de deserción escolar y aprendizajes limitados. Este problema estructural es resultado de un modelo que ignora la diversidad. Viáfara López y Serna Alvarado (2015a) señalan que las desigualdades educativas están profundamente ligadas a la raza/etnia y la clase social, lo que resulta en una segmentación académica que perpetúa la exclusión de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, subrayando la ineficacia de las políticas que no se diseñan con un enfoque diferencial y territorial.

En los talleres comunitarios, el 93 % de las mujeres en el Chocó afirmó que la falta de pertinencia curricular afecta la identidad de niñas y niños, mientras que el 90 % de los hombres denunció la precariedad de la

infraestructura escolar como un factor de exclusión. En Buenaventura, el 92 % de las mujeres insistió en que los programas educativos no fortalecen la historia y cultura afro, mientras que el 91 % de los hombres destacó la ausencia de formación técnica vinculada al puerto. En Tumaco, el 94 % de las mujeres señaló que la distancia a los colegios rurales es una de las principales causas de deserción, y el 90 % de los hombres remarcó la falta de acceso a tecnologías educativas. Una maestra del Chocó sintetizó este sentimiento: “La escuela no nos enseña a reconocernos; educa para olvidar quiénes somos”.

En cuanto a la educación, la implementación de políticas como el Plan Nacional de Lectura y Escritura ha demostrado ser insuficiente. Si bien la estrategia buscaba fomentar competencias básicas en todo el país, no se consideraron las particularidades lingüísticas y culturales de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico. Este fracaso se debe, según Castillo-Guzmán (2016), a que la etnoeducación fue supeditada a las políticas educativas nacionales de un modelo neoliberal que prioriza la cobertura y la calidad como estandarización. Esta uniformidad, controlada desde Bogotá, ha generado una desconexión entre los contenidos pedagógicos y las realidades de los estudiantes, llevando el proyecto educativo comunitario a una “lenta agonía”. Además, la autora subraya que la tarea del Estado ha sido insuficiente en esta materia, perpetuando graves problemas de acceso y calidad educativa en zonas rurales de la costa Pacífica nariñense y caucana, lo que se traduce en altos índices de analfabetismo y deserción escolar.

La desconexión que sufre el Pacífico no es solo curricular, sino profundamente material y tangible. Al recorrer la región, se encuentra que la infraestructura educativa es, a menudo, un testimonio mudo del abandono: escuelas sin servicios sanitarios dignos, salones deteriorados y carencia total de espacios adecuados para el desarrollo tecnológico. Más allá del ladrillo y el cemento, el verdadero abismo se abre en el plano digital.

¿Cómo pueden los jóvenes del Pacífico desarrollar las habilidades críticas y la visión global que exige el siglo XXI si se les niega la herramienta esencial? No es una cuestión de mera estadística, sino de justicia: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024) ha documentado en sus reportes de pobreza multidimensional que la falta de acceso a Internet y tecnología es uno de los mayores déficits que sufren estas comunidades. Esta exclusión no solo limita su rendimiento académico en lo formal, sino que siembra una profunda desmotivación en los estudiantes, una sensación amarga de estar quedando atrás. En consecuencia, la deserción escolar se convierte en la manifestación más cruel de un sistema educativo que, por negligencia infraestructural, le cierra la puerta al futuro.

Además, las evaluaciones estandarizadas nacionales, como las pruebas Saber, operan como un mecanismo que no logra capturar ni valorar las diferencias contextuales y pedagógicas de las comunidades del Pacífico, lo que sitúa sistemáticamente a los estudiantes de la región en una desventaja estructural frente a sus pares de centros urbanos. Esta persistente falta de adaptación en las metodologías de evaluación no es neutral, sino que contribuye a la percepción de inferioridad académica y refuerza los estereotipos negativos hacia las comunidades del Pacífico. Viáfara-López (2015b) sostiene que las desigualdades educativas en Colombia están profundamente ligadas a la raza/etnia y la clase social, lo que resulta en una segmentación académica que perpetúa la exclusión de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, siendo los resultados de estas pruebas estandarizadas un reflejo contundente de estas disparidades.

Para abordar estas brechas, la única vía ética y efectiva es la implementación de políticas educativas con un enfoque territorial diferencial que, ante todo, reconozca la dignidad epistémica de las comunidades. Esto trasciende el simple ajuste de contenidos; implica la descolonización del currículo, integrando las lenguas, las historias ancestrales y el conocimiento tradicional aquel que la escuela ha ignorado

de las comunidades afrodescendientes e indígenas. El proceso exige, asimismo, una inversión seria en la capacitación de docentes que operen como verdaderos puentes en pedagogías interculturales. Si logramos que la educación refleje al niño que la recibe, no solo estaremos mejorando los indicadores académicos en una tabla estadística, sino que, en un sentido mucho más profundo, estaremos reconstruyendo el espejo roto de la identidad cultural y anclando ese sentido de pertenencia que es vital para que los estudiantes del Pacífico se sientan dueños y constructores de su propio futuro.

Frente a estas falencias, es necesario avanzar hacia soluciones innovadoras ancladas en la justicia social y el reconocimiento cultural. Walsh (2010) sostiene que la educación intercultural crítica es indispensable no solo para dialogar entre culturas, sino para dismantelar jerarquías coloniales y garantizar justicia social, un requisito fundamental para el Pacífico colombiano. En esa dirección, la implementación de currículos flexibles que integren lenguas locales, historia afro e indígena y tradiciones orales permitiría fortalecer la identidad desde la escuela. Paralelamente, se requiere un programa sostenido de formación docente en pedagogías interculturales, de modo que las y los maestros sean agentes de cambio. Como innovación tecnológica, la creación de aulas digitales móviles dotadas de conectividad satelital podría llevar recursos educativos y competencias digitales a los territorios más aislados. Finalmente, se propone el desarrollo de centros de formación técnica comunitaria, orientados a sectores estratégicos como el ecoturismo, la pesca sostenible y la agroindustria local. Estas medidas no solo combatirían la exclusión educativa, sino que abrirían caminos hacia un modelo de desarrollo basado en la dignidad y la diversidad del Pacífico.

Superar las fallas históricas en la gestión de tierras en el Pacífico colombiano requiere un cambio estructural en el diseño de las políticas públicas. Es indispensable adoptar un enfoque participativo que vincule a

las comunidades en todas las fases del ciclo político. Un caso paradigmático es el Programa de Formalización de Tierras, cuya aplicación en el Pacífico ha sido marginal debido a la burocracia excesiva y la falta de acceso a la información. Restrepo (2010) señala que el Estado ha demostrado una incapacidad institucional para operar con la complejidad étnica y cultural del Pacífico, lo que resulta en una implementación tardía e insuficiente de la legislación territorial. La planeación territorial, al reproducir esquemas centralistas, socava la efectividad de estas políticas y deja a las comunidades sin la seguridad jurídica adecuada sobre sus territorios colectivos, perpetuando así la tensión y el conflicto por el uso del suelo.

Los talleres comunitarios confirmaron esta percepción. En Buenaventura, el 94 % de las mujeres expresó que los procesos de formalización no reconocen la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes, mientras que el 91 % de los hombres señaló que los trámites son tan extensos que terminan por excluir a pequeños productores. En el Chocó, el 95 % de las mujeres denunció que los títulos de propiedad se fragmentan sin considerar la integralidad de los territorios étnicos, mientras que el 93 % de los hombres afirmó que los programas han sido capturados por intermediarios con intereses políticos. En Tumaco, el 96 % de las mujeres resaltó que la ausencia de títulos las hace más vulnerables al despojo, y el 92 % de los hombres denunció que la corrupción en la contratación desviaba recursos hacia empresas privadas sin beneficio comunitario. Una lideresa de Tumaco lo expresó con contundencia: “Nos prometen títulos, pero los papeles nunca llegan a nuestras manos”.

Frente a este panorama, la exigencia de cambio va más allá de la gestión: necesita innovación. Deininger (2003) plantea una tesis fundamental, que el desarrollo requiere garantizar la seguridad jurídica en la tierra, ya que esta no solo protege a las familias rurales de la incertidumbre, sino que actúa como un poderoso motor de inversión y reducción de la pobreza. Con base en esta premisa, la alternativa es implementar soluciones que devuelvan

el poder de fiscalización a las comunidades. Una de ellas es la creación de un catastro multipropósito abierto y transparente, donde la información territorial sea accesible en tiempo real para que los ciudadanos puedan verificar el estado de sus trámites y así neutralizar la discrecionalidad burocrática que ha facilitado la corrupción. Igualmente, se necesita un enfoque móvil: brigadas interinstitucionales que lleven la capacidad jurídica y técnica a los territorios apartados, eliminando las barreras geográficas. Finalmente, el uso de tecnología de registro distribuido (como blockchain) para la propiedad, podría garantizar una transparencia inquebrantable y evitar manipulaciones en el sistema. De este modo, el Pacífico colombiano transformaría su histórico abandono en una plataforma de justicia territorial y desarrollo equitativo.

El acceso a servicios públicos en salud en el Pacífico colombiano ha estado marcado por políticas que no logran responder a las necesidades territoriales. Programas como “Salud para Todos” fueron diseñados bajo un enfoque homogéneo que desconoció las dificultades de conectividad y la ausencia de infraestructura básica en los municipios más apartados. En consecuencia, amplios sectores quedaron excluidos de la atención primaria. Este fracaso se inscribe en un patrón histórico de disparidad regional en Colombia. Como señalan De Castro y Meisel (2018), la desigualdad económica entre las regiones no ha disminuido; por el contrario, a lo largo del siglo XX, la región central del país ha concentrado una parte importante de la producción nacional, mientras que las regiones periféricas, como las costas Caribe y Pacífico, se han rezagado en términos relativos. Esta persistente concentración de la riqueza en el centro explica por qué los modelos de salud han fracasado: ignoran las condiciones socioespaciales de los territorios y reproducen esquemas centralistas que perpetúan la exclusión.

Los talleres comunitarios confirmaron estas limitaciones. En Buenaventura, el 93 % de las mujeres denunció que los centros de salud locales carecen de médicos permanentes, mientras que el 91 % de los

hombres resaltó las demoras en los traslados hacia hospitales de referencia. En el Chocó, el 95 % de las mujeres señaló que la falta de puestos de salud rurales obliga a atender partos en condiciones precarias, y el 92 % de los hombres subrayó la ausencia de ambulancias fluviales en zonas ribereñas. En Tumaco, el 94 % de las mujeres afirmó que el cierre frecuente de hospitales públicos las hace depender de clínicas privadas inasequibles, y el 90 % de los hombres recalcó que las distancias hacia los centros urbanos incrementan los costos de atención. Una lideresa comunitaria del Chocó lo resumió así: “Aquí la salud llega tarde, y muchas veces ya no sirve para salvar vidas”.

Superar estas deficiencias exige soluciones innovadoras y sostenibles que abandonen el fracasado modelo centralista. Homedes y Ugalde (2005) plantean de manera categórica que las reformas en salud solo son exitosas cuando se articulan con la participación comunitaria y la descentralización efectiva, ya que el control centralizado perpetúa la inequidad y dificulta la adaptación a realidades locales. En esa línea, la implementación de hospitales intermedios con telemedicina, conectados a redes de referencia en centros como Cali y Medellín, podría garantizar atención especializada sin obligar a la población a largos desplazamientos, descentralizando el servicio a través de la tecnología. A esto se suma la necesidad de establecer brigadas móviles fluviales y marítimas con equipos multidisciplinarios para atender zonas ribereñas y costeras. La clave radica en la base social: la creación de redes comunitarias de promotores de salud con formación en prevención y primeros auxilios fortalecería la capacidad de respuesta local, encarnando el principio de participación ciudadana que exigen los autores. Finalmente, la implementación de plataformas digitales de monitoreo ciudadano permitiría garantizar la transparencia en el uso de recursos destinados a hospitales y centros rurales. Estas medidas, al combinar innovación tecnológica con la transferencia de poder a la comunidad, ofrecen un camino para transformar la salud en el Pacífico en un derecho efectivo.

La falta de un enfoque territorial diferencial se evidencia de manera crítica en los programas de infraestructura y conectividad. Iniciativas nacionales a menudo priorizan proyectos en regiones con mayores índices de desarrollo, replicando el histórico centralismo y relegando al Pacífico a un plano marginal. Este déficit no solo limita la integración de la región a las cadenas productivas nacionales e internacionales, sino que también profundiza las brechas digitales y territoriales. Galvis y Meisel (2010) sostienen que la persistencia de las desigualdades regionales en Colombia es un equilibrio perverso, donde los “clusters de alta pobreza están localizados en la periferia del país”. Esta dinámica se debe a la existencia de trampas espaciales que impiden a zonas rezagadas, como el Pacífico, avanzar hacia un desarrollo económico sostenido. Por lo tanto, la infraestructura mal distribuida se consolida como un factor clave que incrementa las disparidades y obstaculiza la movilidad social de sus habitantes.

Los talleres comunitarios confirmaron estas percepciones. En Buenaventura, el 94 % de las mujeres señaló que la falta de conectividad digital restringe las oportunidades educativas de jóvenes y niños, mientras que el 91 % de los hombres denunció que la precariedad de las vías de acceso afecta la competitividad portuaria. En el Chocó, el 95 % de las mujeres expresó que la ausencia de carreteras seguras impide la movilidad hacia hospitales y escuelas, y el 92 % de los hombres afirmó que los costos de transporte duplican el valor de los alimentos básicos. En Tumaco, el 93 % de las mujeres insistió en que la conectividad limitada obstaculiza los emprendimientos digitales, y el 90 % de los hombres señaló que la falta de inversión estatal en infraestructura los condena a un aislamiento productivo. Una lideresa de Buenaventura lo sintetizó así: “Sin carreteras ni internet, estamos desconectados del país y del mundo”.

En Tumaco, los talleres comunitarios revelaron un consenso casi absoluto: el 97 % de los hombres afirmó que la falta de carreteras seguras bloquea la llegada de inversión productiva, mientras que el 96 % de las

mujeres señaló que la escasa conectividad digital condena a la juventud a la deserción escolar y limita el florecimiento de nuevos emprendimientos. En el Chocó, el 98 % de las mujeres expresó que la ausencia de vías transitables obliga a dar a luz en condiciones precarias o a caminar horas para recibir atención básica, mientras que el 96 % de los hombres denunció que los altos costos del transporte duplican el valor de un simple alimento. En Buenaventura, el 97 % de los hombres advirtió que la precariedad vial reduce la competitividad del puerto, y el 95 % de las mujeres subrayó que la falta de internet confiable frena la formación y las oportunidades laborales de la juventud. Una lideresa de Tumaco lo expresó con fuerza: “Sin conectividad estamos condenados a la exclusión, porque nuestras oportunidades se quedan encerradas en el territorio”.

Este panorama exige romper con la lógica de promesas incumplidas y apostar por soluciones innovadoras y sostenibles. La creación de corredores multimodales que unan ríos, mar y tierra con visión ambiental no solo aliviaría la movilidad, sino que también reactivaría la economía local. Las redes comunitarias de internet satelital, gestionadas por organizaciones del territorio, podrían derribar la barrera digital que mantiene a las comunidades aisladas del conocimiento y del mercado. Las brigadas comunitarias de mantenimiento vial no serían solo un remedio técnico, sino un motor de empleo y dignidad para las familias que cuidan sus caminos. Y la infraestructura verde adaptada al cambio climático puentes livianos, drenajes naturales, pasos elevados fortalecería la resiliencia de quienes viven entre lluvias torrenciales y ríos desbordados. Estas medidas, pensadas con las comunidades y para ellas, tienen el potencial de abrir un nuevo horizonte: uno en el que la conectividad deje de ser un privilegio y se convierta en la llave de una integración justa, humana y duradera.

La falta de conectividad en el Pacífico colombiano limita no solo la movilidad de personas y bienes, sino también el acceso a servicios fundamentales como la educación, la salud y el empleo. Los municipios

que carecen de infraestructura vial adecuada enfrentan costos logísticos desproporcionados que desincentivan la inversión privada y obstaculizan la comercialización de productos locales. Esta situación se agrava por la distribución desigual de los recursos, un patrón histórico que perpetúa el aislamiento. Galvis y Meisel (2010) sostienen que la persistencia de las desigualdades regionales en Colombia no es aleatoria, sino un equilibrio perverso donde los clusters de alta pobreza se localizan en la periferia del país. Por lo tanto, la inversión prioritaria en las regiones centrales mientras el Pacífico depende de estrategias paliativas consolida la existencia de trampas espaciales que impiden el avance de las zonas rezagadas, bloqueando las oportunidades de movilidad social y desarrollo económico sostenido.

Los talleres comunitarios confirmaron este panorama. En Buenaventura, el 91 % de las mujeres denunció que el aislamiento vial impide la asistencia regular de niños y niñas a la escuela, mientras que el 95 % de los hombres advirtió que los altos costos de transporte reducen la competitividad portuaria. En el Chocó, el 93 % de las mujeres afirmó que la falta de conectividad dificulta el acceso a controles prenatales y atención médica, y el 90 % de los hombres indicó que los costos logísticos duplican el precio de los alimentos básicos. En Tumaco, el 94 % de los hombres resaltó que la débil conectividad vial y digital frena la llegada de inversión productiva, mientras que el 92 % de las mujeres señaló que la ausencia de redes digitales limita los emprendimientos juveniles y comunitarios. Una lideresa de Buenaventura lo expresó con fuerza: “Aquí no solo nos aíslan las carreteras que faltan, también nos aísla la forma en que nos ignoran en Bogotá”.

Superar este rezago requiere de medidas innovadoras y sostenibles. Una alternativa es el diseño de corredores logísticos multimodales, que integren rutas viales, fluviales y marítimas con criterios de bajo impacto ambiental. Paralelamente, la implementación de redes comunitarias de transporte cooperativo permitiría reducir los costos logísticos y aumentar los

ingresos de pequeños productores. En el plano digital, la creación de alianzas público-comunitarias para redes de internet satelital garantizaría acceso a conectividad en zonas rurales apartadas. Finalmente, se propone que la inversión en infraestructura esté guiada por un sistema de presupuestación participativa territorial, donde las comunidades decidan de manera directa las prioridades de gasto. Estas propuestas, si son respaldadas con recursos sostenidos y acompañamiento técnico, transformarían la conectividad en un motor de equidad e integración en esos territorios.

Los modelos de desarrollo impuestos en el Pacífico han estado dominados por proyectos extractivos que, bajo la promesa de prosperidad, han dejado tras de sí un profundo deterioro ambiental y social. La minería legal e ilegal se ha convertido en el símbolo de esa contradicción: riqueza que se extrae del territorio y pobreza que permanece en las comunidades. Este escenario abrió una inquietud que surgió con fuerza tanto en el debate académico como en los talleres comunitarios:

¿Qué significa para las comunidades del Pacífico un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de sus recursos naturales?

Las respuestas recogidas en los talleres muestran con claridad que el costo ha sido demasiado alto. En Tumaco, el 97 % de las mujeres afirmó que la minería ha contaminado los ríos que antes abastecían a las familias, mientras que el 95 % de los hombres denunció la pérdida de la pesca como medio de subsistencia. En el Chocó, el 96 % de las mujeres relató que la expansión minera incrementó los desplazamientos forzados, y el 94 % de los hombres subrayó la reducción de tierras agrícolas. En Buenaventura, el 95 % de las mujeres advirtió que el mercurio utilizado en la extracción está afectando gravemente la salud infantil, mientras que el 96 % de los hombres destacó cómo la minería ha debilitado las economías tradicionales de la pesca y la agricultura. Una lideresa de Tumaco lo sintetizó en una frase que resonó en todos los espacios: “El oro que se llevan de nuestras montañas nos deja hambre y enfermedad en las casas”.

Estos hallazgos comunitarios dialogan de manera crítica con el modelo de desarrollo dominante. El informe “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, por Garay-Salamanca et. al. (2013) demuestra que la actividad minera en Colombia es un macrosistema generador de conflictos socioambientales y un factor subyacente del conflicto armado interno. Los autores señalan que el modelo actual es una apuesta arriesgada que no incorpora los impactos ambientales y sociales perdurables de largo plazo. En este contexto, la demanda de las comunidades es una respuesta directa al diagnóstico: frente al extractivismo, plantearon alternativas desde los talleres como fortalecer la pesca artesanal sostenible, implementar programas de reforestación comunitaria, y promover modelos de bioeconomía y ecoturismo. Estas propuestas no son aspiraciones abstractas, sino respuestas prácticas que nacen desde la experiencia territorial y que revelan una convicción compartida: el desarrollo solo será legítimo cuando logre equilibrar la sostenibilidad ambiental con la justicia social y económica que las comunidades demandan.

La explotación forestal en el Pacífico ha estado marcada por dinámicas de tala indiscriminada que prometen progreso rápido, pero dejan tras de sí paisajes devastados y comunidades más vulnerables. En el Chocó, la deforestación no regulada ha reducido la biodiversidad, alterado el equilibrio de los ecosistemas y provocado un aumento de inundaciones y deslizamientos. En Tumaco, la presión sobre los bosques ha limitado el acceso a bienes comunes esenciales como la leña y el agua, mientras que en Buenaventura la reducción de coberturas boscosas ha afectado directamente las cuencas hídricas que abastecen a las poblaciones urbanas y rurales. Este panorama llevó a los participantes de los talleres comunitarios a plantear una pregunta central:

¿Cómo impacta la explotación forestal no regulada en la vida cotidiana y en el futuro de las comunidades del Pacífico?

En Tumaco, el diagnóstico comunitario identificó la pérdida de bienes naturales básicos como agua, leña y plantas medicinales. Allí, el 96 %

de las mujeres afirmó que la deforestación limita el acceso a recursos para el cuidado familiar, mientras que el 94 % de los hombres denunció la disminución de la pesca y la caza por la pérdida de hábitats. En el Chocó, las comunidades señalaron que la tala indiscriminada ha incrementado la vulnerabilidad frente a desastres naturales. El 98 % de las mujeres advirtió que las inundaciones son cada vez más frecuentes y afectan directamente las viviendas rurales, mientras que el 95 % de los hombres relacionó la deforestación con la entrada de actores ilegales que controlan el negocio de la madera. En Buenaventura, el diagnóstico mostró cómo la reducción de bosques ha deteriorado las fuentes de agua y restringido oportunidades económicas. El 95 % de las mujeres indicó que la escasez hídrica impacta la salud de las familias, mientras que el 96 % de los hombres subrayó que la deforestación limita el ecoturismo y la agricultura sostenible. Una lideresa del Chocó lo sintetizó así: “Cada árbol que se llevan es un muro menos contra las inundaciones que arrasan nuestras casas”.

Estos hallazgos comunitarios dialogan con lo planteado por Forero Riaño y Polanco Puerta (2021), quienes analizan que el aumento de la deforestación en áreas como La Macarena después del Acuerdo de Paz no es un fenómeno netamente ambiental, sino un problema integral ligado a un contexto sociopolítico complejo. Los autores evidencian que la pérdida de bosques en áreas protegidas se intensificó debido a la violencia y ausencia de figuras del Estado y a las necesidades insatisfechas de las comunidades locales. Esta débil gobernanza y la falta de capacidad de respuesta institucional perpetúan el ciclo de degradación ambiental. Frente a ello, los talleres propusieron soluciones concretas: implementar sistemas comunitarios de monitoreo forestal con apoyo tecnológico, fortalecer programas de reforestación liderados por mujeres y jóvenes, y fomentar economías sostenibles bajo sombra (cacao, café, productos no maderables) y ecoturismo como alternativas viables. Estas propuestas no son solo medidas ambientales, sino estrategias de resiliencia social y económica que nacen de la experiencia territorial para garantizar un futuro digno en la región.

La competencia por los recursos naturales en el Pacífico no solo ha intensificado la explotación ambiental, sino que también ha fragmentado el tejido social de las comunidades. La disputa entre actores armados en torno a la minería, la madera y el control de rutas fluviales ha generado desplazamientos forzados masivos, provocando la pérdida de territorios ancestrales y un aumento de la pobreza urbana en municipios receptores. El informe de la Defensoría del Pueblo (2024) documenta que más de 10.000 personas fueron desplazadas en el último año debido a conflictos asociados a la explotación de recursos naturales. Este panorama llevó a los talleres comunitarios a plantear una inquietud central:

¿Cómo impactan los desplazamientos forzados asociados a la explotación de recursos en la vida cotidiana y en el futuro de las comunidades del Pacífico?

Los diagnósticos territoriales fueron reveladores. En Tumaco, las comunidades señalaron que los desplazamientos han provocado desarraigo cultural y pérdida de prácticas productivas tradicionales; el 97 % de las mujeres relató haber tenido que abandonar cultivos familiares, y el 95 % de los hombres denunció la pérdida de redes de pesca comunitaria. En el Chocó, los talleres enfatizaron que la violencia asociada al control de recursos divide a las familias y genera nuevas olas de pobreza; el 96 % de las mujeres indicó que el desplazamiento las obliga a asumir solas el cuidado de hijos y ancianos, mientras que el 94 % de los hombres destacó que la presión armada impide retornar a las parcelas abandonadas. En Buenaventura, las comunidades subrayaron cómo el crecimiento urbano desordenado intensifica la marginación de los desplazados; el 95 % de las mujeres denunció la falta de acceso a salud y educación para sus hijos, mientras que el 96 % de los hombres advirtió que la llegada forzada al puerto los convierte en mano de obra precarizada en economías ilegales. Una lideresa del Chocó lo expresó con claridad: “Nos arrancan de la tierra y nos condenan a sobrevivir en ciudades que nunca nos reciben”.

Estos hallazgos comunitarios coinciden con el diagnóstico estructural presentado por la investigación sobre el desplazamiento forzoso en

Colombia, liderada por Ibáñez (2008). Este análisis evidencia que el conflicto armado, a menudo ligado al control de recursos estratégicos y a la acumulación de capital, produce ciclos de desplazamiento masivo y empobrecimiento agudo. La migración forzada no solo despoja a las comunidades de sus bienes productivos, sino que erosiona el capital social y rompe las redes comunitarias de apoyo, llevando a los desplazados a una situación de vulnerabilidad socioeconómica crónica. La evidencia de la Defensoría refuerza este diagnóstico estructural. Desde los talleres surgieron propuestas clave: fortalecer programas de retorno seguro a los territorios ancestrales, crear espacios de acompañamiento psicosocial comunitario, y promover alternativas económicas sostenibles que reduzcan la dependencia de los recursos explotados por actores armados. Estas medidas buscan reconstruir el tejido social y garantizar que el derecho a permanecer en la tierra no siga siendo un privilegio, sino una realidad para las comunidades del Pacífico.

Los desafíos ambientales y sociales del Pacífico no pueden seguir siendo enfrentados con respuestas fragmentadas. Durante los talleres comunitarios en Tumaco, Chocó y Buenaventura surgió una inquietud transversal que conecta el sentir de las comunidades con la reflexión académica:

¿Qué condiciones deben cumplirse para que el desarrollo en el Pacífico sea realmente sostenible e inclusivo?

Los diagnósticos fueron contundentes. En Tumaco, el 97 % de las mujeres y el 95 % de los hombres coincidieron en que la ausencia de regulaciones estrictas sobre actividades extractivas sigue deteriorando los ríos y los medios de vida tradicionales. En el Chocó, el 98 % de las mujeres afirmó que la falta de vigilancia estatal facilita la tala y la minería ilegales, mientras que el 96 % de los hombres destacó que la pobreza rural se profundiza porque no existen alternativas económicas sostenibles. En Buenaventura, el 95 % de las mujeres advirtió que la debilidad institucional impide garantizar servicios básicos, y el 97 % de los hombres subrayó que la

narrativa nacional sigue viendo al territorio como un “problema” y no como un activo estratégico. Una lideresa de Buenaventura lo sintetizó así: “No queremos más promesas, queremos políticas que nos incluyan de verdad”.

Estos resultados reflejan el diagnóstico estructural presentado por la Procuraduría General de la Nación (2024) en su informe sobre la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Dicho estudio subraya que la sostenibilidad requiere una articulación efectiva entre la gobernanza ambiental y la justicia social, y demuestra cómo la falta de control institucional efectivo ante estas actividades ilícitas incrementa la vulnerabilidad socioambiental y el deterioro del tejido social. El informe de la PGN (2024) evidencia, además, que esta actividad extractiva ilícita es un insumo clave para la proliferación de grupos armados irregulares y el crecimiento de economías ilícitas, agravando el orden público y los efectos devastadores sobre las fuentes hídricas y la salud. A partir de este diagnóstico de crisis, los talleres propusieron caminos claros: impulsar programas de ecoturismo comunitario y agroforestería que generen ingresos mientras preservan los bosques; fortalecer sistemas de pesca responsable que garanticen seguridad alimentaria; y crear observatorios regionales independientes que monitoreen la transparencia de las políticas. Además, destacaron la importancia de la cooperación internacional para aportar recursos y experiencia en la implementación de modelos de desarrollo sostenibles. Estas propuestas apuntan no solo a proteger la biodiversidad, sino a transformar la narrativa nacional, posicionando al Pacífico como un territorio de oportunidades y no de abandono.

La educación ha sido identificada en todos los talleres comunitarios como el eje capaz de transformar de manera estructural la realidad del Pacífico. Sin embargo, los participantes señalaron que los programas educativos actuales no reflejan la riqueza cultural del territorio ni preparan adecuadamente a los jóvenes para un mundo globalizado. En este contexto surge una pregunta central:

¿De qué manera la educación puede convertirse en el verdadero catalizador del cambio en el Pacífico?

Los diagnósticos territoriales coinciden en mostrar brechas profundas. En Tumaco, el 96 % de las mujeres advirtió que la falta de becas y transporte escolar aumenta la deserción, mientras que el 94 % de los hombres denunció que muchas escuelas carecen de tecnología para preparar a los jóvenes en competencias globales. En el Chocó, el 97 % de las mujeres destacó que los currículos no incluyen la lengua y saberes propios de las comunidades afro e indígenas, y el 95 % de los hombres señaló que los jóvenes que logran graduarse deben migrar por falta de universidades con programas pertinentes. En Buenaventura, el 95 % de las mujeres subrayó que las desigualdades económicas excluyen a estudiantes talentosos del acceso a la educación superior, mientras que el 96 % de los hombres enfatizó que la desconexión entre instituciones educativas y el sector productivo frena la creación de oportunidades laborales. Una lideresa educativa de Tumaco lo expresó con fuerza: “Nuestros hijos tienen derecho a aprender sin dejar de ser lo que son, y a soñar sin tener que irse de su tierra”.

Estos hallazgos dialogan con la necesidad de transformar el sistema educativo en un proyecto político y social. Walsh (2010) sostiene que la educación intercultural crítica fortalece la cohesión social en contextos de desigualdad al dismantelar las jerarquías coloniales y posicionar a las comunidades afrodescendientes e indígenas en un lugar central. En la misma línea, la pertinencia de la educación es crucial para el desarrollo regional. Viáfara-López (2015a) enfatiza que la persistente segmentación académica y las desigualdades en el sistema educativo perpetúan la exclusión; por lo tanto, la educación contextualizada es indispensable para romper el ciclo de la pobreza y generar oportunidades. Desde los talleres se propusieron acciones concretas: crear currículos interculturales que integren lenguas y saberes propios; establecer un sistema de becas y subsidios que asegure el acceso a la educación superior de jóvenes vulnerables; y fortalecer a las

universidades locales como centros de investigación aplicada, capaces de generar soluciones para los problemas de la región. Estas medidas reflejan la convicción de que la educación no solo forma individuos, sino que construye futuros colectivos.

El Pacífico colombiano sigue atrapado en un modelo económico dependiente de la explotación de recursos naturales, lo que ha dejado a sus comunidades en una situación de vulnerabilidad. Diversificar las actividades productivas se percibe como una necesidad urgente para abrir caminos de empleo digno y sostenibilidad ambiental. A partir de esta realidad, en los talleres comunitarios surgió una pregunta clave:

¿Qué transformaciones económicas y de gobernanza son necesarias para que el Pacífico avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible?

Los diagnósticos territoriales mostraron matices importantes. En Tumaco, el 96 % de las mujeres señaló que la falta de apoyo a emprendimientos comunitarios impide aprovechar el potencial de la economía circular, mientras que el 94 % de los hombres indicó que la ausencia de infraestructura limita la competitividad agrícola. En el Chocó, el 97 % de las mujeres advirtió que la dependencia de la minería genera inestabilidad económica, y el 95 % de los hombres subrayó que la falta de diversificación productiva los obliga a migrar en busca de empleo. En Buenaventura, el 95 % de las mujeres destacó que las brechas en servicios básicos frenan el desarrollo del ecoturismo, mientras que el 96 % de los hombres afirmó que la exclusión en la toma de decisiones impide que los beneficios del puerto se traduzcan en bienestar local. Una lideresa de Buenaventura lo resumió con contundencia: “Nuestro puerto mueve al mundo, pero aquí seguimos sin agua ni trabajo digno”.

Estos hallazgos se alinean con la crítica al modelo de desarrollo dominante en Colombia. El informe “Minería en Colombia: Fundamentos

para superar el modelo extractivista” de Garay-Salamanca et al. (2013), muestra que la dependencia extractiva ha limitado la diversificación económica en Colombia y ha generado serios conflictos socioambientales. Para contrarrestar esta dinámica, Escobar (2010) plantea que el desarrollo solo será legítimo cuando se base en la sostenibilidad y la equidad, reconociendo los saberes y la gestión comunitaria del territorio. Desde los talleres emergieron propuestas claras: impulsar proyectos de ecoturismo y agroforestería vinculados a cadenas de valor sostenibles; fortalecer centros de innovación en biotecnología local para aprovechar la biodiversidad como activo económico; y establecer mecanismos de gobernanza participativa que otorguen a las comunidades un papel decisivo en la planeación territorial. Estas medidas no solo diversifican la economía, sino que también reconfiguran las relaciones de poder, poniendo la dignidad de las comunidades en el centro del desarrollo.

En conclusión, este capítulo sobre el análisis de las políticas públicas en el Pacífico revela un patrón de exclusión histórica que ha mantenido a la región en los márgenes del desarrollo nacional. Durante décadas, programas concebidos desde un centralismo andino y aplicados sin un enfoque diferencial han producido más frustraciones que resultados: escuelas sin maestros, hospitales desabastecidos y carreteras que se pierden en la inconclusión. Los talleres comunitarios realizados en Tumaco, Chocó y Buenaventura confirmaron lo que los diagnósticos oficiales apenas insinúan: la brecha no es únicamente material, sino también simbólica, pues a estas comunidades se les sigue tratando como periferias prescindibles. Como advierte Escobar (2014), el desarrollo impuesto desde afuera basado en categorías occidentales de progreso termina siendo una forma de dominación cultural y epistémica más que un verdadero proceso de emancipación y autonomía territorial.

Los hallazgos empíricos evidencian un consenso casi unánime. Más del 95 % de los participantes coincidió en que las políticas vigentes profundizan

la dependencia extractiva y agravan la pobreza estructural. Las mujeres enfatizaron los impactos en la salud, la educación y el cuidado familiar, mientras que los hombres señalaron la pérdida de medios de vida como la pesca, la agricultura y los bosques. Esta convergencia confirma lo planteado por Bebbington (2020), quien sostiene que los territorios mineros y forestales enfrentan un círculo vicioso de desposesión y vulnerabilidad. Una lideresa del Chocó lo expresó con crudeza: “Nos prometieron progreso, pero lo único que llegó fue el desarraigo”. A su vez, una joven maestra de Buenaventura lo resumió con esperanza: “Enseñamos a nuestros estudiantes a soñar, pero el sistema insiste en decirles que sus sueños no caben en esta tierra”.

Frente a este panorama, las comunidades no se limitaron a denunciar: plantearon caminos posibles desde la acción y la autonomía. De los talleres surgieron propuestas claras y viables: impulsar la pesca artesanal sostenible, fortalecer la agroforestería comunitaria, diversificar con ecoturismo y bioeconomía, y crear observatorios ciudadanos de transparencia. Estas alternativas coinciden con lo señalado por Cornwall (2008), quien subraya que la participación ciudadana es una condición indispensable para construir Estados inclusivos y garantizar la justicia social. Asimismo, se alinean con lo planteado por Escobar (2010), que resalta la urgencia de reconocer la capacidad de las comunidades para diseñar modelos propios de desarrollo que trasciendan la lógica extractivista. El mensaje final es contundente y poético: el Pacífico no es periferia ni frontera olvidada, es el corazón que late con fuerza en Colombia, un corazón que, pese al abandono, sigue marcando el ritmo de la esperanza.

4.2.2: Impacto del abandono estatal en las comunidades

El desempleo constituye una de las expresiones más graves del abandono estatal en el Pacífico colombiano. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), la tasa de desempleo

en la región alcanza el 21 %, casi el doble del promedio nacional (11 %). La escasez de empleo formal empuja a miles de familias a depender de actividades informales que generan ingresos precarios y carecen de protección social. De esta manera, la falta de políticas diferenciadas no solo frena el desarrollo económico, sino que perpetúa un círculo de pobreza estructural que margina a las comunidades.

Los talleres comunitarios realizados en Tumaco, Buenaventura y el Chocó confirmaron esta situación de precariedad laboral. En Tumaco, el 94 % de los participantes afirmó que la pesca artesanal o el “moto-taxismo” son las únicas alternativas de sustento; en Buenaventura, el 96 % denunció que las oportunidades se concentran en actividades portuarias dominadas por grandes empresas, sin llegar a los barrios periféricos; y en el Chocó, el 95 % señaló que la juventud se ve forzada a migrar hacia Cali o Medellín en busca de trabajo. Una madre en Tumaco lo resumió de manera contundente: “Nuestros hijos no sueñan con quedarse; el abandono los expulsa”.

Este panorama confirma que la problemática va más allá de un simple déficit, entrando en lo que la investigación sobre el mercado laboral define como una “trampa de informalidad estructural”. Rodríguez (2020) señala que es esencial explorar las formas diversas y atípicas de la informalidad en Colombia, reconociendo que esta dinámica no es homogénea y que, en regiones como el Pacífico, la ausencia de inversión pública y el limitado acceso a crédito y educación técnica reproducen un ciclo de exclusión social y laboral. Más allá de los indicadores, lo que se observa es una fractura en la cohesión social: comunidades que, al carecer de empleo digno, ven restringida su capacidad de construir proyectos de vida sostenibles.

A pesar de las profundas fallas estructurales, las comunidades no se limitaron al diagnóstico, sino que ejercieron su agencia al plantear alternativas concretas y viables. En los talleres propusieron fortalecer cooperativas pesqueras y agrícolas, diseñar programas de formación técnica

vinculados a la bioeconomía e implementar incentivos fiscales específicos para las pequeñas y medianas empresas locales. Estas propuestas se alinean con lo señalado por De Ferranti et al. (2004), quienes sostienen que la reducción de la desigualdad en América Latina requiere políticas territoriales diferenciadas que reconozcan e impulsen las capacidades propias de cada región, especialmente aquellas con altas concentraciones de pobreza. En voz de los propios participantes, el mensaje fue claro: el Pacífico no necesita caridad, sino oportunidades para construir su futuro con dignidad y autonomía económica.

La economía informal en el Pacífico colombiano constituye cerca del 60 % de las actividades productivas, un indicador que refleja el peso de la exclusión estructural (DANE, 2024). Este sector incluye desde la venta ambulante hasta oficios como la pesca artesanal y el reciclaje, todos ellos caracterizados por la ausencia de regulaciones, alta vulnerabilidad frente a fluctuaciones económicas y climáticas, y falta de seguridad social. La ausencia de estabilidad laboral profundiza la brecha en la acumulación de capital humano: los trabajadores carecen de acceso a programas de capacitación y de beneficios básicos como pensiones o seguros de salud, perpetuando así ciclos de pobreza intergeneracional.

Los talleres comunitarios aportaron matices reveladores a este diagnóstico. En Tumaco, el 93 % de los participantes señaló que la economía informal es la única opción de subsistencia en sectores rurales donde el Estado no ha generado alternativas. En Buenaventura, el 95 % denunció que incluso actividades portuarias son tercerizadas en condiciones precarias, lo que reproduce la informalidad en el corazón de la economía formal. En el Chocó, el 92 % advirtió que la ausencia de industrias obliga a recurrir a oficios temporales, lo que genera inestabilidad permanente. Una lideresa de Buenaventura lo expresó con claridad: “Trabajamos mucho, pero siempre seguimos en la cuerda floja”.

Este panorama confirma lo señalado por Perry et. al. (2007), quienes sostienen que la informalidad en América Latina no es un fenómeno

coyuntural, sino la expresión de una “economía dual” donde los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de baja productividad y sin protección social, debido a mecanismos de “escape y exclusión”. En el Pacífico, esta situación se manifiesta de forma crítica: los excluidos quedan relegados a actividades de subsistencia (pesca artesanal, mototaxismo) de baja productividad. La precariedad se ve agravada por la falta de infraestructura industrial y agroindustrial, lo que, según diagnósticos sectoriales, reduce la competitividad de la región y limita la capacidad de expansión de las microempresas, profundizando el dualismo económico frente a mercados nacionales e internacionales.

Las comunidades, sin embargo, no se limitaron a describir el problema, sino que ejercieron su agencia al proponer alternativas concretas y orientadas a la productividad. Propusieron la creación de corredores agroindustriales comunitarios para conectar pequeños productores con cadenas nacionales, impulsar programas de capacitación en biotecnología agrícola, y facilitar créditos blandos para microempresas rurales. Estas iniciativas coinciden con lo planteado por Levy (2008), quien argumenta que superar la informalidad requiere no solo reformas estructurales de gran calado, sino también un rediseño profundo de los sistemas de incentivos que promuevan la productividad y la integración laboral formal, reconociendo que la informalidad es un problema de baja productividad y no solo de regulación.

El déficit habitacional en el Pacífico colombiano constituye uno de los rostros más evidentes del abandono estatal y una clara manifestación de la privación de derechos económicos y sociales. Las estadísticas oficiales confirman este panorama: más del 50 % de las viviendas en la región carecen de condiciones básicas de habitabilidad, incluyendo el acceso a servicios públicos esenciales como electricidad y agua potable (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2024). En los municipios rurales, la prevalencia del hacinamiento y la vivienda inadecuada no solo degrada

la calidad de vida, sino que opera como un factor estructural que incide directamente en la reproducción intergeneracional de las desigualdades y la pobreza multidimensional, al comprometer la salud y el capital humano de las familias.

Los talleres comunitarios corroboraron esta situación. En Tumaco, el 91 % de los participantes denunció vivir en viviendas construidas con materiales precarios y sin servicios básicos; en Buenaventura, el 93 % afirmó que el hacinamiento es una condición habitual en los barrios marginales; y en el Chocó, el 94 % advirtió que la informalidad en la construcción expone a las familias a riesgos de derrumbes e inundaciones recurrentes. Una mujer participante en Buenaventura lo resumió con contundencia: “Nuestras casas son frágiles como nuestras esperanzas: siempre en riesgo de caer”.

Este panorama coincide con lo planteado por Gilbert (2011), quien analiza cómo la vivienda informal en América Latina refleja la ausencia de políticas urbanas efectivas y genera un círculo de exclusión al limitar el acceso a subsidios y créditos hipotecarios. En el Pacífico, la informalidad alcanza niveles críticos: en municipios como Tumaco y Buenaventura, cerca del 65 % de las viviendas se han construido sin permisos y con materiales inadecuados. Estas condiciones no solo elevan la vulnerabilidad estructural de las familias ante riesgos ambientales, sino que también bloquean su inclusión en el sistema financiero, perpetuando la marginalidad habitacional como una expresión de la desigualdad territorial.

Sin embargo, las comunidades no se limitaron a describir el problema, sino que ejercieron su agencia al proponer alternativas claras en los talleres: programas de autoconstrucción asistida con apoyo técnico estatal, esquemas de regularización de tierras que permitan a los ocupantes acceder a créditos, y proyectos de vivienda comunitaria que integren materiales locales. Estas iniciativas coinciden con lo planteado por Calderón (2019), quien argumenta

que la solución al déficit habitacional requiere políticas que combinen mecanismos de subsidio con una gestión activa del suelo urbano. El autor resalta que el enfoque debe trascender la simple construcción de unidades, y avanzar hacia esquemas que promuevan la participación comunitaria y la formalización del suelo, como ejes esenciales para construir proyectos de vida sostenibles.

La desigualdad en la distribución de recursos públicos agrava críticamente el déficit habitacional. La proporción históricamente baja del presupuesto nacional destinado a Vivienda de Interés Social (VIS) asignada al Pacífico, a pesar de concentrar un alto porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema, refleja una falta de prioridad política que perpetúa la marginalización. Esta brecha presupuestaria se inscribe en un patrón histórico de disparidad regional. Galvis y Meisel (2010) sostienen que la persistencia de las desigualdades regionales en Colombia es un “equilibrio perverso” donde los clusters de alta pobreza se localizan en la periferia del país. La carencia de inversión central para infraestructura básica, como vivienda y servicios públicos, se convierte en una manifestación de estas trampas espaciales, bloqueando la movilidad social y el desarrollo económico de la región.

El impacto del déficit habitacional va más allá de lo material. La falta de vivienda digna, exacerbada por la desigualdad presupuestaria, tiene repercusiones psicológicas y sociales significativas. El hacinamiento y la precariedad habitacional se convierten en factores de riesgo que incrementan los niveles de estrés crónico y violencia intrafamiliar en contextos de pobreza. Además, estas condiciones limitan severamente el desarrollo educativo de niños y jóvenes, quienes no cuentan con espacios adecuados para estudiar o jugar. En este sentido, la precariedad material que sufren estas comunidades incide directamente en la reproducción intergeneracional de las desigualdades, asegurando que los efectos de las fallas del Estado se transmitan al capital humano futuro.

Superar ese déficit habitacional requiere un enfoque integral que combine la construcción de viviendas dignas con la implementación de programas de regularización de tierras y acceso a crédito. Además, es crucial fomentar la participación comunitaria en el diseño y ejecución de proyectos habitacionales para garantizar que las soluciones se ajusten a las necesidades y contextos locales. Esta integración de elementos es vital, como lo señalan Acevedo Agudelo y Hurtado Sarmiento (2022), quienes subrayan que la creación de hábitats dignos debe trascender la unidad de vivienda para enfocarse en la integración completa con el territorio. Concluyen que solo mediante el reconocimiento de los factores endógenos (como la capacidad de gestión comunitaria y las características específicas de la población) se puede generar la sostenibilidad social y económica necesaria para transformar el panorama habitacional en regiones marginalizadas como el Pacífico colombiano.

La situación educativa en el Pacífico es, de hecho, una profunda limitación estructural al desarrollo humano y a la equidad. El diagnóstico revela un déficit crítico en la infraestructura escolar: un estimado del 35 % de las escuelas rurales cuenta con instalaciones adecuadas, y el acceso a tecnologías de la información es prácticamente inexistente. Esta precariedad material se correlaciona con tasas de deserción escolar que superan el 40 % en varias zonas, motivadas principalmente por la falta de recursos, la escasez de transporte escolar y la lejanía de las instituciones. Este panorama de acceso desigual consolida una profunda segregación educativa con claros matices étnico-raciales. Tal como demuestran Viáfara-López y Serna-Alvarado (2015a), la desigualdad de oportunidades educativas en Colombia se manifiesta de manera más fuerte y significativa para la población afrodescendiente, sugiriendo la presencia de una discriminación premercado. Esta desventaja se traduce en que, incluso a igual estatus socioeconómico familiar, es menos probable que los jóvenes de la región alcancen logros educativos superiores, lo que restringe directamente las posibilidades de movilidad social y perpetúa las disparidades.

Los talleres comunitarios ofrecieron un diagnóstico más humano y preciso de esta problemática. La infraestructura educativa, o su ausencia, fue identificada como un factor de expulsión: en Tumaco, el 92 % de los participantes manifestó que la falta de aulas dignas y materiales escolares empuja a los niños al abandono. La violencia territorial se fusiona con la exclusión educativa: en Buenaventura, el 94 % señaló que la inseguridad en el camino hacia las escuelas rurales es una causa recurrente de deserción. En el Chocó, el 91 % indicó que la falta de acceso a internet y la escasez de docentes capacitados convierten la educación de calidad en una aspiración lejana. Una profesora en el Chocó resumió esta situación con crudeza: “Enseñamos con ganas, pero sin herramientas”.

Este contexto empírico coincide con lo planteado por Hanushek y Woessmann (2011), quienes sostienen que las desigualdades en infraestructura educativa y calidad docente en regiones marginadas refuerzan la exclusión social y limitan la productividad futura y el crecimiento económico del país. Los autores argumentan que la acumulación de habilidades cognitivas es el factor clave para el desarrollo. Por lo tanto, la falta de inversión sostenida en la educación rural del Pacífico, al impedir esta acumulación, se convierte en un obstáculo estructural que restringe el capital humano y el desarrollo integral de la región.

Las comunidades, sin embargo, no se han quedado en el diagnóstico, sino que han propuesto alternativas viables que responden a las necesidades territoriales. Entre ellas destacan la implementación de programas de educación intercultural bilingüe que integren saberes ancestrales, la creación de escuelas comunitarias con apoyo estatal y el fortalecimiento de plataformas de educación virtual adaptadas a contextos rurales. Estas iniciativas coinciden con lo planteado por Trucco y Sunkel (2010), quienes afirman que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) deben ser concebidas como instrumentos para garantizar la equidad educativa y no como un fin en sí mismo. Para los autores, el desafío clave

es que las políticas reconozcan que la integración tecnológica debe ir acompañada de la revisión de las prácticas prevalecientes, impulsando así cambios estructurales que reconozcan las particularidades culturales y territoriales del Pacífico.

La ausencia de inversión en investigación y desarrollo (I+D) constituye un obstáculo crítico para el progreso del Pacífico colombiano. El desequilibrio en el presupuesto nacional es notorio: menos del 2 % del presupuesto destinado a investigación se dirige a esta región, lo que limita la generación de conocimiento y la innovación necesaria para aprovechar de manera sostenible sus recursos naturales y culturales. La brecha en infraestructura científica es evidente, con una fuerte concentración de centros de investigación en el interior del país. Este panorama corrobora el análisis sobre la inversión en CTI regional: la tesis principal de la investigación sobre Colombia y Ecuador (2020) propone que la inversión en CTI en Colombia está fuertemente concentrada en las regiones centrales, lo que exacerba las disparidades regionales y condena a las zonas periféricas a depender del conocimiento generado en los centros de poder, impidiendo el desarrollo de una innovación pertinente y endógena.

Las consecuencias de esta baja inversión son sistémicas para el Pacífico, impactando directamente su dinámica económica, social y de innovación. En la esfera económica, la dependencia de un conocimiento externo impide la formulación de modelos productivos que aprovechen la vasta biodiversidad regional de manera sostenible, lo que resulta en una baja productividad y la perpetuación del extractivismo. En el plano social, la escasa capacidad de investigación local obstaculiza la generación de soluciones adaptadas a problemas estructurales de la región (como el manejo de ecosistemas marinos, los desafíos de salud pública o la gestión de riesgos), lo cual agrava la vulnerabilidad de las comunidades. Finalmente, en términos de innovación, la falta de apoyo estructural centraliza la generación de valor agregado, consolidando un círculo vicioso

de desigualdad y subdesarrollo que impide que el Pacífico transite hacia una economía basada en el conocimiento propio.

Los talleres comunitarios confirmaron que esta carencia de investigación tiene impactos directos en la vida cotidiana y la vocación productiva. En Tumaco, el 90 % de los participantes señaló que proyectos científicos sobre pesca sostenible nunca se han desarrollado en la región, a pesar de su vocación marítima. En Buenaventura, el 92 % denunció que los programas de innovación portuaria se diseñan desde Bogotá, sin participación de investigadores locales. La crisis de capital humano es evidente: en el Chocó, el 93 % advirtió que la falta de incentivos expulsa a los jóvenes con formación en ciencias hacia otras regiones. Una joven investigadora del Chocó resumió el dilema: “Nos formamos con becas, pero al regresar no hay laboratorios ni programas para aplicar lo aprendido”.

Este panorama de conocimiento centralizado y capacidades locales truncadas tiene un coste humano incalculable. La región queda atrapada en un modelo extractivo que, al ignorar el desarrollo de sus propios talentos, condena a sus jóvenes a la diáspora. La inversión no llega porque el conocimiento no está ahí; y el conocimiento no se genera porque la inversión no llega. Esta dinámica perversa anula la capacidad del Pacífico para diseñar una innovación endógena y para generar valor agregado a su propia biodiversidad. Así, lo que debería ser el motor de su despegue económico su capital humano formado y su riqueza natural se convierte, paradójicamente, en el bien que se expulsa o se explota bajo un modelo dependiente de decisiones externas.

Frente a la centralización de la CTI, las comunidades plantearon propuestas claras orientadas a la autonomía del conocimiento: la creación de centros de investigación comunitarios vinculados a universidades locales, el fortalecimiento de programas de becas con retorno garantizado y la financiación de proyectos en bioeconomía, energías renovables y

agroforestería. Estas alternativas coinciden con la tesis de González Gallego (2017) sobre los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) en Colombia. Su análisis subraya la urgencia de identificar y fortalecer los componentes institucionales y organizacionales en regiones estratégicas como el Pacífico, bajo una visión que integre las capacidades territoriales y fomente el desarrollo de un sistema de CTI que no se limite a los departamentos con mayor inversión.

El sistema de salud en el Pacífico colombiano enfrenta una crisis estructural que refleja décadas de exclusión. Apenas el 25 % de los municipios cuentan con hospitales de primer nivel operativos, lo que incide directamente en los altos índices de mortalidad infantil y materna: 120 muertes por cada 100.000 nacidos vivos frente a un promedio nacional de 50 (Ministerio de Salud, 2023a). Esta precariedad en infraestructura y servicios sanitarios responde a una histórica brecha en la distribución de recursos: mientras hospitales del interior del país cuentan con tecnología de punta, en municipios como Guapi o Barbacoas los centros de salud carecen de insumos básicos y personal suficiente. El DNP (2023) confirma que más del 70 % de estas instalaciones no cumple con los estándares mínimos de calidad.

Los talleres comunitarios validaron este diagnóstico con testimonios desgarradores. En Tumaco, el 92 % de los participantes afirmó que las brigadas médicas son la única opción para acceder a servicios de salud, mientras que en Buenaventura el 94 % señaló que la precariedad hospitalaria se traduce en traslados constantes hacia Cali, con altos costos económicos y emocionales. En el Chocó, el 91 % destacó la ausencia de médicos especialistas y la dependencia de ayudas humanitarias. Una lideresa de Guapi lo resumió así: “Aquí los niños mueren de enfermedades que en otras partes ya ni existen”.

La escasez de profesionales de la salud profundiza esta crisis: en el Pacífico hay apenas un médico por cada 2.500 habitantes, una proporción

que representa una grave disparidad frente al promedio nacional (Ministerio de Salud, 2023b). Este déficit de capital humano, sumado a la falta de programas de prevención adaptados, explica por qué enfermedades como la malaria, el dengue y la tuberculosis tienen tasas de incidencia que triplican el promedio nacional. Esta situación confirma los hallazgos del artículo “Desigualdades sociales en salud: análisis de la región pacífica colombiana” por Asprilla-Córdoba y Montenegro-Martínez (2022). Los autores demostraron que las desigualdades sociales en salud en la región están marcadamente asociadas a las condiciones de vida, siendo el Chocó el departamento con los peores indicadores. Los autores concluyen que la persistencia de estas brechas requiere el diseño de intervenciones complejas que trasciendan la simple cobertura y consideren las profundas condiciones socioeconómicas en las que viven las poblaciones.

Las condiciones sanitarias en el Pacífico no pueden desvincularse de la pobreza extrema. La Defensoría del Pueblo (2024) señala que el 60 % de las familias del Pacífico carece de recursos para acceder a medicamentos, mientras que los altos costos de transporte y la baja cobertura de programas públicos impiden garantizar atención digna a niños y mujeres embarazadas. Esta situación confirma que la salud en el Pacífico está determinada por la desigualdad económica y territorial. El Ministerio de Salud y Protección Social (2023b), en su diagnóstico de los indicadores de salud, evidencia cómo la persistente ausencia de infraestructura de saneamiento y la precariedad de las condiciones de vida se traducen directamente en peores resultados en salud para las poblaciones más vulnerables.

Frente a este panorama crítico, las comunidades plantearon propuestas concretas durante los talleres, enfocadas en la construcción de sistemas de salud resilientes. Estas incluyen programas de formación de médicos y enfermeras locales, incentivos económicos para especialistas que se radiquen en la región, y la creación de hospitales intermedios con redes de telemedicina para ampliar la cobertura. Estas iniciativas se alinean con

los objetivos de política pública del Ministerio de Salud y Protección Social (2023a) en materia de Atención Primaria en Salud (APS), la cual busca superar la fragmentación del sistema. La agencia comunitaria demanda un modelo que, además de la inversión en infraestructura y capital humano, integre mecanismos efectivos de rendición de cuentas para transformar la salud del Pacífico en un derecho efectivo y duradero.

El desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano es una experiencia atravesada por género y territorio. En los talleres comunitarios realizados en Tumaco, Buenaventura y el Chocó se constató que, aunque hombres y mujeres comparten la pérdida de tierras y medios de subsistencia, los efectos se experimentan de manera distinta. En Tumaco, el 93 % de las mujeres subrayó que el desarraigo ha deteriorado su rol como cuidadoras, al contaminarse las fuentes de agua y dificultarse la alimentación de sus hijos; en contraste, el 91 % de los hombres identificó la pérdida de cultivos y pesca como su mayor impacto. En Buenaventura, el 95 % de las mujeres denunció que los asentamientos informales incrementan la violencia intrafamiliar y sexual, mientras que el 92 % de los hombres señaló la pérdida de empleos portuarios como consecuencia directa del desplazamiento. En el Chocó, el 94 % de las mujeres explicó que el despojo quebró redes comunitarias de cuidado y ritualidad, mientras que el 90 % de los hombres mencionó la reducción de tierras agrícolas y forestales.

Estos hallazgos demuestran que el desplazamiento forzado no es un evento neutro, sino un catalizador que reproduce y agudiza las desigualdades de género preexistentes. Para las mujeres, la tragedia es multidimensional: el desarraigo material se acompaña de la erosión de roles sociales esenciales, pues la pérdida del territorio implica la ruptura de las redes de cuidado, la dificultad para alimentar a los hijos y la interrupción de la transmisión cultural. Esto las convierte en víctimas múltiples, pues a la pérdida del hogar se suma un incremento de la vulnerabilidad ante nuevas formas de violencia. Por su parte, la experiencia se manifiesta de manera distinta en

los hombres, traduciéndose principalmente en la pérdida de tierra y empleo, lo que socava su rol tradicional como proveedores y genera una profunda frustración colectiva ante la imposibilidad de proteger o sustentar a sus familias. El conflicto, en última instancia, ataca la identidad de género en ambos frentes.

La dimensión de género es fundamental para comprender la profundidad del impacto social y la reconfiguración de roles que impone el conflicto. En el Pacífico, este diagnóstico se confirma con los testimonios de las lideresas comunitarias que relataron cómo la desprotección en los asentamientos ha incrementado los riesgos para sus hijas, mientras que los hombres enfatizaron la imposibilidad de transmitir saberes agrícolas y pesqueros a sus hijos, cortando de raíz las bases de su identidad territorial. Esta experiencia de vulnerabilidad múltiple se alinea con lo planteado por Iza-Certuche (2018). Su análisis, centrado en el caso de las mujeres de Buenaventura, demuestra cómo el entrecruzamiento de la raza, la clase, el género y el conflicto armado agrava la situación humanitaria. El enfoque de la interseccionalidad revela que la pérdida implica para las mujeres una triple vulnerabilidad (económica, social y de seguridad) que erosiona sus roles vinculados al cuidado, mientras que la pérdida de tierras y empleos debilita la función de los hombres como proveedores.

Frente a esta realidad de impacto diferenciado, las comunidades plantearon propuestas que no solo buscan la restitución material de las tierras, sino también la reconstrucción de la vida social. Las mujeres pidieron programas de salud psicosocial, espacios seguros en los asentamientos y proyectos productivos enfocados en la economía del cuidado. Por su parte, los hombres insistieron en la restitución de tierras agrícolas y en el impulso a cadenas productivas sostenibles como la pesca artesanal y la agroforestería. Estas propuestas coinciden con lo planteado por Madrideoj-Ornilla y Salinas-Coy (2018), quienes sostienen que la consolidación de la paz requiere modelos de intervención que prioricen el “desarrollo desde

abajo” (development from below). Su análisis destaca que es crucial otorgar un papel decisorio a los actores locales y generar capacidades que permitan integrar los consensos comunitarios en la territorialización de las políticas públicas, superando el enfoque centralista tradicional.

La agroindustria representa una de las mayores oportunidades desaprovechadas en el Pacífico colombiano. Aunque la región cuenta con condiciones únicas para la producción de cacao, palma de aceite, coco y frutales tropicales, apenas el 10 % de las tierras cultivables son utilizadas con tecnología adecuada (Ministerio de Agricultura, 2023). Esta brecha refleja la falta de acceso a créditos, infraestructura y mercados, lo que restringe el crecimiento de un sector que podría transformar la economía local. En los talleres comunitarios, el 88 % de los participantes en Tumaco afirmó que la ausencia de créditos y asistencia técnica es el mayor obstáculo, mientras que en Buenaventura el 91 % señaló la falta de vías para transportar productos, y en el Chocó el 87 % advirtió sobre la dependencia de intermediarios que compren sus cosechas a precios injustos. Esta realidad confirma la necesidad de superar las barreras estructurales para el desarrollo interregional, tal como lo destaca el Plan Regional de Gestión de la RAP Pacífico (2024), cuyo objetivo estratégico es aumentar la competitividad y generar transformación a largo plazo.

El desarrollo agroindustrial podría ser un motor clave de empleo sostenible y formal. Cada hectárea tecnificada en cultivos agroindustriales genera al menos tres empleos directos y cinco indirectos (Ministerio de Agricultura, 2023). En los talleres, las mujeres subrayaron que la agroindustria permitiría vincular a jóvenes y madres cabeza de familia en proyectos productivos, fortaleciendo el tejido comunitario. Esta visión coincide con el análisis de López-Trujillo et al. (2023), quienes argumentan que el desarrollo de cadenas de valor basadas en actividades económicas con enfoque territorial propicia una coordinación y gobernanza vertical, orientada a generar valor agregado, sostenibilidad y cohesión social, al

tiempo que promueve la paz y la prosperidad, centrándose en los más afectados por el conflicto como son las comunidades y los jóvenes.

La diversificación de productos es otro eje fundamental. Fedecacao (2023) estima que menos del 20 % del cacao colombiano se exporta con valor agregado, lo que representa una pérdida de competitividad. El 89 % de los participantes en Tumaco y Buenaventura sugirió que la transformación local del cacao en chocolate y derivados abriría mercados internacionales y aumentaría los ingresos locales. Esta visión está respaldada por estudios como el de Olarte-Libreros y Muñoz-Maya (2025), quienes demuestran que la implementación de prácticas sostenibles y la agroforestería en la cadena de valor del cacao no solo potencian la productividad, sino que también mejoran el acceso a mercados para los pequeños productores, asegurando una sostenibilidad económica a largo plazo.

Finalmente, el desarrollo agroindustrial en el Pacífico no puede desligarse de la sostenibilidad ambiental. En el Chocó, el 92 % de los participantes alertó que el monocultivo sin control amenaza la biodiversidad y los suelos. Por eso, comunidades propusieron modelos de agroforestería y certificaciones de palma sostenible como alternativas viables. Esta propuesta se articula con lo señalado por Mena-Mosquera y Andrade-C. (2021), quienes, en un estudio en el Pacífico colombiano (Chocó), cuantificaron que los sistemas agroforestales con cacao tienen un potencial significativo de reducción de emisiones y captura de carbono, demostrando que la combinación de agroindustria y conservación es esencial para la mitigación del cambio climático y la protección de ecosistemas estratégicos en la región.

El turismo, pese a ser un sector rezagado en el Pacífico colombiano, es reconocido por las comunidades como una alternativa estratégica para dinamizar la economía y diversificar los ingresos locales. En los talleres comunitarios, el 89 % de los participantes en Tumaco destacó que el ecoturismo y la observación de ballenas podrían generar empleo sin

destruir el medioambiente; en Buenaventura, el 92 % señaló que el turismo cultural, basado en festivales, gastronomía y música, tiene el potencial de revalorizar la identidad afrodescendiente; mientras que en el Chocó, el 90 % enfatizó la necesidad de turismo comunitario que conecte visitantes con experiencias de selva, ríos y tradiciones locales. Estas percepciones coinciden en que el turismo no debe imponerse como industria externa, sino desarrollarse desde las comunidades para asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente.

Potenciar el turismo en el Pacífico requiere inversiones estratégicas y políticas públicas inclusivas que trasciendan la mera promoción. La infraestructura es un punto de partida ineludible: mejorar las vías de acceso, los servicios básicos y la conectividad digital permitiría atraer visitantes nacionales e internacionales en condiciones seguras y sostenibles. Además, es necesario fortalecer las capacidades locales mediante programas de formación en guianza turística, hospitalidad y gestión empresarial. De acuerdo con Scheyvens y Van der Watt (2021), el turismo sostenible y equitativo debe enmarcarse en un nuevo modelo que combine las dimensiones de empoderamiento comunitario (psicológico, social, económico y político) con los factores habilitadores de la sostenibilidad ambiental y cultural. Este enfoque asegura que la actividad turística no solo redistribuya beneficios, sino que también fortalezca la gobernanza y la resiliencia de las comunidades que gestionan sus propios recursos y su patrimonio.

La biodiversidad del Pacífico colombiano ofrece una plataforma única para construir un modelo turístico diferenciado. Desde el Parque Nacional Natural Utría hasta sus playas vírgenes y reservas de manglares, la región podría posicionarse como un destino global de ecoturismo y turismo cultural. Sin embargo, en los talleres comunitarios, el 91 % de los participantes en Tumaco coincidió en que esta riqueza natural sigue desaprovechada por la ausencia de caminos seguros y servicios básicos de hospedaje; en Buenaventura, el 93 % señaló que la inseguridad y la falta

de promoción internacional son las principales barreras; mientras que, en el Chocó, el 89 % enfatizó que los visitantes potenciales desisten por la precariedad de la infraestructura hotelera y de transporte.

Más allá del impacto económico, el turismo sostenible puede convertirse en un instrumento directo de conservación ambiental. Iniciativas de base comunitaria, como la observación de ballenas y el avistamiento de aves (ampliamente mencionadas en los talleres), son percibidas como actividades que no solo generan ingresos directos, sino que también fortalecen la conciencia ambiental tanto de los visitantes como de las comunidades locales. Esto coincide con el marco estratégico de la Política de Turismo Sostenible de Colombia: “Unidos por la Naturaleza” (MINCIT, 2021), la cual establece que el sector debe consolidarse como un instrumento para la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los modos de vida. El objetivo de la política es asegurar que el patrimonio natural sea la base del desarrollo de la actividad y, a su vez, el objeto principal a proteger.

El turismo cultural representa un eje estratégico que va más allá de la rentabilidad: es una herramienta de fortalecimiento identitario. Los festivales icónicos del Pacífico, como el Petronio Álvarez o las celebraciones religiosas de Guapi, no son meros eventos de entretenimiento, sino el corazón de la memoria colectiva. Los talleres comunitarios demostraron que estas manifestaciones son vistas como oportunidades para generar orgullo local y atraer visitantes. Esta dinámica, al revalorizar las tradiciones, fomenta que las comunidades se reconozcan como guardianas y anfitrionas de un patrimonio único. La integración de estos saberes ancestrales en proyectos de turismo comunitario asegura que la cultura inmaterial se convierta en la principal fuente de valor agregado, consolidando los lazos sociales y garantizando que el beneficio económico permanezca en el territorio.

Para que el turismo sea realmente un motor de desarrollo, es indispensable superar las barreras estructurales que perpetúan el

aislamiento. La comunidad, en un ejercicio de agencia, propuso medidas concretas: garantizar seguridad territorial mediante presencia institucional efectiva; invertir en aeropuertos regionales y vías secundarias que conecten las zonas rurales; y diseñar programas de capacitación en hospitalidad y guianza turística liderados por universidades locales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2021), a través de su política sectorial, advierte que la falta de infraestructura y conectividad sigue siendo el principal obstáculo para atraer turismo internacional de manera sostenible. Las comunidades, sin embargo, dejaron claro en los talleres que el turismo solo será legítimo si se construye desde abajo y con beneficios tangibles para quienes habitan el territorio, asegurando que la inversión no reproduzca el centralismo.

Un clamor casi unánime surgió de los talleres comunitarios realizados en Tumaco, Buenaventura y el Chocó, donde un contundente 92 % de los participantes identificó la misma raíz del estancamiento: el déficit crónico de infraestructura y conectividad. Esta carencia es devastadora; no solo limita la movilidad y restringe el acceso a mercados esenciales para el comercio, sino que, de forma más crítica, restringe el acceso de las comunidades a servicios básicos fundamentales, perpetuando una brecha de inequidad.

La verdadera integración de estas zonas al desarrollo requiere un doble esfuerzo simultáneo. La evidencia en desarrollo regional demuestra que la inversión en la infraestructura física, aunque vital, debe ir necesariamente de la mano con la construcción y el fortalecimiento de instituciones que sean transparentes e inclusivas. Solo así el desarrollo no será una promesa efímera, sino una realidad sostenible y equitativa que le devuelva a la comunidad la agencia sobre su propio territorio.

La inversión en infraestructura debe trascender la construcción de carreteras inconexas o proyectos aislados. Se requieren corredores

multimodales que integren transporte marítimo, fluvial y terrestre, articulados con redes digitales comunitarias y soluciones de energía sostenible. En Tumaco, el 91 % de los participantes sugirió que la conectividad digital abriría oportunidades en telemedicina, comercio electrónico y educación virtual. Estas propuestas muestran que el Pacífico no debe ser concebido como receptor pasivo de proyectos, sino como un espacio capaz de innovar y liderar modelos de desarrollo adaptados a su geografía y cultura.

El turismo y la agroindustria emergen, desde la voz de las comunidades, como los pilares esenciales para dinamizar la economía regional. Los talleres reflejaron una convicción profunda: en Buenaventura, el 93 % de los asistentes destacó el turismo cultural y comunitario no solo como fuente de empleo, sino como afirmación de su orgullo identitario. Paralelamente, en el Chocó, el 89 % señaló la agroforestería y el ecoturismo como alternativas tangibles frente a la devastación que produce la minería ilegal. Esta visión territorial demuestra que el desarrollo es posible cuando se conjuga la riqueza cultural con la biodiversidad. La clave reside en asegurar que estos emprendimientos, nacidos de la base, se gestionen con la conservación ambiental como principio y la redistribución equitativa de beneficios como meta. El Pacífico, con su sabiduría, está marcando el camino hacia la creación de un modelo económico que es, ante todo, digno y propio.

Un modelo innovador de desarrollo económico en el Pacífico debe tener como premisa la diversificación productiva, mirando hacia el mundo con sus propios recursos. Nuestro ejercicio en los talleres reveló un consenso notable: el 90 % de los participantes sugirió la creación de cooperativas robustas en sectores como el cacao y la pesca artesanal, buscando directamente certificaciones internacionales. Este paso estratégico permitiría a los productores locales abrir mercados premium en Europa y Asia, eliminando la dependencia de intermediarios y aumentando los márgenes de ganancia. Estas propuestas demuestran

que la capacidad innovadora ya existe en la región. Al combinar estas estrategias comunitarias con políticas estatales que garanticen el acceso a crédito y la capacitación en innovación tecnológica, el Pacífico puede transformarse, dejando atrás la pobreza para convertirse en un epicentro de bioeconomía y un faro de la economía circular.

Finalmente, Finalmente, la sostenibilidad de estas transformaciones exige mecanismos de gobernanza participativa que vinculen de manera real a las comunidades en la toma de decisiones. En los tres territorios consultados, el consenso fue claro: más del 90 % de los participantes coincidió en que la transparencia es una condición indispensable para evitar que la corrupción capture los beneficios de la inversión. Esta demanda se conecta con la necesidad de superar las fallas históricas de gobernanza en la periferia. Galvis y Meisel (2010) insisten en que la superación de las desigualdades regionales requiere un enfoque multinivel que promueva la articulación entre el Estado central, las autoridades locales y las comunidades. En esta clave, el Pacífico no debe ser visto como periferia, sino como un laboratorio de innovación territorial donde la justicia social y la sostenibilidad ambiental se convierten en los motores de una nueva economía para Colombia y el mundo.

En relación con la paz Lograr acuerdos de paz en el Pacífico no significa únicamente poner fin a la violencia, sino abrir la posibilidad de transformar la economía y el bienestar de las comunidades. En los talleres comunitarios, el 98 % de los participantes coincidió en que la pacificación permitiría atraer inversiones y proyectos sostenibles capaces de generar empleo digno. La ausencia de violencia es percibida no como un fin, sino como la base para activar sectores productivos que han permanecido en letargo por el conflicto.

En Tumaco, el 98 % de los asistentes afirmó que la paz permitiría consolidar cooperativas de pesca artesanal certificada, lo que generaría

empleo estable y aumentaría la seguridad alimentaria local. En Buenaventura, el 97 % destacó que la estabilidad fortalecería el turismo cultural y religioso, capaz de dinamizar la economía urbana e incrementar los ingresos de pequeños emprendedores en gastronomía y servicios. En el Chocó, el 97 % señaló que solo en un contexto seguro podrían prosperar proyectos de agroforestería y ecoturismo comunitario, con beneficios económicos directos en las comunidades afro e indígenas.

Los efectos de una inversión productiva con visión territorial en el Pacífico serían transformadores para el empleo. La investigación sobre el posconflicto, liderada por Verwimp, et. al. (2009), demuestra que las regiones que logran atraer inversión productiva y apoyo institucional después del conflicto experimentan un aumento significativo en las tasas de empleo formal, reduciendo la informalidad y la precariedad. Para el Pacífico, esta transformación se traduciría en oportunidades reales para los jóvenes que hoy enfrentan un desempleo estructural que los expulsa de la región. Además, un enfoque productivo permitiría fortalecer el capital humano mediante la inversión en capacitación específica para sus vocaciones: tecnologías agrícolas sostenibles, manejo ambiental y hospitalidad turística, permitiendo a la región dejar de exportar personas y comenzar a exportar valor agregado y talento propio.

Además de los incuestionables beneficios económicos, la consolidación de la paz en el Pacífico impactaría de manera directa en el Buen Vivir de las comunidades. Los talleres revelaron una visión profunda: tanto mujeres como hombres identifican en la paz la oportunidad tangible de reducir los costos emocionales y materiales del desplazamiento, garantizar un acceso seguro y regular a la salud y la educación, y finalmente, recuperar los territorios ancestrales que sostienen sus economías y su identidad cultural. Este vínculo inquebrantable entre la seguridad y el bienestar demuestra que la paz territorial no es solo el cese del fuego, sino la condición primordial para reconstruir el tejido social fracturado por décadas de conflicto y abrir, por primera vez, espacios genuinos de inclusión económica y justicia social.

Finalmente, la paz en el Pacífico debe entenderse no como un punto de llegada, sino como un motor económico y social de largo plazo. Sus efectos trascienden los indicadores macroeconómicos, manifestándose en la capacidad de generar empleo estable, en la garantía de la seguridad alimentaria y en la posibilidad de devolver la esperanza de un futuro digno a las comunidades. Para que este futuro se materialice, es imperativo que la gobernanza sea participativa y transparente. Solo un modelo que erradique la corrupción y confíe en las decisiones locales permitirá que los beneficios de la paz se traduzcan en bienestar colectivo y en una economía que, por fin, reconozca al Pacífico como protagonista y gestor de su propio destino.

Este capítulo nos permite concluir que el abandono estatal en el Pacífico colombiano es estructural y persistente, no un problema coyuntural. La región ha sido relegada a los márgenes del desarrollo, con consecuencias devastadoras en sectores como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, el empleo y la investigación. En los talleres comunitarios de Tumaco, Buenaventura y el Chocó, más del 97 % de los participantes coincidió en que la ausencia del Estado se expresa tanto en carencias materiales hospitales sin médicos, escuelas sin maestros, carreteras inconclusas como en la negación simbólica de la dignidad de sus pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos.

El impacto del abandono no es homogéneo: las mujeres enfrentan una sobrecarga en el cuidado familiar y en el acceso a salud y educación; los jóvenes padecen desempleo estructural y ausencia de programas de formación; y las comunidades indígenas y afrodescendientes ven amenazados sus territorios y cosmovisiones por políticas que no reconocen sus particularidades. Esta exclusión diferenciada profundiza las desigualdades sociales, de género y étnicas, debilitando el tejido comunitario y generando desplazamientos forzados.

A pesar de este panorama, el Pacífico representa una oportunidad perdida para el país. Su potencial en pesca artesanal, agroindustria

sostenible, bioeconomía y turismo cultural sigue desaprovechado por la falta de infraestructura, inversión tecnológica y apoyo institucional. En lugar de convertirse en motor de transformación, la región ha sido condenada a sostenerse en economías informales de baja productividad, reproduciendo ciclos de pobreza intergeneracional.

Sin embargo, las comunidades no se limitan a denunciar: también proponen soluciones. Los talleres identificaron alternativas como la consolidación de cooperativas pesqueras y agroforestales, la creación de observatorios ciudadanos de transparencia, el desarrollo de corredores multimodales sostenibles y la implementación de redes comunitarias de internet. Estas propuestas, si son reconocidas y vinculadas a instrumentos concretos como los Planes de Ordenamiento Territorial, los presupuestos participativos y los Planes Nacionales y Departamentales de Desarrollo, pueden marcar el inicio de un modelo de gobernanza participativa, inclusiva y sostenible que transforme décadas de exclusión en oportunidades de dignidad y progreso.

4.2.3 Las voces silenciadas en el Pacífico

El Pacífico colombiano ha sido históricamente silenciado en los escenarios nacionales, no solo en los medios de comunicación, sino también en las instituciones políticas y educativas. Este silenciamiento no es fortuito: responde a una estructura de exclusión que ha marginado sistemáticamente a las comunidades afrodescendientes e indígenas, privándolas de espacios de representación y decisión. Estudios recientes evidencian que más del 70 % de las narrativas mediáticas sobre la región se concentran en la violencia y el narcotráfico, invisibilizando las prácticas de resiliencia, innovación social y aportes culturales que sostienen la vida comunitaria. Este enfoque reduccionista no solo estigmatiza al territorio, sino que debilita su reconocimiento como actor legítimo. Como advierte Escobar (2010), la invisibilidad de las comunidades negras e indígenas en los discursos

hegemónicos del desarrollo es una estrategia de dominación cultural y política que mantiene la periferia sometida a los intereses del centro.

El enfoque mediático sesgado hacia el Pacífico ha contribuido a consolidar estereotipos que reducen a sus comunidades a categorías de marginalidad, despojándolas de su rica humanidad y, lo que es más grave, obstaculizando la formulación de políticas públicas inclusivas y pertinentes. Esta invisibilización desconoce los múltiples aportes de la región en el plano cultural, económico y social, y perpetúa una narrativa limitada que omite las experiencias transformadoras. Expresiones de vida y creatividad como el Festival Petronio Álvarez o las iniciativas de economía solidaria lideradas por mujeres en Tumaco proyectos que fortalecen el tejido comunitario y dinamizan la base económica local suelen ser relegadas a menciones superficiales en la agenda nacional. Esta representación fragmentada refuerza una profunda desigualdad simbólica y restringe la participación política de los territorios afrodescendientes e indígenas, negándoles su lugar como actores centrales y dignos en la construcción del proyecto de nación.

La exclusión histórica del Pacífico se cristaliza en la débil representación política de sus comunidades. Los liderazgos forjados en la resistencia y la adversidad, que representan la legítima voz del territorio, se estrellan contra barreras estructurales que restringen de manera sistemática su participación real en los espacios de decisión nacional. Esta fractura consolida la dolorosa percepción de la región como una periferia subordinada, incapaz de incidir efectivamente en su propio destino.

Análisis recientes confirman que la ausencia de reconocimiento institucional hacia los representantes étnicos como legítimas autoridades de gobierno genera una barrera de relacionamiento que erosiona la confianza y obstruye la concertación (Banco Mundial, 2024). Garantizar la presencia y la voz de los liderazgos afro e indígenas en la planeación estatal no es un acto de cuota, sino una condición indispensable para construir una

democracia verdaderamente plural y para que el desarrollo responda a la cosmovisión y las necesidades del territorio.

Superar el histórico silenciamiento del Pacífico implica, necesariamente, un ejercicio de valoración y visibilización de las prácticas de resistencia que emergen de la base territorial. Proyectos como el turismo comunitario, los procesos educativos que rescatan lenguas ancestrales y las economías solidarias lideradas por mujeres y jóvenes en medio de la adversidad, no son meras iniciativas; son modelos propios y robustos de sostenibilidad y desarrollo. Estas experiencias, lejos de ser excepciones folclóricas, constituyen alternativas probadas y replicables que permiten edificar un futuro basado en los principios de la justicia social y ambiental.

El gran desafío consiste en transformar la riqueza de estas prácticas en políticas públicas efectivas. Para ello, resulta indispensable vincular los consejos comunitarios y los cabildos indígenas las estructuras propias del gobierno territorial a instrumentos estatales clave, como los planes de ordenamiento territorial (POT) y los presupuestos participativos. De este modo, la gobernanza participativa dejaría de ser un mero discurso retórico, consolidándose como un camino concreto para asegurar la incidencia real, la autonomía y la dignidad de las comunidades del Pacífico colombiano.

La superación del silenciamiento histórico del Pacífico exige una articulación valiente entre el Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil, donde el papel de las comunidades cambie radicalmente: deben ser reconocidas no como meras receptoras pasivas, sino como las protagonistas ineludibles del cambio. Para que esta inversión de roles sea efectiva, resulta fundamental impulsar la creación de plataformas comunicativas que honren la pluralidad cultural de la región, junto con el apoyo a la investigación académica local que eleve y valide las experiencias territoriales al estatus de conocimiento legítimo. Es indispensable ligar el fortalecimiento de consejos comunitarios, cabildos y organizaciones de

base directamente a las herramientas de planificación oficial, como los presupuestos participativos y los planes de desarrollo territorial. Solo así, la voz de los pueblos afrodescendientes e indígenas dejará de ser consultiva para adquirir una incidencia real y tangible en las decisiones públicas, cimentando una gobernanza multinivel que es la llave para un desarrollo justo, transparente y sostenible.

Un ejemplo contundente del silenciamiento sistemático en el Pacífico es la violencia dirigida contra los líderes sociales y defensores comunitarios. La evidencia es cruda: entre 2020 y 2023, la región concentró una cifra alarmante de asesinatos, según reportes de organizaciones de derechos humanos como Indepaz (2023). Estos líderes, comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y la justicia ambiental, han sido blanco constante de actores armados ilegales. La Misión de Observación Electoral (MOE, 2025) ha documentado que este patrón de violencia no es fortuito: es el resultado de la debilidad institucional en la periferia, que permite a grupos de interés y élites políticas y económicas utilizar el ataque a los liderazgos como una vía para mantener el control territorial y asegurar la apropiación de recursos. De esta manera, la violencia funciona como un mecanismo estructural que perpetúa la exclusión y la desigualdad, silenciando cualquier voz que se oponga a este orden.

La visión de futuro del Pacífico colombiano debe ir más allá de la gestión interna y proyectarse en el escenario global. La cooperación internacional y la inversión extranjera constituyen un eje estratégico, aunque frecuentemente mal gestionado. La experiencia demuestra que la llegada de capital foráneo, si no está mediada por una fuerte gobernanza local y criterios de justicia ambiental, puede reproducir dinámicas extractivistas y concentrar beneficios en el centro. Sin embargo, existe una oportunidad inmensa: al canalizar los recursos de la cooperación hacia el fortalecimiento de la bioeconomía, el ecoturismo y las cadenas de valor comunitarias, se logra una transferencia de conocimiento y se

impulsa un desarrollo inclusivo. El gran reto no es simplemente atraer dólares, sino asegurar que esa inversión se alinee con el Buen Vivir y la autonomía territorial de las comunidades, transformando la ayuda externa en un auténtico motor de desarrollo sostenible y equitativo.

La falta de inclusión en el ámbito de la investigación no es un error de representación, sino una falla estructural en la gobernanza de la CTI. Las políticas científicas que se gestan sin la participación de los sabedores y las universidades del Pacífico terminan privilegiando problemáticas urbanas y centrales, desaprovechando la riqueza epistémica de la región. En el Pacífico, esta omisión se traduce en una ausencia crítica de conocimiento vital: la ciencia no logra responder a preguntas urgentes sobre la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, el manejo de enfermedades tropicales o la aplicación de los saberes ancestrales a la bioeconomía. Investigaciones recientes han demostrado que la gobernanza de la CTI en Colombia ha sido ineficaz para reducir las brechas de inversión y capacidad entre las regiones, perpetuando la marginalidad y restringiendo la posibilidad de que el Pacífico gestione su propio desarrollo científico y productivo.

Este vacío en la gobernanza científica perpetúa una grave negación epistémica: la desvalorización sistemática de los conocimientos locales y ancestrales en favor de modelos homogéneos importados desde el centro. Superar esta brecha no es un ajuste técnico, sino un acto de justicia que requiere el rediseño estructural de las políticas de ciencia e innovación. La participación de los líderes afrodescendientes e indígenas debe dejar de ser una excepción consultiva para convertirse en un principio rector y estructural. Solo así será posible avanzar hacia una ciencia socialmente responsable, enraizada en la diversidad cultural y territorial que define a Colombia.

Revertir la exclusión en la investigación exige una transformación profunda en la forma en que el país organiza y financia la producción de

conocimiento. Ello implica promover activamente la formación avanzada y las becas focalizadas que aseguren que los propios investigadores del Pacífico lideren proyectos de alto impacto, garantizando su acceso a redes internacionales. Fortalecer estos liderazgos no solo democratiza la investigación, sino que también permite integrar las perspectivas culturales y territoriales que enriquecen y dotan de pertinencia a las políticas públicas, asegurando que el conocimiento sirva a la dignidad de sus comunidades.

En paralelo, resulta indispensable abrir espacios de diálogo de saberes genuino que reconozcan y articulen los conocimientos ancestrales del Pacífico con la ciencia contemporánea. Nuestro análisis confirma que la integración efectiva de los saberes sobre la selva húmeda, el manejo del río y los ecosistemas marinos en las agendas científicas nacionales incrementa la pertinencia de las investigaciones y facilita la sostenibilidad de los resultados. Estos diálogos, cuando logran institucionalizarse mediante políticas de investigación inclusivas y respetuosas, pueden contribuir a revertir siglos de epistemicidio y a construir un modelo de ciencia situado, que responda de forma ética a la inmensa diversidad cultural y biológica única de Colombia.

La invisibilización también atraviesa el campo educativo con un profundo impacto en la identidad. Los currículos escolares en Colombia continúan reproduciendo un relato centralista y homogeneizado que excluye sistemáticamente la historia, cultura y aportes de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico. Esta omisión genera una fractura dolorosa en la identidad de las generaciones más jóvenes, socavando su autoestima cultural, y perpetúa el desconocimiento en el resto del país sobre la inmensa riqueza y las cosmovisiones del litoral. Incorporar estos contenidos en la educación básica y media no es un lujo, sino una necesidad impostergable para sanar el tejido social, promover una cohesión nacional auténtica y garantizar el reconocimiento pleno de la diversidad que define y enriquece a Colombia.

Así mismo, la falta de formación docente que incorpore perspectivas interculturales y diferenciales agrava la exclusión. Muchos profesores, especialmente aquellos que trabajan en zonas urbanas o que llegan al litoral, desconocen profundamente las realidades culturales del Pacífico y, por ende, carecen de las herramientas pedagógicas necesarias para conectar el currículo con el saber ancestral. Es fundamental, en este sentido, diseñar programas de capacitación docente que realmente integren los saberes propios de la selva, el río y el mar, promoviendo una visión más rica y amplia de la diversidad cultural de Colombia. Esto es un requisito para generar un cambio significativo en la percepción y la dignidad educativa de la región.

La carencia de plataformas sostenibles para expresar las narrativas locales también limita la capacidad de las comunidades para contrarrestar los estereotipos que las han estigmatizado históricamente. Medios alternativos y de base, como las radios comunitarias y las redes sociales gestionadas por jóvenes, han luchado por llenar este vacío, pero se encuentran con restricciones financieras y técnicas que impiden su sostenibilidad a largo plazo. Esta interrupción de la voz propia mantiene a la región dependiente de las agendas mediáticas externas, lo cual perpetúa el círculo de la invisibilidad.

La falta de recursos para los medios de comunicación locales restringe severamente la difusión de historias positivas sobre el Pacífico y, de forma más crítica, limita el acceso a información vital para las propias comunidades. Los habitantes de regiones apartadas dependen a menudo de estas plataformas para conocer sus derechos fundamentales, acceder a oportunidades de desarrollo y denunciar injusticias. Sin un apoyo institucional robusto, estos valiosos medios enfrentan el riesgo real e inminente de desaparecer, dejando a las comunidades en un estado de vulnerabilidad informativa. Esta interrupción de la voz propia mantiene a la región dependiente de las agendas mediáticas externas, lo cual perpetúa el círculo de la invisibilidad y la exclusión social.

La consolidación de plataformas mediáticas comunitarias podría transformar radicalmente la percepción del Pacífico. Estas iniciativas deben enfocarse en destacar historias de éxito en sectores como la educación, la economía solidaria y la conservación ambiental. Escobar (2010) sostiene que, al conectar las narrativas locales con audiencias más amplias, se revaloriza el conocimiento endógeno y se genera una plataforma que facilita alianzas estratégicas y atrae inversiones alineadas con el Buen Vivir y el desarrollo sostenible de la región.

Es crucial que el Estado colombiano y las organizaciones internacionales trasciendan la visión asistencialista y reconozcan el papel estratégico y político de los medios comunitarios en la construcción de la gobernanza y el tejido social del Pacífico. Invertir en esta infraestructura técnica y en la capacitación de los comunicadores, junto con la creación de marcos regulatorios favorables, no es un gasto social, sino una inversión estratégica en soberanía informativa y estabilidad democrática. La sostenibilidad de estas plataformas garantiza que el conocimiento vital fluya y que las voces locales se amplifiquen, construyendo un puente de doble vía entre el Pacífico y el resto del país. De esta forma, la inversión en comunicación se convierte en un acelerador de la inclusión y la equidad, asegurando que la realidad de la región sea comprendida y valorada como un activo nacional.

Superar la histórica invisibilización del Pacífico exige un esfuerzo integral enfocado en la agencia y la participación de sus comunidades. Esto implica destinar recursos para fortalecer las plataformas de comunicación comunitaria y para impulsar programas educativos que no solo reconozcan, sino que celebren la diversidad cultural y ancestral de la región. De manera crucial, es fundamental garantizar la seguridad de los líderes sociales y brindarles un apoyo institucional efectivo que les permita continuar su vital labor en la defensa de los territorios y los derechos humanos sin el temor constante a represalias. Solo así la inversión en el Pacífico se

traducirá en la consolidación de un tejido social resiliente y una democracia territorial plena.

La inversión estratégica en plataformas de comunicación comunitaria es una necesidad urgente, pues daría voz a las historias y luchas locales, constituyéndose en un motor de transformación social. Estas plataformas, gestionadas desde el territorio, son clave para la construcción de una narrativa propia, justa e inclusiva, que pueda visibilizar las iniciativas de desarrollo, la economía solidaria y los logros de las comunidades.

En este sentido, los medios ciudadanos van más allá de la simple divulgación. Como lo define la investigadora colombiana Rodríguez (2008), estos medios tienen el potencial de actuar como auténticas herramientas de empoderamiento y apropiación simbólica. Al permitir que las comunidades nombren el mundo en sus propios términos y definan sus propias agendas, estas plataformas contribuyen a la reconstitución del tejido social y facilitan el acceso a información vital para su progreso económico y social, fortaleciendo la esfera pública local.

La inversión en plataformas de comunicación comunitaria daría voz a las historias y luchas locales y podría ser un motor de transformación social. Estas plataformas podrían desempeñar un papel clave en la construcción de una narrativa más justa e inclusiva, destacando las iniciativas de desarrollo y los logros de las comunidades.

Paralelamente, es crucial fortalecer los programas educativos que celebran la diversidad cultural del Pacífico (RAP Pacífico, 2025). Incluir contenidos que resalten la música, las tradiciones orales y la historia de las comunidades afrodescendientes e indígenas enriquecería la experiencia educativa y fomentaría un sentido de identidad y orgullo cultural. En este sentido, la etnoeducación, al ser asumida como educación intercultural, se configura como una política educativa fundamental. Esta aproximación es

esencial para dismantelar estereotipos, promover la equidad en el país y movilizar un nuevo tipo de maestro capaz de tramitar la diversidad étnica y cultural en el mundo escolar.

Además, es fundamental que el Estado y la sociedad garanticen la seguridad de los líderes sociales como una acción imprescindible para construir confianza y estabilidad democrática en la región del Pacífico. Proveer recursos y protección efectiva a quienes defienden los derechos colectivos y promueven el desarrollo sostenible no es una opción, sino una forma concreta de respaldar y legitimar los esfuerzos locales de gobernanza. Sin esta protección vital, cualquier iniciativa de progreso estará condenada a la precariedad y al fracaso, ya que las comunidades seguirán enfrentando amenazas sistemáticas que dificultan la organización comunitaria y paralizan la construcción de un futuro más equitativo.

En última instancia, lograr la inclusión real de las comunidades del Pacífico en el proyecto nacional requiere un compromiso sostenido por parte del Estado, la sociedad civil y los sectores privados. Reconocer y amplificar las voces locales transformará la narrativa de la región y abrirá caminos hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. Ese cambio es posible si las instituciones y la sociedad en su conjunto se comprometen a escuchar y valorar las historias y propuestas que emanan del Pacífico colombiano.

El fortalecimiento de las organizaciones locales también es clave para amplificar esas voces. Iniciativas como consejos comunitarios y cabildos indígenas han demostrado ser herramientas efectivas para la gestión territorial y la defensa de los derechos colectivos. Estas estructuras deben ser fortalecidas mediante financiamiento y reconocimiento formal, asegurando que las comunidades tengan un papel activo en la toma de decisiones (Defensoría del Pueblo, 2024).

Para consolidar el fortalecimiento de la gobernanza territorial, es crucial establecer programas de capacitación dirigidos a los líderes de

estas organizaciones, con un énfasis práctico en la gestión de proyectos, la resolución de conflictos y las estrategias efectivas de incidencia política. Estas habilidades no solo mejorarían la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios territorios y recursos, sino que también aumentarían su influencia directa en la formulación de políticas públicas, asegurando que el diseño estatal atienda sus necesidades reales y complejas. La creación de alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación nacionales y regionales podría facilitar este proceso, asegurando la transferencia de conocimientos técnicos y académicos desde una óptica de diálogo de saberes y no de imposición.

Además, el financiamiento sostenible para estas organizaciones es una condición indispensable para su efectividad a largo plazo. Esto implica el diseño de fondos especiales con destinación exclusiva a apoyar los consejos comunitarios y los cabildos indígenas, operando bajo criterios estrictos de transparencia y rendición de cuentas. Organismos internacionales y agencias de cooperación tienen un papel crucial en este aspecto, aportando recursos financieros y promoviendo la participación directa de las comunidades en el diseño de proyectos de desarrollo. La inversión estable en estas estructuras asegura la continuidad de la defensa territorial y la construcción de un modelo de autonomía económica que está, por su naturaleza, alineado con los principios de la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

La complejidad del Pacífico colombiano no reside en la escasez de ideas, sino en la fragmentación de su vasta riqueza conceptual. La multiplicidad de iniciativas de conservación y desarrollo, aunque valiosas se encuentra dispersa y desarticulada, impidiendo que se consolide como una fuerza política unificada capaz de incidir en el orden nacional. El problema no es la falta de proyectos, sino la incapacidad de sistematizar y jerarquizar estos esfuerzos de base, ricos en sabiduría endógena y adaptabilidad ecológica. Esta dispersión diluye la autonomía política de las comunidades

y mantiene a la región conceptualmente rica pero políticamente vulnerable. Generar una metodología de integración de estas iniciativas es la llave para transformar el hacer local en un poderoso argumento estructural de justicia histórica y desarrollo territorial.

Los proyectos estructurales constituyen la base de un cambio profundo y duradero, y no simples paliativos. En esta categoría se ubican iniciativas como las energías renovables comunitarias y, de manera crucial, el reconocimiento de los consejos comunitarios y cabildos indígenas como actores decisores legítimos en la planeación territorial. Estos procesos son estructurales porque su fin es redistribuir el poder y fortalecer la autonomía política. Esta transformación garantiza que el desarrollo económico que se genere en el Pacífico sea endógeno, promoviendo el desarrollo humano de las comunidades y superando las relaciones históricas de subordinación. Al sanar la fractura entre el poder central y el saber local, se construye un futuro justo.

La inclusión de los presupuestos participativos en las agendas municipales no debe verse como una herramienta meramente administrativa, sino como un ejercicio de soberanía económica que revierte el poder al territorio. Lejos de ser receptora pasiva de decisiones ajenas, la ciudadanía afrodescendiente e indígena incide directamente en la distribución del dinero público. Al articular la planificación estatal con sus legítimos liderazgos locales, se sientan las bases de un modelo de gobernanza maduro en el que las comunidades son protagonistas del desarrollo territorial. Este es el camino más expedito para garantizar que los recursos se inviertan en la consolidación del desarrollo económico y humano en el Pacífico.

Los proyectos emergentes del Pacífico representan un vibrante catálogo de innovaciones endógenas que han demostrado resultados positivos y un enorme potencial de crecimiento. Iniciativas como la

agroindustria comunitaria (particularmente la transformación de cacao y coco en productos de alto valor) y el turismo cultural gestionado por las comunidades no solo generan ingresos vitales, sino que fortalecen la identidad colectiva y visibilizan el inmenso patrimonio cultural de la región. Estas empresas de base demuestran que el desarrollo sostenible no requiere modelos externos, sino la inversión inteligente en las capacidades y la creatividad de los habitantes del Pacífico para asegurar su futuro.

Se incluyen también como emergentes las valiosas experiencias de bioeconomía y agroforestería, que muestran un alto potencial de impacto tanto ambiental como económico. Al lograr la diversificación de las fuentes de ingreso y promover prácticas productivas que son inherentemente sostenibles, estas iniciativas golpean directamente la dependencia extractiva que tanto ha vulnerado a la región. El reto crucial radica en cómo lograr la articulación estratégica de estas empresas de base con las cadenas de valor nacionales e internacionales. Es imperativo que estos esfuerzos no queden relegados a la categoría de “proyecto piloto” testimonial, sino que se conviertan en motores de transformación real con capacidad de generar una riqueza que se quede en el territorio.

A nivel de proyectos replicables se encuentran las prácticas comunitarias de menor escala, pero de alto impacto social. Ejemplos como las brigadas comunitarias de mantenimiento vial o las redes digitales gestionadas localmente han demostrado una eficacia sorprendente en contextos rurales y aislados. Su valor estratégico radica precisamente en la capacidad de multiplicarse a bajo costo en distintos municipios, generando empleo inmediato y mejorando el acceso a servicios básicos sin la necesidad de depender exclusivamente de la acción central. Estas iniciativas son un testimonio de la adaptabilidad y la autogestión del Pacífico, y su réplica masiva es una vía concreta para transformar la calidad de vida territorial.

La cooperación internacional se revela como un catalizador esencial, ofreciendo modelos de intervención de gran valor replicable. Programas

exitosos centrados en la educación, la seguridad alimentaria y la salud comunitaria demuestran su efectividad cuando se articulan directamente con los consejos comunitarios y cabildos indígenas. La clave para que esta inversión trascienda el asistencialismo reside en la coordinación interinstitucional y el diseño de fondos comunes con mecanismos participativos que garanticen la transparencia y fortalezcan la autonomía local en lugar de minarla.

En conclusión, este capítulo revela que la tesis del “silenciamiento histórico” de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico no puede reducirse a una mera ausencia de voz, sino que debe entenderse como un mecanismo estructural de exclusión política, mediática y académica que las ha relegado a la periferia conceptual de la nación. Esta invisibilidad institucional ha tenido un efecto devastador: reduce sus aportes culturales y políticos a expresiones folclóricas, al tiempo que omite su papel central como vanguardia en la construcción de alternativas de desarrollo. La marginación resultante limita severamente su capacidad de incidir en la planeación territorial y en el acceso a recursos públicos, lo que perpetúa una desigualdad que las mantiene fuera de los espacios donde se deciden sus propios destinos.

Superar este escenario exige un giro radical hacia modelos de gobernanza participativa que reconozcan a los consejos comunitarios y cabildos indígenas como actores vinculantes y decisorios en la planeación estatal. La inclusión efectiva pasa por articular la sabiduría ancestral con instrumentos de política pública (como los presupuestos participativos y los planes de ordenamiento territorial), de manera que las comunidades no solo sean escuchadas, sino que definan directamente las rutas de su propio desarrollo. Romper el silencio del Pacífico implica reconocer que no se trata de “dar voz” a quienes ya la tienen, sino de garantizar que esa voz transforme las estructuras políticas y sociales de Colombia en clave de justicia histórica y sostenibilidad.

CAPÍTULO 03

RIQUEZAS NATURALES

4.3.1. Biodiversidad y recursos no aprovechados

El Pacífico colombiano es un epicentro de biodiversidad global que alberga algunas de las áreas protegidas y parques naturales más icónicos del mundo. Entre estos se destacan el Parque Nacional Natural Utría, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Parque Nacional Natural Sanquianga. Estas áreas no solo resguardan ecosistemas críticos, sino que también proporcionan servicios ambientales esenciales, como la regulación del clima y la conservación de cuencas hídricas (Parques Nacionales Naturales, 2023).

El Parque Nacional Natural Utría, ubicado en el Chocó, es un refugio para especies emblemáticas como las ballenas jorobadas, que llegan cada año a reproducirse en sus aguas. Además, alberga más de 700 especies de aves, incluidas endémicas como el colibrí esmeralda del occidente. Sin embargo, a pesar de su potencial para el ecoturismo, solo recibe un promedio de 2.000 visitantes anuales debido a problemas de infraestructura y seguridad (ProColombia, 2023a). La mejora de sus condiciones podría transformar esa área en un destino clave para el turismo sostenible.

El Santuario de Fauna y Flora Malpelo es otro tesoro natural, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ese islote volcánico es un punto caliente de biodiversidad marina, hogar de tiburones martillo, rayas gigantes y más de 400 especies de peces. Aunque la pesca ilegal amenaza la sostenibilidad de ese ecosistema único. Según WWF (2025), es urgente implementar mecanismos de vigilancia más estrictos y fomentar la colaboración internacional para proteger esta área crítica.

En el continente, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es un santuario para especies como el oso de anteojos y el puma. También alberga más de 1.500 especies de plantas, muchas de ellas con potencial medicinal y agroindustrial (Instituto Humboldt, 2023). La falta de inversión en investigación y desarrollo limita el aprovechamiento sostenible de esos recursos, lo cual imposibilita oportunidades para la innovación científica y económica.

El Parque Nacional Natural Sanquianga, ubicado en Nariño, es otra joya de biodiversidad que merece atención especial. Ese parque protege una de las redes de manglares más extensas y biodiversas del Pacífico colombiano, cubriendo aproximadamente el 20 % de los manglares del litoral Pacífico de Colombia (Parques Nacionales Naturales, 2023). Ecosistemas cruciales para la captura de carbono, la protección contra inundaciones y como hábitat para especies de importancia comercial, como la piangua y el camarón blanco. A pesar de ello, la deforestación y la pesca ilegal amenazan su sostenibilidad, lo que resalta la necesidad de estrategias de conservación y manejo sostenible.

Los recursos hídricos del Pacífico son también una fuente inagotable de oportunidades. Ríos como el Atrato y el San Juan podrían aprovecharse para la generación de energía hidroeléctrica, no solo para satisfacer la demanda local, sino también para exportar energía a otras regiones. Sin embargo, menos del 10 % de ese potencial ha sido explotado (DNP, 2023).

La inversión en proyectos hidroeléctricos sostenibles podría transformar la economía local, creando empleos decentes y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

En el ámbito marino, el Pacífico cuenta con una de las áreas pesqueras más ricas del país, generando el 40 % de la producción pesquera nacional (Ministerio de Agricultura, 2023). Pese a eso, la mayor parte de esta pesca se realiza de manera artesanal, con tecnologías obsoletas y un acceso limitado a los mercados internacionales. La introducción de prácticas de pesca sostenible y la modernización de la infraestructura portuaria podrían duplicar los ingresos de ese sector, en pro de fortalecer la seguridad alimentaria y de mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras.

La selva tropical del Pacífico no es solo una vasta extensión de árboles; es el pulmón biocultural de América Latina, una reserva de vida fundamental para la estabilidad climática global y el sostén de economías locales dignas basadas en sus frutos, medicinas y maderas no maderables. Sin embargo, esta fuerza vital enfrenta una dinámica de deterioro acelerado. Esta destrucción no solo desmantela la biodiversidad única del territorio, sino que debilita las defensas naturales de las comunidades, exponiéndolas a desastres como inundaciones y deslizamientos de tierra. La imperiosa necesidad es transformar este reto en una oportunidad: implementar políticas de manejo forestal sostenible que incluyan incentivos económicos robustos para la conservación. El bosque en pie es la inversión más rentable para la seguridad humana, la prosperidad futura y la sostenibilidad ambiental del Pacífico.

El potencial agroindustrial de la región ha sido históricamente subestimado, pero es una reserva de prosperidad esperando ser activada. Productos emblemáticos como el cacao fino, el coco y el borojó tienen una alta demanda y un valor diferencial en los mercados internacionales gracias a su origen y calidad. Sin embargo, la ausencia de cadenas de

valor integradas y el déficit de infraestructura limita drásticamente su aprovechamiento. La respuesta a este desafío no es otra que la creación de cooperativas agroindustriales y la inversión estratégica en certificaciones de calidad. Activar este sector no solo significa generar empleos estables y atraer inversión extranjera responsable, sino que consolida un modelo económico endógeno que honra la riqueza de la tierra y la capacidad productiva de sus comunidades.

La biodiversidad del Pacífico colombiano tiene un potencial extraordinario para generar desarrollo sostenible y contribuir de manera significativa a la mitigación del cambio climático. Esa región alberga ecosistemas estratégicos, como manglares, selvas húmedas tropicales y arrecifes de coral, que actúan como sumideros de carbono y reguladores naturales del clima. El Instituto Humboldt (2022) confirma que los manglares del Pacífico tienen la capacidad de capturar hasta 1.5 toneladas de carbono por hectárea al año, y los posiciona como aliados fundamentales en la lucha contra el calentamiento global. La preservación y restauración de esos ecosistemas reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y también abren oportunidades económicas mediante la participación en mercados internacionales de bonos de carbono, en beneficio directo de las comunidades locales.

Más allá de su papel en la mitigación climática, la vasta riqueza natural del Pacífico ofrece servicios ecosistémicos esenciales que impactan directamente tanto la estabilidad ambiental como la económica. Las cuencas hídricas de la región no son solo ríos; son auténticos bancos de agua dulce y motores potenciales para la generación de energía, vitales para el sostenimiento de la nación. Sin embargo, estas venas del territorio están gravemente comprometidas por actividades como la deforestación y la minería ilegal. Esta degradación, que se traduce en una erosión de la resiliencia climática, afecta la base misma de la vida de las comunidades al limitar su acceso a recursos básicos. La solución es sistémica:

implementar proyectos de reforestación masiva y manejo sostenible de cuencas restauraría estos ecosistemas, al tiempo que generaría empleos verdes de alto valor, fortaleciendo las economías locales y garantizando el abastecimiento de recursos críticos a largo plazo.

La conservación de la vida silvestre es otro aspecto fundamental para el desarrollo sostenible del Pacífico. Especies icónicas como el jaguar, el oso de anteojos y las ballenas jorobadas tienen un inmenso valor ecológico y económico, especialmente para el ecoturismo. Según ProColombia (2023a), el turismo de naturaleza en Colombia ha crecido un 15 % en los últimos años, pero el Pacífico solo recibe un pequeño porcentaje de esos visitantes, debido a las deficiencias en infraestructura y seguridad. Invertir en programas de conservación de vida silvestre y desarrollar un turismo sostenible en la región podría atraer a más visitantes, fortalecer la economía local y garantizar la protección de especies amenazadas.

El apoyo del gobierno nacional y la cooperación internacional son cruciales para aprovechar de manera sostenible la megadiversidad del Pacífico. Organizaciones como USAID y el Banco Mundial han contribuido históricamente al financiamiento de proyectos que no solo se centran en la creación de áreas protegidas, sino en el fortalecimiento de las capacidades locales para la autogestión de los recursos naturales. La efectividad de estas iniciativas se multiplica cuando están arraigadas en políticas públicas sólidas y, sobre todo, cuentan con la participación y vinculante de las comunidades. Es imperativo, además, incrementar la inversión en investigación científica y programas de educación ambiental para que, al entender mejor los ecosistemas, para poder codiseñar estrategias de conservación que honren la sabiduría ancestral y garanticen la prosperidad a largo plazo.

La riqueza natural del Pacífico colombiano representa un patrimonio invaluable para la nación, al igual que ofrece una plataforma única para el

desarrollo de modelos de economía verde que pueden redefinir el concepto de sostenibilidad en Colombia. En ese contexto, la integración de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares y bosques tropicales, no solo ayuda a mitigar el cambio climático global, sino que fortalece las economías locales mediante la generación de empleos verdes dignos. Los programas de restauración, combinados con incentivos fiscales y financieros estratégicos, tienen el potencial de convertir a las comunidades del Pacífico en líderes nacionales en la implementación de estrategias ambientales efectivas, demostrando que la conservación es la vía más rentable para el desarrollo.

El desarrollo de proyectos de conservación sostenible se convierte, además, en un imán para la inversión internacional responsable, la cual busca impactar positivamente tanto lo ambiental como lo social. La biodiversidad única del Pacífico posee un atractivo natural incalculable para la bioprospección, una actividad que busca identificar compuestos bioactivos en plantas y organismos marinos para su uso en las industrias farmacéutica y cosmética. El potencial en este campo es vasto y, en gran medida, inexplorado. Esto demuestra el inmenso capital de innovación que podría transformar la economía regional si se canalizan adecuadamente los recursos en investigación y el fortalecimiento de las capacidades locales, garantizando que los beneficios de esta riqueza se queden en las comunidades que la han custodiado históricamente.

La conexión intrínseca entre biodiversidad y seguridad hídrica es crucial para garantizar el bienestar de las comunidades locales y la sostenibilidad a largo plazo de la región. Las cuencas hidrográficas del Pacífico no son solo fuentes de agua; son ecosistemas fundamentales para el suministro de agua potable, el sustento de la agricultura y el potencial de generación de energía renovable. Sin embargo, el deterioro de estos ecosistemas vitales por la deforestación y la minería ilegal ha reducido drásticamente su capacidad para proveer estos servicios. La urgencia radica

en implementar un modelo de manejo integrado de cuencas que restaure la funcionalidad ecológica de estos sistemas, asegurando el acceso equitativo a los recursos hídricos y reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos climáticos extremos. La conservación del bosque es, en esencia, la garantía de vida para el Pacífico.

Por su parte, la biodiversidad marina del Pacífico colombiano tiene un valor estratégico para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. Especies marinas como el camarón, el atún y las ostras sostienen la pesca artesanal y, además, tienen un alto potencial para la exportación. Sin embargo, la sobreexplotación y la pesca ilegal amenazan con agotar estos recursos. Programas de manejo pesquero sostenible, respaldados por la cooperación internacional y el gobierno nacional, pueden garantizar la conservación de los ecosistemas marinos mientras aumentan la productividad y los ingresos de las comunidades pesqueras (WWF, 2025).

La participación activa de las comunidades locales es un elemento esencial en cualquier estrategia de conservación y desarrollo sostenible en el Pacífico. Los conocimientos tradicionales de las comunidades afrodescendientes e indígenas son fundamentales para diseñar proyectos que respeten las dinámicas naturales y culturales del territorio. Además, al garantizar la inclusión de esas comunidades en la toma de decisiones, se fortalece su sentido de pertenencia y compromiso con los proyectos, y aumenta sus probabilidades de éxito, en ese sentido las políticas que integran el conocimiento ancestral y la ciencia moderna generan soluciones más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

La mega-diversidad del Pacífico colombiano no es un activo estático, sino el cimiento de un capital biocultural que trasciende lo meramente biológico. La interdependencia entre las comunidades y su entorno no se limita a la gestión de recursos, sino que es una relación ontológica que forja la identidad colectiva y promueve la cooperación social. Es esta cosmovisión

holística la que dota a la biodiversidad de su verdadero potencial: debe ser vista como el núcleo estratégico para cualquier programa de desarrollo. Al proteger este acervo natural y cultural de forma conjunta, se impulsa no solo la salud de los ecosistemas, sino también la vitalidad social, convirtiendo la conservación en una poderosa estrategia de integración para el territorio.

La gestión colaborativa de recursos naturales, como los manglares y las cuencas hídricas, ha demostrado ser un modelo excepcionalmente efectivo para fomentar la cohesión social en la región del Pacífico. Experiencias históricas y contemporáneas ilustran cómo el manejo comunitario no solo preserva la biodiversidad a largo plazo, sino que empodera a las comunidades al otorgarles un rol protagónico y decisorio. Estos esquemas de autogobierno han demostrado su capacidad para reducir significativamente los conflictos locales y fortalecer el tejido social, al establecer metas comunes que giran en torno a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos. En esencia, la defensa del territorio se convierte en una estrategia de unificación que genera capital social y afianza la autonomía colectiva.

La educación ambiental, articulada con el conocimiento ancestral, se establece como un pilar esencial para consolidar la cohesión social en el Pacífico. Los programas educativos que logran incorporar la sabiduría tradicional y la ciencia moderna en el estudio de la biodiversidad tienen la capacidad única de empoderar a las nuevas generaciones, forjando en ellas un sentido de responsabilidad compartida hacia su entorno. Esta educación con pertinencia cultural no solo aumenta la conciencia sobre los desafíos ambientales, sino que promueve activamente la equidad al incluir todas las voces y saberes de la comunidad en los procesos de aprendizaje y toma de decisiones. Es una estrategia vital que refuerza los lazos comunitarios y crea un compromiso colectivo profundo e inquebrantable con la conservación.

Por otro lado, la biodiversidad debe dejar de ser vista únicamente como un recurso ambiental para convertirse en el punto de partida para

proyectos productivos sostenibles que generen beneficios económicos y, simultáneamente, fortalezcan la cohesión social. Iniciativas de agroforestería o ecoturismo comunitario no solo protegen el medioambiente, sino que brindan oportunidades laborales dignas y promueven la cooperación solidaria entre los habitantes. Estos proyectos demuestran su capacidad para reducir la pobreza y la exclusión social, al tiempo que garantizan la preservación activa de los ecosistemas locales. Por tanto, la riqueza biológica del Pacífico es, por diseño, un motor estratégico para el desarrollo equitativo y sostenible de sus comunidades.

La protección, conservación y preservación de la biodiversidad del Pacífico colombiano dependen de la convergencia de políticas gubernamentales e internacionales, pero, crucialmente, del papel protagónico de las comunidades negras e indígenas que habitan ese territorio. Estas comunidades son las guardianas tradicionales de los ecosistemas, un rol que han ejercido durante siglos mediante el uso de prácticas de manejo sostenible basadas en un conocimiento ancestral profundo. La implementación de esta sabiduría en las estrategias de conservación modernas no es un acto de folclor, sino una estrategia de gestión esencial que garantiza la subsistencia y contribuye directamente a la salud de los ecosistemas. Su integración efectiva en los programas de protección ambiental eleva la efectividad y la legitimidad de toda intervención en la región.

El conocimiento ancestral de estas comunidades es especialmente relevante en la mitigación del cambio climático y en la restauración de ecosistemas degradados. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han demostrado una profunda comprensión de los ciclos naturales y de las interacciones entre los ecosistemas, lo que les permite desarrollar estrategias de manejo adaptativo con una precisión inigualable. La inclusión activa y estratégica de este saber en proyectos de restauración ecológica tiene el potencial de aumentar significativamente la resiliencia de los ecosistemas

del Pacífico. Además, al fortalecer el liderazgo de estas comunidades en toda iniciativa de manejo de recursos naturales, se mejora la efectividad de los resultados ambientales y se fomenta simultáneamente la cohesión social y el desarrollo local genuino.

La biodiversidad del Pacífico colombiano es, en su esencia más profunda, inseparable de las culturas que la rodean. Los manglares, los ríos y los bosques no son solo recursos naturales; son, fundamentalmente, los elementos centrales de la identidad y la espiritualidad de las comunidades locales. Esta relación simbiótica significa que la pérdida de biodiversidad es también una pérdida irrecuperable de tradiciones, prácticas ceremoniales y saberes que han sido transmitidos de generación en generación. Por ello, la conservación de estos ecosistemas trasciende lo meramente ambiental; es un compromiso ético y cultural ineludible que exige la participación equitativa y vinculante de estas comunidades en todos los procesos de toma de decisiones.

El empoderamiento de las comunidades negras e indígenas es la clave irrenunciable para la sostenibilidad de toda iniciativa de conservación. Estas comunidades deben dejar de ser percibidas únicamente como beneficiarias de los proyectos para ser reconocidas como actores fundamentales, protagonistas y decisivos en su diseño y ejecución. La creación de alianzas estratégicas entre las comunidades, el gobierno y las organizaciones internacionales es esencial para fortalecer este liderazgo local. Solo a través de este enfoque inclusivo se puede asegurar que los beneficios de la conservación se distribuyan equitativamente, protegiendo así los ecosistemas del Pacífico y garantizando la justicia social y el respeto por los derechos colectivos de las comunidades. El empoderamiento es, en última instancia, una estrategia de justicia distributiva.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali en octubre de 2024, representó un momento crucial para

la conservación de la biodiversidad global y, particularmente, para las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano. Esas comunidades, históricamente guardianas de los ecosistemas locales, jugaron un papel destacado en los compromisos adquiridos durante la cumbre. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2024) abordó en la COP16 temas como la protección de áreas clave y la inclusión de comunidades locales en la gestión ambiental, y destacó el conocimiento ancestral como una herramienta esencial para la preservación de la biodiversidad. La elección de Cali como sede fue un reconocimiento implícito a la importancia del Pacífico colombiano como epicentro de riqueza natural y cultural.

Uno de los logros más trascendentales de la COP16 fue el reconocimiento formal y vinculante del papel de las comunidades negras e indígenas en la conservación de la biodiversidad. Este avance no fue meramente simbólico: se materializó en el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobernanza ambiental global que integra los conocimientos tradicionales de estas comunidades en la alta toma de decisiones. Este progreso, que asegura los derechos de estas poblaciones, al mismo tiempo que refuerza las estrategias de conservación mediante prácticas adaptadas al contexto local, es un hito de la justicia ambiental global. Además, la creación de un fondo internacional para la biodiversidad, con un porcentaje significativo de sus recursos destinados a las comunidades locales, busca apoyar directamente proyectos sostenibles como el manejo de manglares y la reforestación, fortaleciendo su capacidad para actuar como custodios indispensables del territorio y líderes en la agenda ambiental del planeta.

El enfoque en la biodiversidad marina ha destacado la relevancia estratégica de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la gestión sostenible de estos recursos vitales. Áreas como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Parque Nacional Natural Gorgona, hábitats clave para especies marinas, dependen en gran medida del conocimiento y las prácticas tradicionales de las comunidades costeras para su preservación a

largo plazo. La validación de este liderazgo se ha traducido en la promoción de iniciativas que impulsan la capacitación de líderes comunitarios en vigilancia ambiental y la implementación de programas de pesca sostenible. Estas acciones generan un ciclo virtuoso: benefician directamente a los ecosistemas marinos, favorecen la seguridad alimentaria y mejoran las condiciones económicas de las comunidades, consolidando su rol como custodios insustituibles del patrimonio marino.

Sin embargo, el hito de la COP16 también puso de manifiesto los desafíos estructurales que persisten para las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano. A pesar del reconocimiento global y los avances en gobernanza, subsisten tensiones críticas en la distribución equitativa de los recursos financieros destinados a la conservación. Se observa una paradoja: muchas comunidades, custodias vitales de la biodiversidad, enfrentan barreras sistémicas para acceder a esos fondos, como la ausencia de representación directa en las mesas de negociación y las marcadas limitaciones técnicas para formular proyectos que cumplan con los estándares de gran escala. Esta realidad acentúa la urgencia de fortalecer las capacidades locales mediante programas de formación y asistencia técnica que permitan a las comunidades participar de manera efectiva, autónoma y justa en toda iniciativa de conservación y desarrollo.

El evento de la COP16 dejó un impacto positivo trascendental al posicionar a las comunidades negras e indígenas como actores clave en la agenda ambiental global. Más allá de los compromisos internacionales, esta cumbre generó oportunidades económicas y sociales tangibles, impulsando la promoción de proyectos de ecoturismo liderados localmente y el desarrollo de economías verdes de base comunitaria. Estos esfuerzos demuestran que la acción va más allá de la protección de la biodiversidad; también fortalecen la identidad cultural y el tejido social de las comunidades. La COP16 validó una verdad fundamental: la conservación es, por diseño, una vía directa para garantizar la justicia social y el desarrollo inclusivo en el Pacífico colombiano.

Las inversiones dirigidas a la conservación de la biodiversidad en el Pacífico colombiano buscan preservar los ecosistemas, al igual que generar impactos sociales y económicos en las comunidades locales. En ese sentido, el proyecto “Pacífico Biocultural”, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha destinado recursos para promover prácticas de producción sostenible y fortalecer la capacidad de manejo en áreas protegidas (Ministerio de Ambiente, 2021). Por ejemplo, este proyecto ha desarrollado estrategias para la restauración de manglares y la promoción de la agroforestería, con el fin de impactar directamente en la vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el corredor del Chocó Biogeográfico. Acciones como esas destacan la importancia de articular esfuerzos entre la biodiversidad y el desarrollo social.

En el ámbito internacional, la creación del Fondo de Protección de la Biodiversidad del Pacífico, anunciado en la COP16, representa una oportunidad histórica para atraer inversión global en proyectos sostenibles en el Pacífico colombiano. De acuerdo con Infobae (2024), ese fondo tiene como objetivo proteger la biodiversidad y fomentar la equidad social y económica mediante la generación de empleo en actividades sostenibles como el ecoturismo y la pesca responsable. Además, iniciativas como el bono de biodiversidad, que destina parte de sus recursos a la restauración de ecosistemas estratégicos, son innovadoras al integrar mecanismos financieros modernos con objetivos ambientales y sociales claros.

Aquí, es necesario aclarar que el éxito de esas iniciativas depende en gran medida de su implementación efectiva y la participación de las comunidades locales. Como señala el Ministerio de Ambiente (2024), garantizar la inclusión de las comunidades negras e indígenas en los procesos de planificación y ejecución es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Esas comunidades son las más afectadas por la pérdida de biodiversidad, pero también son las más capacitadas para liderar su conservación, debido a su conocimiento ancestral. La cooperación

internacional, en ese contexto, puede desempeñar un papel crucial al proporcionar recursos financieros, tecnológicos y humanos que fortalezcan las capacidades locales y aseguren el éxito de esas inversiones.

La conservación de la biodiversidad del Pacífico colombiano, una de las regiones más ricas y diversas del planeta, requiere estrategias que protejan los ecosistemas y que generen beneficios tangibles para las comunidades locales. Los Bancos de Carbono Comunitarios (BCC) se presentan como una solución integral que puede vincular la conservación de los bosques con el desarrollo económico y social, ya que fomentan la sostenibilidad en el territorio. Ese modelo se alinea con los objetivos globales de conservación, al integrar la biodiversidad como un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático.

La implementación de los Bancos Comunitarios de Cuidado (BCC) en el Pacífico colombiano ha comenzado a configurarse como una estrategia de innovación social que fusiona la conservación ambiental con el bienestar social. Estos mecanismos operan otorgando incentivos económicos directos a familias y organizaciones locales, transformando su labor de custodia en una actividad productiva sostenible. A cambio de prácticas como la vigilancia comunitaria, la protección de especies en riesgo y la restauración de áreas degradadas, las comunidades reciben un ingreso que legitima su rol. Si bien estas iniciativas piloto demuestran un potencial inmenso para la resiliencia ecológica, su sostenibilidad plena exige superar las limitaciones asociadas a la financiación inestable y la imperativa necesidad de una articulación más profunda y comprometida con los gobiernos locales.

En Tumaco, las redes de cuidado se han consolidado como un mecanismo innovador de organización social que articula el trabajo comunitario con la protección de la vida y el territorio. En particular, los consejos comunitarios de ACAPA y Bajo Mira y Frontera han liderado la implementación de estas redes, generando espacios colectivos para atender

necesidades básicas como la seguridad alimentaria, la salud comunitaria y la protección de liderazgos sociales. Su funcionamiento se basa en la cooperación entre familias, donde se establecen turnos para el cuidado de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, lo cual fortalece los lazos comunitarios y reduce la sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado.

Los logros alcanzados en estos territorios son profundamente significativos y van más allá de lo meramente ambiental. Estas iniciativas comunitarias han elevado notablemente la participación de mujeres en los procesos de planeación territorial y han ampliado el acceso de jóvenes a programas de formación local, liberando tiempos que históricamente estaban destinados a labores domésticas no remuneradas. Además, la articulación de estas redes ha fortalecido la seguridad humana de las comunidades, generando sistemas de alerta temprana y defensas colectivas frente a las amenazas de actores armados. Este capital social y humano ha permitido disminuir el riesgo de desplazamiento forzado en áreas rurales, demostrando que la organización endógena es la forma más efectiva de garantizar la permanencia digna en el territorio.

No obstante, la realidad de los resultados también revela limitaciones críticas. La ausencia de financiamiento estable y el bajo nivel de apoyo institucional comprometen seriamente la sostenibilidad de estas redes de cuidado y autogestión en el largo plazo. Aunque los consejos comunitarios han demostrado una capacidad admirable para diseñar mecanismos internos de subsistencia, estos se ven desbordados y anulados frente a contextos de violencia recurrente y el poder corrosivo de las economías ilícitas. La experiencia de Tumaco, por ejemplo, evidencia tanto el inmenso potencial como las tensiones estructurales de un modelo comunitario que solo podrá ser replicado y consolidado en otros territorios del Pacífico si se articula con políticas públicas de protección social y presupuestos estables que le brinden la legitimidad y los recursos del Estado.

Más allá de su aporte ambiental, los Bancos Comunitarios de Cuidado (BCC) trascienden para constituirse en instrumentos de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Integran a las comunidades afrodescendientes e indígenas como protagonistas esenciales de la gestión territorial. Su participación supera la mera ejecución de actividades, incluyendo procesos de planificación y monitoreo en los que el saber ancestral es reconocido como una fuente legítima de conocimiento. Esta inclusión de actores en esquemas de conservación no solo incrementa la efectividad de los programas, sino que potencia la cohesión social y la legitimidad de las decisiones colectivas. Sin embargo, existe un clamor persistente desde los liderazgos locales: sin un respaldo estatal sólido, especialmente en términos presupuestales, estos valiosos procesos de autogestión corren el riesgo de convertirse en esfuerzos aislados y de corta duración, privando al país de su potencial transformador.

El impacto estratégico de los Bancos Comunitarios de Cuidado (BCC) en el Pacífico se hace aún más evidente al considerar su relación indisoluble con los ecosistemas marino-costeros y los bosques húmedos tropicales. Experiencias recientes demuestran que integrar la conservación de manglares y bosques de niebla en estos mecanismos no solo optimiza la captura de carbono, sino que también brinda una protección vital a las comunidades frente a desastres naturales como inundaciones y deslizamientos. Estos esquemas tienen la capacidad de articular la conservación terrestre y la marina en un modelo de bioeconomía comunitaria que refuerza profundamente la seguridad alimentaria y abre ventanas de oportunidad en mercados globales emergentes, demostrando el valor de la gestión biocultural como estrategia de desarrollo.

Así también, el financiamiento climático que se obtiene a través de mercados de carbono puede y debe ser invertido estratégicamente en programas educativos y de investigación enfocados en la biodiversidad del Pacífico. Ello incluiría el desarrollo de centros de estudios especializados

que investiguen a fondo cómo los ecosistemas locales contribuyen a la estabilidad climática global y cómo pueden ser protegidos de manera más efectiva. Estas iniciativas, al fomentar la participación de jóvenes y académicos locales, tienen el doble valor de aumentar el conocimiento científico endógeno y fortalecer la base humana para futuras generaciones comprometidas con la conservación. De esta manera, el territorio mismo se convierte en el motor de su propia inteligencia ecológica.

Los BCC, al integrarse con las prioridades de conservación de la biodiversidad del Pacífico colombiano, representan un modelo innovador que aborda la urgencia de proteger los ecosistemas mientras se impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades. Ese enfoque combina la ciencia, la tecnología y el conocimiento tradicional, y demuestra que es posible reconciliar la protección del medioambiente con una mejor calidad de vida, en uno de los territorios más estratégicos de Colombia.

El gobierno de Colombia ha demostrado un compromiso significativo con la protección de la biodiversidad en la región del Pacífico, mediante la implementación de diversas estrategias y programas para conservar sus ecosistemas únicos. Una de las iniciativas más destacadas es el proyecto “Pacífico Biocultural”, que trabaja en cinco Mosaicos de Uso y Conservación de la Biodiversidad: Katios Caoba, Serranía Paraguas-Tatamá, Farallones Calima, Munchique Río Saja y Cabo Manglares Awá, abarcando los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. Este proyecto busca avanzar en la gobernanza regional para asegurar la conservación de áreas de importancia ecológica, en colaboración con las comunidades locales, promoviendo prácticas de producción sostenible como alternativas para el desarrollo local (Ministerio de Ambiente, 2023).

En el ámbito internacional, durante la COP16 celebrada en Cali en octubre de 2024, Colombia presentó su Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, y reafirmó su compromiso con la conservación. Ese plan establece

seis metas clave, entre las cuales se destaca el aumento de las áreas protegidas, pasando del 24 % al 34 % del territorio nacional para 2030, y la protección del 34 % de las áreas oceánicas, incrementando el actual 30 %. Además, se busca impulsar la economía de la biodiversidad, la restauración multifuncional y la gestión sostenible de áreas terrestres y marinas, con el objetivo de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para mediados del siglo.

Esas acciones reflejan el compromiso del gobierno colombiano con la protección de la biodiversidad en el Pacífico, al integrar esfuerzos nacionales e internacionales y promover la participación de las comunidades locales en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. También resalta la necesidad de una visión integral que combine conservación ambiental y desarrollo económico para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

4.3.2: La minería y su impacto en el medioambiente

La minería, tanto legal como ilegal, ha dejado una huella profunda y compleja en el medioambiente del Pacífico colombiano. Esa actividad, impulsada por la riqueza de recursos minerales como el oro y el platino, ha generado importantes problemas ecológicos y sociales. El informe de la Defensoría del Pueblo (2024) reconoce que más del 60 % de la minería en el Pacífico se realiza de manera ilegal, lo que exacerba el impacto ambiental y dificulta la regulación y supervisión por parte de las autoridades. La extracción descontrolada de recursos ha transformado paisajes, contaminado ríos y afectado de manera directa a las comunidades locales.

El flagelo más devastador de la minería en el Pacífico colombiano es la contaminación sistémica de sus ríos, causada por la introducción de metales pesados y tóxicos, venenos comunes en la extracción de oro. Esta práctica no solo degrada profundamente la funcionalidad de los ecosistemas fluviales, sino que cercena la vida misma de las comunidades ribereñas que dependen

del río para su abastecimiento de agua, su alimentación y la reproducción de sus tradiciones culturales. La presencia de estos contaminantes en el agua y los sedimentos excede todo límite de seguridad. El costo humano se traduce en un drama cotidiano: la exposición crónica en pueblos afrodescendientes e indígenas ha generado una crisis silenciosa de salud pública, con riesgos directos sobre la integridad neurológica y el desarrollo infantil. En muchos municipios, las familias enfrentan la cruel dicotomía de elegir entre consumir su principal fuente de proteína o exponerse a la intoxicación. La urgencia de la intervención trasciende lo ambiental; es un imperativo ético que exige defender el derecho fundamental a la vida digna en uno de los territorios más vulnerables y olvidados del país.

A la contaminación sistémica de los sistemas fluviales se suma la destrucción estructural que deja la minería ilegal en el Pacífico colombiano. La deforestación masiva, perpetrada por maquinaria pesada, abre cicatrices irreversibles en el bosque húmedo tropical, comprometiendo una de las mayores extensiones continuas de selva en América Latina. Esta pérdida no es solo paisajística: implica la liberación de vastas reservas de carbono que agravan el cambio climático y, simultáneamente, aniquila el hábitat de especies endémicas únicas, patrimonio biológico de la nación. La destrucción de la cobertura forestal erosiona la base de servicios ecosistémicos vitales: los ríos pierden su capacidad de regulación natural, los suelos quedan expuestos a la erosión, y las comunidades son despojadas de su defensa natural frente a inundaciones y sequías. Este doble asalto el envenenamiento químico y la devastación física es la manifestación más dramática de la vulnerabilidad socioambiental de la región, pues atenta simultáneamente contra la biodiversidad, el bienestar comunitario y la resiliencia climática integral.

La minería en el Pacífico colombiano ha consumado una alteración estructural e irreversible de sus ecosistemas, dejando un desgarrro geológico en el corazón del territorio. La remoción de ingentes volúmenes de tierra y

sedimento para extraer oro y platino no solo degrada la capa superficial del suelo, sino que ejecuta una amputación funcional de hábitats completos, fragmentando los corredores biológicos que son indispensables para la supervivencia de especies únicas en el mundo. Este asalto genera una pérdida crítica de cobertura vegetal y destruye la arquitectura ecológica de la selva, reduciendo a cero su capacidad de regeneración natural. El deterioro impacta con particular crueldad a las especies endémicas y críticamente amenazadas, cuyo rango de distribución es limitado y cuya existencia pende directamente de la salud del bosque. La desaparición de estas formas de vida no es una mera estadística biológica: constituye una herida profunda en el tejido cultural de las comunidades, que han codificado su identidad, su medicina y sus prácticas ancestrales en convivencia con esta biodiversidad. La destrucción del ecosistema es, en última instancia, una traición al patrimonio más sagrado del Pacífico.

La contaminación del agua es, quizá, el rostro más visible y doloroso de la minería en el Pacífico colombiano. Ríos y quebradas, que son las arterias de la vida y la abundancia del territorio, se han convertido en cauces envenenados por el mercurio y el cianuro utilizados en la extracción de oro. La evidencia científica es contundente: las concentraciones de estos tóxicos en el agua superan ampliamente los estándares internacionales, comprometiendo tanto la biodiversidad acuática como la salud de las comunidades humanas que dependen de estas fuentes. La alteración de los ecosistemas fluviales también se refleja en la drástica disminución de especies de peces de importancia cultural y alimentaria, amenazando la seguridad alimentaria de miles de familias ribereñas. Lo que para la distancia es una cifra en un informe, para los habitantes del litoral es un dilema existencial diario: beber agua contaminada o asumir el costo de comprar agua embotellada en una de las regiones más pobres del país.

Además de la devastación ambiental, la minería ilegal en el Pacífico colombiano ha fracturado de manera profunda la cohesión social de los

territorios. La llegada de actores externos y con ellos, la violencia de grupos armados ilegales ha generado disputas violentas por el control del recurso, forzando el éxodo forzado de miles de familias afrodescendientes e indígenas de sus territorios ancestrales. Este factor no solo ha intensificado el conflicto armado, al alimentar economías ilícitas y disputas territoriales, sino que ha provocado una erosión sistémica de las estructuras de gobernanza propias. Consejos comunitarios y cabildos indígenas ven debilitada su capacidad para ejercer el control territorial y proteger su herencia cultural. En consecuencia, el impacto social de la minería trasciende lo material: se traduce en la fragmentación del tejido comunitario, en el miedo cotidiano y en la ruptura de los vínculos de confianza y solidaridad que han sostenido históricamente la vida colectiva en la región.

El impacto de la minería en la cohesión social también se refleja de manera dramática en la erosión de las prácticas culturales que históricamente han garantizado la sostenibilidad del territorio. Para las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico, el río y el bosque no son solo espacios productivos, sino escenarios vivos de memoria y espiritualidad. La degradación de los ecosistemas ha reducido drásticamente la posibilidad de continuar con actividades ancestrales como la pesca artesanal, la minería de bareque realizada de manera tradicional o la recolección de plantas medicinales, prácticas esenciales para la transmisión intergeneracional de saberes. El extractivismo violento rompe las relaciones de reciprocidad entre las comunidades y la naturaleza, imponiendo lógicas de mercado que profundizan la pobreza y la exclusión. Así, el deterioro ambiental no es separable del deterioro cultural, perpetuando un círculo de vulnerabilidad que anula las posibilidades reales de un desarrollo con identidad propia.

La mitigación de los impactos de la minería en el Pacífico colombiano exige un giro político radical y la implementación de políticas que prioricen lo ambiental sobre la lógica extractiva. En el plano estructural,

se requiere establecer zonas de exclusión minera definitivas en los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, blindando las cabeceras de cuenca y los ecosistemas estratégicos. Esto debe acompañarse del fortalecimiento ineludible de los sistemas de vigilancia y control ambiental, dotando a las autoridades y a las propias comunidades de la capacidad para disuadir y erradicar la explotación ilegal. La prevención es la única política viable: el costo de la remediación es inasumible y el daño cultural y a la salud, irreversible.

En el ámbito de la transición económica, deben promoverse activamente las prácticas productivas de subsistencia y alta sostenibilidad que ya son endógenas al territorio, como la bioeconomía y la agroforestería. Los esfuerzos deben centrarse en garantizar que la minería artesanal limpia, si llegara a existir, opere bajo la fiscalización comunitaria y sin el uso de contaminantes. Las valiosas experiencias piloto demuestran que la transición es viable si se combina la sabiduría local con incentivos de mercado y un acompañamiento técnico robusto. El Pacífico se posiciona, así como un laboratorio esencial para un futuro donde la rentabilidad económica se subordina a la ética de la vida.

Como estrategia replicable de alto valor, es indispensable el apoyo directo a las comunidades para restaurar territorios degradados y revitalizar las tradiciones culturales asociadas al manejo del agua, los bosques y la pesca. Programas de restauración ecológica han demostrado que la reforestación con especies nativas no solo recupera servicios ecosistémicos vitales, sino que fortalece el tejido social al integrar a mujeres y jóvenes en proyectos de empleo verde. La cooperación internacional cumple aquí un rol fundamental: las iniciativas lideradas por organismos europeos y multilaterales han destinado recursos significativos a proyectos de restauración y bioeconomía en el Pacífico, potenciando la articulación efectiva entre la ciencia moderna, la política pública y los saberes comunitarios como un modelo de gestión integral.

En suma, solo mediante un enfoque inclusivo, territorializado y sostenible, que combine control estatal, innovación comunitaria y apoyo internacional, será posible revertir los daños acumulados por décadas de minería y abrir un horizonte de justicia ambiental en el Pacífico colombiano.

En términos sociales, la minería ha intensificado la fractura de la cohesión comunitaria y los conflictos por el control de los recursos naturales. La intromisión de actores armados ilegales ha establecido redes de explotación minera que financian sus actividades, perpetuando la violencia y afectando directamente a las comunidades, quienes luchan por preservar sus territorios ancestrales. La minería, más allá de su impacto ambiental, es un desafío crítico para la gobernanza local. Para contrarrestar su poder destructivo, es indispensable avanzar hacia estrategias que combinen innovación tecnológica con justicia ambiental y social. El uso de tecnologías avanzadas de monitoreo, como drones e imágenes satelitales, debe concebirse no solo como instrumentos de vigilancia, sino como mecanismos de empoderamiento comunitario. La integración de estas herramientas en procesos participativos incrementa notablemente la detección temprana de la deforestación y la contaminación, transformando a las comunidades en los primeros defensores digitales de su propio territorio.

En el plano emergente, la formación de brigadas comunitarias de monitoreo ambiental, articuladas con los consejos comunitarios y cabildos indígenas, constituye una estrategia replicable y culturalmente pertinente. Estas brigadas, cuando se combinan con tecnologías de bajo costo y capacitación local, logran un doble impacto: no solo refuerzan el control territorial frente a actividades ilegales, sino que también generan empleo verde digno y consolidan la cohesión social. La experiencia en territorios piloto ha demostrado su efectividad al identificar y documentar con precisión los puntos de contaminación, generando evidencia clave para los procesos judiciales. Estos grupos de vigilancia son, en esencia, la

extensión sensible y organizada de la gobernanza comunitaria sobre su propio territorio.

Este enfoque de gobernanza permite desactivar el paradigma asistencialista al reconocer a las comunidades como socias plenas y protagonistas de la gestión ambiental. Cuando las poblaciones locales se convierten en guardianas funcionales de los ecosistemas mediante la apropiación de herramientas tecnológicas de monitoreo, se consolida un modelo de corresponsabilidad que transforma la vigilancia en un proceso colectivo de defensa del territorio. Esta virtuosa articulación entre innovación tecnológica y participación social no solo fortalece la gobernanza ambiental, sino que asegura una ruta hacia un desarrollo más justo y sostenible en el Pacífico colombiano.

En este marco, la diversificación económica emerge como el eje esencial para superar la dependencia extractiva y construir un modelo de prosperidad territorial. Alternativas endógenas como la agroforestería y el ecoturismo comunitario no solo generan ingresos dignos, sino que activan la restauración de ecosistemas degradados y robustecen el tejido social. Estos sistemas productivos, al integrarse con la sabiduría tradicional, demuestran que pueden multiplicar la productividad agrícola y fortalecer la resiliencia climática de las comunidades rurales. La economía del Pacífico debe florecer bajo el principio de que la rentabilidad es inseparable de la restauración de la vida.

En el campo del turismo, proyectos en áreas estratégicas como el Parque Nacional Natural Sanquianga y los manglares del Chocó tienen un potencial transformador excepcional. Estos destinos, reconocidos mundialmente por su megadiversidad, podrían convertirse en referentes internacionales de ecoturismo sostenible, siempre que la participación de las comunidades locales sea el eje rector en la planificación y la gestión total de la actividad. La experiencia demuestra que el turismo de base comunitaria

en regiones costeras similares multiplica los ingresos familiares, frena la migración y robustece la cohesión social. Esta estrategia no es solo económica, sino que es una afirmación de la identidad cultural y ambiental del Pacífico.

No obstante, la implementación de estas alternativas productivas enfrenta desafíos estructurales. La falta de infraestructura adecuada, el limitado acceso a créditos verdes y la ausencia de capacitación técnica especializada constituyen barreras que impiden el escalamiento de estos proyectos. Para superar estas limitaciones, se requiere una articulación efectiva con políticas públicas que reconozcan estas iniciativas como pilares legítimos de la economía regional. Es fundamental incluirlas en los presupuestos participativos y los planes de ordenamiento territorial, garantizando así la sostenibilidad financiera y el respaldo institucional. De esta manera, el desarrollo económico no solo será inclusivo, sino que reafirmará el orgullo colectivo y la justicia territorial.

La educación, por su parte, debe ocupar un lugar central y ético en cualquier estrategia de transformación en el Pacífico colombiano. Más allá de la mera transmisión de conocimientos técnicos, los procesos educativos necesitan despertar un vínculo emocional y un compromiso ético con la biodiversidad y los recursos naturales que sostienen la vida en el territorio. Incorporar temas esenciales como la restauración ecológica, la agroforestería y la economía circular en los currículos escolares siembra las bases para un desarrollo sostenible de largo plazo. No se trata solo de formar habilidades utilitarias, sino de cultivar un sentido de corresponsabilidad y custodia con el territorio. Además, esta educación debe ser radicalmente accesible y culturalmente pertinente, respetando las particularidades lingüísticas, históricas y espirituales de las comunidades. Las iniciativas lideradas desde las propias comunidades refuerzan la autonomía y el liderazgo local, logrando que el aprendizaje se convierta en una herramienta de resistencia y en la construcción activa de futuro.

El fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local constituye una estrategia indispensable para que las comunidades del Pacífico puedan decidir de manera autónoma y legítima sobre su propio futuro. Los consejos comunitarios y cabildos indígenas trascienden la simple instancia administrativa: representan la memoria histórica y el conocimiento profundo de los ecosistemas que habitan. Reconocer y financiar estas organizaciones es clave para garantizar una gestión sostenible de los territorios, pues ellas poseen ya mecanismos efectivos de control social y prácticas de conservación que han protegido la biodiversidad durante generaciones. Con apoyo técnico y financiero adecuado, estas estructuras pueden liderar proyectos de restauración, agroforestería y desarrollo económico que respondan a necesidades reales y no a visiones impuestas desde afuera. En este marco, la cooperación internacional debe desempeñar un papel complementario, nunca sustituto, aportando recursos y facilitando el intercambio de experiencias globales, siempre bajo el respeto a las dinámicas locales y el fortalecimiento de las capacidades propias.

La restauración ecológica en el Pacífico colombiano se configura como una estrategia fundamental para enfrentar los impactos acumulados de la minería ilegal, la deforestación y el cambio climático. Experiencias lideradas por los consejos comunitarios han demostrado que la reforestación de ecosistemas clave, como los manglares, no solo recupera servicios ecosistémicos vitales, sino que se convierte en un mecanismo de justicia climática. Cada hectárea restaurada tiene un impacto directo en la mitigación del cambio climático y en la protección de los medios de vida locales. Estos procesos, al generar empleo temporal y vincular activamente a mujeres y jóvenes en viveros y brigadas de monitoreo, prueban que la regeneración ambiental es inseparable de la regeneración del tejido social.

En el Chocó, tras el hito judicial que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, los consejos comunitarios afrodescendientes han liderado una respuesta profunda, desarrollando proyectos de restauración en las

riberas del río. La recuperación del bosque ha mejorado tangiblemente la calidad del agua y ha reducido los procesos de erosión, beneficiando directamente a las comunidades pesqueras e indígenas que dependen de la salud del Atrato para su subsistencia. Aunque estos logros son significativos y demuestran la capacidad de las comunidades para sanar el territorio, el financiamiento intermitente y la ausencia de inclusión en los planes de ordenamiento territorial han limitado la escalabilidad y la permanencia de estas iniciativas vitales.

En Buenaventura, la restauración de estuarios y manglares se ha articulado de forma virtuosa con proyectos de ecoturismo comunitario, ofreciendo alternativas económicas sostenibles que son inherentemente respetuosas con el ecosistema. La recuperación de áreas degradadas ha generado espacios de avistamiento de aves y rutas de educación ambiental, traduciéndose en ingresos directos para las familias locales. Estas experiencias refuerzan la idea de que la restauración no debe ser concebida únicamente como una estrategia ecológica, sino como un proceso social y económico que fortalece la identidad cultural y la cohesión comunitaria. Demuestran, además, que el desarrollo económico es más sostenible cuando emana de la voz y el trabajo organizado del territorio.

No obstante, persisten limitaciones estructurales. La dependencia de fondos internacionales y ONG genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo, y la débil articulación con políticas públicas locales y nacionales reduce su impacto estructural. Para garantizar su permanencia, se requiere integrar estos proyectos en los presupuestos participativos y fortalecer su incidencia en la planeación territorial. Solo así la restauración ecológica pasará de ser una iniciativa emergente para convertirse en una estrategia estructural de desarrollo sostenible para el Pacífico colombiano.

La transformación del Pacífico colombiano exige replantear a fondo la narrativa que históricamente ha encasillado a la región. No puede seguir

viéndose únicamente como un territorio asociado a la exclusión, la pobreza y el conflicto; es imperativo reconocerlo como un espacio estratégico, profundamente diverso y esencial para el futuro de Colombia. Este litoral no solo alberga una de las mayores biodiversidades del planeta, sino que sus comunidades afrodescendientes e indígenas poseen saberes ancestrales que constituyen una fuente invaluable de estrategias de sostenibilidad. Reconocer estos conocimientos implica entender que la conservación y el desarrollo no pueden imponerse desde afuera, sino que deben construirse en diálogo con quienes han habitado y cuidado estos territorios por siglos. Cambiar esta narrativa no es un ejercicio retórico, sino un compromiso político, económico y social que integre plenamente al Pacífico en el proyecto nacional, no como periferia olvidada, sino como protagonista activo de un modelo de desarrollo sostenible y plural.

La tecnología puede convertirse en un catalizador decisivo para la transformación del Pacífico colombiano, siempre que se integre con los saberes locales y responda a las necesidades reales de sus habitantes. Herramientas de monitoreo ambiental basadas en drones y satélites han demostrado ser altamente eficaces para detectar deforestación y minería ilegal, permitiendo diseñar respuestas oportunas y planes de manejo territorial más precisos. Sin embargo, la innovación tecnológica por sí sola resulta insuficiente: su verdadero potencial surge cuando se articula con la participación activa de las comunidades, que aportan conocimiento ancestral y legitimidad social a los procesos de gestión ambiental.

El fortalecimiento educativo resulta clave en este proceso. Los programas que logran integrar la formación técnica, la sensibilización ambiental y la transmisión de saberes tradicionales preparan a jóvenes y líderes comunitarios para combinar la innovación con el respeto por el entorno. Esta integración favorece la creación de liderazgos transformadores, capaces de diseñar alternativas productivas sostenibles sin romper el vínculo cultural con la naturaleza. Cuando la tecnología es apropiada por las comunidades y se ancla en procesos educativos pertinentes, se convierte en un medio poderoso para fortalecer la autonomía territorial.

Más recientemente, la formación en competencias digitales aplicada a la gestión ambiental en zonas rurales no solo fortalece la gobernanza, sino que incrementa significativamente la resiliencia comunitaria frente a los impactos del cambio climático. Esta integración en los procesos educativos refuerza el sentido de pertenencia y facilita el liderazgo juvenil en la protección ambiental. La sinergia entre la innovación y la cultura ofrece una respuesta contundente a los desafíos inmediatos del Pacífico y abre horizontes hacia un modelo de desarrollo propio, digno y resiliente, donde la sostenibilidad se construye desde la unión indisoluble entre la ciencia y la sabiduría ancestral.

La restauración ecológica en el Pacífico colombiano no debe entenderse únicamente como un deber ambiental, sino como una promesa tangible de futuro. Allí donde la minería y la deforestación han dejado cicatrices profundas, emerge también la posibilidad de sanar la tierra y de reconstruir los lazos vitales entre la naturaleza y la comunidad. La reforestación de manglares, la recuperación de cuencas hidrográficas y la protección de especies endémicas no solo restablecen el equilibrio de los ecosistemas, sino que generan empleos dignos en actividades de conservación y revitalizan un tejido social que ha sido golpeado históricamente por la violencia y el despojo. La restauración es, en esencia, un proceso de justicia territorial y social.

La dimensión social de estos procesos es igualmente significativa. En diversas experiencias locales, más del 72 % de los participantes reconoció que la restauración de ecosistemas contribuye directamente a la seguridad alimentaria, y un 68 % destacó que estas iniciativas fortalecen la cohesión comunitaria al reactivar prácticas colectivas de cuidado del territorio. Estos datos evidencian que la restauración ambiental es percibida no solo como una estrategia ecológica, sino como un camino para reconstruir la confianza social y abrir nuevas oportunidades económicas. Andrade (2021) afirma que la restauración puede convertirse en un puente entre conservación y

desarrollo, capaz de transformar la desesperanza en esperanza tangible y de cimentar economías más inclusivas.

En esa visión, el Pacífico colombiano se proyecta no como un territorio condenado por la degradación, sino como un laboratorio vivo de resiliencia socioecológica. La restauración ecológica, cuando se integra con los saberes ancestrales y con mecanismos de financiamiento innovadores, puede abrir un horizonte donde la biodiversidad y la dignidad humana se fortalezcan mutuamente. De esta manera, lo que hoy parecen cicatrices puede convertirse mañana en huellas de esperanza, capaces de inspirar no solo a Colombia, sino al mundo entero.

El fortalecimiento comunitario debe situarse en el corazón de cualquier estrategia de transformación en el Pacífico colombiano. Los consejos comunitarios y los cabildos indígenas no son únicamente estructuras de representación, sino expresiones vivas de la autonomía territorial y del derecho a decidir sobre los destinos colectivos. Respaldar su labor con recursos financieros, herramientas técnicas y marcos normativos sólidos resulta indispensable para garantizar su participación en la toma de decisiones sobre conservación y desarrollo. Estos espacios de gobernanza han demostrado una notable capacidad para gestionar los territorios de manera sostenible, siempre que cuenten con el apoyo institucional adecuado.

Más allá del plano normativo, la legitimidad de estas organizaciones se refleja en la profunda confianza que inspiran entre las comunidades locales. La experiencia demuestra que los consejos comunitarios fortalecidos son actores insustituibles para la defensa de los recursos naturales y cumplen un papel esencial en la construcción de cohesión social y en la resolución efectiva de conflictos locales. Estos hechos confirman que la gobernanza comunitaria no solo gestiona los ecosistemas con sabiduría, sino que activamente contribuye a restaurar el tejido social en regiones históricamente fragmentadas por la violencia y la exclusión. Su

validez emana del territorio, lo que la convierte en la forma más robusta de autoridad.

En este horizonte de autonomía, la cooperación internacional adquiere un papel complementario, pero crítico, cuyo éxito depende de establecer relaciones rigurosamente horizontales que respeten los saberes locales y potencien la autodeterminación. Cuando los procesos de cooperación integran la cosmovisión y las prioridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas, los resultados trascienden lo ambiental y consolidan nuevos pactos de dignidad y justicia social. Este tipo de alianzas solidarias no solo aporta recursos financieros y técnicos necesarios, sino que también amplifica la voz del Pacífico en escenarios globales de discusión sobre sostenibilidad y equidad.

En definitiva, los consejos comunitarios y cabildos indígenas encarnan un potencial transformador que va más allá de la gestión territorial: son custodios de memorias, identidades y futuros posibles. Al reconocerlos como protagonistas de la transformación regional, y no como receptores pasivos de políticas externas, se sientan las bases para un modelo de desarrollo donde la sostenibilidad se construye desde adentro hacia afuera. Así, el Pacífico colombiano puede convertirse en un faro de innovación socioambiental, demostrando que la verdadera resiliencia surge cuando la comunidad y la naturaleza caminan de la mano.

La minería ilegal en el Pacífico colombiano constituye uno de los mayores retos para la sostenibilidad ambiental y social de la región. Allí donde la extracción de oro deja ríos contaminados y bosques arrasados, los Bancos Comunitarios de Cuidado (BCC) emergen como una alternativa de innovación social capaz de transformar la vulnerabilidad en esperanza y en nuevas formas de vida digna. Estos esquemas se sustentan en una lógica de reciprocidad ecológica, donde la custodia y el almacenamiento de carbono en los bosques se convierten en un ingreso legítimo para las comunidades.

La implementación de los BCC en comunidades afectadas por la minería no solo promueve la conservación de áreas forestales críticas, sino que fortalece las capacidades locales de gestión territorial. Estos incentivos, alineados con la preservación ambiental, convierten a las comunidades en guardianas funcionales de sus propios ecosistemas. En este proceso, los beneficios tangibles trascienden lo ambiental: se reflejan en mejoras en la salud, acceso a la educación y diversificación de ingresos, lo que rompe el círculo de degradación y marginación histórica, devolviendo dignidad y futuro a quienes habitan estos territorios.

La preservación de los bosques a través de los BCC puede, además, convertirse en un motor de restauración ecológica en territorios degradados por la minería ilegal. Allí donde las retroexcavadoras han dejado cicatrices profundas, la reforestación con especies nativas no solo permite capturar carbono, sino también recuperar hábitats esenciales para la biodiversidad y restablecer servicios ecosistémicos básicos como la regulación hídrica y la fertilidad de los suelos. La restauración ecológica, apoyada por mecanismos financieros como los pagos por servicios ecosistémicos, ofrece un potencial significativo para rehabilitar suelos contaminados y revitalizar cuencas hídricas, devolviendo a las comunidades recursos indispensables para su subsistencia y resiliencia.

Los resultados de campo en Tumaco, Buenaventura y el Chocó confirman la pertinencia de estas estrategias. En promedio, el 72 % de los encuestados manifestó que estaría dispuesto a participar en programas de conservación si estos generaban ingresos estables, mientras que el 65 % identificó la restauración de bosques como la alternativa más viable frente a la minería ilegal. Además, en los talleres comunitarios, líderes afrodescendientes e indígenas resaltaron que los BCC representan una oportunidad para “recuperar la dignidad perdida y asegurar el futuro de los jóvenes”. Estos hallazgos muestran que, más allá de una propuesta técnica, los BCC responden a un anhelo colectivo de reconstrucción territorial,

donde la justicia ambiental y social se entrelazan con la esperanza de un desarrollo sostenible propio.

Pero este modelo no solo ofrece beneficios ambientales, sino que tiene un profundo impacto social. La integración de las comunidades en la vigilancia ambiental y la gestión sostenible de sus territorios fortalece intrínsecamente la cohesión social y refuerza la autonomía local. Los proyectos de carbono comunitario, por ejemplo, contribuyen a empoderar a las poblaciones al dotarlas de herramientas económicas y técnicas para liderar sus procesos de conservación. Complementar estas iniciativas con programas educativos y de formación técnica abre la puerta a una diversificación de ingresos real, alejando a las comunidades de economías destructivas como la minería ilegal y acercándolas a un modelo de desarrollo sostenible, digno y profundamente respetuoso con su entorno.

El impacto ambiental de la minería ilegal, reflejado en la contaminación de ríos y la pérdida acelerada de biodiversidad, debe enfrentarse mediante iniciativas que prioricen la restauración y la autonomía local. Los Bancos Comunitarios de Cuidado (BCC) emergen como un esquema innovador que permite priorizar áreas críticas afectadas por la extracción, promoviendo procesos de reforestación con especies nativas capaces de recuperar funciones ecológicas esenciales. Al financiar acciones como la rehabilitación de cuencas hidrográficas y la recuperación de suelos, estos mecanismos no solo restauran la funcionalidad ecológica del territorio, sino que contribuyen a construir paisajes más resilientes frente a los efectos del cambio climático.

En la dimensión social, los BCC refuerzan la participación activa de comunidades afrodescendientes e indígenas en la gestión sostenible de los territorios. Este involucramiento incrementa la capacidad local de vigilancia y control ambiental, al tiempo que reduce la dependencia de economías ilícitas. Estos esquemas tienen la capacidad de fortalecer la gobernanza territorial y generar beneficios económicos tangibles, reflejados

en el aumento de la seguridad alimentaria y la generación de empleo juvenil y femenino en actividades de agroforestería y ecoturismo. Así, cuando las comunidades son protagonistas de los proyectos, emerge una poderosa dinámica de cohesión social y se consolidan nuevas oportunidades legítimas de desarrollo que superan la lógica destructiva de la minería.

Así, los BCC no se limitan a capturar carbono: son una apuesta integral que combina justicia ambiental, inclusión social y viabilidad económica. Al diversificar las fuentes de ingreso mediante programas de capacitación en conservación, agroforestería y ecoturismo, estas iniciativas consolidan un modelo de vida digna que refuerza el sentido de pertenencia hacia los territorios. En esta visión, el Pacífico colombiano podría convertirse en referente internacional de cómo comunidades locales transforman la degradación en oportunidad, enseñando al mundo que la sostenibilidad es posible cuando la naturaleza y la sociedad avanzan de la mano.

El éxito de estos proyectos exige, sin embargo, un marco de gobernanza sólido que garantice la certificación de créditos de carbono y su acceso a mercados nacionales e internacionales. En este escenario, la cooperación internacional puede jugar un rol decisivo al aportar financiamiento y asistencia técnica. Iniciativas apoyadas por agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y organizaciones como WWF muestran que la integración de la conservación y la restauración en las políticas públicas es un camino eficaz para frenar economías extractivas ilegales y abrir paso a modelos sostenibles. Esta visión integral convierte a los BCC en una estrategia no solo ambiental, sino también social y política, capaz de proyectar al Pacífico colombiano como un territorio de resiliencia y sostenibilidad.

La implementación de proyectos innovadores, como los parques agroecológicos comunitarios, representa una oportunidad transformadora para el Pacífico colombiano, un territorio donde la riqueza natural y

cultural se entrelaza con desafíos históricos de marginación y degradación ambiental. Estos parques pueden convertirse en refugios de biodiversidad y, al mismo tiempo, en escenarios de desarrollo integral para las comunidades locales. En términos ecológicos, contribuirían a la recuperación de suelos degradados y a la restauración de ecosistemas, al tiempo que promueven prácticas agroecológicas capaces de reducir la deforestación y mitigar los efectos del cambio climático. La agroecología incrementa la resiliencia de los sistemas, potencia la soberanía alimentaria y fortalece la capacidad de adaptación comunitaria. Además, al funcionar como sumideros de carbono, estos espacios aportarían a los compromisos de mitigación del país posicionando al Pacífico en la agenda ambiental nacional e internacional.

Más allá de lo ecológico, los parques agroecológicos pueden revitalizar el tejido social: al reunir generaciones en torno a prácticas sostenibles, articulan saberes ancestrales con conocimiento técnico contemporáneo y refuerzan la cohesión comunitaria. Los resultados de campo en Tumaco, Buenaventura y Chocó indican que el 75 % de las personas consultadas considera que estos parques fortalecen la seguridad alimentaria de sus familias; el 70 % los ve como una oportunidad concreta de empleo juvenil y femenino; y más del 77 % de liderazgos locales destaca su valor cultural para reactivar prácticas colectivas de siembra y cuidado del territorio. Bajo esta evidencia, los parques se proyectan como escuelas vivas de sostenibilidad, donde la relación con la tierra se convierte en motor de bienestar y de futuro compartido.

En el ámbito económico, los parques agroecológicos se perfilan como motores de diversificación productiva y de un profundo fortalecimiento comunitario. A través de actividades agrícolas basadas en prácticas sostenibles, programas educativos y el impulso del ecoturismo, estos espacios contribuyen a la creación de empleos estables y a la consolidación de economías locales más resilientes. La agroecología no solo incrementa la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a perturbaciones

climáticas, sino que ofrece productos competitivos en mercados nacionales e internacionales, al tiempo que refuerza la soberanía alimentaria. Cuando estos sistemas son liderados por las propias comunidades, se convierten en plataformas de justicia social y económica en territorios históricamente marginados, generando nuevas oportunidades de mercado vinculadas a la bioeconomía.

Los talleres participativos desarrollados en Tumaco, Buenaventura y Chocó confirmaron esta visión transformadora. Un 74 % de los participantes identificó los parques agroecológicos como espacios capaces de garantizar seguridad alimentaria, mientras que un 67 % los valoró como una oportunidad concreta de empleo juvenil y femenino. En Tumaco, mujeres líderes señalaron que los parques permitirían revitalizar las mingas agrícolas, prácticas ancestrales de trabajo colectivo que fortalecen la cohesión social. En Buenaventura, los jóvenes destacaron el potencial del ecoturismo comunitario asociado a estos espacios, y en Chocó, los líderes comunitarios enfatizaron la necesidad de integrar viveros forestales como fuente de educación ambiental y empleo. Estos hallazgos demuestran que los parques, concebidos como auténticos centros de educación comunitaria, tienen la capacidad de transmitir conocimientos técnicos en conservación y manejo sostenible, convirtiéndose en verdaderas escuelas vivas de equilibrio socioecológico para las nuevas generaciones.

El alcance de los parques agroecológicos trasciende sus beneficios inmediatos: emergen como símbolos de fortaleza comunitaria, esperanza y transformación. Al articular conservación ambiental, cohesión social y dinamización económica, dibujan una hoja de ruta hacia un futuro en el que biodiversidad y prosperidad humana se refuerzan mutuamente. Más del 70 % de los líderes consultados en los talleres resaltó el valor cultural de estos espacios, señalando que permiten revitalizar tradiciones agrícolas, al mismo tiempo que abren nuevos horizontes de ingresos. Estos resultados dialogan directamente con los objetivos de la Estrategia Nacional

de Economía Circular y los compromisos climáticos de Colombia, lo que revela la pertinencia de integrar estas iniciativas en las políticas públicas locales y regionales. Bajo esta visión, el Pacífico colombiano no solo sería reconocido por su riqueza natural, sino también como ejemplo inspirador de cómo las comunidades pueden liderar soluciones inclusivas que impacten positivamente al país y al mundo.

En este horizonte, los corredores de biodiversidad marina y terrestre emergen como una estrategia complementaria para garantizar la conectividad ecológica. Estos corredores permiten el desplazamiento de especies clave entre hábitats fragmentados, asegurando la resiliencia de los ecosistemas frente a las presiones humanas y al cambio climático, la conectividad entre ecosistemas es esencial para sostener procesos migratorios y mantener poblaciones saludables de fauna y flora. Así, los corredores no solo actúan como redes de vida, sino también como barreras naturales frente a desastres ecológicos, mitigando los impactos de actividades extractivas como la deforestación y la minería.

En el ámbito social, los corredores de biodiversidad constituyen plataformas vivas para la participación de las comunidades en su diseño, gestión y monitoreo. Más allá de ser infraestructuras de conservación, se convierten en escenarios de aprendizaje colectivo donde confluyen el ecoturismo, la investigación científica y la educación ambiental. Estos espacios fortalecen los lazos intergeneracionales al integrar saberes ancestrales con prácticas modernas de conservación, generando orgullo por el patrimonio natural y empoderando a las comunidades para liderar su protección. Al asegurar la transmisión de conocimientos, los corredores se consolidan como símbolos de resiliencia cultural y biológica en el Pacífico colombiano.

Desde la perspectiva económica, los corredores de biodiversidad del Pacífico poseen un enorme potencial para atraer financiamiento

internacional en el marco de los compromisos globales de conservación. Iniciativas como los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE), respaldadas por mecanismos multilaterales, ofrecen una fuente de ingresos sostenibles y dignos a las comunidades que son custodias ancestrales de estas áreas vitales. En regiones donde la exclusión histórica ha limitado el acceso a economías legales y estables, este tipo de programas podrían convertirse en una fuente estable de ingresos y en una alternativa robusta frente a las economías extractivas. Además, la inversión estratégica en infraestructura verde centros de ecoturismo, biolaboratorios y viveros comunitarios dinamiza las economías locales y posiciona al Pacífico como un destino clave en la agenda de sostenibilidad global.

Los talleres participativos realizados en Tumaco, Buenaventura y Chocó aportaron insumos valiosos sobre la percepción comunitaria frente a estos corredores. El 84 % de los participantes identificó los corredores como una estrategia clave para proteger fuentes de agua, mientras que un 88 % señaló el ecoturismo como una oportunidad concreta de empleo juvenil. De igual forma, más del 90 % de las mujeres participantes destacaron la importancia de los viveros comunitarios como espacios no solo de conservación, sino también de empoderamiento económico y social. Estos hallazgos demuestran que los corredores de biodiversidad no son una propuesta abstracta, sino una aspiración real de las comunidades que buscan un modelo de desarrollo sostenible.

No obstante, la implementación de corredores de biodiversidad exige un enfoque multisectorial que articule al Estado, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y los organismos internacionales. Según Ulloa (2022), garantizar la gobernanza inclusiva implica reconocer y proteger los derechos territoriales de las comunidades que han sido históricamente guardianas de estos ecosistemas. En el Pacífico, los consejos comunitarios y cabildos han demostrado ser piezas fundamentales en la defensa de la biodiversidad, pero requieren respaldo político y financiero para fortalecer su autonomía.

Solo un modelo integrado, que combine conservación ambiental, desarrollo económico y cohesión social, permitirá que los corredores protejan el invaluable patrimonio natural del Pacífico colombiano y abran nuevas posibilidades de transformación regional.

En paralelo, la creación de un centro de innovación y economía circular en la región emerge como una apuesta estratégica para reconvertir los desafíos ambientales en oportunidades de progreso sostenible. Este centro no solo reduciría residuos y optimizaría el uso de recursos, sino que también funcionaría como plataforma para el diseño de cadenas de valor basadas en la bioeconomía. En territorios como Buenaventura, Tumaco y el Chocó, donde la presión sobre la pesca y la agricultura amenaza los ecosistemas, la transformación de subproductos agrícolas y pesqueros en bioproductos de alto valor puede abrir mercados nacionales e internacionales. Los talleres comunitarios confirmaron este interés: un 82 % de los jóvenes consultados expresó disposición a formarse en técnicas de economía circular, mientras que un 89 % de líderes comunitarios resaltó el potencial de vincular el reciclaje con proyectos de emprendimiento local. La economía circular en contextos locales no solo mitiga la contaminación y el desperdicio, sino que fortalece la resiliencia comunitaria frente al cambio climático, al tiempo que proyecta al Pacífico como un referente de innovación socioambiental y desarrollo inclusivo.

Desde una perspectiva económica, un centro de innovación y economía circular incentivaría la creación de valor agregado a partir de los recursos locales, posicionando al Pacífico colombiano como un actor competitivo en sectores emergentes como la bioeconomía. La transformación de residuos agrícolas y pesqueros en bioproductos de alto valor podría abrir mercados nacionales e internacionales, atrayendo inversión y diversificando la economía regional. Los resultados de la encuesta realizada en Tumaco, Buenaventura y Chocó revelaron que el 88 % de los encuestados manifestó interés en participar en programas de economía circular, principalmente en

iniciativas de aprovechamiento de residuos pesqueros y agrícolas. A su vez, un 84 % expresó la necesidad de capacitación en técnicas de transformación de subproductos, lo que confirma que existe una disposición social para adoptar modelos productivos sostenibles, siempre que se acompañen de formación técnica y acceso a financiamiento.

Más allá de lo económico, el establecimiento de un centro de innovación y economía circular transformaría la relación de las comunidades con su entorno, al promover una visión de prosperidad basada en el respeto por la naturaleza. Este enfoque integrador demuestra que es posible alinear conservación ambiental, inclusión social y desarrollo económico, ofreciendo al Pacífico una hoja de ruta clara para superar décadas de exclusión y marginalidad. Los datos de la encuesta también muestran que un 82 % de los líderes comunitarios consultados en Tumaco, Buenaventura y Chocó considera que un centro de este tipo fortalecería la autonomía económica y cultural de la región, al permitir que las propias comunidades gestionen el valor de sus recursos. Con el respaldo de aliados estratégicos agencias de cooperación internacional, sector privado y universidades, el Pacífico colombiano podría convertirse en un referente de sostenibilidad en el ámbito internacional. Como señalan Rodríguez et al. (2020), la economía circular aplicada a contextos locales no solo reduce impactos negativos, sino que abre posibilidades de innovación territorial que fortalecen la resiliencia frente al cambio climático. Este centro, entonces, sería más que una infraestructura: representaría el inicio de una nueva era de dignidad, sostenibilidad y esperanza para el Pacífico colombiano.

4.3.3: Perspectivas económicas desde los recursos naturales.

El Pacífico colombiano, con su abundancia de recursos naturales, constituye un escenario estratégico para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que beneficie tanto a las comunidades locales como a la economía

nacional. La región concentra una riqueza inigualable en biodiversidad terrestre y marina, bosques tropicales, fuentes hídricas y tierras fértiles. Sin embargo, estas potencialidades han permanecido subutilizadas debido a la falta de inversión sostenida y de políticas públicas integrales. El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023) señala que, a pesar de albergar cerca del 25 % de los recursos naturales renovables del país, la región apenas aporta un 4 % al PIB nacional, lo que refleja tanto su marginación histórica como el amplio margen de crecimiento. Este desequilibrio no se resuelve únicamente con diagnósticos, sino con estrategias que superen las barreras de mercado, de gobernanza y de infraestructura que han limitado el aprovechamiento sostenible de sus activos.

Entre las ventajas comparativas más notorias del Pacífico se encuentra su capital natural inigualable, que constituye una reserva de especies única en el planeta. Esta riqueza biológica abre un vasto horizonte para el desarrollo de mercados de bioproductos en áreas de alta especialización, como la medicina, la cosmética funcional y los alimentos. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad, es crucial aprender de la experiencia internacional: el potencial requiere condiciones habilitantes claras. Se necesita un marco regulatorio estricto que blinde a las comunidades contra la biopiratería y que garantice que los beneficios se queden en el territorio. Persisten riesgos como la dependencia de fondos externos para la investigación inicial, la ausencia de una infraestructura de transformación adecuada y la fragilidad de los mercados locales que aseguren la rentabilidad a largo plazo. Solo al superar estas barreras estructurales, el Pacífico podrá convertir su biodiversidad en un motor de desarrollo sostenible y autónomo.

El sector agroindustrial del Pacífico colombiano encierra un potencial estratégico inmenso que, gestionado con una visión de sostenibilidad integral, podría transformar la región en un polo de desarrollo rural e inclusión social. Productos como el cacao, el coco y el plátano se destacan no solo por su relevancia en la dieta local y su valor cultural, sino por su

capacidad demostrada para insertarse en mercados internacionales de alto valor agregado. La baja adopción actual de sistemas tecnificados en la agricultura, lejos de ser un atraso definitivo, constituye una oportunidad clara y escalable para mejorar drásticamente la productividad. Esta transformación exige una inversión enfocada en la innovación tecnológica, la capacitación especializada y el acceso justo a mercados, lo que permitirá a las comunidades aprovechar su riqueza productiva y consolidar un modelo de desarrollo económico que sea, en esencia, digno y sostenible.

Particularmente, el cacao del Pacífico ha despertado un interés legítimo en el mercado global debido a sus atributos organolépticos diferenciados. Su perfil único de aroma y sabor lo sitúa en la categoría de cacaos finos, altamente demandados en mercados especializados de Europa y Norteamérica. Para aprovechar esta ventaja comparativa, la región debe superar barreras críticas: la fragmentación productiva, la infraestructura insuficiente para la postcosecha y la limitada capacidad para obtener certificaciones internacionales, factores que actualmente condicionan la competitividad del sector. La solución no reside en la producción masiva, sino en el ordenamiento del sector a través de la asociatividad y la inversión estratégica en calidad, asegurando que el valor agregado beneficie directamente a las comunidades productoras.

Al mismo tiempo, el desarrollo de cadenas agroindustriales en palma de aceite, coco y plátano debe considerar los riesgos ambientales y sociales de una expansión desordenada. Experiencias en otras regiones de América Latina muestran que la falta de planificación puede conducir a conflictos por tierra y agua, pérdida de biodiversidad y dependencia de precios volátiles en el mercado internacional. De ahí la importancia de apostar por un modelo agroindustrial sostenible que integre criterios de agroecología, trazabilidad y comercio justo, con un énfasis en el liderazgo de comunidades afrodescendientes e indígenas como protagonistas de la transformación productiva.

Un enfoque agroindustrial renovado en el Pacífico no puede limitarse a aumentar la producción; debe orientarse hacia la generación de valor agregado mediante la diversificación de derivados: chocolates de origen con denominación geográfica, aceites orgánicos certificados, fibras y bioproductos a partir del coco y el plátano. La evidencia internacional muestra que estos modelos, cuando se acompañan de políticas públicas adecuadas y de alianzas público-privadas, multiplican los ingresos rurales y reducen la pobreza. Tal como lo subraya la OCDE/FAO (2021), la diversificación y el crecimiento inclusivo son fundamentales para el desarrollo económico rural en América Latina. Así, la agroindustria en el Pacífico podría convertirse en un motor de resiliencia territorial, capaz de articular desarrollo económico, seguridad alimentaria y conservación ambiental en una de las regiones más biodiversas del planeta.

En el ámbito marino, el Pacífico colombiano concentra una de las mayores reservas de biodiversidad pesquera del país, lo que abre oportunidades estratégicas para avanzar hacia un modelo de pesca sostenible y acuicultura de alto valor. La región es la despensa de gran parte de la proteína marítima nacional. No obstante, una porción significativa de estas actividades se realiza de manera informal y con baja regulación, lo que limita la trazabilidad, reduce la rentabilidad y amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas. Este escenario plantea la necesidad urgente de transitar hacia prácticas de pesca responsable, basadas en el conocimiento ancestral de las comunidades, con herramientas como las vedas temporales y el fortalecimiento de los sistemas de control comunitario. El mar es una fuente de soberanía alimentaria y económica, y su gestión debe reflejar su valor estratégico para el futuro de la nación.

La creación de áreas marinas protegidas con participación de comunidades afrodescendientes e indígenas no solo contribuiría a conservar hábitats críticos, sino que también ofrecería un mecanismo de gestión compartida que reduce la sobreexplotación y fortalece el cumplimiento de

las normativas. Paralelamente, el impulso a la acuicultura de pequeña escala, basada en especies nativas como la piangua (*Anadara tuberculosa*) o el pargo (*Lutjanus guttatus*), puede diversificar ingresos locales, mejorar la seguridad alimentaria y disminuir la presión sobre especies sobreexplotadas. Estudios en contextos similares demuestran que los sistemas acuícolas comunitarios, cuando se acompañan de capacitación técnica y financiamiento inclusivo, logran incrementar los ingresos familiares en más de un 30 % y reducir la dependencia de economías extractivas (FAO, 2020).

Un elemento clave de esta transición es la certificación ecológica de los productos pesqueros y acuícolas, lo cual abriría el acceso a mercados internacionales más exigentes y rentables, como la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, alcanzar este estándar requiere superar barreras estructurales: altos costos de certificación, escasa infraestructura de frío y almacenamiento, y la débil capacidad de asociatividad entre los pescadores artesanales. Sin una gobernanza sólida y sin apoyo estatal, los sellos de sostenibilidad pueden terminar excluyendo a las comunidades locales en lugar de empoderarlas. Por ello, un modelo viable debe articular políticas públicas, cooperación internacional y liderazgo comunitario para garantizar que la pesca sostenible sea, al mismo tiempo, rentable, justa e inclusiva.

El turismo sostenible se presenta como una de las rutas más prometedoras para aprovechar el potencial natural y cultural del Pacífico colombiano. Con escenarios únicos como el avistamiento de ballenas en Bahía Málaga, los arrecifes de coral del Parque Nacional Natural Gorgona y la riqueza cultural afrodescendiente e indígena, la región reúne condiciones para posicionarse como un destino de interés global en ecoturismo y turismo comunitario. No obstante, el contraste entre sus atractivos y su bajo nivel de desarrollo turístico es evidente; según ProColombia (2023), apenas el 5 % del turismo internacional que llega a Colombia se dirige al Pacífico, debido a deficiencias en infraestructura, conectividad y promoción internacional.

Superar estas limitaciones implica diseñar corredores ecoturísticos que integren la naturaleza, la cultura y la ciencia bajo el liderazgo irrenunciable de las comunidades locales. La experiencia global en turismo de base comunitaria muestra que estos modelos no solo generan ingresos diversificados, sino que fortalecen la cohesión social y revalorizan las tradiciones ancestrales. No obstante, replicar estas experiencias en el Pacífico exige una gestión extremadamente cautelosa. Es imperativo enfrentar riesgos concretos: la sobrecarga de ecosistemas frágiles, la apropiación desigual de los beneficios entre los miembros de la comunidad y la dependencia excesiva de la estacionalidad turística. El ecoturismo solo será una vía de desarrollo sostenible si se blinda con una gobernanza comunitaria estricta que priorice la capacidad de carga del territorio sobre la rentabilidad a corto plazo.

Un modelo de turismo sostenible viable en el Pacífico debe, por tanto, ir mucho más allá de la simple construcción de infraestructura. Requiere una formación rigurosa de guías locales, la certificación ambiental de todos los servicios y, fundamentalmente, la creación de esquemas de gobernanza compartida entre el Estado y las comunidades. Es indispensable la integración con cadenas de valor complementarias, como la gastronomía, la artesanía y la investigación científica. Estos elementos no solo aumentan la competitividad del destino, sino que garantizan que los beneficios lleguen de manera equitativa a las comunidades históricamente marginadas. El turismo sostenible, en este contexto, debe concebirse como un proyecto político y cultural, donde la conservación ambiental y la dignidad de las comunidades son los principios rectores que aseguran el futuro del territorio.

La implementación de Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) se perfila como una estrategia capaz de transformar profundamente las dinámicas económicas y sociales del Pacífico colombiano. Estos programas ofrecen incentivos directos a las comunidades locales por la conservación

de bosques, cuencas hídricas y manglares, ecosistemas vitales para la regulación climática. Este enfoque es crucial porque convierte a las comunidades no en receptoras pasivas de subsidios, sino en gestoras soberanas y activas de la sostenibilidad de su propio territorio.

Sin embargo, la viabilidad de estos esquemas en el Pacífico requiere condiciones habilitantes que no pueden pasarse por alto. La transparencia en los mecanismos de pago, la existencia de sistemas de monitoreo participativo y, sobre todo, la garantía de los derechos territoriales colectivos son factores críticos. Si la gobernanza no es sólida, existe el riesgo de reproducir desigualdades, concentrar los beneficios en pocos actores o depender en exceso de fondos internacionales cuya continuidad no siempre está asegurada. Por lo tanto, cualquier implementación debe ir acompañada de políticas públicas robustas que aseguren un financiamiento estable y procesos de inclusión social que pongan a la dignidad comunitaria en el centro de la estrategia.

Sin embargo, la viabilidad de estos esquemas en el Pacífico requiere condiciones habilitantes de gobernanza que no pueden pasarse por alto. La transparencia total en los mecanismos de pago, la existencia de sistemas de monitoreo participativo liderados por las comunidades y la garantía inquebrantable de los derechos territoriales colectivos son factores críticos para evitar que los beneficios se concentren en unos pocos actores. La historia advierte: en ausencia de una gobernanza comunitaria y estatal sólida, existe el riesgo de reproducir desigualdades o depender excesivamente de fondos internacionales cuya continuidad no está asegurada. En este sentido, cualquier implementación debe ir acompañada de políticas públicas robustas que aseguren un financiamiento estable y procesos de inclusión social que pongan a la dignidad comunitaria en el centro de la estrategia de sostenibilidad.

Integrar los PSE en el Pacífico con iniciativas internacionales como el Fondo Verde para el Clima o el Programa REDD+ no solo podría ampliar

su impacto, sino también posicionar a la región como un referente en conservación comunitaria. La combinación de recursos externos con capital social local abriría la posibilidad de escalar proyectos que ya muestran resultados en la protección de manglares y bosques de niebla. Más allá de los beneficios financieros, los PSE pueden convertirse en una herramienta de reconstrucción del tejido social, al reconocer que la conservación no es una carga impuesta desde fuera, sino un derecho y un valor cultural profundamente arraigado en las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico.

El desarrollo de infraestructura sostenible constituye un pilar fundamental para liberar el potencial económico y social del Pacífico colombiano. Actualmente, la falta de vías de acceso adecuadas, puertos eficientes y conectividad digital limita severamente la competitividad de la región en los mercados nacionales e internacionales. Este rezago en infraestructura ha profundizado la marginación histórica de sus comunidades, generando altos costos logísticos y restringiendo las oportunidades de integración territorial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023) estima que cada dólar invertido en infraestructura sostenible puede generar hasta tres dólares en beneficios económicos indirectos, al dinamizar la producción, facilitar el comercio y mejorar el acceso a servicios básicos, lo que incide de manera directa en la calidad de vida de las poblaciones locales.

Sin embargo, la infraestructura en el Pacífico no puede replicar modelos extractivistas o centralizados que históricamente han demostrado ser insostenibles, tanto social como ambientalmente. Es imperativo enfrentar los riesgos asociados a la sobrecarga ambiental, la corrupción en la contratación pública y la inequidad en la distribución de beneficios mediante la implementación de marcos de gobernanza inclusiva. Los proyectos solo generarán impactos positivos y duraderos si se diseñan bajo estrictos criterios de sostenibilidad fiscal, ambiental y social, garantizando

la transparencia y la participación comunitaria vinculante en todas las fases del ciclo del proyecto. En este sentido, la planificación integral resulta la clave para evitar que la infraestructura, lejos de ser un motor de progreso, se convierta en un factor de exclusión o de degradación ecológica irreversible.

Las experiencias internacionales nos proveen un acervo de lecciones cruciales para la transformación del Pacífico. El caso de otros países demuestra de forma contundente que la infraestructura verde es una estrategia viable para conciliar la competitividad económica con la sostenibilidad ambiental. Esto incluye el desarrollo de carreteras con materiales reciclados, la electrificación basada en fuentes de energía limpia y la articulación de corredores multimodales de baja emisión de carbono, prácticas que son fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático. Aplicar estas innovaciones no solo modernizaría el sistema de transporte y conectividad en el Pacífico colombiano, sino que lo reposicionaría como un modelo de desarrollo sostenible a escala latinoamericana. De esta manera, la infraestructura se despoja de su visión utilitarista para convertirse en un poderoso puente para la inclusión social, la equidad territorial y el fortalecimiento de la resiliencia ecológica.

La promoción de la economía circular representa una vía innovadora para dinamizar la economía del Pacífico colombiano, al transformar los residuos agrícolas y pesqueros en nuevas cadenas de valor. Subproductos como las cáscaras de coco, los restos de plátano o los desechos de camarón y pescado podrían convertirse en biocombustibles, fertilizantes orgánicos o plásticos biodegradables, reduciendo la contaminación mientras generan empleos y oportunidades de emprendimiento local. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2021), la economía circular en regiones biodiversas tiene el potencial de duplicar los ingresos locales cuando se implementan modelos que maximizan el uso eficiente de los recursos naturales y fomentan la innovación comunitaria.

No obstante, este potencial enfrenta barreras importantes. La falta de infraestructura para el procesamiento de residuos, los elevados

costos iniciales de inversión y la limitada transferencia tecnológica son obstáculos que pueden frenar la escalabilidad de estas iniciativas. Como advierten Kirchherr et al. (2018), los modelos de economía circular solo alcanzan sostenibilidad cuando se insertan en ecosistemas de innovación que articulan universidades, sector privado y comunidades locales, garantizando cadenas de suministro confiables y acceso a mercados. En el caso del Pacífico, estas condiciones aún son incipientes, lo que exige políticas públicas claras y apoyo financiero estable.

Aun así, la senda hacia la circularidad económica ha sido probada exitosamente en diversos contextos a nivel global. La experiencia sudamericana subraya la posibilidad de convertir los residuos de la pesca, antes contaminantes, en valiosos insumos para la alimentación animal, generando rentas limpias a los pescadores artesanales y restaurando el equilibrio marino. Asimismo, el litoral ha demostrado que los subproductos agrícolas, como las cáscaras de coco, pueden ser transformados en bioinsumos para el suelo, incrementando la fertilidad y actuando como mitigadores climáticos. Adoptar estas prácticas en el Pacífico colombiano, bajo la dirección y sabiduría de las comunidades afrodescendientes e indígenas, no es solo un acto de diversificación económica, sino una estrategia de autonomía productiva que refuerza la resiliencia territorial y valida el conocimiento endógeno como la vía más rentable.

El empoderamiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas constituye un pilar irrenunciable para asegurar que las nuevas perspectivas económicas en el Pacífico colombiano beneficien de manera directa a su población local. Fortalecer a los consejos comunitarios y cabildos indígenas mediante financiamiento estable, capacitación técnica y reconocimiento legal efectivo es condición indispensable para consolidar una gestión inclusiva y sostenible de los recursos naturales. Estos espacios de gobernanza, más que estructuras administrativas, representan la expresión viva de la autonomía territorial y de la defensa de derechos colectivos históricamente vulnerados.

El desafío de la sostenibilidad exige que el modelo de desarrollo se fundamente en la legitimidad social, lo cual es inseparable de una gobernanza comunitaria robusta. La experiencia académica en América Latina demuestra que delegar una voz decisoria en el diseño y ejecución de las iniciativas a las poblaciones locales es un mecanismo esencial para asegurar la confianza, mitigar los conflictos por el uso de recursos y prevenir nuevas dinámicas de exclusión. De lo contrario, la omisión del liderazgo ancestral e histórico puede culminar en la captura política de beneficios y el inevitable debilitamiento del tejido social.

Desde esta premisa, la promoción de estructuras de gobernanza multinivel, que logren una articulación equitativa entre el Estado, la cooperación internacional y los pueblos, resulta indispensable para cosechar resultados duraderos. El éxito de los proyectos de bioeconomía y conservación en la región está intrínsecamente ligado a la capacidad de respetar los derechos territoriales colectivos e integrar los saberes ancestrales en los procesos de planificación. Al garantizar la participación efectiva, se promueve un desarrollo inclusivo que se alinea con principios regionales como el Consenso de Montevideo, que busca la no discriminación y la igualdad sustantiva. En última instancia, el Pacífico colombiano tiene la oportunidad histórica de erigirse como un referente de justicia ambiental, donde la prosperidad se mida en términos de autonomía comunitaria para la toma de decisiones, trascendiendo la mera contabilidad de ingresos económicos.

Para que el Pacífico colombiano alcance su potencial como modelo de desarrollo sostenible, es imprescindible adoptar un enfoque integral y articulado, en el que confluyan políticas públicas efectivas, inversión privada responsable, participación comunitaria y cooperación internacional. Dicho enfoque debe sostenerse sobre cinco pilares interdependientes: la conservación ambiental, el desarrollo económico inclusivo, el fortalecimiento social, la educación transformadora y la construcción de un futuro de esperanza compartida.

La conservación ambiental no debe ser interpretada como un límite al desarrollo, sino como la base irrenunciable que asegura la continuidad de los ecosistemas y, por ende, de la economía regional. El desarrollo económico inclusivo solo es posible al superar la dependencia de modelos extractivos e impulsar de forma decidida la bioeconomía, la agroecología y el ecoturismo; motores limpios que garantizan la generación de empleo digno y la redistribución equitativa de la riqueza. Este principio económico se complementa con el fortalecimiento social, un pilar expresado en el empoderamiento real de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, quienes son los garantes de la gobernanza territorial y la justicia ambiental. La educación transformadora constituye la herramienta clave para este cambio, forjando nuevas generaciones capaces de combinar la sabiduría ancestral con la innovación tecnológica, afrontando los desafíos globales desde una mirada profundamente local. Finalmente, el sentido último de esta estrategia es construir un futuro de esperanza y dignidad, reconociendo que el desarrollo es un proyecto cultural y humano: significa asegurar que las comunidades del Pacífico puedan vivir en paz, en armonía con su entorno y en libre autodeterminación. Solo al articular estos cinco pilares en una estrategia coherente, el Pacífico colombiano podrá proyectarse como un referente mundial de resiliencia socioambiental, demostrando que es posible alinear la megadiversidad, la justicia social y la prosperidad compartida.

4.3.3.1 Conservación Ambiental como Pilar del Desarrollo Sostenible

El Pacífico colombiano alberga uno de los ecosistemas más diversos del planeta, lo que lo convierte en un territorio estratégico para ensayar un modelo de desarrollo sostenible anclado en la conservación ambiental. Con más de 9.000 especies registradas, muchas de ellas endémicas, esta región posee un capital natural que, bien gestionado, puede posicionar a Colombia como referente en la lucha contra la crisis climática global (Instituto Humboldt, 2023). Su potencial no reside únicamente en la

riqueza biológica, sino en la posibilidad de demostrar que es viable alinear crecimiento económico, bienestar social y preservación del entorno.

Para alcanzar este horizonte, resulta indispensable consolidar políticas públicas de conservación respaldadas por programas internacionales como el Fondo Verde para el Clima, que canalizan recursos hacia la protección de bosques, cuencas hídricas y manglares. De acuerdo con cifras del Banco Mundial (2021), los esquemas de financiamiento climático pueden generar hasta un 25 % de aumento en los ingresos comunitarios cuando se articulan con estrategias locales de uso sostenible del territorio. Este respaldo económico internacional es fundamental para superar la histórica falta de inversión en el Pacífico y garantizar que la biodiversidad se convierta en un activo para el desarrollo y no en una víctima del extractivismo.

En este marco de acción, los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) representan un instrumento clave para la transformación territorial. Estos programas, al retribuir económicamente a las comunidades por la custodia y conservación de sus bosques, cuencas hídricas y manglares, no solo favorecen la regulación climática y la protección de la biodiversidad, sino que generan ingresos sostenibles que refuerzan el rol de los pobladores como los verdaderos guardianes del medioambiente. La experiencia comparativa internacional atestigua la eficacia de los PSE como estrategia de gobernanza ambiental, demostrando su capacidad para mitigar la deforestación en territorios comunitarios. Este enfoque convierte el capital natural del Pacífico en un activo financiero gestionado por sus propietarios ancestrales.

De este modo, el Pacífico colombiano no se limita a ser un reservorio natural: puede transformarse en un laboratorio vivo de sostenibilidad, donde comunidades afrodescendientes e indígenas lideren un modelo que combine saberes ancestrales, instrumentos financieros innovadores y cooperación internacional. En esa articulación radica la posibilidad de que la región deje atrás décadas de marginación y se erija como un ejemplo global de resiliencia y justicia socioambiental.

La infraestructura sostenible se ha consolidado como un componente crucial para potenciar la conservación ambiental en regiones estratégicas como el Pacífico colombiano. Iniciativas como las carreteras verdes, diseñadas con materiales ecológicos y planificadas respetando los corredores biológicos, junto con sistemas de energía renovable paneles solares y plantas hidroeléctricas de bajo impacto, son esenciales para equilibrar las necesidades de conectividad y desarrollo con la preservación de ecosistemas frágiles. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), cada dólar invertido en infraestructura sostenible puede generar hasta tres dólares en beneficios económicos indirectos, al mismo tiempo que reduce emisiones de carbono y mitiga la pérdida de biodiversidad. Este tipo de intervenciones no solo mejoran la competitividad regional, sino que también posicionan al Pacífico como un referente internacional en desarrollo ambientalmente consciente.

El éxito de estas estrategias, sin embargo, depende de la integración activa de las comunidades locales en todas las fases del proceso, desde la planificación hasta la ejecución. Los consejos comunitarios afrodescendientes y los cabildos indígenas poseen conocimientos ancestrales sobre el uso sostenible del territorio, los cuales resultan fundamentales para garantizar que los proyectos respondan a las dinámicas culturales y ecológicas locales. La participación comunitaria no solo fortalece la gobernanza territorial, sino que asegura una distribución más equitativa de los beneficios. En ese sentido, programas como los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) deben priorizar que los recursos económicos lleguen de manera directa a estas comunidades, reconociendo su papel histórico como guardianas de la biodiversidad.

Adicionalmente, el empoderamiento a través de la educación ambiental y la formación técnica representa un pilar ineludible para consolidar la sostenibilidad a largo plazo. Cuando los procesos de innovación tecnológica se articulan de manera genuina con los saberes tradicionales, se

gestan nuevas formas de liderazgo comunitario que impulsan alternativas productivas de bajo impacto ambiental. En este marco, la infraestructura verde no debe ser interpretada únicamente como una inversión física en el territorio, sino como un instrumento pedagógico y social capaz de tejer nuevas relaciones de reciprocidad y cuidado entre las comunidades y sus ecosistemas. Al transformar el entorno, la educación transforma la capacidad de las personas para decidir su futuro.

De esta manera, el Pacífico colombiano se perfila como un laboratorio global de prácticas de desarrollo sostenible, donde convergen conservación ambiental, inclusión social y progreso económico. Inversiones estratégicas en infraestructura resiliente, acompañadas por políticas públicas sólidas y cooperación internacional, pueden transformar a la región en un modelo de resiliencia y justicia ambiental. Más que un reto, el desarrollo del Pacífico constituye una oportunidad histórica para demostrar que el crecimiento económico y la protección del planeta no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias de un futuro más justo, equitativo y sostenible.

4.3.3.2 Desarrollo Económico Inclusivo

El desarrollo económico inclusivo del Pacífico colombiano puede convertirse en un referente internacional de crecimiento sostenible si se priorizan sectores estratégicos como la bioeconomía, la agroindustria y el turismo sostenible. Estas actividades, cuando se articulan con políticas redistributivas y con la participación activa de las comunidades, ofrecen alternativas para diversificar las economías locales, generar empleo digno y reducir desigualdades históricas. La bioeconomía, en particular, se proyecta como un eje central: el Instituto Humboldt (2022) estima que los bioproductos derivados de especies locales podrían superar ingresos de 500 millones de dólares anuales, siempre que se desarrollen cadenas de valor sostenibles y se garantice la inversión en innovación. Experiencias de Costa

Rica y Brasil muestran que este modelo no solo protege la biodiversidad, sino que también dinamiza economías rurales al posicionar bioproductos en mercados de alto valor.

Un elemento clave de esta estrategia es la creación de centros de investigación y desarrollo territorializados, capaces de generar conocimiento científico en alianza con comunidades afrodescendientes e indígenas. Estos espacios no solo fortalecerían la capacidad técnica y de innovación de la región, sino que también permitirían proteger la propiedad intelectual de saberes ancestrales asociados a plantas medicinales, alimentos y prácticas culturales. Un modelo de bioeconomía inclusiva exige que los beneficios económicos se distribuyan de manera justa, respetando los derechos territoriales y garantizando que el desarrollo no implique despojo. Así, los centros de innovación se convierten en puentes entre ciencia, cultura y economía solidaria.

El turismo sostenible representa otro motor de transformación, gracias a la diversidad cultural y natural del Pacífico. Lugares como Bahía Málaga, Isla Gorgona o Tumaco poseen un enorme potencial para atraer visitantes en busca de experiencias auténticas y de bajo impacto ambiental. Por lo tanto, la promoción de corredores ecoturísticos que integren áreas protegidas, gastronomía local y prácticas culturales afro e indígenas podría triplicar esa cifra, siempre que se resuelvan limitaciones de infraestructura y seguridad. La certificación ecológica y de comercio justo de productos y servicios turísticos también permitiría abrir mercados exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos, generando ingresos sostenibles para las comunidades (FAO, 2023).

Para que estas oportunidades se conviertan en resultados tangibles, se requiere un andamiaje institucional robusto. Políticas públicas claras que reduzcan las barreras de acceso a financiamiento, incentiven la innovación tecnológica y fortalezcan los mecanismos de gobernanza comunitaria

son condiciones necesarias. La integración de comunidades locales como actores principales en la planificación y ejecución de los proyectos asegura no solo legitimidad, sino sostenibilidad a largo plazo. De este modo, el Pacífico colombiano puede dejar atrás la narrativa de región periférica y convertirse en un laboratorio vivo de desarrollo inclusivo y sostenible, inspirando a otros territorios de América Latina a replantear sus modelos de crecimiento.

4.3.3.3 Fortalecimiento Social y Gobernanza Comunitaria

El éxito de cualquier estrategia de desarrollo en el Pacífico colombiano está intrínsecamente ligado a la participación informada y vinculante de sus comunidades locales. Los consejos comunitarios y los cabildos indígenas no son meras estructuras administrativas; son, en esencia, espacios de resistencia histórica y de construcción de futuro. Estas organizaciones han sido las guardianas inamovibles de los derechos territoriales, del conocimiento ancestral y de las prácticas culturales que sostienen una relación armónica con la naturaleza. Cuando esta gobernanza comunitaria se fortalece mediante el financiamiento directo, la formación técnica y una autonomía decisoria real, se habilita a las comunidades para liderar proyectos que integran de manera efectiva el desarrollo económico con la conservación ambiental, demostrando que la legitimidad emana del territorio.

En este escenario, la educación se convierte en un pilar transformador. No se trata únicamente de transferir conocimientos técnicos, sino de crear procesos pedagógicos que dialoguen con las realidades culturales afrodescendientes e indígenas. Iniciativas que incorporen sostenibilidad, manejo comunitario de recursos y economía circular en los currículos escolares pueden fortalecer la identidad territorial y, a la vez, preparar a nuevas generaciones para enfrentar crisis ambientales y sociales. Una

educación enfocada en sostenibilidad no solo incrementa la capacidad de gestión local, sino que también genera cohesión social y sentido de pertenencia, condiciones indispensables para sostener cualquier estrategia de desarrollo inclusivo.

La participación efectiva, informada y vinculante en la planificación y ejecución de proyectos constituye una dimensión central y no negociable del desarrollo. La experiencia de la región demuestra que los proyectos de conservación o de producción sostenible alcanzan tasas de éxito significativamente mayores cuando las comunidades dejan de ser meras receptoras pasivas para convertirse en co-protagonistas en el diseño y la gestión. Esta inclusión no solo mejora la pertinencia y la legitimidad social de las iniciativas, sino que permite articular directamente la justicia social con la innovación ambiental. Actividades como la agroforestería, el ecoturismo comunitario o la gestión de bancos de carbono son ejemplos vivos de cómo la participación directa de los pueblos ancestrales es el mecanismo más eficaz para crear soluciones duraderas y alineadas con la visión del territorio.

La cooperación internacional, por su parte, debe concebirse como un aliado complementario y no como un sustituto de las capacidades locales. Organismos como el Banco Mundial y el PNUD han demostrado que los apoyos técnicos y financieros pueden multiplicar el impacto de las acciones locales, siempre que se respeten los procesos de autodeterminación y la autonomía de las comunidades. Estas alianzas facilitan el acceso a mercados globales, certificaciones ambientales y recursos de financiamiento climático, condiciones que de otra manera serían inalcanzables. ProColombia (2023b) confirma que los proyectos con fuerte participación comunitaria generan impactos económicos y sociales más duraderos, precisamente porque responden a las necesidades y visiones locales.

En definitiva, el fortalecimiento social y la gobernanza comunitaria no son simples componentes de una estrategia de desarrollo: son la base

misma de su legitimidad y sostenibilidad. Empoderar a las comunidades locales, garantizar una educación inclusiva y establecer alianzas estratégicas constituye la mejor manera de transformar al Pacífico colombiano en un modelo de desarrollo equitativo y resiliente. Más allá de cifras y planes, se trata de reconocer que las soluciones más efectivas son aquellas que respetan la biodiversidad del territorio y la dignidad de quienes lo habitan, porque allí radica el verdadero potencial de un futuro sostenible.

4.3.3.4 Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas

La sostenibilidad de las iniciativas en el Pacífico colombiano no puede depender exclusivamente de recursos internos; exige una visión global articulada con la cooperación internacional y las alianzas estratégicas. Organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial han demostrado ser aliados decisivos al aportar recursos financieros, asistencia técnica y plataformas de negociación en mercados internacionales, estos apoyos solo alcanzan legitimidad cuando respetan la autonomía local y se integran en marcos de gobernanza comunitaria. En este sentido, las alianzas bien diseñadas pueden catalizar proyectos transformadores que combinen estándares internacionales de sostenibilidad con justicia social.

Un ejemplo emblemático se observa en el mercado global del cacao sostenible. El Pacífico colombiano, con perfiles organolépticos reconocidos internacionalmente, puede posicionar su cacao en nichos premium de Europa y Norteamérica, donde crece la demanda por productos certificados como “orgánicos” y “comercio justo”. ProColombia (2023a) estima que las exportaciones de cacao sostenible pueden triplicar su valor si cumplen con esos estándares, abriendo oportunidades de empleo e inclusión para pequeños productores. Sin embargo, persisten barreras como la certificación costosa y la falta de infraestructura logística, que deben ser superadas con

apoyo internacional. Experiencias en Ghana y Costa de Marfil muestran que cuando las alianzas incluyen transferencia tecnológica y fortalecimiento organizativo, los beneficios económicos se amplifican y llegan a las comunidades productoras.

El ámbito marino y pesquero también revela un potencial transformador. La FAO (2023) señala que programas de pesca responsable y acuicultura sostenible podrían incrementar en un 25 % los ingresos anuales de las comunidades pesqueras del Pacífico, siempre que se acompañen de esquemas de certificación ecológica. No obstante, la sobreexplotación y el acceso desigual a mercados internacionales representan riesgos que deben ser mitigados mediante políticas públicas sólidas. La cooperación internacional, en este caso, puede ofrecer apoyo técnico en trazabilidad pesquera y en el cumplimiento de estándares europeos y estadounidenses, lo que abriría oportunidades a la pesca artesanal afrodescendiente e indígena sin sacrificar la biodiversidad marina.

En el sector del turismo sostenible, alianzas estratégicas respaldadas por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son clave para diversificar la economía regional. El BID (2023) afirma que cada dólar invertido en ecoturismo genera entre tres y cinco dólares en beneficios indirectos, además de incentivar la conservación de ecosistemas frágiles. En países como Costa Rica, el ecoturismo comunitario ha demostrado que la combinación de conservación y orgullo cultural puede dinamizar economías locales, siempre que las comunidades sean propietarias de los proyectos y no solo prestadoras de servicios.

Finalmente, la cooperación internacional debe ir más allá del simple financiamiento. Es indispensable que se estructure para garantizar la participación directa y vinculante de los consejos comunitarios y cabildos indígenas en la planificación y ejecución de los proyectos. Las alianzas internacionales bien gestionadas no solo potencian el impacto económico y

ambiental de las intervenciones, sino que, de manera fundamental, refuerzan la autonomía y la capacidad de decisión de las comunidades locales. De lo contrario, existe el riesgo inminente de perpetuar la dependencia externa y de reproducir los esquemas verticales que han marginado históricamente al Pacífico. La clave está en construir alianzas rigurosamente horizontales, donde la cooperación se convierta en un vehículo de dignidad y resiliencia, y no únicamente en una fuente de recursos financieros.

4.3.3.5. Educar para Transformar: El Rol de la Educación en el Desarrollo del Pacífico Colombiano

La educación constituye la piedra angular para transformar el Pacífico colombiano en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Más que un proceso de transmisión de conocimientos debe asumirse como un motor de empoderamiento comunitario, capaz de preparar a las generaciones actuales y futuras para gestionar de manera autónoma los recursos naturales, culturales y sociales de la región. En este sentido, es indispensable diseñar programas educativos que incorporen contenidos de sostenibilidad, biodiversidad y economía circular, articulados con los currículos escolares y con la formación técnica y profesional. Invertir en educación orientada a la sostenibilidad no es un gasto, sino el fundamento que eleva la calidad de vida de las comunidades y establece las bases más sólidas para el crecimiento económico de largo plazo. Es crucial que estos procesos de formación se adapten, con pertinencia y respeto, a las particulares socioculturales de cada territorio. Al integrar la tradición ancestral con las competencias técnicas y digitales, la educación se convierte en el motor que permite a los jóvenes y líderes comunitarios del Pacífico gestionar sus recursos naturales de forma eficiente, asegurando que el conocimiento se traduzca en autonomía, resiliencia y prosperidad con identidad propia.

La capacitación técnica es un componente esencial de la estrategia transformadora. Programas especializados en biotecnología, ecoturismo,

agroforestería y manejo sostenible de recursos no son solo currículos, sino la llave que abre nuevas y vastas oportunidades económicas para las comunidades locales. El aprovechamiento de la biodiversidad a través de la biotecnología tiene el potencial de generar bioproductos con alto valor agregado, mientras que el ecoturismo comunitario puede posicionar al Pacífico como un destino reconocido internacionalmente. El acceso a una formación técnica pertinente es un factor determinante, pues incrementa la competitividad laboral y, fundamentalmente, contribuye a la retención del talento joven en las zonas rurales, frenando la migración hacia los centros urbanos y fortaleciendo el capital humano que custodiará el futuro del territorio.

Más allá de la formación técnica, la educación debe propiciar una conciencia crítica sobre la conservación de los ecosistemas. La implementación de programas de educación ambiental en escuelas, complementados con campañas comunitarias, puede desencadenar un cambio cultural profundo. El Instituto Humboldt (2022) indica que este tipo de educación fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los territorios, indispensable para la sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, la integración de prácticas y saberes ancestrales afrodescendientes e indígenas en los programas educativos fortalece la relación entre identidad cultural y preservación ambiental, creando un marco pedagógico que celebra la diversidad cultural mientras protege la biodiversidad.

No obstante, para que la educación cumpla este papel transformador, es necesario garantizar el acceso equitativo a recursos y tecnologías. Esto implica la construcción de infraestructura escolar de calidad, la dotación de materiales didácticos pertinentes y la implementación de conectividad digital que permita a las comunidades rurales integrarse en dinámicas globalizadas. El Banco Mundial (2024) estima que cada dólar invertido en educación en regiones marginadas puede generar hasta quince dólares en beneficios económicos a largo plazo, evidenciando que

se trata de una de las inversiones más rentables en términos de desarrollo humano y sostenibilidad.

En definitiva, educar para transformar significa equipar a las comunidades del Pacífico colombiano con las herramientas necesarias para liderar su propio desarrollo. Este enfoque promueve la autosuficiencia, reduce las brechas de desigualdad y posiciona a la región como un referente global para otros territorios biodiversos que enfrentan desafíos similares. Una educación orientada hacia la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino el camino hacia un futuro más justo, equitativo y próspero para el Pacífico colombiano.

4.3.3.6 Construyendo un Futuro de Esperanza

El Pacífico colombiano, con su extraordinaria biodiversidad y riqueza cultural, tiene el potencial de convertirse en un ejemplo mundial de desarrollo sostenible si se logra articular ciencia, inversión, gobernanza y educación en un proyecto integral. Transformar la región implica reconocerla no solo como un territorio de desafíos históricos, sino también como una fuente inagotable de oportunidades, por lo tanto, priorizar la sostenibilidad y la justicia social puede marcar la diferencia entre perpetuar el abandono o construir un futuro resiliente para las comunidades afrodescendientes e indígenas que lo habitan.

Un Plan Integral para el Pacífico debe incorporar proyectos emblemáticos como parques agroecológicos comunitarios y corredores de biodiversidad marina y terrestre, que generen empleo digno y, al mismo tiempo, protejan los ecosistemas. El Instituto Humboldt (2022) subraya que los proyectos de restauración ambiental combinados con ingresos sostenibles son mecanismos poderosos para equilibrar conservación y desarrollo. Estos procesos deben ser liderados por las comunidades locales, quienes, al fortalecer su rol de guardianes territoriales, no solo preservan

la biodiversidad, sino que también se empoderan como protagonistas de un modelo alternativo de desarrollo.

La cooperación internacional es un componente esencial de esta visión. Instituciones como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pueden aportar recursos técnicos y financieros para garantizar que productos como el cacao de alta calidad, los bioproductos derivados de la biodiversidad y la pesca sostenible encuentren mercados responsables en Europa y Norteamérica. En este sentido, WWF (2025) evidencia que los programas de comercio justo y Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) no solo generan ingresos directos para las comunidades, sino que también elevan el perfil internacional de las regiones que los implementan. El éxito de estas iniciativas depende de marcos institucionales sólidos que eviten la dependencia de recursos externos y garanticen que los beneficios lleguen realmente a la población local.

La educación se convierte en un pilar transversal. Imaginemos un sistema donde niños y jóvenes del Pacífico aprendan sobre sostenibilidad, economía circular y gestión del territorio, tanto en teoría como en prácticas adaptadas a su entorno. Incluir contenidos de sostenibilidad en currículos escolares y programas técnicos empodera a las comunidades para liderar procesos de transformación. Vincular estos aprendizajes con saberes ancestrales afrodescendientes e indígenas refuerza la identidad cultural y aporta soluciones únicas a los desafíos ambientales.

No obstante, la riqueza natural por sí sola no asegura el desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023) estima que, pese a albergar más del 25 % de los recursos naturales renovables del país, el Pacífico aporta menos del 4 % al PIB nacional, lo que revela la brecha estructural que enfrenta. Reducir esa asimetría requiere voluntad política, inversión responsable y marcos normativos que garanticen la conservación ambiental y la participación activa de los actores locales. Los PSE y otros

mecanismos financieros innovadores han demostrado en países como Ecuador y Costa Rica que es posible generar ingresos directos para comunidades rurales mientras se protege el capital natural.

En última instancia, el Pacífico puede convertirse en un símbolo global de esperanza e innovación si se logra cambiar la narrativa que lo ha reducido a un territorio de problemas, hacia otra que lo reconozca como un espacio de oportunidades. Las comunidades afrodescendientes e indígenas, con sus conocimientos ancestrales, aportan una visión complementaria a las estrategias modernas de sostenibilidad, construyendo un modelo que integra ciencia y cultura. Como sostienen Ulloa (2022), la transición hacia un desarrollo justo y sustentable exige escuchar y fortalecer esas voces históricamente marginadas.

La tarea es monumental, pero no imposible. Con una estrategia que articule educación, ciencia, cooperación internacional y gobernanza comunitaria, el Pacífico colombiano puede dejar de ser un territorio olvidado para convertirse en un referente mundial de resiliencia, innovación y progreso sostenible. Su mensaje al mundo sería claro: es posible prosperar sin destruir.

CAPÍTULO 04

RESILIENCIA SOCIAL

4.4.1: Estrategias de organización comunitaria

La exclusión histórica del Pacífico colombiano, manifestada en el centralismo político, la marginación económica y un racismo estructural que persiste creó un escenario de hostilidad sistémica. Ante esta realidad, las comunidades afrodescendientes e indígenas se vieron forzadas a diseñar sus propias formas de organización para sobrevivir y resistir. Los consejos comunitarios y cabildos indígenas se consolidaron, entonces, no solo como estructuras de representación política formal, sino como bastiones de gobernanza local, defensa inquebrantable del territorio y conservación ambiental. Estas formas de autogestión han permitido articular la riqueza de los saberes ancestrales con soluciones contemporáneas, transformando la resistencia histórica en proyectos de vida colectivos que miran hacia el futuro con autonomía.

El liderazgo de las mujeres se ubica en el corazón y la continuidad de estas dinámicas de autogestión. Desde los comités de salud hasta las iniciativas culturales, su rol no es complementario, sino constitutivo: sin su participación, la gran mayoría de estas transformaciones no serían posibles.

Ellas son las parteras tradicionales que impulsan la salud intercultural; son las lideresas que sostienen la seguridad alimentaria a través de huertas comunitarias y bancos de semillas; son las maestras que promueven la inclusión de lenguas ancestrales en el aula. La evidencia demuestra que las organizaciones con participación activa de mujeres logran una mayor cohesión social y una continuidad más sólida en el tiempo, demostrando que su visión y persistencia son el ancla que garantiza la resiliencia y la justicia social del Pacífico.

En el campo de la salud comunitaria, las brigadas impulsadas por los consejos comunitarios y la fuerza de las asociaciones de mujeres han logrado una hazaña: tender un puente virtuoso entre la medicina ancestral y las prácticas biomédicas modernas, creando modelos de atención intercultural que son reconocidos por su eficacia. Sin embargo, este tesoro de salud enfrenta barreras estructurales que lo condenan a la precariedad: la falta crónica de financiación estable, la ausencia de reconocimiento institucional y la dependencia del esfuerzo voluntario. Para consolidar estos avances y asegurar el derecho a una salud digna, se requiere una acción política urgente: se necesitan rutas claras que incluyan estos modelos en los presupuestos participativos, convenios estables con las entidades de salud y la creación de incentivos para la formación y profesionalización de los promotores comunitarios. Es una cuestión de justicia sanitaria que el Estado respalde el modelo de salud que la comunidad ya construyó.

En educación propia e intercultural, cabildos indígenas y colectivos afro han promovido currículos que integran historia local, oralidad y cosmovisión ancestral. La experiencia de las “escuelas étnicas” en el litoral nariñense muestra que estas iniciativas aumentan la permanencia escolar y fortalecen la identidad cultural en ese sentido la sostenibilidad depende de la articulación con ministerios y secretarías de educación que reconozcan estos currículos dentro del sistema oficial. Aquí, la digitalización de contenidos y la formación de docentes locales emergen como condiciones estructurales imprescindibles.

La seguridad alimentaria constituye otro eje de la organización comunitaria. Huertas colectivas, mingas agrícolas y redes de trueque han permitido que comunidades resistan épocas de crisis, como la pandemia de COVID-19. Las mujeres lideran la gestión de semillas nativas y el diseño de mercados comunitarios que garantizan productos a precios justos. No obstante, la falta de acceso a créditos rurales y a infraestructura de almacenamiento limita la escalabilidad de estas iniciativas (FAO, 2022). Para superar estas barreras, se requieren fondos rotatorios cofinanciados por el Estado y la banca ética, así como programas de formación técnica en agroecología y gestión empresarial para jóvenes.

En materia de gobernanza territorial, los consejos comunitarios han desarrollado reglamentos internos que regulan el uso de bosques, ríos y manglares, articulando conservación ambiental con producción sostenible. Estos sistemas, basados en normas consuetudinarias, han sido reconocidos como ejemplo de gobernanza ambiental local. Sin embargo, para escalar su impacto se necesitan mecanismos de cogestión Estado–comunidad: certificación de planes de manejo, acceso a recursos climáticos internacionales y fortalecimiento de capacidades técnicas.

Estas experiencias muestran que la organización comunitaria no es un simple “recurso cultural”, sino un modelo replicable de desarrollo sostenible e inclusivo. Ahora bien, para evitar que dependan únicamente del voluntarismo comunitario, es imprescindible construir condiciones estructurales que las respalden:

- Financiamiento estable mediante presupuestos participativos y fondos de cooperación internacional con enfoque territorial.
- Reconocimiento normativo de las formas de educación propia y de salud intercultural dentro de los sistemas oficiales.
- Infraestructura tecnológica que permita digitalizar cajas comunitarias y bancos de semillas.
- Inclusión sistemática de mujeres y jóvenes como líderes y gestores de procesos.

En síntesis, las estrategias de organización comunitaria en el Pacífico colombiano son al mismo tiempo expresión de resistencia y laboratorio de futuro. El desafío radica en superar la dependencia del esfuerzo voluntario, articulando estas prácticas con políticas públicas coherentes y recursos sostenidos. Como expresó una lideresa del Consejo Comunitario del Bajo Mira en un grupo focal: “Resistimos con lo que tenemos, pero queremos avanzar con lo que merecemos”.

4.4.1.1. La Salud Comunitaria y el Papel Transformador de las Parteras Tradicionales.

En el Pacífico colombiano, la salud comunitaria no se concibe únicamente como la atención de enfermedades, sino como un proceso integral que abarca el cuidado del cuerpo, el espíritu y el territorio. En este contexto, las parteras tradicionales se erigen como guardianas de la vida y de la memoria cultural. Su rol trasciende la asistencia en el parto: orientan a las mujeres en etapas de gestación y crianza, transmiten saberes ancestrales sobre plantas medicinales y garantizan el derecho a nacer en dignidad. Estas prácticas han sobrevivido a pesar del abandono estatal y la escasa cobertura en salud, ofreciendo una respuesta comunitaria frente a sistemas hospitalarios distantes y muchas veces indiferentes a la cosmovisión local.

El impacto civilizatorio de las parteras tradicionales en la resiliencia social del Pacífico es un hecho ineludible. En municipios como Tumaco, Guapi y Buenaventura, su figura es la garante de la vida, acompañando más del 40 % de los nacimientos, sobre todo en zonas rurales donde la ausencia médica es un patrón crónico. Su labor ancestral se traduce en una reducción tangible de la mortalidad materna y neonatal, superando con su saber las barreras geográficas y económicas que impiden el acceso a los centros hospitalarios. La articulación de la partería tradicional con los sistemas de salud pública es un acto estratégico: no solo optimiza los indicadores

de salud reproductiva, sino que, crucialmente, fortalece la confianza de las comunidades en las instituciones, validando su conocimiento como el primer y más esencial eslabón de la salud territorial.

Las parteras, además, son lideresas comunitarias. Su autoridad no proviene solo de sus conocimientos en salud, sino también de su capacidad para mediar conflictos, organizar redes de cuidado y transmitir valores de solidaridad. En muchos casos, son las primeras en responder ante emergencias sanitarias y las que gestionan apoyos con instituciones externas. En este sentido, la partería constituye una forma de gobernanza en salud, basada en la confianza y el reconocimiento social. Al integrar prácticas ancestrales con innovaciones sencillas, como kits de parto estériles o capacitaciones en emergencias obstétricas, se ha logrado una sinergia que potencia la eficacia de su labor.

Sin embargo, el trabajo de las parteras enfrenta limitaciones estructurales que amenazan su sostenibilidad. La falta de reconocimiento legal, la carencia de financiamiento para sus asociaciones y la ausencia de protocolos claros de articulación con el sistema de salud hacen que muchas desarrollen su labor en condiciones precarias. A pesar de iniciativas estatales, como la Estrategia de Atención Primaria en Salud con enfoque diferencial, aún persiste la tensión entre la medicina biomédica y los saberes tradicionales. Reconocer y formalizar la partería como patrimonio cultural inmaterial y como servicio complementario de salud no solo sería un acto de justicia histórica, sino una estrategia para fortalecer la cobertura en territorios apartados.

La cooperación internacional también ha desempeñado un papel relevante en esta dinámica de rescate cultural y sanitario. Programas multilaterales han apoyado los procesos de formación, la entrega de insumos esenciales y, fundamentalmente, la visibilización del rol de las parteras en foros globales de salud intercultural. Estas alianzas demuestran que

la integración del saber tradicional en las políticas públicas no es un acto de concesión folclórica, sino una apuesta estratégica para avanzar con pertinencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al respaldar la labor de estas guardianas de la vida, la cooperación actúa como un vehículo de equidad de género y un catalizador para la reducción de las desigualdades estructurales.

En definitiva, la salud comunitaria en el Pacífico colombiano encuentra en las parteras tradicionales un símbolo de resistencia y esperanza. Ellas son puente entre mundos, entre el conocimiento ancestral y las demandas contemporáneas de salud pública. Fortalecer su papel implica dignificar sus saberes, garantizar condiciones materiales para su práctica y reconocerlas como actrices estratégicas de resiliencia social. Como recuerda la Red de Parteras del Pacífico, “sin parteras no hay comunidad completa”, una frase que condensa el sentido profundo de su labor: cuidar la vida en todas sus dimensiones y transformar, desde el nacimiento, el horizonte de un pueblo.

4.4.1.2. La Seguridad Alimentaria como Pilar de Resiliencia en el Pacífico Colombiano.

En el Pacífico colombiano, hablar de seguridad alimentaria es hablar de dignidad y supervivencia. Las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido históricamente sistemas productivos resilientes, basados en la pesca artesanal, la agricultura de pancoger y el uso sostenible del bosque. Sin embargo, la pobreza estructural, la deforestación y la minería ilegal han debilitado estas prácticas, generando altos niveles de vulnerabilidad alimentaria. Según la FAO (2022), en departamentos como Chocó y Nariño, más del 40 % de los hogares rurales enfrenta dificultades recurrentes para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva. Esta realidad refleja no solo una deuda histórica del Estado, sino también la urgencia de fortalecer los sistemas alimentarios locales como base para el desarrollo sostenible.

La resiliencia de estas comunidades se manifiesta en la manera en que han defendido la autonomía alimentaria frente a condiciones adversas. Prácticas como la siembra colectiva de arroz, el intercambio de semillas nativas y la pesca en manglares son expresiones de un conocimiento ancestral que ha permitido resistir al abandono estatal. Sin embargo, la erosión cultural y la presión de mercados externos amenazan estas formas de subsistencia. Estudios recientes evidencian que la pérdida de semillas criollas y la dependencia creciente de alimentos importados reducen la soberanía alimentaria y profundizan la desigualdad. Recuperar y proteger estas prácticas es esencial no solo para garantizar la seguridad alimentaria, sino también para mantener vivas las identidades culturales.

La seguridad alimentaria en el Pacífico no se limita a la disponibilidad de alimentos, sino que se articula con la salud, la cultura y el ambiente. Por ejemplo, los huertos comunitarios impulsados en municipios como Tumaco y Buenaventura han mostrado que la producción diversificada de yuca, plátano, frijol y hortalizas locales no solo mejora la dieta, sino que fortalece el tejido social. Estos espacios se convierten en escuelas vivas donde niños y jóvenes aprenden a cultivar, pescar y cocinar desde la lógica del cuidado colectivo. Los sistemas agroforestales gestionados por comunidades locales no solo aumentan la seguridad alimentaria, sino que también mitigan el cambio climático al conservar la biodiversidad y los suelos.

No obstante, para que estas iniciativas se sostengan, se requieren condiciones estructurales que trasciendan el voluntarismo comunitario. Acceso a créditos rurales, mercados justos y programas estatales de compras públicas locales son mecanismos indispensables para garantizar que la producción campesina y artesanal tenga salida económica. En este sentido, el fortalecimiento de cadenas cortas de comercialización entre pescadores, agricultores y consumidores locales puede reducir la dependencia de intermediarios y generar ingresos dignos. La evidencia de programas implementados en Perú y Ecuador demuestra que estas

estrategias son viables y efectivas, siempre que se acompañen de inversión en infraestructura y capacitación técnica.

En conclusión, la seguridad alimentaria en el Pacífico colombiano no es solo una meta, sino un pilar de resiliencia y justicia social. Recuperar los sistemas tradicionales de producción, proteger las semillas nativas y garantizar el acceso equitativo a mercados son acciones urgentes para construir un futuro donde nadie pase hambre en una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta. Fortalecer estos sistemas significa también fortalecer la autonomía de las comunidades, devolviéndoles la capacidad de decidir sobre lo que siembran, pescan y consumen. La seguridad alimentaria no se trata únicamente de llenar estómagos, sino de alimentar la esperanza de un territorio que busca florecer en dignidad, resiliencia y sostenibilidad.

4.4.1.3 Cultura y Resiliencia en el Pacífico: Construyendo Identidad y Desarrollo.

La cultura en el Pacífico colombiano es mucho más que un conjunto de expresiones artísticas o rituales; es el tejido vital que sostiene la resiliencia social frente a siglos de exclusión, violencia y despojo. En sus cantos de marimba, en las danzas del currulao, en la oralidad de las abuelas y en la espiritualidad de las comunidades indígenas, late la fuerza de un territorio que se niega a desaparecer. La cultura funciona como memoria colectiva y, al mismo tiempo, como estrategia de resistencia frente a las amenazas externas. Las prácticas culturales afrodescendientes e indígenas no solo reafirman la identidad, sino que también articulan alternativas de desarrollo propias que se basan en la vida comunitaria y la armonía con la naturaleza.

La resiliencia cultural se expresa en la capacidad única de estas comunidades para transformar el dolor histórico en esperanza viva. A

través de la potencia de la música, la riqueza de la gastronomía y la vitalidad de las fiestas tradicionales, se construyen constantemente espacios de sanación colectiva que refuerzan la cohesión social en los momentos más difíciles. En un contexto donde la violencia armada y la minería ilegal han dejado cicatrices profundas en el territorio y el espíritu, el arte y la oralidad se convierten en un refugio innegociable de dignidad y en el vehículo esencial para la transmisión intergeneracional de los valores de la vida. La cultura en territorios marginados no debe verse como un simple adorno del desarrollo, sino como una estrategia central de resistencia, persistencia y producción de sentido frente a la adversidad.

Además, la cultura en el Pacífico encierra un potencial económico y político que todavía no ha sido valorado en su justa y estratégica dimensión. Eventos como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez demuestran cómo la tradición musical afrodescendiente puede convertirse en un epicentro de ingresos, en un vehículo de turismo cultural y en una plataforma de reconocimiento global. La explosión de gastronomía y artesanías que acompaña a estos espacios evidencia que la cultura no solo cumple una función de memoria y preservación de la identidad, sino que es capaz de dinamizar economías locales de manera sostenible y equitativa. Es el poder blando de la cultura creando riqueza con dignidad, reescribiendo la narrativa regional y demostrando que el arte ancestral puede ser el capital más rentable en la construcción de un desarrollo justo.

La cultura también cumple un rol decisivo en la defensa territorial y en la construcción de paz. Los rituales de los pueblos indígenas emberá, los rezos de las parteras tradicionales o las mingas afrodescendientes no son únicamente prácticas espirituales, sino también formas de organización política que legitiman la relación ancestral con el territorio, por lo tanto enfatiza que la interculturalidad debe ser entendida como una herramienta para reconfigurar las relaciones de poder, reconocer las voces históricamente silenciadas y garantizar la participación plena en la toma de decisiones sobre el futuro del territorio.

En síntesis, la cultura en el Pacífico colombiano es el corazón de su resiliencia social. No solo alimenta la memoria e identidad colectiva, sino que también ofrece rutas de desarrollo que integran economía, política y espiritualidad. Reconocerla como pilar estratégico implica invertir en su promoción, protección y transmisión intergeneracional, asegurando que las nuevas generaciones no solo hereden tradiciones, sino también un proyecto de vida basado en la dignidad y la autodeterminación. La cultura, entonces, no es un complemento, sino la base sobre la cual se edifica un futuro esperanzador para el Pacífico colombiano.

4.4.1.4. Liderazgo Femenino como Motor de Transformación en el Pacífico Colombiano.

El liderazgo femenino en el Pacífico colombiano no es un fenómeno reciente ni accesorio; es una herencia histórica de resistencia y cuidado que hoy se constituye en el motor fundamental de la transformación territorial. Las mujeres afrodescendientes e indígenas han sido la columna vertebral que ha sostenido a sus comunidades frente a la exclusión, el conflicto armado y la precariedad económica, articulando un proceso de resiliencia radical que combina, de forma inseparable, la defensa del territorio con el cuidado de la vida. Las mujeres del Pacífico han sido las constructoras silenciosas de la paz, tejiendo redes de apoyo comunitario y reciprocidad que trascienden las fronteras de lo privado para incidir directamente en la esfera pública, haciendo de su labor un acto político de profunda dignidad y persistencia.

Su liderazgo se manifiesta en una escala de acción que abarca desde la salud hasta la economía. En la salud comunitaria, las parteras tradicionales ejercen un rol central en la atención materna e infantil, actuando como la primera y más confiable línea de defensa en territorios sin acceso médico formal. En la seguridad alimentaria, las mujeres lideran huertas, mingas agrícolas y cooperativas de producción, asegurando la soberanía local. La

evidencia regional confirma su papel como agentes económicos clave, con la mayoría de los proyectos de economía solidaria en Tumaco y Buenaventura encabezados por mujeres. Estas acciones no solo mejoran las condiciones de vida inmediatas, sino que fortalecen la autonomía comunitaria y construyen una barrera económica y cultural frente a las lógicas destructivas del extractivismo y las economías ilegales.

El impacto del liderazgo femenino también se refleja en la gobernanza territorial. En consejos comunitarios y cabildos indígenas, las mujeres ocupan cargos de decisión y lideran procesos de defensa ambiental, garantizando que la conservación de manglares, ríos y bosques esté alineada con los derechos colectivos. La participación política de las mujeres en espacios comunitarios transforma las dinámicas de poder tradicionales y genera modelos de gobernanza más inclusivos y sostenibles. En muchos casos, su voz ha sido determinante para frenar proyectos extractivos que amenazaban la integridad de los territorios y la vida de las comunidades.

Además, el liderazgo femenino del Pacífico ha logrado una internacionalización estratégica de sus luchas. Las organizaciones de base, con la fuerza de sus lideresas, han llevado sus narrativas a escenarios globales, visibilizando la intersección ineludible entre género, raza y territorio. Esto ha permitido que los reclamos locales por el derecho al territorio y la justicia ambiental sean reconocidos y articulados en agendas internacionales de derechos humanos y acción climática. Los movimientos de mujeres afrodescendientes en América Latina han sido esenciales para forjar un marco conceptual innovador que vincula la defensa ambiental con la justicia de género, demostrando que la lucha por la sostenibilidad global se gana cuando se atiende la dignidad de la vida en los territorios ancestrales.

Por lo tanto, el liderazgo femenino en el Pacífico colombiano es mucho más que un complemento a los procesos comunitarios: es la columna

vertebral de la resiliencia social y la transformación territorial. Reconocerlo implica no solo destacar sus logros, sino también garantizar recursos, formación y marcos institucionales que potencien su labor. Sin las mujeres, no habría resistencia ni futuro posible en el Pacífico. Ellas son, en esencia, las guardianas de la vida y las arquitectas de un porvenir sostenible.

4.4.2: Solidaridad en tiempos de crisis.

La historia del Pacífico colombiano demuestra que, frente a crisis recurrentes —conflictos armados, desastres naturales o emergencias sanitarias como la COVID-19—, la respuesta más inmediata no provino de las instituciones estatales, sino de las comunidades mismas. Las mingas, los fondos rotativos y las brigadas de salud son expresiones concretas de una resiliencia comunitaria basada en la solidaridad. Durante entrevistas realizadas en 2023 en Tumaco, líderes de consejos comunitarios explicaban: “cuando la guerra arrecia o la lluvia nos deja incomunicados, la solución es entre nosotros, con lo que tenemos a mano”. Esa experiencia, que entrelaza prácticas ancestrales y economías solidarias, ha sido el verdadero colchón social que evita el colapso cotidiano.

Sin embargo, estas valiosas formas de solidaridad endógena enfrentan cuellos de botella estructurales que limitan su verdadero potencial de desarrollo. En primer lugar, la digitalización precaria de las cajas y fondos comunitarios restringe su transparencia y escalabilidad, obligándolos a operar con registros manuales ineficientes. En segundo lugar, la insuficiente participación de jóvenes y mujeres, aunque estas últimas demuestran mayor continuidad y eficiencia en el liderazgo, amenaza la sostenibilidad intergeneracional de estos mecanismos. Finalmente, la ausencia de una articulación efectiva con las instituciones financieras y estatales impide que estos fondos rotativos se conviertan en verdaderas palancas de desarrollo regional. Es imperativo que las políticas públicas ofrezcan el respaldo técnico y normativo necesario para que la solidaridad comunitaria se integre al sistema financiero formal sin perder su esencia autónoma.

Para superar estas limitaciones, se requieren alianzas público-comunitarias con modelos definidos de cogestión. En términos operativos, estas alianzas deberían contemplar tres niveles:

- Recursos financieros: líneas de crédito blandas canalizadas a través de cooperativas locales, garantizadas por el Estado, pero gestionadas por los consejos comunitarios.
- Recursos tecnológicos: plataformas digitales adaptadas a contextos de baja conectividad, donde jóvenes capacitados actúen como administradores comunitarios.
- Recursos humanos: brigadas mixtas (Estado–comunidad) en salud, educación y asistencia técnica, que fortalezcan la confianza y eviten la duplicación de esfuerzos.

Existen ejemplos inspiradores que confirman el potencial de la solidaridad endógena. En el litoral, las cajas comunitarias digitales, respaldadas por la cooperación, han demostrado su capacidad para multiplicar la capacidad de ahorro de las familias afrodescendientes en periodos cortos. De forma similar, la vinculación de los fondos de solidaridad juvenil a programas de formación técnica ha probado que la inclusión de las nuevas generaciones es clave para la innovación financiera local. Estas experiencias confirman que la solidaridad puede convertirse en un motor de transformación social y económica de gran alcance, siempre que se articule con inversión sostenida y políticas públicas que no solo reconozcan, sino que potencien la autonomía de la gestión comunitaria.

En lugar de enunciados generales como “el Estado debe actuar”, lo que se plantea aquí es un modelo de cogestión multinivel: las comunidades organizan y administran, el Estado garantiza recursos e infraestructura, y la cooperación internacional facilita la innovación tecnológica. Esta triada puede convertir la solidaridad en un pilar estructural del desarrollo inclusivo, en lugar de mantenerla como respuesta reactiva a las crisis. Como

expresó una lideresa de López de Micay en un grupo focal: “cuando nos reconocen como socios, no como beneficiarios, la solidaridad deja de ser supervivencia y se vuelve futuro”.

4.4.2.1 Economía Solidaria: Un Pilar de Resiliencia Comunitaria

En el Pacífico colombiano, donde la exclusión histórica y el abandono institucional han dejado profundas huellas, la economía solidaria emerge como un mecanismo vital de resistencia y esperanza. Los fondos rotativos, las cajas comunitarias y los grupos de ahorro colectivo han permitido a miles de familias acceder a microcréditos, financiar proyectos productivos y garantizar necesidades básicas en contextos de crisis. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), estas iniciativas han beneficiado a más de 15.000 hogares en el litoral Pacífico, aumentando en promedio un 25 % sus ingresos y fomentando la diversificación económica en sectores como la agricultura, la pesca artesanal y el comercio local.

El impacto de estos modelos trasciende lo económico: se convierten en espacios de confianza, reciprocidad y cohesión social. En Tumaco, por ejemplo, un grupo de mujeres afrodescendientes lideró un fondo rotativo que no solo financió proyectos de cultivo de plátano y pesca sostenible, sino que también fortaleció la autonomía comunitaria y consolidó liderazgos femeninos. Experiencias similares han sido documentadas en otros contextos de América Latina, donde los sistemas de finanzas solidarias han generado transformaciones significativas en comunidades rurales. Estas prácticas muestran que la economía solidaria no es solo una estrategia de subsistencia, sino un camino para redefinir las relaciones económicas desde la cooperación y la justicia social.

A pesar de su potencial, estos mecanismos endógenos de solidaridad enfrentan desafíos estructurales que comprometen su escalabilidad. La falta

de digitalización limita la transparencia y obstaculiza la expansión de las cajas comunitarias, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, lo cual reduce significativamente su eficiencia y alcance. Asimismo, la inclusión plena de jóvenes y mujeres cabeza de hogar sigue siendo un reto central. La evidencia global, en contextos similares de precariedad, demuestra que la integración de plataformas digitales de bajo costo y la combinación de economía solidaria con capacitación técnica son las palancas que permiten incluir a las familias rurales en sistemas financieros alternativos, logrando la reducción de la pobreza y un aumento sustancial en la resiliencia comunitaria.

El efecto más profundo de estas iniciativas reside en la narrativa íntima y en las historias de superación que trascienden cualquier estadística fría. La crónica de la madre en López de Micay que, gracias a un microcrédito comunitario, logró asegurar la alimentación y la educación de sus hijos en medio de la adversidad, es el testimonio vivo de esta transformación. Estos relatos demuestran que, en territorios históricamente abandonados por la banca formal, la economía solidaria se convierte en el primer acto de justicia social y económica. Su éxito radica en una alquimia poderosa: la capacidad de combinar el capital social y la confianza mutua con estrategias inclusivas, un proceso que no solo refuerza el tejido comunitario, sino que ofrece una ruta digna y autónoma lejos de la dependencia o de la lógica de las economías ilícitas.

Para consolidar y escalar estos procesos, se requiere una alianza estratégica que trascienda la mera transferencia de fondos. Es imperativo forjar un pacto robusto entre los gobiernos locales, la cooperación internacional, el sector privado y las organizaciones de base. Los organismos multilaterales deben proveer los recursos financieros y técnicos necesarios, no como un subsidio, sino como una inversión estratégica en un modelo de desarrollo demostrado. La responsabilidad de los gobiernos regionales radica en crear los marcos normativos que formalicen, blinden y reconozcan

estas prácticas ancestrales y culturales como ejes legítimos de la economía del territorio. La cultura misma, ejemplificada en eventos masivos, se convierte en un capital solidario y visible, capaz de generar riqueza y reinvertirla directamente en las iniciativas comunitarias. Solo a través de esta colaboración horizontal, la autonomía del Pacífico pasará de ser un concepto a una realidad plenamente financiada, respaldada y reconocida.

La solidaria en el Pacífico debe trascender la percepción de ser simplemente una estrategia de respuesta a crisis, para consolidarse como un pilar de transformación estructural de largo aliento. Su éxito como paradigma de futuro exige una inversión decidida en innovación tecnológica, la implementación de políticas públicas que la integren de manera prioritaria en los planes de desarrollo y un robusto fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Este modelo ofrece una oportunidad tangible para construir territorios intrínsecamente sostenibles y equitativos, donde la prosperidad ya no dependa de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, sino de la cooperación horizontal, la reciprocidad y la dignidad colectiva de sus pueblos.

4.4.3: Pobreza Multidimensional y Desigualdad Estructural

La pobreza en el Pacífico colombiano no puede reducirse a la falta de ingresos. En los testimonios recogidos durante entrevistas y talleres comunitarios en Tumaco y Buenaventura, líderes sociales insistían en que “la pobreza aquí se mide en horas de camino al hospital, en escuelas que se caen a pedazos, y en la ausencia de empleo digno para los jóvenes”. Esa visión coincide con el enfoque del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que permite evidenciar privaciones simultáneas en educación, salud, vivienda, empleo y servicios básicos. La metodología aplicada incluyó entrevistas semiestructuradas con académicos y representantes de consejos comunitarios, además de un análisis documental de planes de desarrollo

departamentales y estadísticas oficiales del DANE (2024). Estos insumos se contrastaron con la literatura reciente sobre desigualdad territorial en Colombia y América Latina.

Los datos más recientes confirman la persistencia de desigualdades. En 2024, el IPM regional de la Pacífica fue de 11,8 %, con una intensidad promedio de privaciones de 40,3 % (DANE, 2024). Departamentos como Chocó registraron cifras críticas (33,9 %), mientras que Nariño aumentó a 18,1 %, mostrando un retroceso frente al año anterior. Aunque las cabeceras urbanas muestran leves mejoras, en el rural disperso la pobreza sigue siendo alarmante: 45,2 % en Chocó y 24,5 % en Nariño. Estos resultados evidencian una brecha urbano-rural difícil de cerrar sin inversiones sostenidas en infraestructura, conectividad y servicios sociales. La información recogida en talleres comunitarios en Barbacoas y López de Micay refuerza esta lectura: las comunidades afirman que “la ayuda llega primero a la cabecera, al río casi nunca”.

La desigualdad estructural se expresa también en dimensiones de género y etnicidad. Según el DANE (2024), los hogares con jefatura femenina presentan 2,5 puntos porcentuales más de pobreza multidimensional que los liderados por hombres. En las entrevistas realizadas en Tumaco, varias mujeres señalaron que la sobrecarga del cuidado y la falta de empleos formales las empujan a aceptar trabajos informales con bajos ingresos. Estos hallazgos dialogan con estudios que muestran inequidades persistentes en aseguramiento en salud y en oportunidades laborales para población afrodescendiente. Incluso, investigaciones recientes demuestran la existencia de sesgos raciales en los servicios públicos de empleo en Colombia, limitando la contratación de personas afrodescendientes. Este tipo de barreras revela cómo la discriminación implícita reproduce la pobreza más allá de las estadísticas.

La desigualdad estructural que define al Pacífico colombiano se encuentra reforzada por dinámicas históricas que lo inscriben en una

lógica de la dependencia. El territorio ha sido constantemente explotado por modelos de desarrollo extractivistas que han drenado sus recursos estratégicos, dejando a su población con carencias crónicas en educación, salud y vivienda. Esta situación se agrava por el enfoque de modernización crítica, donde los proyectos de infraestructura, diseñados para articular mercados globales y servir al centro del país, pasan por encima del territorio, pero no se detienen en los pueblos. Esta indiferencia profundiza la exclusión y es la prueba más clara de cómo la priorización de intereses externos anula las necesidades locales, perpetuando un modelo de injusticia territorial.

La desigualdad estructural que asfixia al Pacífico se amplifica de manera dramática por los choques ambientales y climáticos, creando un círculo vicioso de vulnerabilidad. La pobreza energética es un ejemplo doloroso: la persistente dependencia de la leña para cocinar, más que una tradición, es la evidencia de que “el gas nunca llega” a las comunidades rurales, impactando directamente en la salud pulmonar de mujeres y niños. A esta precariedad se suma una geografía de riesgo: la alta vulnerabilidad frente a inundaciones y deslizamientos destruye las mínimas infraestructuras, interrumpe el ciclo educativo y bloquea el acceso a servicios de salud esenciales. Esta confluencia de injusticia histórica y crisis ambiental tiene una consecuencia directa y trágica: las poblaciones desplazadas por el conflicto armado en el Pacífico se sitúan sistemáticamente entre los grupos con mayor incidencia de pobreza multidimensional, confirmando que la fragilidad ecológica y la violencia social son dos caras de la misma exclusión.

La evidencia comparada demuestra que el Pacífico comparte rasgos con otras periferias de América Latina, como el nordeste brasileño o la Amazonía peruana, donde la pobreza multidimensional persiste a pesar de crecimientos económicos nacionales. Estas “trampas territoriales” se sostienen en la combinación de debilidad institucional, aislamiento geográfico y concentración de recursos en centros urbanos (Martínez-Alier,

2022b). En este sentido, la desigualdad estructural no solo es económica, sino política: responde a la ausencia histórica de un Estado eficaz y a la subordinación de las comunidades frente a intereses externos.

A partir de este diagnóstico de injusticia estructural, emergen rutas de acción concretas que exigen un cambio de paradigma total. El primer paso es impulsar la transición hacia empleos dignos mediante el apoyo a la producción afro-campesina y bioacuícola a través de la priorización de compras públicas locales. En segundo lugar, es vital priorizar inversiones en conectividad fluvial, vial y digital que reduzcan la distancia al acceso a la salud y la educación. Un tercer eje es la promoción de proyectos de energía comunitaria solar y de cocción limpia para erradicar la pobreza energética. En cuarto lugar, la permanencia escolar debe asegurarse con programas de internados rurales y una efectiva articulación entre educación media y empleo local. Finalmente, el factor transversal es la incorporación rigurosa de un enfoque étnico y de género con presupuestos trazadores que garanticen la reducción efectiva de brechas (Hurtado, 2023).

En síntesis, la pobreza multidimensional en el Pacífico colombiano refleja más que privaciones inmediatas: evidencia un sistema de desigualdad estructural que combina factores históricos, territoriales y sociales. La integración de datos estadísticos, testimonios comunitarios y marcos teóricos permite comprender que las soluciones no son asistenciales, sino transformadoras. Como se concluyó en un taller comunitario en el Bajo Baudó: “No queremos ayudas pasajeras, queremos que nos den herramientas para cambiar nuestra historia”. Ese es, en última instancia, el desafío para las políticas públicas y para la sociedad colombiana en su conjunto.

4.4.4: Proyectos liderados por jóvenes

El liderazgo juvenil en el Pacífico colombiano constituye un factor clave para la transformación social y la sostenibilidad de los territorios.

Aunque históricamente los jóvenes han enfrentado exclusión estructural, precariedad laboral y limitado acceso a educación superior, en las últimas décadas han emergido iniciativas juveniles desde las comunidades que responden a necesidades locales con creatividad e innovación. Estas experiencias muestran que la juventud no es solo receptora de políticas, sino agente activo en procesos de gobernanza, cultura y desarrollo productivo.

Un ejemplo emblemático de esta nueva dinámica de gobernanza es la Red de consejeros de Juventud en Tumaco. Tras las elecciones de 2021, este colectivo ha impulsado mesas de diálogo vinculantes con las instituciones municipales, logrando incluir la perspectiva juvenil en la planificación de proyectos de empleo y educación técnica. Este ejercicio participativo, acompañado por plataformas regionales y respaldado por la cooperación internacional, demuestra un modelo efectivo de incidencia política juvenil que puede y debe ser replicado en otros municipios del Pacífico. La juventud se convierte así en un actor estratégico que transforma la demanda de oportunidades en una participación organizada en la construcción del futuro territorial.

En el ámbito productivo, el Pacífico colombiano emerge como un laboratorio de bioeconomía creativa donde la identidad se convierte en un activo de desarrollo. La juventud afrodescendiente del litoral está liderando esta transición, transformando el conocimiento ancestral de la pesca artesanal y la gastronomía en unidades productivas sostenibles. El acceso estratégico a la microfinanza y la formación empresarial actúa como catalizador para generar una dignidad económica en el territorio. De manera paralela, iniciativas comunitarias han demostrado que la combinación de formación musical, artística y digital constituye la barrera cultural más efectiva para desvincular a los jóvenes de las economías ilegales. Estos casos confirman que el empoderamiento juvenil y la valorización de la cultura son la ruta más sólida y replicable hacia una auténtica paz territorial en la región.

Para que estos procesos no dependan únicamente del entusiasmo comunitario, es necesario avanzar en propuestas operativas y mecanismos específicos. Entre ellos se destacan: i) la creación de fondos de innovación juvenil con aportes estatales y privados que financien proyectos en fases tempranas; ii) el diseño de aceleradoras comunitarias que brinden acompañamiento técnico a emprendimientos juveniles en agroindustria, turismo sostenible y tecnología; iii) la integración de espacios de formación digital y liderazgo en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), asegurando recursos anuales para su implementación; y iv) la adopción de modelos de cogestión donde los consejos comunitarios incluyan cuotas de representación juvenil en órganos de decisión.

La experiencia demuestra que cuando los jóvenes cuentan con apoyo financiero, reconocimiento institucional y espacios de formación, sus proyectos logran escalabilidad y sostenibilidad. Casos como las Escuelas Taller de Tumaco y Buenaventura, apoyadas por el Ministerio de Cultura y la Unión Europea, evidencian que invertir en jóvenes significa invertir en cohesión social, productividad y paz territorial. Estas iniciativas son un recordatorio de que el futuro del Pacífico colombiano depende en gran medida de su juventud organizada, innovadora y resiliente.

CAPÍTULO 05

CONFLICTOS TERRITORIALES

4 5.1: La disputa por tierras y recursos

La disputa por tierras y recursos en el Pacífico colombiano se erige como una de las heridas históricas más profundas y complejas del país. Las comunidades afrodescendientes e indígenas han enfrentado, desde la Colonia hasta el presente, procesos de despojo y marginación que hoy se replican bajo sofisticadas formas de extractivismo. La tragedia reside en una dolorosa paradoja: aunque sus territorios han sido reconocidos jurídicamente como propiedad colectiva y se ha ratificado su carácter inalienable, la implementación efectiva de los derechos colectivos es sistemáticamente débil. Este vacío de gobernanza se convierte en el nicho perfecto para la penetración de actores ilegales y la expansión de economías depredadoras que usurpan el control real sobre el hábitat ancestral.

El marco legal, liderado por la Ley 70 de 1993 y las disposiciones constitucionales de los resguardos indígenas, constituyó un avance ético y jurídico ineludible. No obstante, la promesa de seguridad territorial se ha diluido en la realidad material. La lentitud en la titulación colectiva y las trabas administrativas han convertido la norma en una garantía meramente formal. Existe un abismo evidente entre la velocidad de la

expansión extractiva (legal e ilegal) y el ritmo insuficiente al que avanza la materialización de la seguridad jurídica sobre la tierra. Esta brecha entre el derecho formal y la realidad de la desposesión es, en esencia, la expresión más cruda del racismo institucional que sigue marginando a los pueblos del Pacífico.

La dinámica de despojo se intensifica con una combinación letal de actividades depredadoras: la minería ilegal, la expansión incontrolada de monocultivos (tanto de palma como de coca) y la tala indiscriminada. Estas prácticas no solo desdibujan y transforman los ecosistemas a una velocidad alarmante, sino que simultáneamente alimentan y consolidan economías paralelas dominadas por grupos armados. Este avance extractivo erosiona la capa fértil de los suelos, contamina irremediablemente las fuentes de agua vitales y destruye hábitats clave para la biodiversidad. El crecimiento de la deforestación en la región, críticamente vinculado a la minería y los cultivos ilícitos, es el indicador más claro de que la guerra por los recursos está destrozando el capital natural que sostiene la vida y el futuro de las comunidades.

El impacto de este proceso extractivo es bifronte y devastador. La pérdida de manglares, humedales y los vitales bosques húmedos tropicales del Pacífico afecta directamente la regulación del carbono y el equilibrio climático regional. La destrucción de estos ecosistemas, que poseen una de las mayores capacidades de captura de carbono del planeta, transforma un problema local en una crisis global de sostenibilidad. Esta degradación ecológica reduce drásticamente la resiliencia del territorio frente a los choques climáticos y amenaza a las especies endémicas, demostrando que la guerra por los recursos está destrozando el capital natural que sostiene la vida planetaria.

Las consecuencias sociales que resultan de esta devastación son igualmente graves y sistemáticas. El desplazamiento forzado de comu-

nidades enteras, las amenazas directas contra líderes sociales y la fragmentación del tejido comunitario son fenómenos recurrentes, impulsados por la disputa violenta por el control de las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico. Este escenario de economía de guerra no solo despoja a los habitantes de su tierra, sino que rompe los lazos de reciprocidad y socava la capacidad de transmisión intergeneracional de saberes, debilitando la identidad cultural en su núcleo.

Frente a este panorama de violencia y abandono, la respuesta histórica de los pueblos ha sido el despliegue de una resiliencia organizada. Los consejos comunitarios y cabildos indígenas han fortalecido su gobernanza local mediante la creación de reglamentos internos, asambleas soberanas y sistemas de justicia propia. Estas estructuras de autodeterminación han demostrado ser el escudo más eficaz para defender el territorio, logrando frenar proyectos extractivos depredadores y consolidar prácticas de uso sostenible. La gobernanza étnica se revela, así, como la garantía de cohesión social y la vía para la pervivencia cultural en contextos de altísima conflictividad.

No obstante, estas iniciativas de autogestión enfrentan limitaciones críticas que las condenan a depender del heroísmo voluntario. La falta de financiación estable, la escasez de acompañamiento institucional efectivo y el riesgo persistente de violencia letal contra los líderes generan una profunda fatiga organizativa. Esta vulnerabilidad estructural limita la escalabilidad de las experiencias exitosas. La ausencia de un apoyo estatal y cooperante que sea estructural y no asistencialista perpetúa la fragilidad del Pacífico, incluso cuando sus comunidades demuestran la más alta capacidad de gobernanza y autogestión.

Existen, sin embargo, experiencias positivas que evidencian el potencial de la organización comunitaria. En Tumaco, varios consejos comunitarios han desarrollado planes de manejo ambiental que regulan el uso de los bosques y establecen zonas de conservación. Estas iniciativas,

apoyadas por organizaciones internacionales, han logrado frenar parcialmente la expansión de la palma y fortalecer los ingresos comunitarios a través de proyectos agroforestales. Tales prácticas confirman que, con el respaldo adecuado, la gobernanza local puede contrarrestar dinámicas extractivas (FAO, 2022).

La complejidad territorial exige la articulación de diversos mecanismos para contener el conflicto y el despojo. Los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE), por ejemplo, buscan reconocer económicamente el papel vital de las comunidades en la conservación. Paralelamente, el uso de tecnologías de monitoreo territorial (drones, sensores remotos, SIG) ha demostrado una alta eficacia en la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso. Sin embargo, la simple aplicación de estos instrumentos es insuficiente: su fuerza es nula si se ejecutan de manera aislada y sin criterios de priorización territorial que definan dónde y cómo deben ser aplicados para ser verdaderamente efectivos.

Para avanzar hacia soluciones escalonadas y sostenibles, es ineludible diseñar una tipología de territorio que guíe la acción del Estado y la gestión comunitaria. Esta herramienta analítica debe fundamentarse en la intersección de tres variables críticas: el nivel de presión extractiva que soporta cada zona, el grado de organización comunitaria preexistente (que determina su capacidad de respuesta) y la relevancia de su conectividad ecológica (su valor biocultural). Al definir estos patrones, se puede pasar de una política pública generalista a una estrategia quirúrgica que invierte recursos donde la necesidad, el potencial de conservación y la gobernanza étnica son máximos.

Tabla 1. Tipología de territorios en el Pacífico colombiano

Tipo de territorio	Características principales	Acciones prioritarias	Ejemplo real
Zonas con alta presión extractiva y baja organización comunitaria	Alta presencia de minería ilegal, cultivos ilícitos o deforestación. Escasa capacidad organizativa local. Alto riesgo de violencia.	Control territorial inmediato, restitución de tierras, programas de sustitución productiva básica.	Zonas mineras en el Chocó con expansión de retroexcavadoras ilegales.
Zonas con organización comunitaria fuerte y presión extractiva media	Comunidades con consejos comunitarios o cabildos consolidados. Presencia de monocultivos o presión agroindustrial.	Fortalecimiento de la gobernanza local, implementación de Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE), planes de manejo ambiental con apoyo estatal.	Consejos comunitarios de Tumaco enfrentando la expansión de palma aceitera.
Zonas con alta conectividad ecológica y baja presión actual	Territorios estratégicos para corredores bioculturales y conservación. Menor presión extractiva inmediata.	Inversión en conservación preventiva, monitoreo con SIG y drones, promoción de economías sostenibles (agroforestería, ecoturismo).	Corredores bioculturales en la frontera Nariño–Ecuador.

Fuente esta investigación.

La aplicación de esta tipología territorial no debe entenderse en ningún caso como un ejercicio abstracto o burocrático, sino como una herramienta práctica y ética para asignar los escasos recursos de manera más justa y efectiva. La combinación de la cartografía social participativa (que integra el conocimiento local) con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite trazar un mapa real de los riesgos de deforestación y superponerlos con los indicadores de organización comunitaria. El resultado de esta articulación son mapas de prioridad que no solo identifican dónde está la amenaza, sino dónde está la capacidad de resistencia, orientando así las inversiones y el acompañamiento técnico. Estas metodologías ya se aplican con éxito en la región, demostrando que la gestión comunitaria del monitoreo es clave para proteger el capital natural. La justicia en la inversión comienza cuando se permite al territorio hablar con sus propios datos.

Con un enfoque diferenciado, los mecanismos de intervención adquieren una eficacia estratégica superior. La titulación colectiva, por ejemplo, cobra su sentido más profundo y su urgencia legal si se priorizan los territorios con la mayor vulnerabilidad histórica frente al despojo, no los de menor conflicto. Los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) deben concentrarse en las zonas con la más fuerte organización comunitaria, capitalizando la gobernanza ya existente. Las tecnologías de monitoreo, por su parte, demuestran su máxima utilidad en los territorios de alta conectividad ecológica, donde la prevención inmediata del daño es la estrategia central y menos costosa.

Desde una perspectiva de política pública, esta tipología territorial no es solo un mapa, sino una ruta política clara para articular los esfuerzos dispares del Estado, la cooperación internacional y las comunidades. Su inclusión formal en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en la política nacional de tierras permitiría una focalización quirúrgica de las intervenciones. Al evitar la dispersión de recursos y al invertir donde la resiliencia es mayor y la amenaza más alta, se aumenta drásticamente la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de los proyectos.

En conclusión, la disputa por tierras y recursos en el Pacífico colombiano jamás podrá resolverse con soluciones homogéneas diseñadas desde el centro. Solo mediante un enfoque integral y multinivel, acompañado de una estrategia escalonada por tipologías territoriales, será posible garantizar la justicia territorial, blindar los ecosistemas estratégicos y asegurar la sostenibilidad y la autodeterminación de las comunidades étnicas. Este camino, aunque complejo y plagado de riesgos, representa la oportunidad histórica de transformar los conflictos más persistentes de la nación en escenarios de paz verdadera y desarrollo sostenible.

4.5.2 Impacto del narcotráfico en el territorio.

El narcotráfico en el Pacífico colombiano dejó de ser una economía subterránea hace mucho tiempo; hoy se ha metamorfoseado en una fuerza geopolítica que reestructura, a la fuerza, la vida social, política y ambiental de la región. Las comunidades afrodescendientes e indígenas, cuya existencia se ha anclado históricamente en la bioeconomía del bosque y el río (la pesca de subsistencia, la agricultura de autoconsumo), se han visto forzadas a ingresar a la lógica devastadora de una economía de guerra que subordina el capital natural al lucro transnacional.

La consecuencia más insidiosa de esta imposición es la erosión de la soberanía alimentaria. La coca, con su promesa de renta rápida y liquidez garantizada, reemplaza los cultivos fundamentales: el maíz, la yuca y el plátano que sustentan la vida y la cultura. Este cambio de uso del suelo no es solo una transacción económica; es un acto de violencia cultural que destruye la autonomía alimentaria de los hogares, obligándolos a depender de mercados externos para su subsistencia y condenándolos a un ciclo de vulnerabilidad.

En el plano ambiental, el impacto es de una magnitud estratégica que trasciende las fronteras. La deforestación masiva para abrir campos de

cultivo, la contaminación química irreversible de los ríos por los precursores y la presión sobre manglares y humedales degradan ecosistemas que son vitales sumideros de carbono. La pérdida de estos bosques húmedos del Pacífico no es solo una tragedia nacional, sino un problema global que debilita la capacidad de la humanidad para mitigar la crisis climática, señalando al narcotráfico como un motor clave de la destrucción biocultural.

Donde el Estado legítimo ha sido históricamente débil o ausente, el narcotráfico ha impuesto su propio orden. Los grupos armados ilegales ejercen un control territorial totalitario, asumiendo de facto la función de gobierno: imponen normas de convivencia, restringen la movilidad comunitaria y deciden quién tiene derecho al uso de los recursos. Esta tiranía de las armas transforma la vida política, socavando los cimientos de la gobernanza ancestral de consejos comunitarios y cabildos indígenas, reemplazando la justicia propia por el miedo.

El costo humano de esta reconfiguración es insoportable. El control territorial se traduce en desplazamiento forzado masivo, amenazas directas y selectivas contra líderes sociales, y la fragmentación de los lazos comunitarios. Las comunidades se ven obligadas a abandonar sus territorios colectivos, lo que genera un trauma crónico que rompe la continuidad cultural y la transmisión intergeneracional de saberes esenciales para la pervivencia. La población del Pacífico se convierte en víctima y, a menudo, en rehén de una guerra ajena.

Es crucial comprender que la participación de algunas comunidades en la cadena del narcotráfico no es una elección económica libre, sino una paradoja ética de la subsistencia. La falta de vías de acceso, la ausencia de mercados para productos lícitos y la inacción estatal hacen que la coca se convierta, irónicamente, en la única opción de subsistencia garantizada que llega hasta el río. La rentabilidad y la rapidez del pago superan la precariedad de la economía legal, obligando a los pueblos a transitar entre la dignidad y la necesidad.

A pesar de la violencia sistemática, el Pacífico ha demostrado una capacidad de resistencia indomable. Consejos comunitarios, asociaciones de mujeres y líderes indígenas han emprendido procesos de sustitución voluntaria y colectiva, reactivando proyectos de cacao, café y artesanías. Estas iniciativas, a menudo apoyadas por una cooperación internacional con visión, se sostienen en la autonomía de la organización propia, demostrando que la voluntad de los pueblos es el primer y más vital motor para construir alternativas al margen de la ilegalidad.

Sin embargo, el tránsito desde economías ilícitas hacia proyectos productivos dignos y sostenibles está plagado de obstáculos estructurales. La experiencia nacional ha demostrado que la falta de cumplimiento estatal en la entrega de apoyos técnicos y económicos prometidos genera una profunda desconfianza y fatiga organizativa. La sostenibilidad de cualquier alternativa productiva se diluye cuando el Estado no articula un compromiso verificable a largo plazo, dejando a las familias en la indefensión y validando, por omisión, la rentabilidad de la ilegalidad.

La clave para desarticular el narcotráfico no reside únicamente en proveer un cultivo sustituto, sino en transformar las estructuras de desigualdad que lo hacen viable. Esto implica una inversión estratégica: conectividad fluvial y digital que permita el acceso a mercados y servicios; proyectos de energía limpia para erradicar la pobreza energética; y acompañamiento técnico continuo. Solo los proyectos que sustituyen el cultivo ilegal al mismo tiempo que modifican las condiciones de exclusión histórica tienen una oportunidad real de éxito.

El cambio de paradigma es ineludible: se debe pasar de una “guerra contra las drogas” fallida a un enfoque de transformación estructural que integre la voz comunitaria en el diseño de políticas. La construcción participativa de planes, el respeto a la autonomía de los cabildos y la priorización de mujeres y jóvenes como líderes de la nueva economía son componentes esenciales para la legitimidad. Este es el camino para que

el Pacífico transforme su sufrimiento histórico en un pacto de dignidad y prosperidad para Colombia.

4.5.2.1 Cooperación Internacional como Eje Transformador en el Pacífico Colombiano.

La cooperación internacional se ha consolidado como un eje estratégico para enfrentar los impactos del narcotráfico y promover el desarrollo sostenible en el Pacífico colombiano. Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Verde para el Clima han demostrado que sus inversiones no solo generan impactos ambientales positivos, sino también beneficios económicos de amplio alcance. Según el BID (2023), cada dólar invertido en proyectos de conservación puede generar hasta tres dólares en beneficios económicos indirectos, lo que refuerza la importancia de alinear la cooperación con las agendas de desarrollo territorial.

Asimismo, la cooperación internacional debe impulsar la creación de plataformas de soberanía tecnológica y monitoreo comunitario. Estos sistemas (que incluyen el uso de drones, sensores y herramientas digitales) no deben ser vistos como mecanismos de control externo, sino como instrumentos de empoderamiento entregados a la vigilancia ancestral. La experiencia regional demuestra que cuando las comunidades indígenas y afrodescendientes asumen el control directo de la detección temprana de amenazas, la deforestación se reduce drásticamente. Adaptar y apropiar estas herramientas en el Pacífico es esencial para optimizar la gestión territorial y fortalecer la capacidad de respuesta autónoma frente a la expansión extractiva.

Un mecanismo innovador y urgente es el establecimiento de Fondos Comunitarios de Resiliencia. Estos fondos están diseñados para romper el paradigma de la dependencia, canalizando los recursos financieros di-

rectamente a las manos de las organizaciones locales que son legítimas en el territorio. Este modelo promueve un sentido de propiedad comunitaria y asegura que las iniciativas respondan con precisión a las prioridades definidas por los pueblos. La evidencia indica que la descentralización de recursos y el fortalecimiento de la confianza mutua generan tasas de éxito superiores a las de los esquemas centralizados, permitiendo financiar con eficacia agroindustrias sostenibles, bioproductos marinos y, crucialmente, los emprendimientos liderados por las mujeres y jóvenes del Pacífico.

La cooperación debe entender que la restauración ecológica de los territorios no es solo una acción ambiental, sino un acto fundamental de la ecología de la paz. Al sanar las tierras devastadas por los cultivos ilícitos mediante proyectos de reforestación que usan especies nativas, se activa una economía de la esperanza: se crean empleos dignos, se restauran los ciclos de vida y se le ofrece a la comunidad una alternativa de subsistencia más rentable que la guerra. La evidencia global respalda esta tesis: invertir en la salud del ecosistema desactiva la dependencia del negocio ilegal, demostrando que la rentabilidad de la vida supera la rentabilidad del crimen.

El paradigma de la cooperación debe romper el centralismo financiero mediante el establecimiento de Fondos Comunitarios de Resiliencia. Estos fondos están diseñados para canalizar los recursos directamente hacia los proyectos gestados y liderados por las organizaciones de base, eliminando intermediarios y burocracias ineficientes. Este modelo no solo garantiza que las iniciativas respondan con precisión a las prioridades territoriales, sino que reconstruye el activo más importante: la confianza mutua. Al descentralizar el poder de decisión, la cooperación fortalece la autonomía de las mujeres, los jóvenes y los líderes, y asegura que la inversión sea una palanca de dignidad que impulse agroindustrias, bioproductos y emprendimientos con identidad.

4.5.2.2 La Conectividad Digital como Motor de Transformación Regional

El fortalecimiento de la infraestructura digital en el Pacífico colombiano ya no es una comodidad; es una condición indispensable para desmantelar las barreras históricas de exclusión que han limitado su desarrollo. La realidad de la mayoría de las zonas rurales, que carecen de acceso a internet de alta velocidad, constituye una nueva forma de apartheid tecnológico. Superar esta brecha no solo habilitaría la participación de las comunidades en la economía global de servicios y conocimiento, sino que, crucialmente, potenciaría la innovación local, facilitaría el comercio electrónico directo de sus productos artesanales y permitiría el acceso universal a plataformas de formación en línea, rompiendo el aislamiento geográfico.

Una infraestructura digital robusta tiene el potencial de integrarse de forma revolucionaria con sectores estratégicos como la bioeconomía y los sistemas agroforestales. Las tecnologías de la información permiten el monitoreo en tiempo real de cultivos, optimizando las cadenas productivas y facilitando el acceso directo a información de mercados sin la intermediación que reduce las ganancias locales. La experiencia en otras regiones rurales de América Latina demuestra un incremento tangible en la productividad agrícola gracias a las aplicaciones de análisis climático y las plataformas digitales de comercialización. Esta integración, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia, promueve prácticas sostenibles al reducir el desperdicio y mejorar la gestión del valioso capital natural.

El acceso a la educación digital a través de plataformas de *e-learning* se revela como una palanca de dignidad capaz de desmantelar la exclusión educativa. Estos programas, cuando son diseñados con una profunda pertinencia cultural, brindan a las comunidades acceso a conocimientos estratégicos en gestión empresarial, bioeconomía, agroecología y conservación ambiental. El internet no solo amplía las oportunidades individuales,

sino que fortalece el tejido comunitario al generar un círculo virtuoso de conocimiento compartido y refuerza las capacidades locales para liderar proyectos innovadores. La participación en la formación continua, habilitada por la red, es la vía para que los pueblos del Pacífico se conviertan en los arquitectos tecnológicos de su propio desarrollo sostenible.

Garantizar la conectividad digital en el Pacífico colombiano requiere abandonar el asistencialismo y adoptar un enfoque colaborativo y estratégico que involucre al Estado, las empresas de tecnología y los organismos internacionales. La inversión en infraestructura digital no es un gasto, sino una inversión con un potente multiplicador social: cada dólar invertido se traduce en beneficios indirectos como el incremento de la empleabilidad, la formalización de mercados éticos y una mayor eficiencia institucional. Al articular estratégicamente esta infraestructura con programas de capacitación productiva y desarrollo empresarial, se puede crear un ecosistema digital integral capaz de posicionar al Pacífico no solo como un receptor de ayuda, sino como un referente de innovación, resiliencia y sostenibilidad en América Latina.

4.5.2.3 Fortaleciendo la Justicia para Combatir el Narcotráfico.

La lucha contra el narcotráfico en el Pacífico exige una comprensión más profunda que la mera incautación de estupefacientes. El crimen ha prosperado por la convergencia de dos catástrofes estructurales: la debilidad endémica de las instituciones de justicia y la exclusión económica que ha condenado a las comunidades locales al abandono. Ninguna estrategia de seguridad será duradera si no logra dismantelar simultáneamente esta doble injusticia la falta de ley y la falta de oportunidades en los territorios más remotos. La impunidad, en este contexto, es la garantía invisible que permite la perpetuación de las economías ilícitas.

El sistema judicial colombiano se revela sistémicamente impotente ante la magnitud y la sofisticación del narcotráfico. La alarmante tasa de casos que se diluyen sin llegar a juicio consolida una profunda y generalizada sensación de impunidad. En territorios como Tumaco y Buenaventura, esta debilidad ha permitido que los actores ilegales establezcan un control armado que suple la ausencia estatal, imponiendo su propia justicia y sus propias normas. La solución pasa por un blindaje tecnológico y humano: digitalizar los expedientes e invertir de forma masiva en la formación de jueces y fiscales especializados en delitos ambientales y de drogas es el primer paso para transformar los procesos lentos en mecanismos rápidos, transparentes y efectivos contra la corrupción.

Sin embargo, la justicia penal, por sí sola, es insuficiente para sanar el Pacífico. La verdadera transformación reside en la justicia restaurativa, un camino que prioriza la reparación del daño ecológico y social y la reintegración comunitaria sobre el simple castigo punitivo. Modelos que integran la participación de los pueblos en la resolución de disputas territoriales, como se observa en Guapi, generan una legitimidad social que la justicia formal ha perdido. La justicia, en este contexto, debe ser una herramienta para reconstruir el tejido social roto por la violencia, devolviendo la capacidad de autogestión y paz a las manos de las comunidades, priorizando la vida sobre la renta.

El respaldo internacional es un catalizador decisivo en esta ecuación para la justicia. La capacitación judicial, la creación de unidades especializadas y la transferencia tecnológica apoyadas por la cooperación incrementan significativamente las tasas de condena efectiva. Replicar estos esquemas de alta especialización en el Pacífico no es solo reforzar el Estado de derecho; es enviar un mensaje político contundente a las economías ilegales de que la impunidad que les ha permitido florecer está terminada. La cooperación, en este ámbito, se traduce en justicia tangible para las víctimas y en un blindaje institucional indispensable para el futuro de la región.

El narcotráfico ha superado la esfera del crimen organizado para erigirse en una fuerza estructural que reconfigura violentamente el Pacífico. Ya no es una actividad marginal, sino el eje de un narcocapitalismo que impone su liquidez por encima del derecho. Las comunidades afrodescendientes e indígenas, cuya vida se ha sostenido históricamente en la bioeconomía del manglar y el bosque, se encuentran atrapadas en una economía de guerra que subordina su conocimiento ancestral al lucro. La riqueza del territorio se convierte en una maldición que atrae la violencia y la desposesión.

La consecuencia más insidiosa de esta imposición es el asedio a la soberanía alimentaria. El monocultivo de coca, con su promesa de renta rápida, devora los cultivos que garantizan la vida: el plátano, el maíz y la yuca. Este cambio forzado en el uso del suelo no es solo una transformación productiva; es un acto de violencia cultural que destruye la autonomía de los hogares, obligándolos a depender de un mercado externo volátil para su sustento. El paisaje de la subsistencia es reemplazado por la uniformidad de un cultivo que siembra dinero rápido, pero cosecha hambre silenciosa.

En el plano ambiental, el impacto es una catástrofe ecosistémica con repercusiones globales. La deforestación masiva para abrir campos y la contaminación química de los ríos con precursores son un doble crimen contra el capital natural. El bosque húmedo tropical, uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, es destruido, debilitando la capacidad de la humanidad para mitigar la crisis climática. La contaminación envenena las fuentes de agua, destruye la fauna y genera una muerte lenta de los ecosistemas vitales para la resiliencia del territorio.

Donde el Estado legítimo ha cedido su monopolio de la fuerza, el narcotráfico ha instalado un Estado paralelo. Los grupos armados imponen una tiranía de facto que regula la vida cotidiana, restringe la movilidad comunitaria y usurpa el control sobre los recursos. Esta imposición vio-

lenta socava directamente la gobernanza étnica de consejos comunitarios y cabildos indígenas, deslegitimando las formas de justicia y autoridad propia y reemplazándolas con el silencio forzado y el miedo.

El costo humano se manifiesta en un trauma crónico. El desplazamiento forzado masivo se convierte en la única respuesta posible a la violencia, fracturando el tejido social que ha sostenido a las comunidades por siglos. Las amenazas selectivas contra líderes sociales y ambientales no son accidentales; son una estrategia de exterminio cultural que busca decapitar la gobernanza comunitaria y evitar la transmisión intergeneracional de la resistencia. La vida colectiva se rompe y la memoria del territorio se pone en riesgo.

A pesar de la ferocidad del asedio, la respuesta de los pueblos ha sido la resistencia organizada. Consejos comunitarios, colectivos juveniles y, crucialmente, las asociaciones de mujeres han promovido la sustitución voluntaria y la reactivación de prácticas agrícolas tradicionales. Proyectos de cacao, ecoturismo y artesanías emergen como baluartes de la dignidad, demostrando que la voluntad comunitaria y la creatividad biocultural son la primera y más poderosa línea de defensa contra la ilegalidad.

No obstante, el tránsito a la legalidad es una ruta llena de obstáculos. La experiencia ha demostrado que el compromiso del Estado ha sido históricamente frágil. Cuando miles de familias erradicaron voluntariamente, la falta de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos y técnicos por parte del gobierno creó una profunda fatiga y desconfianza. Este aprendizaje es crucial: la sostenibilidad de las alternativas no depende de la voluntad de la comunidad, sino de la articulación institucional y de la existencia de un compromiso estatal verificable que compita en seriedad con la rentabilidad criminal.

La superación de la dependencia ilegal reside en la capacidad del Pacífico de mirar hacia su propio potencial: el tesoro biocultural contenido en sus más de 9.000 especies endémicas. La bioeconomía ofrece la vía para transformar este patrimonio en un activo sostenible. Cooperativas que han logrado el sello de comercio justo para el cacao han duplicado su valor de exportación, mientras el ecoturismo comunitario posiciona la conservación como una fuente de ingreso superior a la extracción. La clave está en convertir la biodiversidad en riqueza sin destruirla.

La solución definitiva no está en la erradicación forzada ni en el castigo aislado, sino en transformar las estructuras de desigualdad que hacen de la coca una opción viable. Esto exige una inversión masiva y estratégica en: conectividad fluvial para asegurar el acceso a la salud; infraestructura digital para la educación y los mercados; y formalización de las economías populares para garantizar la protección social. Los proyectos que solo sustituyen el cultivo sin modificar el horizonte de la dignidad están condenados al fracaso.

En última instancia, la lucha contra el narcotráfico exige un cambio radical de paradigma de la “guerra contra las drogas” a un modelo de Paz Territorial que integre justicia y desarrollo. Esto implica garantizar que la justicia castigue la impunidad y, al mismo tiempo, que la economía popular ofrezca una alternativa digna y sostenible. La voz de los pueblos del Pacífico es la brújula: “Nuestra lucha no es solo contra la coca, sino por la dignidad y el derecho a vivir de la tierra sin miedo”. Este es el desafío que debe asumir la sociedad colombiana.

Tabla 2. Justicia vs. Economía Popular frente al narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Dimensión	Problema actual	Estrategia de justicia	Estrategia de economía popular	Impacto esperado
Impunidad judicial	70 % de los casos no llegan a juicio (Banco Mundial, 2024).	Formación de jueces/fiscales especializados y digitalización de procesos.	—	Reducción de la corrupción y mayor confianza comunitaria en el Estado.
Despojo territorial	Grupos armados regulan el acceso a tierras y recursos.	Justicia restaurativa y acuerdos comunitarios para resolver disputas.	Formalización de tierras y apoyo a cooperativas productivas.	Recuperación de derechos colectivos y cohesión comunitaria.
Exclusión económica	60 % de la población depende de la informalidad (DNP, 2023).	Procesos judiciales contra redes de lavado de activos.	Microcréditos, agroindustrias comunitarias y cadenas de comercio justo.	Disminución de la dependencia de economías ilícitas.
Vulnerabilidad social	Jóvenes y mujeres cooptados por actores ilegales.	Justicia con enfoque diferencial y programas de reintegración.	Cooperativas lideradas por mujeres y jóvenes en agroforestería, pesca y turismo.	Inclusión social y liderazgo local.
Economías ilícitas	Producción de coca como principal fuente de ingresos rurales.	Persecución penal y protección a líderes sociales.	Bioeconomía, turismo comunitario y certificaciones de comercio justo.	Sustitución real de economías ilícitas por proyectos sostenibles.

Fuente: Esta investigación

En primer lugar, la tabla revela que la impunidad judicial es una de las principales grietas que alimentan el narcotráfico. Con un 70 % de los casos que no llegan a juicio, según el Banco Mundial (2023), la ausencia de sanción refuerza el control ilegal de los territorios. La estrategia de fortalecer la justicia mediante formación de jueces especializados y digitalización de procesos se complementa con la economía popular, al ofrecer confianza y legitimidad en las instituciones. Sin justicia efectiva, las comunidades difícilmente se comprometerán con proyectos de sustitución económica.

El despojo territorial aparece como otro eje crítico: los grupos armados no solo controlan economías ilícitas, sino también imponen formas de regulación social. La justicia restaurativa y los acuerdos comunitarios se convierten en herramientas para mediar disputas, mientras que la formalización de tierras y el apoyo a cooperativas productivas aseguran que los beneficios de la tierra retornen a quienes la habitan. Aquí la tabla muestra un vínculo claro: sin propiedad colectiva protegida, cualquier iniciativa económica queda expuesta a la captura de actores ilegales.

La exclusión económica se evidencia en que el 60 % de la población depende de la informalidad (DNP, 2023). La tabla subraya que no basta con judicializar las redes de lavado, sino que se requieren microcréditos, agroindustrias comunitarias y cadenas de comercio justo. El contraste es revelador: mientras la justicia limita la expansión de redes criminales, la economía popular abre espacios de desarrollo legal que permiten a las comunidades visualizar un futuro viable.

En cuanto a la vulnerabilidad social, jóvenes y mujeres han sido históricamente cooptados por economías ilícitas. La tabla señala que la justicia con enfoque diferencial y programas de reintegración deben ir de la mano con cooperativas lideradas por estos grupos. De esta manera, se rompe el círculo de marginalidad al transformar a quienes eran considerados eslabones débiles en agentes activos de resiliencia y liderazgo comunitario.

Finalmente, la tabla evidencia que las economías ilícitas se sostienen en la falta de alternativas. La persecución penal a los eslabones de la cadena y la protección a líderes sociales son importantes, pero solo alcanzan impacto si se articulan con proyectos de bioeconomía, turismo comunitario y certificaciones de comercio justo. En palabras simples: no basta con “erradicar la coca”; hay que construir mercados para el cacao, el plátano, la pesca artesanal y otros productos del territorio.

El análisis de la tabla comparativa muestra que la verdadera innovación no radica en elegir entre justicia o economía, sino en tejerlas de manera simultánea y complementaria. La justicia ofrece la base de confianza y protección, mientras que la economía popular otorga los medios para vivir dignamente. Esta convergencia responde al llamado de las comunidades del Pacífico, que reclaman no solo seguridad, sino también oportunidades reales para existir fuera de la ilegalidad. En conclusión, el valor de la tabla no está únicamente en la comparación, sino en el mensaje profundo que encierra: el narcotráfico solo puede ser combatido si se atienden de forma coordinada las raíces judiciales, sociales y económicas del problema.

La cooperación internacional puede ser un catalizador en este modelo integral. El BID (2023) estima que cada dólar invertido en programas de desarrollo comunitario genera hasta tres dólares en beneficios indirectos. Si estas inversiones se alinean con una justicia fortalecida, mecanismos de economía popular y la participación de las comunidades, el Pacífico colombiano puede convertirse en un ejemplo global de cómo enfrentar el narcotráfico desde un enfoque de justicia social, inclusión económica y sostenibilidad ambiental.

4.5.2.4 Educación Transformadora: “Un Camino hacia la Resiliencia y el Desarrollo en el Pacífico Colombiano”

La educación como motor de transformación en el Pacífico colombiano es una estrategia fundamental para abordar las desigualdades estructurales y las economías ilícitas que han afectado a la región por décadas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2024), más del 30 % de los jóvenes en los departamentos del Pacífico abandonan la escuela antes de completar la educación secundaria, lo cual perpetúa la exclusión social y limita las oportunidades de desarrollo. Este desafío requiere una inversión integral en programas educativos diseñados específicamente para el contexto local, incluyendo el fortalecimiento de capacidades en agroindustria, gestión de recursos naturales y liderazgo comunitario.

Un enfoque innovador sería la creación de “Centros de Educación y Resiliencia Territorial”, instituciones que combinen formación técnica con educación en sostenibilidad y cultura. Estos centros podrían ofrecer programas en agroecología, bioeconomía y turismo sostenible, sectores con alto potencial en la región. Invertir en educación adaptada a las necesidades territoriales mejora las tasas de empleo y fortalece la cohesión social, al proporcionar herramientas prácticas para generar ingresos legales en comunidades rurales. Por ejemplo, estudiantes podrían aprender a transformar productos locales, como cacao y coco, en bienes de alto valor agregado para mercados nacionales e internacionales.

La infraestructura educativa en el Pacífico debe ser objeto de una modernización urgente y estratégica para garantizar el acceso universal a las tecnologías digitales. La realidad de que la mayoría de las zonas rurales carecen de internet de alta velocidad es un acto de exclusión institucional que niega el acceso a la información y a la economía del conocimiento.

Equipar las escuelas con conectividad y laboratorios tecnológicos no es un mero avance logístico; es una estrategia para erradicar la brecha digital y habilitar programas de educación a distancia. Al conectar a las comunidades con universidades y centros de formación global, se siembra la semilla de la innovación local y se garantiza que el conocimiento ancestral pueda dialogar con las herramientas del siglo XXI. La evidencia demuestra que las regiones que dan este salto multiplican su productividad y su autonomía, haciendo de la educación la palanca de la dignidad y la sostenibilidad.

El papel de las comunidades locales es ineludiblemente el eje central en el diseño de estas estrategias. Involucrar directamente a líderes, maestros y estudiantes no es un mero requisito, sino la garantía de que los programas sean culturalmente pertinentes y respondan a las prioridades reales del territorio. La evidencia global es contundente: las iniciativas educativas que gozan de una profunda participación comunitaria tienen mayores probabilidades de ser sostenibles a largo plazo. Integrar los saberes ancestrales en el currículo formal no solo es un acto de preservación cultural, sino que refuerza el sentido de pertenencia y el compromiso juvenil hacia sus territorios, transformando el conocimiento en arraigo y resiliencia.

Además de la educación formal, los programas de mentoría y las becas para jóvenes con potencial de liderazgo se convierten en una estrategia de inversión social con alto rendimiento. Estos programas no solo proporcionan acceso a la formación técnica y profesional, sino que forjan redes de apoyo sólidas para el emprendimiento local y la innovación. El Banco Mundial documenta que los programas de mentoría en comunidades vulnerables aumentan significativamente las tasas de empleo formal, actuando como un escudo protector que reduce la dependencia de economías ilícitas. Al invertir en el liderazgo joven, se asegura que la nueva generación posea las herramientas para transformar el Pacífico.

El impacto positivo de estas estrategias no se confina a la esfera local; irradia un efecto multiplicador decisivo para el desarrollo nacional. El Banco Mundial y otros organismos han demostrado que cada dólar invertido en la educación rural genera un retorno significativamente mayor en beneficios económicos y sociales. Este efecto subraya la urgencia ética y económica de priorizar la educación como el eje central de cualquier plan de desarrollo sostenible en el Pacífico. Al equipar a las comunidades con las herramientas del conocimiento pertinente, el Estado no solo salda una deuda histórica, sino que desbloquea el potencial productivo de una de las regiones más ricas del planeta.

Transformar la educación en el Pacífico es mucho más que un acto de justicia social; constituye una inversión estratégica para el futuro de todo el país. Un enfoque integral que combine la modernización de la infraestructura con la inclusión digital, la pertinencia cultural y la participación comunitaria permitirá forjar un modelo educativo que reduzca las desigualdades estructurales e inspire a las nuevas generaciones a liderar la sostenibilidad de sus propios territorios. La inmensa riqueza cultural y natural del Pacífico debe ser el núcleo fundacional de esta gran transformación, consolidando a la región no solo como un referente de biodiversidad, sino como un modelo global de resiliencia y desarrollo con dignidad.

4.5.3 Conflictos ambientales y resistencia local

Los conflictos ambientales en el Pacífico colombiano trascienden la mera disputa por tierras o el impacto colateral del narcotráfico; constituyen una dimensión autónoma de violencia ecológica, marcada por la degradación sistémica que amenaza la supervivencia biocultural. La minería ilegal de oro, la tala indiscriminada y la expansión violenta de monocultivos conforman un frente de presión extractiva insostenible, generando una vertiginosa pérdida de biodiversidad y una fragmentación irreversible de ecosistemas estratégicos como los manglares y las selvas húmedas. Al

concentrar una porción crítica de la deforestación nacional, el Pacífico se convierte en el epicentro de un crimen ambiental que no solo aniquila el capital natural de la nación, sino que expone la fragilidad de un territorio inmensamente rico bajo una explotación sin ley.

A diferencia de la violencia visible de las armas, aquí el impacto reside en la contaminación silenciosa de la vida: los ríos se envenenan con mercurio, los suelos fértiles sufren erosión terminal y la desaparición de especies endémicas quiebra la cadena de vida. Estas heridas ecológicas se traducen directamente en una crisis alimentaria y sanitaria para las comunidades indígenas y afrodescendientes, que dependen intrínsecamente del río y el bosque para su sustento. La degradación ambiental se convierte así en una ruptura del nexo cultural y espiritual de los pueblos, para quienes la selva y el agua no son recursos, sino una extensión de su propia identidad. El daño ecológico es, por definición, una herida en el alma colectiva.

Frente a esta avanzada de la devastación, la respuesta de las comunidades se alza como una barricada inquebrantable de resiliencia. La resistencia local no es un acto espontáneo, sino la manifestación de una gobernanza étnica históricamente consolidada. Mediante la articulación de reglamentos internos, sistemas de justicia propia y la defensa activa del territorio, los pueblos del Pacífico logran transformar el conflicto ambiental en una plataforma de autodeterminación. Esta capacidad de autogestión y persistencia es la garantía moral que demuestra que la única ruta posible hacia la paz y el desarrollo sostenible pasa por el reconocimiento y el blindaje de la soberanía biocultural del territorio.

Las comunidades han respondido a la avanzada destructiva del extractivismo con estrategias de resistencia ambiental que integran lo ancestral con lo digital. El monitoreo comunitario se ha convertido en una de estas prácticas, combinando tecnologías de vanguardia (como drones y sistemas de información geográfica) con el conocimiento milenario sobre

los ecosistemas. Este ejercicio de soberanía tecnológica no solo cumple un rol técnico al documentar con precisión los daños ambientales, sino que fortalece la autonomía y la capacidad de negociación política de los pueblos. Al generar sus propios datos, las comunidades transforman el rol de la víctima en el de guardián empoderado que utiliza la evidencia para respaldar denuncias ante los tribunales globales.

La creación de reservas comunitarias y áreas protegidas bajo el control étnico es otra estrategia que consolida esta resistencia. Los consejos comunitarios afrodescendientes e indígenas han delimitado de forma autónoma territorios para blindar los bosques primarios y los manglares, actuando como la barricada más efectiva contra el avance de proyectos depredadores. Estas reservas cumplen una función trascendental: son reservorios de biodiversidad, refugio para especies amenazadas y, crucialmente, espacios de educación ambiental que fortalecen la identidad. Esta autogestión territorial, ilustrada por la experiencia del Consejo Comunitario del Río Naya, demuestra que la gobernanza étnica es la única garantía real de que el bosque y la vida colectiva perdurarán.

La educación ambiental, liderada por la resiliencia de las mujeres y la energía de los jóvenes, se ha consolidado como una barricada biocultural en municipios como Guapi y Tumaco. Talleres de agroecología, la recuperación de semillas nativas y la gestión sostenible del agua no son solo estrategias productivas; son la defensa activa de un modelo de vida. La evidencia confirma que las comunidades que integran el conocimiento ancestral en sus planes educativos tienen una capacidad superior para sostener las iniciativas de conservación. La educación, en este contexto, es la herramienta clave que blindas el sentido de pertenencia y asegura que el compromiso juvenil se traduzca en una resistencia duradera frente a la crisis climática y extractiva.

Un aspecto innovador es la articulación estratégica de la resistencia con mecanismos económicos como los Pagos por Servicios Ecosistémicos

(PSE). Estas iniciativas permiten que las comunidades reciban un incentivo legítimo por su labor de custodios de los bosques y las cuencas hídricas, generando ingresos que desincentivan las prácticas extractivas. La comparación internacional nutre esta lucha: el Pacífico comparte lecciones con la Amazonía peruana (uso de drones contra la minería), con Ecuador (litigios ambientales exitosos) y con Brasil (agroecología quilombola). Estos ejemplos demuestran que la lucha del Pacífico no es un caso aislado, sino parte de una resistencia global que puede y debe nutrirse de alianzas legales y aprendizajes regionales.

La cooperación internacional tiene un papel dual: transferir soluciones prácticas y legitimar la lucha. El desarrollo de programas de mentoría, becas y redes de intercambio de saberes con pueblos ancestrales en otras latitudes no solo transfiere soluciones probadas, sino que fortalece la identidad cultural de los pueblos del Pacífico, legitimando su conocimiento como el eje del desarrollo. Al invertir en la juventud y al validar el conocimiento ancestral, la cooperación se convierte en un vehículo para que los reclamos locales sean reconocidos en la agenda global de derechos y sostenibilidad.

No obstante, la heroicidad de las resistencias locales tiene límites cuando no se acompaña de un marco institucional sólido. La falta de reconocimiento efectivo de las autoridades comunitarias por parte del Estado debilita la gobernanza ambiental, dejando el vacío que aprovechan los actores ilegales. La escalabilidad de los proyectos exitosos se ve frustrada por la ausencia de apoyo estatal sostenido. El fortalecimiento de la institucionalidad local, junto con el reconocimiento pleno de la autoridad de los consejos comunitarios y cabildos, resulta indispensable para consolidar la resistencia ambiental y asegurar que la autonomía territorial se traduzca en soberanía productiva y ambiental a largo plazo.

El conflicto ambiental en el Pacífico no puede ser clasificado meramente como una lucha ecológica; es, en su esencia, un problema político y social que ataca directamente los cimientos de la vida. La degradación de

los ecosistemas estratégicos (manglares, selvas húmedas) impacta de forma letal los derechos colectivos, la seguridad alimentaria y la autonomía cultural de los pueblos ancestrales. Un modelo de desarrollo alternativo debe, por principio ético, valorar la biodiversidad como un activo estratégico y reconocer que la sostenibilidad es absolutamente inseparable de la justicia social. La agroforestería, el ecoturismo comunitario y el biocomercio son la prueba viva de que es posible generar prosperidad económica sin ejecutar la sentencia de muerte del entorno.

Un aspecto crucial para fortalecer y blindar las resistencias ambientales es su articulación estratégica con los marcos de la política pública nacional. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se presentan como la puerta de entrada para que las comunidades del Pacífico integren sus sistemas de monitoreo, reservas y educación ambiental como ejes centrales de la transformación regional. Al insertar la defensa del territorio en estos planes, se canalizan recursos y se consolida la premisa de que la sostenibilidad ambiental es indisociable de la paz territorial. De igual forma, la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) debe ser el espacio para validar los saberes y la participación local como parte integral de la agenda climática nacional.

Esta vinculación formal con las políticas públicas no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que otorga legitimidad institucional y, crucialmente, incrementa las posibilidades de escalabilidad de las experiencias exitosas. El reconocimiento de la autoridad comunitaria en los marcos normativos nacionales es indispensable para construir modelos de gobernanza ambiental lo suficientemente robustos para resistir las presiones extractivas y la impunidad. Así, el Pacífico colombiano puede erigirse en un referente de cómo la política de Estado se enriquece y se hace efectiva con la práctica comunitaria, transformando la resistencia ambiental en una estrategia nacional de desarrollo con dignidad.

CAPÍTULO 06

LÍDERES SILENCIADOS

4.6.1: Líderes comunitarios perseguidos

El liderazgo comunitario en el Pacífico colombiano atraviesa una crisis humanitaria que es un reflejo de la fragilidad sistémica del Estado en territorios históricamente excluidos. Desde la firma de los Acuerdos, la violencia ha escalado, concentrando el asesinato de líderes sociales en Nariño y el Chocó. Esta violencia no es aleatoria ni marginal: responde a una estrategia geopolítica de actores armados y económicos por el control de la tierra y sus recursos. Los líderes se han convertido en los guardianes incómodos del territorio, defendiendo la dignidad colectiva frente a la voracidad de las economías depredadoras.

El asesinato de figuras como Temístocles Machado en Buenaventura es la prueba fehaciente de cómo la defensa de los bienes comunes se paga con la vida. Estas muertes no son incidentes aislados; son actos de un “autoritarismo local” que buscan dismantelar organizaciones sociales enteras, sembrando el terror para facilitar el despojo. La voz de los pueblos lo sintetiza con dolorosa claridad: “Nos matan porque estamos defendiendo la vida misma” en territorios donde la renta del oro y la coca pesan más

que los derechos humanos consagrados. La violencia es la herramienta del silenciamiento político.

A pesar de la magnitud de la amenaza, el modelo de protección estatal enfrenta una catástrofe de pertinencia geográfica. Los programas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son ineficaces en el Pacífico rural. Medidas urbanas e individualistas escoltas, chalecos o carros blindados son inútiles en las dinámicas colectivas de las veredas y las comunidades que viven en los ríos. El Estado ofrece una protección que no puede navegar, caminar ni integrarse a las formas de vida ancestrales. Esta desconexión sistémica revela una traición de diseño, que no responde a las necesidades colectivas de protección de los pueblos étnicos.

En respuesta a esta vulnerabilidad, las comunidades han tenido que ejercer su propia soberanía territorial. Las Guardias Cimarronas y las Guardias Indígenas son el ejemplo más poderoso de esta resistencia activa. Estos cuerpos de autoprotección combinan la espiritualidad, el monitoreo territorial y la pedagogía de paz para disuadir la violencia. Son la manifestación de una institucionalidad propia que llena el vacío dejado por la ineficacia estatal y refuerza la cohesión social. Esta es la demostración de la capacidad de autogobierno de los pueblos para defenderse y persistir en las zonas de mayor riesgo.

Las sistemáticas amenazas se ha convertido en una herramienta política crucial para enfrentar la impunidad. Consejos comunitarios en Tumaco y Alto Baudó han creado registros detallados de agresiones, transformando su memoria territorial en evidencia jurídica. Estos datos, utilizados para alimentar mecanismos de alerta temprana y litigios internacionales ante la CIDH, visibilizan la crisis más allá de las fronteras nacionales. La comunidad se convierte en la fuente primaria de la verdad judicial, supliendo la inacción de las entidades de investigación.

La impunidad sigue siendo el eslabón más débil y el principal incentivo para la violencia. La tasa de crímenes contra líderes sociales que permanecen sin sanción es aterradora. Sin una justicia efectiva que condene a los agresores, se consolida la certeza de que el asesinato es una estrategia de control de bajo riesgo. Revertir este patrón exige una reforma profunda: se necesitan fiscalías móviles con enfoque territorial y cultural, capaces de operar en las zonas rurales, garantizando la participación de las comunidades en los procesos judiciales para transformar la impunidad en justicia restaurativa.

La violencia en Colombia se inscribe en un patrón global, pero la persistencia de las altas tasas de asesinatos en el posconflicto es una vergüenza nacional. La paz firmada en La Habana aún no se ha traducido en paz vivida en el Pacífico. El fenómeno es evidente: los líderes locales enfrentan la confluencia trágica de extractivismo ilegal, narcotráfico y la crónica ausencia institucional. Esta realidad demuestra que la violencia contra los defensores no es un remanente, sino la estrategia activa para mantener la subordinación territorial de los pueblos étnicos.

El silenciamiento de los líderes del Pacífico es una estrategia sistemática para mantener el control y despojar los territorios ricos en biodiversidad. Enfrentarlo exige una respuesta integral que combine el blindaje de la protección colectiva, la implementación de políticas públicas con enfoque étnico real (como los PDET), la memoria comunitaria como herramienta política, el apoyo de la cooperación internacional y una justicia que rompa la impunidad. La lucha final es por la dignidad, pues como se ha advertido: “Sin líderes no hay comunidad, y sin comunidad no hay futuro”.

4.6.2: Movimientos sociales y su impacto.

Los movimientos sociales en el Pacífico colombiano representan una fuerza histórica de resistencia que ha reescrito el mapa político del

país, articulando luchas por derechos territoriales, justicia ambiental y dignidad étnica. Organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) no solo han enfrentado el despojo; lograron un hito civilizatorio con el reconocimiento de la titulación colectiva en la Constitución de 1991. Su impacto trasciende la defensa del hábitat: se proyecta en la construcción de una democracia más plural, blindando la ciudadanía activa en contextos de violencia estructural.

El PCN, como actor político central, ha sido el arquitecto de la consolidación de los consejos comunitarios, articulando demandas de autonomía y participación en todos los escenarios posibles. Su labor incansable ha sido decisiva para la implementación real de las políticas de titulación colectiva, logrando que más de cinco millones de hectáreas sean reconocidas legalmente como territorios inalienables de las comunidades negras. Este logro es inédito en América Latina y se erige como un referente global de justicia territorial. El movimiento demostró que la persistencia organizativa es más poderosa que la indolencia estatal.

Por su parte, los movimientos indígenas han reforzado los cimientos de la gobernanza local y la defensa cultural como estrategia de futuro. Asociaciones como la ACIN han implementado su propio modelo de “Plan de Vida”, integrando la educación propia, la salud intercultural y la custodia del territorio como ejes de la autonomía. Estas propuestas desafían la lógica capitalista del extractivismo, al plantear un paradigma alternativo de desarrollo basado en el “buen vivir” y en la continuidad sagrada de la vida en los territorios. Su visión se convierte en la utopía política que el Pacífico necesita.

La capacidad de incidencia política de estos movimientos alcanzó una visibilidad sin precedentes durante el Paro Nacional de 2021. La participación de colectivos afrodescendientes e indígenas fue determinante

para politizar la agenda, movilizando a millones de ciudadanos. El paro consolidó la capacidad de estas organizaciones para llevar la denuncia del racismo estructural, las desigualdades regionales y la precariedad juvenil desde la periferia al centro del debate. Los problemas locales se transformaron en causas nacionales compartidas, demostrando el poder de la articulación popular.

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022 representó un punto de inflexión histórico para los movimientos sociales. Francia Márquez, con su trayectoria de liderazgo en el PCN, encarnó el triunfo simbólico de la resistencia territorial al conquistar la vicepresidencia de la República. Su discurso del “vivir sabroso” se convirtió en un emblema político que vinculó la memoria histórica, la justicia social y la dignidad de los pueblos. El hecho de que la resistencia llegara al Palacio de Nariño se percibió como la validación de décadas de lucha colectiva.

A pesar de estas conquistas políticas, los desafíos persisten y son letales. La violencia sistemática contra líderes sociales continúa siendo la principal estrategia para desarticular los movimientos y sembrar terror. Los ataques no son incidentes aislados, sino un mecanismo estructural de control territorial que busca debilitar la capacidad de participación. En el Pacífico, la violencia armada sigue siendo el obstáculo más formidable para la consolidación de agendas transformadoras. La paz firmada no se ha materializado en la paz vivida para quienes defienden la vida en el territorio.

Otro desafío crucial es la sostenibilidad a largo plazo de sus agendas. Si bien han logrado avances monumentales en el reconocimiento normativo y la titulación colectiva, muchos procesos enfrentan una brecha abismal entre el derecho formal y la implementación efectiva. La falta de recursos económicos estables y el apoyo institucional adecuado obligan a las organizaciones a depender del voluntarismo. La subordinación de

la autonomía por la falta de recursos económicos sigue siendo la mayor tensión para que las conquistas normativas se traduzcan en un poder político real y duradero.

El impacto de los movimientos no puede analizarse sin reconocer su capacidad para incidir en la política pública y tejer redes globales. Al integrar sus propuestas en marcos como los PDET y la Política Nacional de Cambio Climático, alinean la defensa local con estrategias globales de sostenibilidad. Las alianzas transnacionales con colectivos en Brasil o Ecuador amplifican sus demandas y ofrecen nuevos marcos de protección y solidaridad. El futuro del Pacífico depende, en gran medida, de la capacidad de estos movimientos de seguir transformando la resistencia histórica en un poder político sostenible para las nuevas generaciones.

4.6.2.1 Impacto de los Movimientos Sociales en el Cambio Político y Social

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022 marcó un hito civilizatorio en la política colombiana, situando las demandas históricas de justicia social y territorial del Pacífico en el centro del debate nacional. La llegada al poder de la primera vicepresidenta afrodescendiente representó el reconocimiento definitivo del papel de los movimientos sociales como los verdaderos motores de la transformación política, desafiando décadas de exclusión institucional y violencia estructural. Esta victoria se percibió como la validación de que la periferia es el corazón de un nuevo proyecto de nación.

El Paro Nacional de 2021 funcionó como el crisol donde se fundió la nueva fuerza política del país. Cali y el suroccidente se convirtieron en el epicentro de una movilización masiva que unió a jóvenes, mujeres y comunidades étnicas en un grito de exigencia por dignidad y derechos básicos. A pesar de la severidad de la represión estatal, la resiliencia comunitaria

forjó espacios simbólicos de organización como “Puerto Resistencia”. Las movilizaciones evidenciaron que la demanda de los jóvenes no era por las armas, sino por la urgencia de oportunidades y futuro digno.

El Proceso de Comunidades Negras (PCN) emergió como el actor protagónico, logrando articular las demandas territoriales con el discurso político nacional. El PCN ha sido el arquitecto de la titulación colectiva de más de cinco millones de hectáreas en el Pacífico, consolidando una base de autonomía territorial que es inédita en América Latina. Este logro es la prueba más fehaciente de su autoridad política. Esta trayectoria se convirtió en el cimiento de la vicepresidenta, mostrando que la base de su poder emana de la gobernanza comunitaria ancestral.

La figura de Francia Márquez encarnó la culminación de esta trayectoria de lucha, llevando al escenario político nacional el lema comunitario del “vivir sabroso”. Este no es un simple eslogan, sino un emblema político-cultural profundo que vincula la memoria histórica, la justicia de género y el derecho ancestral a vivir en paz y dignidad. Su ascenso simbolizó el reconocimiento de que la resistencia de los pueblos no se resigna a morir y que la victoria del cambio era, en última instancia, la validación de la lucha de las mujeres del Pacífico.

De igual forma, las organizaciones indígenas, lideradas por entidades como la ACIN, fortalecieron la agenda del cambio con sus “Planes de Vida”. Estas propuestas ofrecen un modelo de desarrollo alternativo radicalmente distinto al extractivismo, fundamentado en la sostenibilidad, la salud intercultural y la filosofía del “Buen Vivir”. La “Minga Indígena” recordó al país que las voces de la ruralidad excluida no podían seguir siendo ignoradas, utilizando la marcha como un acto de pedagogía política para exigir al Estado que respete la vida y la sabiduría del territorio.

A pesar del cambio político, los desafíos siguen siendo una amenaza letal para la transformación. La persistencia de los asesinatos de líde-

res sociales en el Pacífico demuestra que el cambio de gobierno no se ha traducido aún en seguridad real en el territorio. La violencia contra los defensores es una estrategia de desarticulación social que busca debilitar la organización comunitaria y sabotear la implementación de las agendas de paz. Las estructuras de control ilegal se muestran más resistentes y fuertes que las instituciones de la justicia.

Frente a esta violencia estructural, los movimientos sociales insisten en que la agenda gubernamental debe incorporar políticas de fondo. La implementación real del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de los PDET son claves para garantizar la titulación efectiva y la protección colectiva de los líderes. El modelo de protección debe ser reformado para volverse pertinente. La incorporación de las propuestas de los movimientos a la política nacional es la única ruta para que el cambio político se traduzca en seguridad y bienestar tangible para las comunidades.

La articulación con redes transnacionales de derechos humanos y cooperación internacional ha sido crucial para amplificar las demandas del Pacífico. Los movimientos étnicos, al vincularse a plataformas globales, logran visibilizar sus luchas y acceder a recursos jurídicos y financieros que superan la parálisis estatal. El éxito comprobado de los proyectos que combinan la cooperación internacional con la participación comunitaria demuestra que estas alianzas son esenciales para la sostenibilidad a largo plazo. La legitimidad de la resistencia local se refuerza con el respaldo de la solidaridad global.

En este contexto, los movimientos sociales del Pacífico no solo son defensores de derechos, sino los actores políticos centrales que han incidido directamente en la reconfiguración del poder en Colombia. Sus luchas por el territorio, la vida y la dignidad han demostrado que la resistencia local puede transformarse en cambio estructural. El futuro de la región se juega en la capacidad de estas organizaciones para que la victoria política

se traduzca en una transformación institucional que garantice la paz, la justicia y la sostenibilidad de sus pueblos.

4.6.2.2 *Reconstrucción de la memoria colectiva.*

En el Pacífico colombiano, la memoria ha dejado de ser un simple recuerdo para convertirse en un campo de disputa y resistencia activo frente a la violencia endémica del conflicto armado y la expansión de las economías ilegales. El arte y la tecnología han sido resignificados y apropiados por las comunidades como herramientas de visibilidad, esenciales para narrar su historia y, crucialmente, proyectar un futuro alternativo. Los procesos de memoria comunitaria no solo reconstruyen los hechos violentos y las ausencias; funcionan como mecanismos de justicia poética que refuerzan las identidades colectivas y abren caminos hacia la reparación moral.

Un ejemplo emblemático de esta transformación es el auge de los proyectos de “Memoria Digital del Pacífico”. Lideradas por colectivos juveniles en Tumaco y Buenaventura, estas iniciativas combinan la riqueza de las narrativas orales con archivos audiovisuales y plataformas digitales para democratizar el acceso a la historia. Más allá de preservar los testimonios, estas prácticas generan competencias tecnológicas en jóvenes históricamente excluidos de la economía digital. La digitalización de la memoria se convierte así en un motor de innovación comunitaria, creando oportunidades de empleo digno en áreas como la edición audiovisual, la gestión cultural y la comunicación digital.

Los talleres de memoria en Tumaco, Buenaventura y Chocó demuestran que la reconstrucción del pasado es, al mismo tiempo, una oportunidad económica real. Los participantes adquieren habilidades concretas en grabación, producción y edición de contenidos multimedia, que habilitan la creación de emprendimientos locales ligados a medios comunitarios y plataformas de *streaming* cultural. El arte digital, en este contexto de

marginación, es una estrategia efectiva de transformación socioeconómica, permitiendo a los jóvenes construir proyectos productivos que vinculan su creatividad con la sostenibilidad y les ofrecen una ruta de vida lejos de la coerción de las economías ilícitas.

La música, la danza y el teatro se han consolidado como los lenguajes ancestrales de la resistencia. Los festivales comunitarios de marimba y currulao han trascendido su rol de celebración cultural para convertirse en escenarios de denuncia política y de sanación colectiva frente a la violencia. La música afrocolombiana no solo preserva la memoria histórica y la espiritualidad del territorio, sino que funciona como un espacio pedagógico vital que fortalece la cohesión social. Integrar estas expresiones a programas de turismo cultural sostenible genera ingresos y empleo, proyectando la identidad regional en mercados internacionales.

La educación artística y digital emerge como un eje central en la formación de ciudadanía activa y resiliente. En los talleres de memoria, los jóvenes proponen activamente currículos alternativos que incluyan la música tradicional, la narrativa digital y la fotografía comunitaria como parte esencial de la formación escolar. La educación creativa en contextos de conflicto no solo fortalece las capacidades técnicas; contribuye a la construcción de un sujeto político capaz de transformar su entorno. La memoria, bajo esta luz, deja de ser un recuerdo pasivo para convertirse en un recurso estratégico para el desarrollo humano.

Otro aporte fundamental es el valor de la vinculación intergeneracional que produce la memoria digital. En el Chocó, adultos mayores transmiten los relatos de desplazamiento y resistencia, y son los jóvenes quienes los documentan, archivan y difunden en formatos digitales. Esta interacción es una doble pedagogía: la de los saberes ancestrales transmitidos por la oralidad, y la de las herramientas contemporáneas apropiadas por las nuevas generaciones. Esta conexión no solo garantiza la supervi-

vencia del conocimiento, sino que valida las voces de quienes han sido históricamente invisibilizados por la narrativa oficial.

El arte y la tecnología también cumplen un rol crucial en la prevención del reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los grupos armados. Iniciativas de hip-hop, grafiti y muralismo en lugares como Buenaventura crean espacios de expresión que permiten a los jóvenes canalizar la experiencia de la violencia y transformarla en creatividad. Estos procesos, al ofrecer alternativas de participación social y reconocimiento comunitario, reducen la vulnerabilidad frente a los actores ilegales y refuerzan el compromiso de los jóvenes con la vida en sus propios territorios.

En conclusión, la memoria, el arte y la tecnología en el Pacífico no solo preservan relatos del pasado; son la plataforma para proyectar un futuro alternativo para la región. Estas prácticas, al integrarse a políticas públicas (como los PDET) y contar con el apoyo de la cooperación internacional, tienen el potencial de generar empleo, conocimiento e innovación comunitaria. La resistencia cultural se convierte así en un eje de transformación capaz de enfrentar la violencia estructural y abrir horizontes de desarrollo basados en justicia, dignidad y sostenibilidad.

CAPÍTULO 07

EL CAMINO HACIA LA VISIBILIDAD

4.7.1: Estrategias para poner al Pacífico en el mapa

El Pacífico colombiano ha permanecido demasiado tiempo confinado a los márgenes de la narrativa nacional, reducido a cifras de precariedad o a relatos de violencia que invisibilizan su potencial civilizatorio. Es una paradoja intolerable: la región concentra una biodiversidad invaluable y ecosistemas vitales que sostienen la vida de la nación. Este territorio, lejos de ser periferia, es un centro estratégico para la sostenibilidad global y la justicia ambiental.

El reclamo no puede ser solo por “visibilidad”; debe ser por la transformación del reconocimiento. Es una exigencia para que las aspiraciones comunitarias se traduzcan en proyectos viables y metas verificables. El Pacífico debe ser reconocido como un laboratorio vivo de innovación y esperanza, demostrando que su riqueza natural y cultural es el activo más poderoso para el futuro de Colombia.

Las estrategias para posicionar al Pacífico en el escenario nacional e internacional deben ser concebidas como ejes de autodeterminación

económica. El ecoturismo, la bioeconomía comunitaria y la economía azul son más que oportunidades: son vehículos para una prosperidad con identidad. Este camino solo será legítimo si la planificación y ejecución de los proyectos es liderada por las propias comunidades.

El Estado y los actores externos deben renunciar a la lógica extractiva y entender que el desarrollo no puede imponerse. La voz de los pueblos afrodescendientes e indígenas, basada en el cuidado ancestral, debe ser la única brújula que guíe la inversión, asegurando que los recursos generados reviertan en el bienestar colectivo y el blindaje del territorio.

En el terreno de la gobernanza, la apuesta central es la construcción de alianzas intersectoriales que sean, por principio, horizontales. La articulación del Estado, la academia, el sector privado ético y las comunidades no puede quedarse en acuerdos formales; requiere recursos asignados y una transparencia férrea.

Es una exigencia ética que los mecanismos de monitoreo ciudadano impidan la captura de beneficios por parte de élites que han vivido históricamente del despojo. Solo al garantizar la participación vinculante de los pueblos, la gobernanza puede transformarse en una herramienta que garantice la equidad y la sostenibilidad, y no en un disfraz para el centralismo.

El fortalecimiento del capital humano y de las capacidades locales es un imperativo de justicia. Los programas educativos deben ir más allá de la transferencia técnica para integrar los saberes ancestrales con la innovación tecnológica. Experiencias exitosas demuestran que, al potenciar a la juventud y a las mujeres, se activan los motores de cambio más poderosos.

Este enfoque permite no solo enfrentar la exclusión estructural, sino construir una autonomía blindada frente a las lógicas asistencialistas. La

educación, en este contexto, es la herramienta que traduce el conocimiento ancestral en poder político y económico, asegurando que el desarrollo territorial sea gestado y liderado desde la propia comunidad.

Finalmente, la visibilización comunicativa es una herramienta de guerra cultural para quebrar siglos de estigmatización. No basta con mostrar cifras; se requiere una resignificación profunda de las narrativas que han reducido el Pacífico a la miseria y la violencia.

Campañas mediáticas que resalten el valor de su cultura, plataformas digitales que conecten a los productores con el mundo, y el arte como vehículo de resistencia son esenciales. Resignificar al Pacífico es un acto político que exige a la nación y al mundo reconocer que la región es un laboratorio vivo de resiliencia, y no la periferia olvidada.

4.7.1.1. Estrategias de Visibilidad Territorial

La invisibilidad territorial del Pacífico colombiano no es un accidente geográfico ni una simple carencia de carreteras; es el resultado de un entramado histórico de decisiones políticas centralistas que han relegado a esta región a los márgenes del mapa nacional. Su aislamiento físico se expresa en trochas convertidas en caminos de incertidumbre, en ríos que transportan más esperanzas que mercancías, y en una conectividad digital que todavía parece promesa más que derecho. La consecuencia es una exclusión múltiple: económica, social y cultural. Frente a este escenario, las Estrategias de Visibilidad Territorial se erigen como un camino imposter-gable para transformar el Pacífico en un actor clave de la competitividad, la sostenibilidad y la cohesión de Colombia.

Los resultados de los talleres comunitarios realizados en Chocó, Buenaventura y Tumaco dan cuenta de la profundidad de este aislamiento. En Chocó, el 72 % de los participantes señaló la falta de vías terciarias como la

principal limitación para transportar plátano, cacao y pesca artesanal. Esta cifra no es menor: significa que siete de cada diez productores ven cómo sus cosechas pierden valor antes de llegar al mercado. En Buenaventura, el 66 % identificó la ausencia de un sistema de transporte intermodal como el principal obstáculo para aprovechar su condición de ciudad-puerto. Allí, exportar un producto puede costar hasta un 35 % más que en otras regiones del país, diluyendo la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. En Tumaco, el 63 % de los asistentes aseguró que el deterioro de las vías rurales reduce hasta en un 40 % los ingresos de pequeños productores de cacao y coco, condenándolos a vender a precios injustos a intermediarios.

La brecha digital es otro rostro de la invisibilidad. En Chocó, apenas un 28 % de las escuelas rurales cuenta con internet estable, lo que condena a más de dos tercios de los estudiantes a la exclusión tecnológica. En Buenaventura, el 59 % de los participantes denunció que la conectividad es insuficiente y de mala calidad, limitando a emprendedores y organizaciones comunitarias que buscan insertarse en la economía digital. En Tumaco, el 54 % de los jóvenes reconoció no poder acceder de manera regular a educación virtual, lo que los deja en clara desventaja frente a sus pares de las grandes ciudades. La invisibilidad, entonces, no solo se mide en kilómetros de carretera ausente, sino en megabytes que nunca llegan y en oportunidades que se diluyen en el aire.

La tercera demanda común recogida en los talleres fue la inversión en cultura y deporte. En Chocó, el 64 % de los jóvenes expresó que la falta de espacios culturales y deportivos los empuja a buscar alternativas fuera del territorio o los deja expuestos a economías ilegales. En Buenaventura, el 71 % planteó que el fortalecimiento de festivales de música, danza y gastronomía es vital para reforzar la identidad y generar oportunidades de ingreso. En Tumaco, el 76 % denunció que la ausencia de infraestructura cultural y recreativa alimenta la desmotivación y facilita el reclutamiento por grupos armados. Estos porcentajes revelan que la invisibilidad también

se juega en el terreno simbólico: sin escenarios para la expresión artística y la cohesión social, el tejido comunitario se fragmenta y la violencia encuentra terreno fértil.

Los hallazgos de estos talleres permiten delinear tres prioridades estratégicas: infraestructura sostenible, conectividad digital inclusiva y fortalecimiento cultural. La meta no es abstracta: reducir en un 15–20 % los costos logísticos de transporte en corredores agro-pesqueros, elevar la cobertura de internet escolar y comunitario a un 70 % en los próximos cinco años, y aumentar en un 40 % la oferta cultural y deportiva para la juventud en municipios priorizados. Estas cifras, nacidas de la voz misma de las comunidades, ofrecen una hoja de ruta clara para que la visibilidad territorial no sea un eslogan político, sino una transformación medible y verificable.

En definitiva, la visibilidad del Pacífico no consiste en aparecer en un mapa oficial, sino en garantizar que sus comunidades puedan construir futuro desde sus propios territorios. Ser visibles significa que los productos de sus campesinos y pescadores lleguen a los mercados sin perder valor en el camino; que sus jóvenes puedan conectarse a una clase virtual sin caminar horas en busca de señal; y que sus músicas, danzas y festivales dejen de ser vistos como folclor para convertirse en activos de desarrollo. Las Estrategias de Visibilidad Territorial son, en última instancia, un llamado a reconocer que, sin el Pacífico, Colombia seguirá incompleta.

4.7.1.2. Participación política y fortalecimiento institucional

La representación política inclusiva y el fortalecimiento institucional son pilares ineludibles para reconfigurar las estructuras de desigualdad que han marcado la historia del Pacífico colombiano. La gobernanza participativa debe convertirse en el eje transversal de cualquier esfuerzo

transformador. Aunque las comunidades afrodescendientes e indígenas constituyen una porción significativa de la población, su presencia en los espacios de decisión sigue siendo mínima. Según la Misión de Observación Electoral (2025), apenas un 12 % de los cargos de elección popular en la región están ocupados por líderes de estas comunidades. Esta baja representación fue confirmada en los talleres comunitarios de 2023: en Buenaventura, el 67 % de los participantes afirmó que nunca ha tenido contacto directo con un representante elegido que provenga de su propio consejo comunitario; en Tumaco, el 71 % señaló que las decisiones políticas no responden a las prioridades locales; y en Chocó, el 63 % expresó que la ausencia de representación ha debilitado la confianza en la democracia local. Estos datos revelan una desconexión profunda entre la política institucional y las realidades comunitarias. Experiencias como la autonomía indígena en Bolivia, institucionalizada mediante la Ley Marco de Autonomías, muestran que garantizar la participación real de pueblos históricamente marginados puede redefinir la relación entre Estado y comunidades (PNUD, 2023).

La lucha contra la corrupción constituye un segundo desafío central. Los recursos destinados al desarrollo del Pacífico colombiano han sido, con frecuencia, objeto de dilapidación o desvío. Transparencia por Colombia (2023) documenta que cerca del 30 % de los fondos sociales asignados a la región presentan irregularidades. Los talleres comunitarios confirmaron esa percepción: en Buenaventura, el 74 % de los asistentes señaló que los proyectos de infraestructura no cumplen con lo prometido; en Tumaco, el 68 % denunció que los recursos de programas sociales no llegan a las comunidades más vulnerables; y en Chocó, el 70 % reconoció que la corrupción es la principal causa de desconfianza hacia las instituciones públicas. Frente a este panorama, la tecnología aparece como un aliado estratégico. La implementación de plataformas de monitoreo basadas en *blockchain* y auditorías ciudadanas podría transparentar la gestión de los recursos. La experiencia de Estonia, donde la digitalización redujo los

casos de corrupción en un 25 %, demuestra que este tipo de herramientas pueden fortalecer la confianza y la eficiencia institucional (Transparency International, 2023).

Un tercer pilar de estas estrategias es la descentralización efectiva. La concentración del poder y los recursos en las grandes ciudades ha dejado a las comunidades rurales del Pacífico en una situación de abandono crónico. Otorgar mayor autonomía fiscal y administrativa a los municipios y consejos comunitarios permitiría que los recursos respondan de manera directa a las particularidades locales. Los talleres comunitarios lo evidencian con claridad: en Chocó, el 62 % de los participantes sostuvo que la falta de autonomía municipal impide ejecutar proyectos de agricultura sostenible; en Buenaventura, el 69 % indicó que la centralización ha bloqueado el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación; y en Tumaco, el 73 % afirmó que las decisiones de inversión pública nunca se consultan con los consejos comunitarios. Ejemplos internacionales respaldan la necesidad de esta estrategia: en Brasil, la descentralización fiscal fortaleció la capacidad de gobiernos locales para invertir en sectores clave, mejorando de manera significativa los indicadores sociales en regiones periféricas (Banco Mundial, 2023).

En suma, los hallazgos de los talleres muestran que la participación política inclusiva, la lucha contra la corrupción y la descentralización no son consignas abstractas, sino demandas sentidas y cuantificables de las comunidades del Pacífico. Sin estos tres pilares, las demás estrategias — bioeconomía, conectividad digital o turismo responsable— corren el riesgo de reproducir las dinámicas de exclusión histórica. Con ellos, en cambio, se abre la posibilidad de un nuevo pacto territorial, basado en instituciones legítimas y en una ciudadanía empoderada que convierta al Pacífico en un referente de justicia social, innovación democrática y desarrollo sostenible para toda Colombia.

4.7.1.3. *Innovaciones en salud y bienestar social*

Las brechas en el acceso a la salud y al bienestar social en el Pacífico colombiano reflejan las desigualdades históricas de la región. El Ministerio de Salud (2023b) reporta que la cobertura en servicios básicos de salud en zonas rurales es significativamente inferior al promedio nacional, lo que se traduce en mayores tasas de mortalidad infantil y enfermedades prevenibles. Los resultados de los talleres comunitarios realizados en 2023 confirman esta realidad: en Chocó, el 69 % de los participantes identificó la ausencia de puestos de salud como el principal problema social; en Buenaventura, el 65 % señaló la precariedad de los servicios hospitalarios; y en Tumaco, el 72 % manifestó que los centros existentes carecen de medicamentos y personal suficiente. Estos hallazgos muestran que la crisis en salud no es únicamente un déficit de infraestructura, sino también una fractura de confianza hacia el sistema institucional.

Una alternativa viable consiste en la creación de centros comunitarios integrales, que combinen atención médica básica, salud mental, nutrición y espacios culturales. Experiencias internacionales muestran la eficacia de este enfoque. En zonas rurales de América Latina, la implementación de intervenciones comunitarias integrales ha mejorado la calidad de la atención y fortalecido la cohesión social. En el caso del Pacífico colombiano, este modelo permitiría no solo ampliar la cobertura sanitaria, sino también integrar dimensiones culturales y sociales que refuercen el tejido comunitario.

La tecnología digital emerge como el recurso clave para dismantelar el apartheid sanitario impuesto por el aislamiento geográfico. En el Pacífico, la ausencia de especialistas condena a una parte crítica de la población a la invisibilidad médica, donde la mayoría de los jóvenes jamás ha accedido a una atención especializada. Las brigadas móviles de telemedicina, equipadas con conectividad satelital, son más que una innovación: son

un acto de justicia territorial que lleva la atención primaria y la consulta especializada directamente a las comunidades ribereñas. La evidencia global es clara al demostrar que la telemedicina es la única herramienta capaz de reducir las inequidades en contextos de baja infraestructura, transformando la tecnología en un catalizador de accesibilidad y calidad en la atención.

El acceso al agua potable y al saneamiento básico se mantiene como el reto estructural más cruel y silencioso. En el litoral, el río, que es la arteria de la vida, es también la fuente de la enfermedad, obligando a las comunidades a depender de fuentes contaminadas. La falta de agua segura es el principal detonante de las enfermedades gastrointestinales que socavan la salud de mujeres y niños y perpetúan el ciclo de la pobreza. El hecho de que la gran mayoría de los habitantes del Chocó y Nariño identifiquen la falta de agua potable como su principal preocupación sanitaria subraya que el Estado ha fallado en garantizar el derecho fundamental a la dignidad humana en estos territorios.

Frente a la inacción estructural, la solución reside en la aplicación de soluciones endógenas, de bajo costo y sostenibles. Sistemas de captación de agua lluvia y plantas de tratamiento descentralizadas se han demostrado como alternativas viables y altamente efectivas en contextos rurales. La clave para la sostenibilidad de estas iniciativas no es la ingeniería, sino la participación comunitaria vinculante. Al integrar a los pueblos afrodescendientes e indígenas en la gestión de estos recursos, no solo se mejoran drásticamente los indicadores de salud, sino que se fortalece la cohesión social y se cimienta una soberanía hídrica que les permite dejar de depender de la precariedad impuesta.

En definitiva, las innovaciones en salud y bienestar social no deben concebirse únicamente como soluciones técnicas, sino como estrategias profundamente humanas que respondan a las demandas expresadas por

las comunidades. Los talleres comunitarios muestran que el acceso a la salud, al agua y a la tecnología son prioridades urgentes, mientras que la literatura internacional ofrece modelos probados para abordarlas. La combinación de evidencia científica y participación comunitaria abre la posibilidad de un pacto territorial que coloque la vida y la dignidad en el centro del desarrollo del Pacífico colombiano.

4.7.1.4. Plataformas Digitales para el Comercio Sostenible

La implementación de plataformas digitales que conecten a pequeños productores del Pacífico colombiano con mercados globales representa una oportunidad estratégica para transformar las dinámicas económicas de la región. Estas plataformas permitirían que comunidades afrodescendientes e indígenas comercialicen productos como cacao, café, pesca artesanal, bioproductos marinos y artesanías directamente con compradores nacionales e internacionales, eliminando intermediarios que históricamente han absorbido gran parte de las ganancias.

La evidencia más contundente de la injusticia económica en el Pacífico proviene directamente de la voz de sus participantes comunitarios. Los talleres realizados en 2023 revelaron una cruda y dolorosa realidad: en Chocó, el 66 % de los encuestados afirmó que los intermediarios reducen sus márgenes de ganancia a menos del 40 %. Esta situación no es una simple ineficiencia de mercado; es una relación extractiva que succiona la riqueza generada por la economía popular, condenando a las familias a la precariedad constante. El valor del trabajo queda irremediabilmente atrapado en una cadena de comercialización que prioriza el lucro centralizado sobre la dignidad local.

Frente a esta tiranía económica, la demanda de emancipación pasa irremediabilmente por la esfera digital. En Buenaventura, un abrumador

70 % de los participantes señaló la carencia absoluta de acceso a mercados y plataformas digitales, lo que subraya la magnitud de la exclusión digital. De manera paralela, en Tumaco, el 73 % de los encuestados expresó que la venta directa de sus productos sería la llave para mejorar sustancialmente sus ingresos. Esta demanda no solo confirma la brecha tecnológica, sino que valida los hallazgos académicos que demuestran cómo el comercio electrónico puede incrementar las ganancias de los productores hasta en un 30 %, otorgándoles autonomía decisoria.

El fortalecimiento de la conectividad digital se convierte, por lo tanto, en un acto de justicia económica fundamental. El objetivo final es desmantelar las estructuras de intermediación que históricamente han lucrado con el aislamiento geográfico. Al garantizar que los participantes de la economía popular tengan las herramientas para negociar directamente con el consumidor final, se impulsa la prosperidad y la reinversión en el desarrollo sostenible del territorio. La conexión digital es el eslabón crucial que permite a las comunidades recuperar el control sobre su trabajo y transformar su valioso capital social en riqueza legítima y autónoma.

La superación de la exclusión económica trasciende el simple acceso a mercados: exige la apropiación de tecnologías avanzadas para blindar el valor biocultural del producto. Herramientas como el Blockchain se presentan como un recurso clave, capaz de garantizar la trazabilidad y transparencia inquebrantable de la cadena de suministro. Esto es crucial para productos de alto valor agregado, como el cacao fino de aroma del Pacífico, cuya singularidad exige credibilidad global. La literatura confirma la lógica económica de la ética: las certificaciones de sostenibilidad y comercio justo incrementan el valor de mercado de estos productos hasta en un 25 %, consolidando un premium de la dignidad que fortalece la confianza de los consumidores éticamente conscientes.

El éxito de las plataformas digitales está supeditado al capital humano y la mitigación de la brecha de competencias. Los talleres revelaron una

carencia crítica: el 68 % de los participantes en Buenaventura admitieron no tener las habilidades digitales suficientes para gestionar ventas en línea, y en Tumaco, el 65 % solicitó formación urgente en estrategias de exportación. Es imperativo que la inversión en infraestructura se acompañe de una capacitación tecnológica y empresarial profunda. Solo al dotar a los productores de competencias en marketing digital y gestión de negocios, se logrará transformarlos en emprendedores autónomos, capaces de capitalizar la tecnología para mejorar su rentabilidad y asegurar la reinversión en sus propias comunidades.

La limitada infraestructura vial y portuaria constituye el cuello de botella más formidable para la competitividad del Pacífico, donde el 72 % de los participantes en Chocó indicó que el costo del transporte es la principal barrera de mercado. Las plataformas digitales, por lo tanto, deben ir más allá de la simple venta, integrando soluciones que conecten a los productores con operadores logísticos sostenibles para optimizar rutas y reducir costos. La mejora de la logística, aunque física y costosa, es un factor determinante para la competitividad exportadora y genera un poderoso efecto multiplicador de empleos indirectos, demostrando que la inversión en esta infraestructura es el paso final para alcanzar la emancipación económica.

Finalmente, estas plataformas digitales trascienden la lógica transaccional para convertirse en espacios de visibilización cultural. La propuesta surgida en Tumaco de que los productos estén acompañados por narrativas culturales es una estrategia de diferenciación identitaria que dota de alma al comercio. Al integrar contenidos audiovisuales sobre tradiciones, música y las formas de vida de las comunidades del Pacífico, la venta se transforma en un acto político y pedagógico. La evidencia demuestra que las narrativas culturales en el comercio digital incrementan el interés de los consumidores internacionales y forjan una conexión emocional profunda con los territorios de origen, creando un valor añadido ético que supera el precio de mercado.

En suma, la convergencia de plataformas digitales, innovación tecnológica y formación comunitaria ofrece al Pacífico colombiano una ruta ineludible hacia el desarrollo sostenible. Los resultados de los talleres evidencian que la población reconoce la urgencia de estas herramientas, mientras que la literatura internacional respalda su viabilidad económica y social. Integrar estas perspectivas permite construir un modelo de comercio justo, inclusivo y culturalmente enraizado. El Pacífico se posiciona, así como un referente de innovación y resiliencia, demostrando que la solución a la desigualdad estructural pasa por la combinación de tecnología de vanguardia con la sabiduría ancestral y la participación comunitaria.

4.7.1.5. Ecosistemas de Startups Rurales

En el Pacífico colombiano, los jóvenes enfrentan a diario la disyuntiva entre migrar o permanecer en sus territorios. Muchos de ellos reconocen que, pese a vivir en una de las regiones más biodiversas del planeta, las oportunidades productivas son escasas y las instituciones históricamente han ignorado sus potencialidades. En los talleres comunitarios realizados en 2023, el 71 % de los participantes en Tumaco aseguró que la falta de alternativas de emprendimiento los empuja a emigrar, mientras que en Buenaventura el 67 % señaló que las iniciativas locales no prosperan por ausencia de apoyo institucional, y en Chocó el 69 % destacó la necesidad urgente de contar con incubadoras y aceleradoras en el territorio. Estos testimonios dan cuenta de un sentimiento compartido: la convicción de que el talento existe, pero falta un ecosistema que lo acompañe.

Los Ecosistemas de Startups Rurales representan una alternativa de desarrollo radicalmente distinta a los modelos extractivistas, transformando el emprendimiento en una plataforma integral de autonomía. Más que un simple programa de microcréditos, estas estructuras articulan de manera fluida incubadoras, aceleradoras, la academia y las comunidades, con el propósito de convertir ideas gestadas en el territorio en proyectos

económicos viables y blindados. Su fuerza reside en fusionar la innovación tecnológica con el conocimiento ancestral, creando sinergias en áreas donde el Pacífico posee una ventaja comparativa irrefutable: la agroindustria sostenible, el turismo con identidad cultural y el desarrollo digital.

La literatura académica confirma que la implementación de estos ecosistemas en contextos periféricos genera una transformación profunda que va más allá de la cifra de negocio. El impacto real se mide en la reducción efectiva de la pobreza, logrando sacar a miles de familias de la precariedad cuando se integra un modelo holístico: financiamiento a tasas justas, capacitación técnica pertinente y acompañamiento continuo. Este enfoque no solo impulsa el crecimiento económico, sino que desbloquea el capital biocultural de la región, demostrando que la inversión estratégica en el emprendimiento local es el mecanismo más eficaz para generar riqueza, diversificar ingresos y construir la resiliencia social frente a las economías ilícitas.

En la agroindustria, la riqueza latente del cacao, el coco y la pesca artesanal aún no se traduce en ingresos dignos para el Pacífico. Los talleres revelaron que el 63 % de los productores en Chocó carecen de la infraestructura más básica para transformar el cacao en productos con valor agregado. Esta precariedad los condena a vender la materia prima en bruto, dejándolos en una posición de extrema vulnerabilidad ante los intermediarios. Sin la capacidad de innovar y transformar, el potencial que podría posicionar al cacao colombiano en los mercados de alta gama se queda capturado en la lógica del subdesarrollo.

La implementación de un Ecosistema de Startups Rurales se convierte, en este contexto, en la bisagra estratégica entre el conocimiento local y las exigencias globales. Este modelo puede proporcionar la infraestructura y el acompañamiento necesarios para que los productores superen la brecha de transformación. Al vincular la genética única del cacao del Pacífico

con procesos de innovación y certificación internacional, se capitalizan sus atributos organolépticos. Este enfoque permite que el conocimiento ancestral sobre el cultivo se encuentre con las demandas de trazabilidad y calidad del mercado mundial, transformando un producto agrícola en un activo de alto valor biocultural.

El objetivo final es transformar el conocimiento local en riqueza sostenible y autónoma. El ecosistema de *startups* no solo impulsa el emprendimiento; habilita la creación de empresas de base comunitaria que reinvierten las ganancias en el territorio. Este proceso de valorización, que dota de identidad y trazabilidad al producto, es la ruta más segura para generar ingresos, diversificar la economía y reducir la dependencia de las economías ilícitas. La agroindustria sostenible, respaldada por la tecnología y la organización, es la prueba de que el Pacífico puede ser un referente de prosperidad con dignidad.

El turismo sostenible se consolida como un frente estratégico ineludible para el desarrollo económico del Pacífico, especialmente para la juventud. En Tumaco, los participantes comunitarios destacaron que el turismo, gestionado por las propias comunidades, sería una de las fuentes prioritarias de empleo juvenil, siempre que existan apoyos técnicos y financieros genuinos. Este planteamiento no busca simplemente la ocupación; reconoce que la participación comunitaria en proyectos turísticos fortalece la cohesión social y activa una economía rural que, de otro modo, permanecería estancada. La creación de *startups* dedicadas al ecoturismo con identidad es la llave para desvincular a los jóvenes de la precariedad.

La creación de emprendimientos enfocados en alojamientos ecológicos y rutas culturales en el Pacífico es una acción que trasciende el ámbito económico. Generar ingresos con esta base consolida una narrativa positiva y poderosa sobre la región, combatiendo siglos de estigmatización y violencia. Al convertir su riqueza natural y su herencia cultural en el

principal atractivo, las comunidades blindan su identidad. El ecosistema de *startups* facilita que el patrimonio se transforme en un activo inalienable, proyectando al Pacífico como un santuario de resiliencia y demostrando que la cultura es la forma más rentable de desarrollo.

La tecnología digital no es un simple accesorio, sino el tercer pilar estratégico que define el éxito o el fracaso de estos ecosistemas. La percepción de los habitantes de Buenaventura sobre la falta de conectividad como una limitación a la competencia externa es un diagnóstico de la fragilidad logística de la región. La nueva ruralidad del Pacífico exige la apropiación de tecnologías disruptivas—desde plataformas de comercio electrónico directo hasta sistemas de blockchain para la trazabilidad—que no solo faciliten la venta, sino que blinden la integridad ética del producto. El objetivo es convertir la cadena de suministro en una cadena de confianza que conecte la calidad ancestral con el consumidor consciente, rompiendo la dependencia del intermediario físico.

El impacto más profundo de los ecosistemas de *startups* se encuentra en la dimensión social del saber. La precariedad no es solo económica; es una brecha de competencias que excluye a la mitad del territorio. La confesión de las mujeres en Tumaco sobre la falta de acceso a la formación empresarial subraya un grave problema de exclusión de liderazgo, a pesar de su rol central en la cohesión comunitaria. La Organización Internacional del Trabajo confirma que los programas de emprendimiento inclusivo son el motor para la participación laboral de mujeres y jóvenes rurales. Por ello, el ecosistema no solo busca crear empresas; su misión fundamental es empoderar liderazgos diversos, asegurando la transferencia de conocimiento técnico y anclando el talento joven a su territorio.

En suma, los Ecosistemas de Startups Rurales son una propuesta visionaria que va más allá de un ciclo de financiamiento. Representan un nuevo pacto estructural para el Pacífico colombiano, uniendo la fuerza

productiva de las comunidades con el rigor de las universidades, el capital del sector privado y el respaldo de las instituciones públicas. Estos ecosistemas se convierten en catalizadores de un cambio profundo, demostrando que la innovación no es patrimonio exclusivo de los centros urbanos. Es la posibilidad real de transformar historias de vida, de probar que la prosperidad y la tecnología también florecen con dignidad desde las orillas del mar y la selva, consolidando al Pacífico como un referente global.

4.7.1.6. Creación de una Marca Región: Posicionando al Pacífico Colombiano en el Escenario Global.

El Pacífico colombiano ha permanecido invisibilizado en la narrativa nacional, a pesar de su extraordinaria riqueza natural y cultural. Sin embargo, el futuro de la región puede reescribirse mediante la creación de una Marca Región que combine identidad, sostenibilidad y desarrollo económico. Esta estrategia no debe limitarse a ser un ejercicio de mercadeo, sino un proyecto integral que posicione al Pacífico en la agenda internacional como un territorio de resiliencia, innovación y justicia social. En los talleres comunitarios de 2023, el 74 % de los participantes en Buenaventura consideró que una Marca Región fortalecería el sentido de pertenencia, mientras que en Tumaco el 69 % indicó que mejoraría la competitividad de los productos locales, y en Chocó el 72 % señaló que esta iniciativa podría contrarrestar los estigmas históricos de violencia y exclusión.

La base fundacional de esta Marca Región debe construirse en torno a sus productos más emblemáticos, que son, a su vez, la síntesis de su patrimonio biocultural. El cacao del Pacífico (incluyendo Chocó y Tumaco), con atributos organolépticos excepcionales, y la pesca artesanal, respaldada por prácticas de manejo sostenible, son bienes que deben ser reconocidos como activos de alto valor ético. La experiencia global ratifica este potencial: al dotar a estos bienes con certificaciones éticas y denominación de origen, se logra incrementar su precio en los mercados internacionales y generar

mayores ingresos directos a los productores locales. El reclamo es claro: el Pacífico no pide caridad, exige que el mercado reconozca la dignidad y el valor *premium* inherentes a un producto que ha sido gestado bajo principios de sostenibilidad ancestral, haciendo de la calidad una herramienta de justicia económica.

La biodiversidad inalienable del Pacífico que custodia la mitad de los manglares de Colombia y ecosistemas marinos únicos debe ocupar el centro de la narrativa de la región. Una estrategia de comunicación efectiva no debe limitarse a la exhibición de paisajes; debe integrar la imagen de los ecosistemas con los relatos profundos y las voces culturales de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Al tejer esta narrativa biocultural, se genera un vínculo emocional con audiencias globales, atrayendo un turismo de alto valor que respeta el patrimonio. Este proceso es, en sí mismo, un acto político que fortalece la identidad juvenil y combate la narrativa de violencia que ha estigmatizado la región por siglos, convirtiendo al Pacífico en un santuario de resiliencia y esperanza.

La sostenibilidad de esta Marca Región no es una opción, sino un mandato ético que garantiza su credibilidad global. Es indispensable trascender la simple intención y cumplir con estándares internacionales de comercio justo y responsabilidad ambiental. La experiencia de certificaciones especializadas ha demostrado que la adopción rigurosa de prácticas responsables es el catalizador para incrementar las exportaciones y consolidar la fe del consumidor en los territorios. Esta es la condición innegociable: el 68 % de los participantes recalca que la Marca solo tendrá legitimidad si las comunidades son las protagonistas absolutas y si los beneficios se distribuyen de manera irrefutablemente equitativa.

La creación de la Marca Región exige un esfuerzo interinstitucional que actúe como blindaje para la inversión. No basta con la voluntad de las comunidades; se requiere articular a las universidades (para la innovación),

al sector privado (para el capital) y al Estado (para el marco normativo). Los estudios globales confirman que las inversiones coordinadas en cadenas de valor sostenibles multiplican la participación de las comunidades rurales en mercados internacionales. La voz del Chocó es clara: el 70 % de los líderes considera esta cooperación multiactor como la condición necesaria para que la marca logre una sostenibilidad a largo plazo y no se diluya en el primer ciclo político.

La Marca Región para el Pacífico colombiano trasciende su función comercial; es una herramienta política, cultural y económica diseñada para reconfigurar la narrativa del país. Al integrar la venta de productos únicos con la promoción de la biodiversidad, las tradiciones culturales y la sostenibilidad certificada, esta marca no solo genera ingresos y competitividad. Su propósito final es dignificar a sus comunidades, proyectando su verdadera esencia su resiliencia, su belleza y su capacidad de innovación en el escenario global. La Marca se convierte en el manifiesto de la autonomía del Pacífico, el sello de su valor incalculable.

4.7.1.7. Estrategias de Visibilidad Económica

El desarrollo económico del Pacífico colombiano exige la consolidación de estrategias de visibilidad que combinen sostenibilidad ambiental, equidad social e inserción competitiva en mercados globales. Las comunidades participantes en los talleres de Chocó, Buenaventura y Tumaco (2023) señalaron tres desafíos prioritarios: la falta de cadenas logísticas adecuadas (72 % de pescadores identificaron pérdidas por ausencia de cadena de frío), la necesidad de formación empresarial (65 % de productores agrícolas expresaron carencia de competencias en gestión y mercadeo), y la dificultad de acceder a mercados internacionales (69 % de productores agroforestales manifestaron no contar con canales de exportación directa). Estas cifras, obtenidas en el marco de la investigación territorial, confirman que la visibilidad económica debe sustentarse en estrategias

adaptadas a la realidad local y acompañadas de mecanismos de innovación y gobernanza participativa.

4.7.1.7.1 Desarrollo de la Economía Azul Sostenible

El Pacífico colombiano concentra más del 70 % de las capturas pesqueras del país (FAO, 2023), aunque cerca del 60 % se realizan sin criterios de sostenibilidad, lo que genera presión sobre especies marinas de alto valor comercial. El concepto de economía azul, que integra conservación y desarrollo, se ha posicionado como una alternativa viable en contextos donde las comunidades costeras dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal (Rojas-y Castillo, 2022). En los talleres, los pescadores coincidieron en que el acceso a tecnologías de trazabilidad digital y a certificaciones ecológicas podría mejorar sus ingresos y abrir mercados diferenciados.

Una experiencia local que refuerza esta viabilidad es el programa piloto de pesca artesanal con trazabilidad digital en Bahía Málaga, impulsado por comunidades afrodescendientes en colaboración con universidades locales. Este modelo permitió aumentar en un 28 % los ingresos netos de las familias participantes en el primer año, al garantizar precios justos en cadenas de restaurantes de Cali y Bogotá. Además, la acuicultura sostenible se ha convertido en un frente innovador: el proyecto piloto de cultivo comunitario de piangua en Tumaco, liderado por asociaciones de mujeres, ha mostrado resultados positivos en términos de restauración ambiental y generación de ingresos, validando los hallazgos del Banco Mundial (2023) sobre el potencial de esta estrategia para duplicar rentas locales.

El ecoturismo y la biotecnología también ofrecen vías transformadoras. En los talleres de Buenaventura, el 66 % de los asistentes identificó el avistamiento de ballenas como una oportunidad estratégica, mientras que investigadores locales exploran el potencial de algas para bioproductos, respaldando las estimaciones del Instituto Humboldt (2022) sobre ingresos

superiores a 500 millones de dólares anuales si se establecen centros de investigación regionales. Así, los ejemplos piloto ya en marcha confirman que la economía azul sostenible es más que un ideal: constituye un camino viable para integrar innovación, conservación y justicia social.

El Pacífico colombiano alberga más de 9.000 especies de flora y fauna con potencial farmacológico, cosmético y alimenticio (Instituto Humboldt, 2022). En este contexto, la bioeconomía se presenta como una estrategia transformadora. Los talleres mostraron que el 69 % de productores en Chocó desean transformar localmente cacao y coco, y en Tumaco, el 65 % subrayó la necesidad de formación en normas sanitarias y estándares internacionales para exportación.

La viabilidad de este modelo de desarrollo no es hipotética; se confirma en los ejemplos vivos que florecen en el territorio. En el Consejo Comunitario del Río Anchicayá, cooperativas de mujeres han forjado un modelo exitoso de producción y comercialización de cacao orgánico certificado, cuyo valor agregado y sello de comercio justo le han permitido acceder directamente a los mercados europeos. Esta experiencia valida un principio ineludible: la adopción de denominaciones de origen y certificaciones éticas es una estrategia de justicia económica que incrementa de forma tangible el valor del producto. De forma paralela, en Tumaco, iniciativas de asociaciones juveniles demuestran el potencial del capital biocultural al exportar bioproductos a base de coco, reforzando la necesidad de invertir en plataformas de comercio justo y en la capacitación técnica liderada por la propia comunidad.

Estas iniciativas piloto desde Anchicayá hasta Tumaco son la prueba contundente de que la bioeconomía no es solo una propuesta teórica, sino una estrategia ya en marcha que conecta de manera virtuosa la sostenibilidad ambiental, el valor agregado y el acceso a los mercados globales. La visibilidad económica del Pacífico no dependerá de un subsidio, sino de su

capacidad estratégica para escalar estas experiencias exitosas, multiplicar su alcance y, sobre todo, garantizar que los beneficios generados por esta riqueza sean distribuidos de manera rigurosamente equitativa entre las comunidades locales. El futuro del desarrollo sostenible en Colombia pasa por replicar esta ruta de la dignidad económica.

4.7.1.7.2. Turismo Comunitario y Sostenible: Un Motor para el Desarrollo del Pacífico

El turismo comunitario, basado en la gestión directa de recursos culturales y naturales por parte de las comunidades, constituye una estrategia con alto impacto redistributivo. La Organización Mundial del Turismo (2023) ha demostrado que este modelo genera en promedio un 60 % más de beneficios directos que los modelos tradicionales. En los talleres, el 71 % de los participantes en Buenaventura expresó interés en proyectos de turismo cultural vinculados a danza, gastronomía y saberes tradicionales, mientras que, en Chocó, el 62 % priorizó el turismo de naturaleza gestionado por guías locales.

La viabilidad de esta estrategia se refuerza con iniciativas en marcha. El ecoturismo comunitario en Nuquí (Chocó) ha logrado posicionarse en mercados internacionales, generando ingresos sostenibles mediante el avistamiento de ballenas y experiencias culturales afrodescendientes. Del mismo modo, en Guapi, los recorridos culturales organizados por colectivos juveniles han permitido rescatar saberes tradicionales e involucrar a las nuevas generaciones en la economía local. ProColombia (2023a) estima que un aumento del 20 % en turismo marino y cultural en la región podría generar más de 200 millones de dólares anuales, lo que confirma la pertinencia de escalar estos pilotos exitosos.

Más allá del beneficio económico, el turismo comunitario promueve cohesión social y revalorización cultural. Tal como señalan Calderón

y Gómez (2023b), la participación de mujeres y jóvenes en la gestión de proyectos turísticos no solo diversifica liderazgos, sino que fortalece la identidad territorial. Los ejemplos de Nuquí y Guapi muestran que el turismo comunitario no es una propuesta hipotética, sino una estrategia que ya opera con resultados concretos.

4.7.1.7.3. Zonas Francas de Innovación Azul

La creación de Zonas Francas de Innovación Azul en el Pacífico colombiano constituye una apuesta estratégica para transformar la región en un epicentro de desarrollo económico, científico y tecnológico. Este modelo, inspirado en experiencias exitosas como los parques marinos de Noruega y Portugal, busca articular investigación aplicada, biotecnología marina, acuicultura sostenible y energías oceánicas renovables. En los talleres regionales realizados en Chocó, Buenaventura y Tumaco en 2023, el 68 % de los participantes señaló la urgencia de contar con plataformas de innovación que les permitan aprovechar de manera sostenible los recursos marinos, mientras que el 54 % identificó la falta de centros de investigación aplicada como una de las principales barreras para la diversificación económica. Estos datos subrayan que las Zonas Francas de Innovación Azul no solo responden a una necesidad estructural, sino que reflejan demandas explícitas de las comunidades.

Desde una perspectiva económica, la creación de Zonas Francas de Innovación Azul es el imperativo estructural para desbloquear la riqueza del Pacífico. La viabilidad se demuestra en iniciativas piloto: cooperativas de pescadores en Tumaco han logrado incrementar sus ingresos netos al adoptar la trazabilidad digital, mientras que el cultivo comunitario de macroalgas en Nuquí prueba la posibilidad de generar bioproductos marinos con viabilidad comercial. Sin embargo, este potencial se enfrenta a un mandato ambiental ineludible: la alarmante sobreexplotación del 45 % de las especies pesqueras exige una transición urgente hacia prácticas de

acuicultura responsable y la exploración de energías oceánicas limpias. La experiencia global con la energía mareomotriz confirma que la inversión en el océano puede ser una fuente estable de energía y empleo cualificado.

El impacto social de las Zonas Francas es profundamente transformador. Este modelo ofrece la oportunidad de diversificar los ingresos y combatir la pobreza en territorios costeros históricamente excluidos, con la mujer afrodescendiente como el motor de esta nueva economía. Los talleres comunitarios revelan que el 61 % de las mujeres identifica la acuicultura sostenible como una vía de ingreso estable, mientras que los jóvenes expresan un claro interés en formarse en biotecnología y gestión empresarial vinculada al mar. Este enfoque no solo apunta a la reducción de la pobreza, sino a la creación de empleo cualificado y al fortalecimiento de la soberanía comunitaria, asegurando que el conocimiento ancestral se encuentre con la innovación digital.

Para garantizar la sostenibilidad y la credibilidad global de esta estrategia, se requiere un entramado de alianzas estratégicas que blinde el proyecto a largo plazo. La transferencia de conocimiento y tecnología de países líderes en economía azul, como Noruega, debe articularse con el rol crucial de las universidades del Pacífico (como Valle y Nariño) en la formación de capital humano especializado. El éxito de las Zonas Francas depende de que la investigación y la formación técnica se integren en cadenas de valor inclusivas y con alta participación comunitaria. Esta cooperación multiactor es la condición indispensable para que el Pacífico se posicione como un referente de innovación y resiliencia en la economía azul de América Latina.

En síntesis, las Zonas Francas de Innovación Azul no deben entenderse como simples enclaves económicos, sino como plataformas integrales de transformación territorial que combinan sostenibilidad ambiental, inclusión social y competitividad global. Con un diseño participativo que incorpore las demandas expresadas en los talleres regionales, estas zonas

tienen el potencial de posicionar al Pacífico colombiano como referente internacional en la gestión sostenible de la riqueza oceánica, demostrando que el mar puede convertirse en motor de bienestar y equidad para las generaciones presentes y futuras.

4.7.1.7.4. Centros de Innovación en Bioeconomía para el Desarrollo

La creación de Centros de Innovación en Bioeconomía en el Pacífico colombiano representa una estrategia clave para aprovechar la biodiversidad como motor de desarrollo sostenible. Esta región alberga más de 9.000 especies de flora y fauna con potencial para generar bioproductos farmacológicos, cosméticos y alimenticios (Instituto Humboldt, 2022). En los talleres realizados el 73 % de los participantes destacó la falta de infraestructura para transformar productos locales, mientras que el 64 % señaló la ausencia de capacitación en normas sanitarias y estándares de exportación como una limitación para ingresar a mercados internacionales. Estos hallazgos evidencian que la bioeconomía no puede desarrollarse sin plataformas de innovación que conecten ciencia, tecnología y saberes comunitarios.

Los Centros de Bioeconomía deben erigirse como verdaderos laboratorios de transformación territorial. Su función esencial es articular la inteligencia de las universidades, la sabiduría de las comunidades locales y la inversión del sector privado para convertir el potencial biológico en bioproductos de alto valor agregado. Experiencias piloto como la producción de aceites esenciales de borojó en el Chocó y la transformación de cacao orgánico en Tumaco demuestran que es posible fusionar la innovación tecnológica con la autonomía territorial. La consolidación de laboratorios avanzados en el Pacífico permitiría diversificar la economía hacia biocombustibles, biomateriales y suplementos nutricionales, fortaleciendo la autonomía local al reducir la dependencia de economías externas.

Un componente esencial de estos centros es la formación comunitaria en bioeconomía, con un enfoque irrenunciable en jóvenes y mujeres. Los talleres revelaron que más de la mitad de las mujeres afrodescendientes identifican la capacitación en biotecnología y mercadeo como la herramienta clave para asumir el liderazgo de sus propios emprendimientos. Esta visión es estratégica: los programas de bioeconomía con un enfoque inclusivo no solo fortalecen las capacidades técnicas; consolidan el sentido de pertenencia comunitario y reducen la desigualdad territorial. El modelo de cooperativas como el de Anchicayá confirma que la capacitación culturalmente adaptada es el motor que incrementa la resiliencia económica y social.

El éxito de estos centros depende de un entramado financiero sólido y multisectorial. La inversión en bioeconomía ha demostrado ser un motor de desarrollo, generando múltiples beneficios sociales y ambientales por cada dólar invertido. El apoyo de fondos globales para la transición hacia biomateriales de bajo impacto es crucial, ya que alinea la producción local con la mitigación del cambio climático global. Al incorporar rigurosas certificaciones de sostenibilidad y comercio justo, los Centros de Innovación en Bioeconomía logran un doble propósito: impulsar exportaciones de calidad premium y, al mismo tiempo, dignificar la producción comunitaria del Pacífico en los mercados globales.

En definitiva, los Centros de Innovación en Bioeconomía son más que espacios de investigación; son plataformas integrales de transformación territorial. Basada en los resultados de los talleres y las experiencias piloto ya en marcha, esta estrategia es urgente para garantizar que la inmensa riqueza biológica del Pacífico se convierta en un motor de bienestar colectivo. La bioeconomía ofrece el camino para consolidar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y globalmente competitivo, reescribiendo el futuro de la región desde la ciencia, el conocimiento ancestral y la dignidad.

4.7.1.7.5. Atracción de Inversión Nacional e Internacional: Transformando el Pacífico Colombiano

El Pacífico colombiano, una región de inigualable riqueza natural y cultural, ha sido históricamente un territorio olvidado en la agenda económica del país, a pesar de que su posición estratégica y su inmenso potencial productivo lo convierten en un eje crucial para el desarrollo sostenible de Colombia. Para transformar esa promesa en realidad, es fundamental implementar estrategias económicas innovadoras que integren incentivos fiscales, infraestructura estratégica y una visión de sostenibilidad que garantice impactos a largo plazo. Ese enfoque busca reconfigurar las dinámicas económicas y devolverles el protagonismo a las comunidades que, por siglos, han sido guardianas de su región.

Uno de los pilares más transformadores para revertir la exclusión histórica es el desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE), concebidas como corredores estratégicos diseñados para anclar la inversión ética. Estas zonas deben ir mucho más allá de un simple perímetro fiscal: deben estar equipadas con incentivos diferenciados y una conectividad logística robusta que capitalice la posición geográfica privilegiada del Pacífico. El objetivo es atraer inversión de impacto en sectores clave como la agroindustria sostenible, la tecnología verde y el turismo cultural de alto impacto. Al generar en promedio un 25 % más de empleos en comparación con otras regiones, este modelo representa la única estrategia viable para transformar Tumaco, Buenaventura y Guapi en puntos focales de desarrollo y prosperidad resiliente.

La implementación de estas ZEE debe ser entendida como un pacto de largo plazo para la estabilidad territorial. La clave para su éxito no es solo la inversión inicial, sino su capacidad para anclar cadenas de valor locales y asegurar la participación de las comunidades. Este modelo permite canalizar la inversión hacia la formalización de la economía popular, el

desarrollo de *startups* de bioproductos y la generación de empleo cualificado. Al fusionar el capital global con el conocimiento ancestral y el valor biocultural, se crea un ecosistema productivo resiliente capaz de competir en los mercados internacionales. La ZEE se convierte, así, en la prueba de que la inversión planificada y sostenible es la herramienta más poderosa para reemplazar la economía de la guerra con un desarrollo justo.

La articulación entre el sector público, las empresas privadas y las organizaciones internacionales es esencial para garantizar el éxito de esas iniciativas. Las alianzas público-privadas (APP) permitirían apalancar los recursos necesarios para grandes proyectos de infraestructura, así como dinamizar sectores económicos estratégicos. La modernización portuaria, por ejemplo, podría convertirse en un motor de exportación para productos agrícolas con denominación de origen, como el cacao del Pacífico o los bioproductos marinos, al generar ingresos significativos para las comunidades locales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023) detalla que cada dólar invertido en infraestructura genera hasta tres dólares en beneficios económicos indirectos, lo que refuerza la necesidad de una inversión decidida en esa dirección.

Un componente crucial de esa transformación económica es el *marketing* territorial, una herramienta subestimada en la planificación económica regional. Posicionar al Pacífico como un epicentro de biodiversidad, innovación y cultura aumenta su atractivo para inversores y fortalece el sentido de identidad y pertenencia de sus habitantes. Las campañas de *marketing* deben destacar el Pacífico como una región única, donde la economía sostenible se entrelaza con la preservación cultural y ambiental. ProColombia (2023a) señala que los territorios que logran articular una narrativa coherente y atractiva para los mercados internacionales experimentan un crecimiento del 30 % en las exportaciones no tradicionales, dato que subraya el potencial de esa estrategia.

El éxito de esas iniciativas dependerá de su capacidad para generar impactos inclusivos. No basta con atraer capital e infraestructuras; es imperativo que esos beneficios permeen a las comunidades locales, cerrando brechas históricas de desigualdad y promoviendo liderazgos comunitarios en la toma de decisiones. La economía del Pacífico no puede construirse como un apéndice de la economía nacional, deber ser un modelo integral para que la riqueza natural y cultural de la región se convierta en el eje de su desarrollo. Ese enfoque garantizará la sostenibilidad económica y la dignidad de sus habitantes, al construir un futuro en el que el Pacífico colombiano brille como un referente global de innovación y equidad.

4.7.1.7.6. Infraestructura Verde y Conectividad Digital: El Camino Hacia la Sostenibilidad del Pacífico.

El Pacífico colombiano ha enfrentado históricamente un déficit en infraestructura básica y conectividad, lo cual ha perpetuado su exclusión de las dinámicas nacionales e internacionales. Del mismo modo, el 89 % de los participantes identificó la falta de vías de acceso resilientes como la principal barrera para la comercialización de productos, mientras que el 82 % resaltó las limitaciones de conectividad digital como un obstáculo para acceder a mercados y servicios básicos. Estos hallazgos reflejan la urgencia de diseñar un modelo de infraestructura verde y conectividad digital que promueva la integración económica y social, pero que al mismo tiempo respete los ecosistemas y evite reproducir desigualdades históricas.

La infraestructura verde implica desarrollar carreteras, sistemas energéticos y equipamientos urbanos que minimicen la huella ambiental y fortalezcan la resiliencia climática. Experiencias internacionales muestran su eficacia: en Brasil, la construcción de carreteras con materiales reciclables redujo en un 25 % las emisiones de carbono (Mustafa, 2025). En el contexto local, proyectos como la vía Buenaventura–Loboguerrero han incorporado tramos de bioingeniería para mitigar riesgos de deslizamiento,

confirmando la viabilidad de esta estrategia. El Banco Mundial (2021) ha demostrado que cada dólar invertido en infraestructura sostenible genera hasta cuatro dólares en beneficios sociales y económicos, lo que refuerza la pertinencia de priorizar estas inversiones en el Pacífico colombiano.

La digitalización sin un acompañamiento social y étnico se arriesga a instaurar un nuevo extractivismo, esta vez no de oro o madera, sino de información y datos. Los programas que se implementan de forma vertical tienden a beneficiar a los sectores ya privilegiados, mientras que la mayoría de las comunidades quedan relegadas al papel de meros consumidores o, peor aún, a generar datos sin control sobre su uso. Este proceso puede generar nuevas y peligrosas formas de dependencia tecnológica, donde la infraestructura y la gestión quedan en manos externas. La verdadera amenaza no es la falta de señal, sino la pérdida de la soberanía digital sobre sus propios recursos y su conocimiento.

Para que la conectividad digital sea una herramienta de justicia y no de profundización de la brecha, es fundamental garantizar la soberanía digital de los territorios. Esto implica que la inversión en infraestructura debe ir inseparablemente ligada a la formación tecnológica de base, priorizando a las mujeres y los jóvenes como líderes del proceso. Solo al dotar a las comunidades de las capacidades para gestionar sus propias plataformas, utilizar *blockchain* para la trazabilidad y negociar directamente en mercados electrónicos, la tecnología se convertirá en un catalizador de la autonomía económica y del empoderamiento local, cumpliendo el mandato de romper con la exclusión histórica del Pacífico.

La tecnología digital, si bien es la herramienta clave para dismantelar el aislamiento geográfico, se presenta como una espada de doble filo que amenaza con instaurar una nueva y sofisticada exclusión. La evidencia del Pacífico es contundente: implementar la digitalización sin un acompañamiento comunitario y ético tiende a reforzar la dependencia, beneficiando

a los sectores que ya poseen capital educativo y económico. La falta de capacitación tecnológica perpetúa esta brecha, corriendo el riesgo de que la economía digital se convierta en una nueva forma de extractivismo de datos. Para mitigar este riesgo, la conectividad debe ser diseñada como un bien colectivo y culturalmente pertinente. El éxito de las plataformas locales, que ya demuestran incrementos del 40 % en los ingresos de los pescadores, radica en que la conectividad no se limita a “poner antenas”, sino que se articula con la formación en derechos digitales, comercio justo y gestión autónoma de la información.

En conclusión, el desarrollo de infraestructura verde y conectividad digital en el Pacífico colombiano no puede ser entendido como una simple estrategia técnica o logística. Su éxito trascendental depende de que estas herramientas se conviertan, de manera intencionada, en los motores de bienestar colectivo y autonomía territorial, y no en nuevos vehículos de desigualdad. Un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible exige la convergencia estratégica de la sostenibilidad ambiental, la soberanía digital y la participación comunitaria. Solo al integrar estas perspectivas, la región garantizará su integración al mundo desde una posición de equidad, innovación y resiliencia, cumpliendo con el mandato de transformar la exclusión histórica en un futuro de dignidad.

4.7.1.7.7. Centros de Innovación y Emprendimiento Comunitario

El desarrollo de Centros de Innovación y Emprendimiento Comunitario en el Pacífico colombiano tiene el potencial de transformar profundamente las dinámicas sociales, económicas y ambientales de la región. Esos centros, diseñados como espacios multifuncionales, combinarían tecnología, educación y emprendimiento para empoderar a las comunidades locales. La región, rica en biodiversidad y diversidad cultural, ofrece un terreno fértil para desarrollar iniciativas innovadoras que aprovechen sus recur-

sos de manera sostenible y que generen empleos, fortalezcan la cohesión social y mejoren significativamente la calidad de vida de sus habitantes.

En primer lugar, esos centros funcionarían como nodos tecnológicos que brinden acceso a herramientas modernas y conectividad digital. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2023) reconocen que más del 60 % de las zonas rurales del Pacífico carecen de acceso a internet de calidad. La creación de esos espacios equipados con tecnología avanzada permitiría a las comunidades conectarse con mercados nacionales e internacionales, acceder a capacitaciones virtuales y participar en redes de innovación global. Además, proporcionarían formación en áreas como diseño digital, programación, y agricultura de precisión, al preparar a los habitantes para enfrentar los retos de la economía contemporánea.

Un aspecto fundamental de esos centros sería su enfoque en el emprendimiento sostenible. Se ofrecerían programas específicos de formación en modelos de negocio adaptados a las características y necesidades locales, como el desarrollo de bioproductos, ecoturismo y agroindustria. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023a) asume que los emprendimientos sostenibles tienen el potencial de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, al tiempo que fomentan empleos dignos y fortalecen las cadenas de valor locales. Esos espacios también actuarían como incubadoras de empresas, al brindar asesoramiento técnico, acceso a microcréditos y apoyo para comercializar productos en mercados más amplios.

La educación sería otro pilar de los Centros de Innovación y Emprendimiento Comunitario. Más allá de la formación técnica y empresarial, esos espacios podrían incorporar programas culturales y de sensibilización ambiental. Para Ramírez & Gómez (2023), la educación contextualizada que incluya elementos culturales y ambientales tiene un impacto significativo en la construcción de sociedades resilientes y cohesionadas. Al

integrar conocimientos ancestrales con tecnologías modernas, los centros preservarían el patrimonio cultural del Pacífico y abrirían oportunidades para su valorización en contextos globales.

Además, esos centros servirían como plataformas de cohesión social, al promover la participación de todos los sectores de la comunidad. En ellos, jóvenes, mujeres, líderes indígenas y afrodescendientes tendrían voz y un espacio para desarrollar proyectos colectivos. La UNESCO (2023a) revela que la participación comunitaria en proyectos de desarrollo aumenta su éxito en un 40 %, dado que refuerza el sentido de pertenencia y empoderamiento local. Esa estrategia también permitiría superar barreras históricas de exclusión y marginalización al brindar acceso equitativo a recursos y conocimientos.

La sostenibilidad ambiental sería transversal en todas las actividades de esos centros. Proyectos de reforestación, conservación de fuentes hídricas y restauración de ecosistemas podrían vincularse con actividades económicas, como la certificación de productos orgánicos o el desarrollo de turismo de naturaleza. El Instituto Humboldt (2022) muestra que iniciativas que integran economía y conservación logran generar beneficios tangibles tanto para las comunidades como para el medioambiente. Al implementar prácticas sostenibles desde esos centros, el Pacífico colombiano podría convertirse en un modelo global de desarrollo basado en la justicia social y la sostenibilidad.

La creación de Centros de Innovación y Emprendimiento Comunitario representa una estrategia audaz y necesaria para el Pacífico colombiano. Ello responde a las necesidades urgentes de desarrollo económico y social y posiciona a la región como un espacio de innovación y sostenibilidad en el contexto nacional e internacional. Esas iniciativas, si se desarrollan con compromiso y apoyo adecuado, pueden ser la clave para transformar el Pacífico en un ejemplo de progreso inclusivo y resiliente.

4.7.1.7.8. Desarrollo Empresarial y Emprendimientos Sostenibles en el Pacífico Colombiano

El Pacífico colombiano, hogar de una de las mayores diversidades culturales y naturales del mundo, enfrenta desafíos estructurales que limitan su desarrollo económico. Aun así, esa región también alberga un potencial sin igual para el emprendimiento sostenible, especialmente entre las comunidades afrodescendientes e indígenas. La clave para desbloquear ese potencial radica en el diseño de estrategias innovadoras que fomenten el desarrollo empresarial y se alineen con los principios de sostenibilidad ambiental, equidad social y respeto por las tradiciones culturales.

Un componente central de esas estrategias es la implementación de ecosistemas empresariales inclusivos, que facilite el acceso al financiamiento, la capacitación y los mercados para pequeños empresarios locales. El Banco Mundial (2024) admite que los ecosistemas de emprendimiento bien diseñados pueden aumentar en un 40 % la tasa de éxito de las microempresas en contextos rurales. Ello, en el Pacífico colombiano podría traducirse en mayores ingresos para comunidades que históricamente han sido excluidas del sistema económico formal. Además, esas iniciativas deben integrar conocimientos tradicionales y promover la participación de los líderes comunitarios para asegurar su sostenibilidad.

La creación de cooperativas empresariales lideradas por mujeres afrodescendientes e indígenas también podría transformar las dinámicas económicas locales. Cooperativas que pueden centrarse en sectores estratégicos como la agroindustria, los bioproductos marinos y el turismo sostenible. Por ejemplo, las mujeres del Consejo Comunitario del Río Anchicayá en el Valle del Cauca han logrado diversificar sus ingresos mediante la comercialización de cacao orgánico, un modelo que podría replicarse en toda la región. Fedecacao (2023) reconoce que el cacao producido en el

Pacífico colombiano tiene un perfil de sabor único que lo hace altamente competitivo en mercados internacionales.

Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en la región. La conectividad digital facilita el acceso a mercados globales y permite la implementación de soluciones innovadoras, como plataformas de comercio electrónico y sistemas de trazabilidad de productos. Al respecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2023) argumenta que mejorar la conectividad en las zonas rurales podría aumentar en un 30 % los ingresos de los productores al eliminar intermediarios y garantizar precios justos.

Además, es esencial establecer alianzas público-privadas que impulsen la inversión en proyectos sostenibles. La experiencia en otras regiones muestra que esas alianzas pueden ser un motor clave para el desarrollo. Por ejemplo, en el Amazonas brasileño, las asociaciones entre empresas privadas y comunidades indígenas han generado empleos, preservado la biodiversidad y promovido el comercio justo (WWF, 2025). Un modelo similar podría adaptarse en el Pacífico colombiano, que maximice el uso sostenible de sus recursos naturales.

El fortalecimiento de las capacidades locales es igualmente crucial. Crear academias empresariales en la región, enfocadas en desarrollar habilidades de gestión, innovación y sostenibilidad, puede preparar a las nuevas generaciones para liderar sus comunidades hacia un desarrollo inclusivo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023b), los programas educativos que combinan teoría y práctica aumentan en un 50 % la empleabilidad de los jóvenes en sectores emergentes.

Por tanto, una narrativa económica para el Pacífico colombiano debe incluir un enfoque ético y transformador. La inclusión de esas comunidades en el diseño de políticas públicas y la priorización de sus necesidades

en las agendas nacionales son pasos indispensables. Como señala Sen (1999), el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino la expansión de las libertades reales que las personas disfrutan. Aplicar esa perspectiva al Pacífico colombiano garantizará su integración en el mercado global, respetará y fortalecerá la identidad única de sus comunidades afrodescendientes e indígenas.

4.7.1.8. Estrategias de Visibilidad Cultural

La cultura del Pacífico es un tesoro que merece mayor visibilidad. Festivales como el Petronio Álvarez han demostrado que las expresiones culturales de la región tienen un atractivo universal, pero se necesita un esfuerzo continuo para integrarlas en el imaginario colectivo nacional e internacional. Campañas mediáticas que destaquen la riqueza musical, gastronómica y artesanal del Pacífico pueden ser herramientas poderosas para cambiar narrativas.

Además, la educación cultural debe empezar en las aulas. Incluir contenidos de la historia y cultura del Pacífico en los currículos escolares fomenta el orgullo local y educa al resto del país acerca de la importancia de esa región. Ejemplos como los talleres de música tradicional en Buenaventura han demostrado el impacto transformador de dichas iniciativas.

4.7.1.8.1. Circuitos Culturales y Creativos

El desarrollo de Circuitos Culturales y Creativos en el Pacífico colombiano representa una oportunidad única para transformar el potencial cultural de la región en un motor de desarrollo económico y cohesión social. Ese modelo propone crear redes integradas que conecten a comunidades locales a través de expresiones artísticas, festivales, turismo cultural y economías creativas. Según la UNESCO (2023b), las industrias culturales

y creativas generan alrededor del 3 % del PIB mundial, y su implementación en territorios vulnerables ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la pobreza y fortalecer la identidad comunitaria. En el Pacífico, donde la música, la danza, la gastronomía y las narrativas orales son pilares fundamentales de su riqueza cultural, los circuitos culturales pueden convertirse en catalizadores de transformación social y económica.

El diseño de esos circuitos debe centrarse en las fortalezas culturales propias de cada departamento del Pacífico, como el Festival Petronio Álvarez en el Valle del Cauca, las tradiciones de los palenques en el Chocó o las expresiones culinarias de Nariño. Esas iniciativas podrían articularse mediante festivales itinerantes, mercados de artesanías y exposiciones artísticas que conecten a las comunidades locales con audiencias nacionales e internacionales. Calderón & Gómez (2023b) resalta que los eventos culturales generan ingresos directos a través del turismo y promueven la apropiación del territorio y el orgullo cultural, elementos esenciales para la cohesión social.

Además de la visibilización de las tradiciones culturales, los circuitos creativos deben incluir procesos de formación y profesionalización para los artistas y gestores culturales locales. La creación de escuelas de arte y creatividad en municipios estratégicos fortalecería las competencias de los jóvenes en áreas como música, diseño, cine y literatura, vinculándolos con redes nacionales e internacionales del sector cultural. Para ProColombia (2023), los proyectos culturales que cuentan con formación técnica y acceso a mercados globales pueden incrementar sus ingresos en más de un 30 %, al dinamizar las economías locales y generar empleo.

El turismo cultural también sería un componente central de esa estrategia, al atraer visitantes interesados en conocer la autenticidad y diversidad del Pacífico. Iniciativas como recorridos guiados por comunidades afrodescendientes e indígenas, talleres gastronómicos y espectáculos

de música tradicional permitirían a los turistas interactuar directamente con los habitantes y contribuir al desarrollo económico de las comunidades. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2023) afirma que el turismo cultural tiene el potencial de generar ingresos anuales superiores a U\$100 millones de dólares, de implementarse estrategias adecuadas de promoción y desarrollo de infraestructura.

Un elemento clave para el éxito de esos circuitos sería el establecimiento de alianzas público-privadas que garanticen el financiamiento, la logística y la promoción de las actividades culturales. Las empresas locales podrían colaborar como patrocinadores, mientras que las organizaciones internacionales podrían aportar recursos técnicos y económicos para la creación de infraestructuras culturales. Además, los gobiernos locales y nacionales jugarían un rol central al garantizar políticas públicas que prioricen la protección del patrimonio cultural y la sostenibilidad de los proyectos creativos.

En resumen, los Circuitos Culturales y Creativos ofrecen una solución innovadora para enfrentar los desafíos estructurales del Pacífico colombiano, al convertir la riqueza cultural en un motor de desarrollo inclusivo. Al integrar elementos de formación, turismo y visibilización, esa estrategia fortalecería la identidad cultural de la región, generaría ingresos sostenibles y promovería la cohesión social. El éxito de esa iniciativa requerirá un enfoque participativo que incluya a las comunidades locales como protagonistas, al asegurar que los beneficios económicos y sociales se distribuyan de manera equitativa y sostenible.

4.7.1.9. Estrategias de visibilidad en la educación

La educación es una herramienta transformadora capaz de cambiar narrativas, construir identidades y empoderar comunidades. En el caso del Pacífico colombiano, donde la invisibilidad histórica ha perpetuado

la exclusión social y el desconocimiento de su riqueza cultural y ambiental, la educación se presenta como un eje estratégico para la visibilidad regional. Integrar las particularidades del Pacífico en los sistemas educativos fortalece el sentido de pertenencia de sus habitantes y promueve un reconocimiento más amplio de su importancia para el país y el mundo.

Este apartado explora las estrategias educativas necesarias para posicionar al Pacífico en el mapa. Mediante la incorporación de contenidos de la historia, cultura y biodiversidad regional en los currículos escolares, hasta la creación de programas de formación técnica y profesional que respondan a las necesidades locales, se busca educar e inspirar. A través de esas estrategias, la educación se convierte en un puente entre la tradición y la innovación, para proyectar al Pacífico como un modelo de resiliencia y sostenibilidad.

4.7.1.9.1. Educación para la Innovación y el Liderazgo Comunitario

La educación en el Pacífico colombiano debe trascender las estructuras tradicionales para convertirse en un catalizador de innovación y liderazgo comunitario. Ese nuevo enfoque educativo debe priorizar la transferencia de conocimientos y la capacidad de los estudiantes para resolver problemas locales de manera creativa y sostenible. Ramírez & Gómez (2023) explican que implementar programas educativos que combinen habilidades técnicas con liderazgo y emprendimiento social puede empoderar a las comunidades para abordar sus propios desafíos, al fomentar la resiliencia y la autosuficiencia.

Un componente esencial de esa estrategia es la integración de la educación basada en proyectos, en los cuales los estudiantes trabajan en problemas reales de sus comunidades. Por ejemplo, proyectos enfocados en la restauración de ecosistemas locales, el diseño de tecnologías para

mejorar el acceso al agua potable o la creación de cadenas de valor para productos locales como el cacao. La UNESCO (2023a) informa que esa metodología aumenta significativamente la participación y el aprendizaje de los estudiantes, al conectar la educación con el desarrollo práctico y la mejora de su entorno inmediato.

La educación para la innovación también debe estar acompañada de un fuerte componente tecnológico. El uso de herramientas digitales, como plataformas de aprendizaje en línea, laboratorios virtuales y simulaciones interactivas, puede superar las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a la educación de calidad en el Pacífico. Según MinTIC (2023), la conectividad digital en zonas rurales aumentó un 18 % en los últimos dos años, lo que abre la puerta para implementar iniciativas tecnológicas que transformen el aprendizaje en dichas regiones.

Adicionalmente, el modelo educativo para el Pacífico debe incorporar, de manera ineludible, un enfoque intercultural que reconozca y preserve la vasta sabiduría de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Esta integración de saberes ancestrales no es un mero adorno curricular; es un acto de justicia que cimienta el sentido de identidad y pertenencia en los estudiantes, al tiempo que funciona como una fuente genuina de soluciones innovadoras para la crisis ecológica y climática. Por ejemplo, al incluir la agroforestería como parte esencial del currículo, se logra revitalizar conocimientos transmitidos por generaciones sobre técnicas agrícolas inherentemente respetuosas con el medioambiente. De este modo, la educación se transforma en un mecanismo de soberanía que vincula la memoria histórica con la sostenibilidad futura.

El impacto económico de esa estrategia sería transformador. La educación para la innovación y el liderazgo puede aumentar la empleabilidad al preparar a los estudiantes para sectores emergentes como la bioeconomía, la economía circular y el ecoturismo. Un estudio del Banco Mundial (2023)

refiere que las regiones que invierten en educación innovadora experimentan un crecimiento económico hasta un 12 % superior en comparación con las que mantienen enfoques tradicionales. Además, los graduados de programas con componentes técnicos y de liderazgo tienen un 70 % más de probabilidades de iniciar negocios sostenibles en sus comunidades.

Esa visión educativa debe estar respaldada por alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, que garanticen recursos, infraestructura y capacitación docente. Organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían jugar un papel clave en la financiación y diseño de programas educativos adaptados a las necesidades del Pacífico. Como señala López (2023), las alianzas multisectoriales no solo garantizan sostenibilidad financiera, sino que también aumentan la eficacia de las iniciativas al integrar diferentes perspectivas y conocimientos.

4.7.1.9.2. Academias de liderazgo Afro Indígena.

La implementación de Academias de Liderazgo Afro e Indígena en el Pacífico colombiano no es una opción de desarrollo, sino una respuesta política urgente ante la exclusión histórica y la marginación que han condenado a la región. Estas instituciones deben erigirse como verdaderos centros de formación integral, diseñados para transformar la dinámica de poder y empoderar a los líderes en la gestión territorial, la defensa de los derechos colectivos y el desarrollo sostenible. La profunda exclusión socioeconómica y política que enfrentan estos pueblos subraya el mandato de crear estrategias que refuercen sus capacidades de autogestión y representación, convirtiendo el saber en poder efectivo.

El diseño de estas academias debe ser intrínsecamente inclusivo, fusionando las epistemologías ancestrales con los enfoques contemporáneos de liderazgo. Los módulos no pueden ser genéricos; deben anclarse en la

realidad biocultural del territorio, ofreciendo formación especializada en bioeconomía, agroforestería y negociación intercultural. Es crucial que el currículo se enfoque en la defensa territorial y la preservación cultural, garantizando que los líderes no solo adquieran competencias técnicas avanzadas, sino que valoren y comprendan las raíces históricas de su resistencia. Esta integración del conocimiento local incrementa la pertinencia cultural y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos comunitarios.

El impacto de estas academias es profundamente multifacético. La formación de líderes no solo fortalece la cohesión social y la gobernanza comunitaria en la base, sino que habilita la incidencia política en escenarios nacionales e internacionales. El propósito es que los líderes del Pacífico pasen de la defensa territorial a la conquista de espacios institucionales. La experiencia global demuestra que los egresados de estas escuelas no solo administran sus territorios, sino que ocupan roles estratégicos en el gobierno y foros mundiales. Este enfoque asegura que las comunidades históricamente marginadas tengan voz y voto en las decisiones fundamentales que moldean el futuro de Colombia.

Además de la formación individual, estas academias deben funcionar como plataformas para la creación de redes intercomunitarias. Facilitar el intercambio de experiencias y la colaboración entre líderes de diferentes territorios es vital en un contexto de fragmentación y vulnerabilidad compartida (minería ilegal, deforestación, exclusión económica). La red de colaboración actúa como un poderoso multiplicador de la resiliencia, permitiendo a las comunidades desarrollar y fortalecer estrategias colectivas frente a amenazas externas. La solidaridad territorial, organizada a través de estas redes, se convierte en un capital político inestimable.

El éxito y la perdurabilidad de esta estrategia dependen de la creación de alianzas horizontales sólidas con organismos internacionales, universidades de alto nivel y el sector privado con responsabilidad social. La

participación de las comunidades en la planificación y ejecución de las academias no es negociable; es el único garante de su pertinencia y sostenibilidad. Los programas de formación diseñados con el protagonismo de los beneficiarios tienen una probabilidad significativamente mayor de generar impactos positivos a largo plazo, asegurando que la inversión financiera y técnica se traduzca en autonomía real, y no en dependencia asistencialista.

En definitiva, las Academias de Liderazgo Afro e Indígena tienen el potencial de convertirse en el pilar de transformación estructural más importante en el Pacífico colombiano. Estas instituciones empoderan a los líderes actuales y preparan a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de la región con conocimiento, resiliencia y una visión clara de desarrollo sostenible. Al invertir en estas academias, el país honra la riqueza biocultural del Pacífico y avanza hacia un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo y equitativo, donde las comunidades históricamente marginadas asumen el rol de actores clave del progreso nacional.

4.7.1.9.3. Red de Escuelas Fluviales para el Desarrollo Integral

La implementación de una red de escuelas fluviales en el Pacífico colombiano podría revolucionar la forma en que se lleva educación, salud y capacitación técnica a las comunidades más aisladas. Ese modelo, inspirado en iniciativas como las escuelas móviles de la Amazonía brasileña, tiene el potencial de llegar a lugares donde la infraestructura terrestre es inexistente o insuficiente. En una región atravesada por vastos sistemas fluviales, esas embarcaciones equipadas con aulas, laboratorios y servicios básicos se convertirían en un puente hacia el conocimiento y el desarrollo. Según la UNESCO (2023a), las escuelas móviles en regiones remotas han demostrado ser herramientas efectivas para reducir las brechas de acceso a la educación, un problema crítico en departamentos como Chocó y Nariño, donde la deserción escolar supera el 30 %.

Además de la enseñanza convencional, esas escuelas fluviales pueden especializarse en temas vitales para la sostenibilidad y el desarrollo local, como la gestión de recursos naturales, la agroforestería y el emprendimiento comunitario. Ello permitiría a las comunidades aprender prácticas que fortalezcan su autonomía económica y preserven su entorno natural. Por ejemplo, en comunidades afrodescendientes a lo largo del río San Juan, el conocimiento de la pesca sostenible y de técnicas de conservación podría transformar su relación con el medioambiente, al promover un desarrollo armónico. La FAO (2023) anuncia que la capacitación técnica en áreas rurales aumenta en un 40 % la productividad de las economías locales, al generar ingresos sostenibles y mejorar la calidad de vida.

El impacto de esas escuelas fluviales no se limita a la educación. También pueden actuar como centros de salud itinerantes, al proporcionar atención médica básica y programas de nutrición en comunidades donde los índices de mortalidad infantil y enfermedades prevenibles son alarmantemente altos. Para el Ministerio de Salud (2023b), el acceso a servicios básicos en el Pacífico colombiano está por debajo del 50 %, lo que convierte esas iniciativas en una solución urgente y necesaria. La combinación de educación y salud crea un enfoque holístico que aborda las necesidades más urgentes de la región, al fortalecer el tejido social y empoderar a las comunidades para superar las condiciones de vulnerabilidad.

Para garantizar la sostenibilidad de ese modelo, es fundamental establecer alianzas entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones internacionales. El financiamiento inicial podría provenir de programas como el Fondo Verde para el Clima y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que las comunidades locales podrían participar en la operación y mantenimiento de las embarcaciones. La participación de las comunidades asegura la pertinencia cultural de los contenidos educativos y refuerza el sentido de pertenencia. El BID (2023) expone que proyectos

comunitarios que involucran a los beneficiarios en su diseño y ejecución tienen un 60 % más de probabilidades de ser sostenibles a largo plazo.

La red de escuelas fluviales no es simplemente una estrategia logística para la educación; es un poderoso símbolo de resiliencia y esperanza para el Pacífico colombiano. Estas embarcaciones educativas, al navegar los ríos y esteros, se convierten en una fuerza activa que acorta las barreras históricas de exclusión y el aislamiento geográfico que han marginado a la región por décadas. La inversión en estas soluciones educativas innovadoras es un acto que transforma las condiciones de vida de las comunidades más dispersas.

Si este modelo se implementa con compromiso real y visión estratégica, el Pacífico tiene el potencial de transformarse en un referente de desarrollo inclusivo. Al llevar el conocimiento directamente a los territorios a través de un medio culturalmente pertinente, se asegura que la equidad y la educación sean las herramientas principales para construir un futuro sostenible. Las escuelas fluviales demuestran que, al honrar la geografía y la cultura local, comunidades enteras pueden convertirse en motores de cambio social y económico.

4.7.1.8. Estrategias de Visibilidad Ambiental

Las Estrategias de Visibilidad Ambiental propuestas para el Pacífico colombiano se enfocan en destacar la importancia de sus recursos naturales y posicionar la región como un modelo de sostenibilidad ambiental en los escenarios nacional e internacional. En ese marco, la conservación de ecosistemas clave, como los manglares, arrecifes coralinos y selvas tropicales, ocupa un lugar central. Martínez-Alier (2022a) proponen que esas áreas representan un refugio para la biodiversidad global y que son esenciales para las comunidades locales, además, dependen de ellas para

sus actividades económicas y culturales. La visibilización de esos ecosistemas a través de campañas educativas, turísticas y mediáticas busca su protección y resaltar su relevancia en la lucha contra el cambio climático.

Las estrategias de desarrollo para el Pacífico deben integrar tecnologías avanzadas, como el monitoreo satelital, no solo como una herramienta técnica, sino como un mecanismo de blindaje territorial contra las actividades ilegales. Estos sistemas son indispensables para la detección temprana de amenazas como la tala y la minería no reguladas, supliendo la ausencia física del Estado en vastas zonas rurales. Al mismo tiempo, el uso de aplicaciones móviles permite la transferencia de conocimientos y la promoción de prácticas productivas sostenibles, optimizando el uso de recursos. Estas herramientas tienen el potencial de amplificar la voz de las comunidades locales en los foros ambientales globales, transformando su conocimiento en evidencia política para la toma de decisiones.

El fortalecimiento de redes de colaboración con instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) es crucial para la sostenibilidad de estas iniciativas. La cooperación es el catalizador que permite atraer los recursos financieros y técnicos necesarios para escalar los proyectos de conservación y monitoreo comunitario. Estas alianzas proyectan al Pacífico colombiano no solo como una víctima, sino como un territorio resiliente y estratégico en la agenda ambiental global. Las acciones conjuntas, integradas y sostenidas en el tiempo, son la prueba de que la defensa del capital natural del Pacífico es, en última instancia, una responsabilidad compartida entre lo local y lo global.

4.7.1.8.1. Centros de Excelencia en Resiliencia Climática

El cielo del Pacífico colombiano, con su denso mosaico de verdes y azules, guarda un contraste doloroso: la belleza inigualable de sus paisajes

choca con las cicatrices profundas que el cambio climático y la explotación desmedida han dejado en la región. En una mañana cualquiera en Tumaco, los pescadores observan cómo el nivel del mar reclama más tierra que nunca, mientras en Quibdó, las lluvias interminables inundan cultivos esenciales para la subsistencia. Ese escenario, aunque devastador, es también un llamado urgente a la acción: el Pacífico colombiano necesita soluciones, porque se las merece. Aquí es donde los Centros de Excelencia en Resiliencia Climática emergen como una propuesta transformadora para reescribir el destino de esa región.

Esos centros no serían simples espacios de investigación, sino faros de conocimiento y acción para comunidades históricamente relegadas. En su núcleo, los Centros de Excelencia combinarían ciencia de vanguardia con la sabiduría local, al integrar tecnologías avanzadas con las prácticas ancestrales de los pueblos afrodescendientes e indígenas. El Instituto Humboldt (2022) estima que las comunidades que integran saberes tradicionales en sus estrategias de adaptación climática tienen una capacidad significativamente mayor de enfrentar fenómenos extremos como inundaciones y sequías. Así, esos centros representarían una respuesta técnica, un homenaje y una defensa del conocimiento cultural.

Una de las áreas más críticas de acción sería la restauración ecológica. En municipios como Guapi y Bahía Solano, donde la deforestación ha reducido la cobertura boscosa en un 18 % durante la última década (DANE, 2024), esos centros podrían liderar iniciativas de reforestación con especies nativas. Más allá de ser un acto ambiental, ese enfoque tiene un impacto económico directo: los proyectos de restauración generan empleos locales y, a largo plazo, fortalecen cadenas productivas sostenibles como la bioeconomía. El Banco Mundial (2023) asume que las comunidades que participan en proyectos de reforestación experimentan un aumento del 12 % en sus ingresos anuales, lo que subraya el poder transformador de ese tipo de iniciativas.

La educación climática es otro pilar clave. Esos centros investigarían y capacitarían a líderes comunitarios, agricultores y pescadores en prácticas resilientes. Aquí, cabría imaginarse a un joven líder de Buenaventura aprendiendo técnicas de agroforestería que combinan cacao y árboles maderables, o a una lideresa indígena del Chocó participando en talleres en manejo hídrico sostenible. Esos conocimientos impactan al individuo, pero de paso se diseminan en las comunidades, al fortalecer la cohesión social y la autosuficiencia. La FAO (2023) registra que la capacitación en sostenibilidad puede reducir en un 40 % la vulnerabilidad económica en regiones afectadas por el cambio climático.

Por último, los Centros de Excelencia en Resiliencia Climática tienen el potencial de convertir al Pacífico colombiano en un referente internacional. A través de la implementación de proyectos piloto como la restauración de manglares y el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la región podría posicionarse como un modelo global de adaptación climática. El Fondo Verde para el Clima y el Banco Interamericano de Desarrollo han demostrado interés en iniciativas similares en América Latina, lo que podría traducirse en financiamiento para el Pacífico. Esas alianzas no solo fortalecen la capacidad técnica de los centros, sino que también amplifican su impacto al integrarlos en redes globales de acción climática (BID, 2023).

En conclusión, los Centros de Excelencia en Resiliencia Climática son más que una simple propuesta, son una necesidad urgente para garantizar la supervivencia y el bienestar del Pacífico colombiano. En un contexto de crisis climática global, esas iniciativas representan la esperanza de que, con conocimiento, cooperación y acción sostenida, incluso las regiones más vulnerables, pueden convertirse en faros de resiliencia y sostenibilidad para el mundo.

4.7.1.8.2. Desarrollo de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) para la Rentabilidad y la Sostenibilidad

La Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) representa una transformación estratégica para abordar los retos del cambio climático en el Pacífico colombiano, donde las comunidades afrodescendientes e indígenas dependen profundamente de la agricultura para su sustento. Ese modelo integra prácticas innovadoras que combinan productividad económica, sostenibilidad ambiental y adaptación climática. En un contexto donde la variabilidad climática amenaza tanto los medios de vida como la seguridad alimentaria, la ACI ofrece un camino hacia la resiliencia y la equidad. La FAO (2023) da por hecho que la implementación de sistemas agroforestales y policultivos ha demostrado aumentar la productividad agrícola en hasta un 20 % en regiones vulnerables, mientras se conserva la biodiversidad y se reducen las emisiones de carbono.

La producción resiliente adaptada al clima se convierte en un pilar esencial de la ACI. Las comunidades negras e indígenas pueden liderar la adopción de tecnologías de adaptación como semillas resistentes a la sequía o sistemas de riego por goteo. Esas prácticas mejoran la eficiencia en el uso de recursos y fortalecen la capacidad de recuperación ante eventos extremos. Además, la diversificación de cultivos, que incluye especies nativas como el chontaduro cacao, coco, plátano entre otros productos típicos de la región, asegura ingresos diversificados, promueve la soberanía alimentaria y la protección de conocimientos tradicionales. Según estudios del Banco Mundial (2023), esas estrategias pueden reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales hasta en un 30 %, al fortaleciendo su capacidad de adaptación.

La sostenibilidad ambiental se refuerza mediante la adopción de prácticas como la labranza cero y el uso de biofertilizantes, que mejoran la salud del suelo y reducen la dependencia de insumos químicos. Adicio-

nalmente, tecnologías de captación de agua de lluvia y sistemas de recarga hídrica son fundamentales en una región donde el acceso al agua puede ser limitado. Esas iniciativas, combinadas con la implementación de energía solar en actividades agrícolas reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecen la autosuficiencia energética. Según el Instituto Humboldt (2022), esas prácticas pueden contribuir a la reducción de la deforestación en un 15 %, al preservar ecosistemas críticos y fomentar un equilibrio ecológico sostenible.

Para garantizar el impacto económico, la ACI fomenta el valor agregado en los productos agrícolas. Transformar el cacao en chocolates *premium* o el coco en productos cosméticos puede abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales, al generar ingresos adicionales para las comunidades locales. Certificaciones de comercio justo y sostenibilidad climática permitirían posicionar esos productos como únicos en mercados globales, e incentivar la conservación de prácticas sostenibles. ProColombia (2023) confirma que el acceso a mercados especializados ha incrementado los ingresos de pequeños productores en un 25 % en regiones que aplican enfoques similares, al promover la equidad económica.

La participación activa y vinculante de las comunidades afrodescendientes e indígenas es, por mandato ético y pragmático, la condición esencial para el éxito de cualquier estrategia de adaptación climática en el Pacífico. El concepto de “escuelas de campo climáticas” es fundamental, ya que ofrece un espacio para que los agricultores se capaciten en técnicas sostenibles y aprendan a utilizar datos climáticos localizados para optimizar la planificación de sus cultivos. Este modelo educativo rompe con el verticalismo tradicional.

La investigación participativa junto con universidades y centros de conocimiento asegura que las tecnologías y las metodologías se diseñen con una profunda pertinencia cultural, adaptándose al contexto y al *ethos*

local. Integrar los saberes ancestrales en estos procesos no solo preserva la riqueza cultural de la región, sino que proporciona soluciones innovadoras para la crisis climática que han demostrado ser más resilientes y sostenibles a largo plazo.

El verdadero desafío en la adaptación climática radica en confrontar las dinámicas de poder que históricamente han marginado estos conocimientos. Sin embargo, la evidencia es contundente: cuando se integran activamente los saberes locales, los proyectos muestran una mayor aceptación y sostenibilidad en el largo plazo. Esta estrategia fortalece el liderazgo comunitario y la apropiación tecnológica, garantizando que las comunidades no sean receptoras pasivas de soluciones externas, sino arquitectas autónomas de su propia resiliencia frente a la crisis global.

En síntesis, el monitoreo y la evaluación del impacto son esenciales para garantizar la efectividad de la ACI. Indicadores de triple impacto deben medir tanto la productividad agrícola como la conservación ambiental y la inclusión social. Los sistemas de monitoreo participativo, donde las comunidades recolectan datos de la biodiversidad, clima y productividad, refuerzan el compromiso local y generan evidencia valiosa para escalar esas prácticas, estrategia que al empoderar a las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano aborda las crisis climáticas actuales y construye un modelo sostenible y equitativo de desarrollo agrícola.

4.7.1.8.3. Programa de Certificación de Productos de Origen Pacífico

Vale imaginar un futuro en el cual el café de Nariño, el pescado de Tumaco y las artesanías de Chocó sean reconocidos por su calidad y por el impacto positivo que generan en las comunidades del Pacífico colombiano. Un Programa de Certificación de Productos de Origen Pacífico posicionaría los productos de la región en mercados internacionales y

dignificaría el trabajo de quienes han dedicado sus vidas a mantener vivas las tradiciones y la riqueza natural del Pacífico. Esa certificación garantizaría que cada producto sea sinónimo de sostenibilidad, comercio justo y calidad excepcional.

El Programa de Certificación implicaría un sello distintivo que acredite que los productos cumplen con altos estándares ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas como el cacao y el plátano, la certificación incluiría la evaluación de prácticas de cultivo sostenible, la reducción de pesticidas y el respeto por los derechos laborales. Ese enfoque aumentaría el valor de mercado de los productos y mejoraría las condiciones de vida de los productores. Un informe de Fair Trade International (2023) comunica que los agricultores que trabajan con esquemas de certificación en América Latina han incrementado sus ingresos en un 30 %, gracias a mejores precios y acceso a mercados *premium*.

Además, la certificación de los productos no es un simple trámite comercial; es un acto estratégico de diversificación y una prueba de la dignidad de la producción. Los pescadores de Tumaco, por ejemplo, pueden certificar sus capturas como sostenibles, mientras que las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó pueden obtener sellos para artesanías únicas que validen la autenticidad de sus procesos culturales. Este proceso abre las puertas a los mercados internacionales, preserva prácticas tradicionales y fortalece la identidad cultural de la región. La experiencia global demuestra que los productos certificados bajo estándares de responsabilidad, como Rainforest Alliance, tienen hasta un 20 % más de aceptación en mercados globales. Este “premium de la dignidad” se convierte en una ventaja competitiva decisiva para los productores del Pacífico, garantizando no solo mayores ingresos, sino el reconocimiento de que la sostenibilidad es el único camino rentable hacia el futuro.

Desde el punto de vista ambiental, el Programa de Certificación también contribuiría a la protección de los ecosistemas del Pacífico. Al exigir prácticas sostenibles, los productores tendrían incentivos para evitar la deforestación, reducir el uso de químicos contaminantes y proteger la biodiversidad local. Para el Instituto Humboldt (2022), la implementación de certificaciones ambientales en zonas de alta biodiversidad puede reducir la deforestación en un 35 %, al generar beneficios tanto locales como globales. Eso posicionaría al Pacífico colombiano como un proveedor de productos de calidad y también como un aliado en la lucha contra el cambio climático.

Para garantizar su éxito, el Programa de Certificación requeriría alianzas estratégicas entre el gobierno, el sector privado y organismos internacionales. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían ofrecer financiamiento inicial, mientras que entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podrían aportar su experiencia en estándares de sostenibilidad. Además, capacitar a los productores en el cumplimiento de los requisitos de certificación y proporcionarles acceso a tecnología y mercados serían pasos esenciales. La FAO (2023) admite que los programas que combinan capacitación técnica con certificaciones sostenibles tienen un 60 % más de probabilidad de éxito a largo plazo.

Este programa sería una herramienta económica y también un símbolo de transformación para una región que ha sido históricamente marginada. Igual, tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de miles de familias, preservar los ecosistemas únicos del Pacífico y posicionar a Colombia como un líder global en comercio justo y sostenibilidad. Más allá de ser un simple sello, la certificación representaría un compromiso con el desarrollo inclusivo y el respeto por el patrimonio cultural y natural de una de las regiones más valiosas del país.

4.7.1.8.4. Cosechas de Esperanza: Bancos de Alimentos, un Camino hacia la Dignidad y la Sostenibilidad en el Pacífico Colombiano

En el vasto territorio del Pacífico colombiano, donde la exuberante biodiversidad contrasta con la persistente pobreza y la violencia, surge una estrategia transformadora que podría redefinir la calidad de vida: los bancos de alimentos comunitarios. Esa propuesta busca mitigar el hambre y construir un modelo de desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible que permita a las comunidades afrodescendientes e indígenas liberarse del ciclo de carencias y exclusión. En un contexto donde el 45 % de los hogares vive en condiciones de inseguridad alimentaria (FAO, 2023), esos bancos de alimentos emergen como faros de esperanza y oportunidad.

Antes que una solución temporal o un acto de caridad, los bancos de alimentos deben ser rediseñados como motores de desarrollo económico y cohesionadores sociales en el Pacífico. Es una respuesta estructural a la paradoja intolerable de la región: una riqueza natural exuberante que coexiste con una desigualdad y una inseguridad alimentaria crónicas. Este modelo ofrece una doble justicia: a través de la recolección de excedentes alimentarios que de otro modo se desperdiciarían, se logra una eficiencia ética del sistema productivo y, simultáneamente, se garantiza que los alimentos nutritivos lleguen a las familias más vulnerables.

El modelo opera como una bisagra para fortalecer las cadenas productivas locales y mejorar la salud pública. Al reducir el desperdicio, se actúa sobre la ineficiencia de la cadena de valor y se proporciona un alimento nutritivo que es vital para combatir los efectos de la malnutrición en la salud, especialmente en mujeres y niños. La recuperación de cada tonelada de alimento no es un simple ahorro logístico, sino un acto de justicia nutricional que impacta positivamente a miles de personas, demostrando

que la solidaridad puede integrarse con la economía para construir comunidades más saludables y autónomas.

En el Pacífico, la implementación de estos bancos de alimentos tiene el potencial de convertir la riqueza biológica en bienestar colectivo tangible. Este mecanismo permite canalizar recursos y atención a las cadenas de valor afrodescendientes e indígenas, asegurando que la producción local de alimentos sea valorada y distribuida equitativamente. La reducción significativa de la inseguridad alimentaria es el primer paso para desbloquear el potencial humano y social del Pacífico, transformando una región de exclusión en un referente de sostenibilidad y dignidad.

La implementación de bancos de alimentos en el Pacífico tiene un impacto ambiental directo y positivo, particularmente, en la promoción de prácticas agroecológicas y la conservación de recursos naturales. Al priorizar la producción local mediante sistemas agrícolas sostenibles, como la agroforestería y los cultivos policulturales, se incentiva la protección del suelo y la biodiversidad, al reducir al mismo tiempo la dependencia de insumos químicos. Eso mejora la calidad de los alimentos y mitiga los efectos del cambio climático. En una región donde los ecosistemas están amenazados por la deforestación y las actividades extractivas, esos bancos pueden convertirse en bastiones de sostenibilidad.

El impacto económico de los bancos de alimentos es profundo y estructural. Al incluir a pequeños agricultores y pescadores artesanales en su modelo operativo, se dinamiza la economía local mediante la creación de empleos en logística, distribución y almacenamiento. Por ejemplo, la integración de productos con denominación de origen, como el cacao y la pesca artesanal, en esas cadenas de valor puede abrir mercados internacionales que reconocen y premian la sostenibilidad y el comercio justo. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), los proyectos alimentarios sostenibles tienen el potencial de incrementar los ingresos

de los productores en un 30 %, avance crucial en una región donde los niveles de pobreza superan el 50 %.

La cohesión social es otro pilar de esa estrategia. Los bancos de alimentos pueden convertirse en espacios de encuentro y organización comunitaria, donde las decisiones de la gestión de los recursos alimentarios se toman de manera inclusiva y participativa. Eso es especialmente relevante en un territorio donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han sido sistemáticamente excluidas de los procesos de planificación y desarrollo. La participación de mujeres y jóvenes en la gestión de esos bancos fortalece los liderazgos locales y genera un sentido de pertenencia, clave para la sostenibilidad de sus proyectos.

A pesar de su potencial, los bancos de alimentos enfrentan desafíos logísticos y financieros que deben ser abordados con políticas públicas efectivas y alianzas estratégicas. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de proporcionar infraestructura adecuada, como centros de acopio con refrigeración, mientras que las plataformas digitales pueden mejorar la eficiencia en la distribución de alimentos y ampliar su alcance. Además, el acceso a financiamiento internacional, como el ofrecido por el Fondo Verde para el Clima, podría asegurar recursos para expandir y consolidar esta iniciativa en el mediano y largo plazo.

La implementación de bancos de alimentos comunitarios en el Pacífico colombiano, antes que una cuestión de caridad es un acto de justicia social y económica. Esas iniciativas ofrecen una ruta para que las comunidades superen el hambre y la pobreza, mientras fortalecen su resiliencia frente a la violencia y los desafíos estructurales. Más que alimentar cuerpos, esas “Cosechas de Esperanza” nutren sueños y brindan herramientas para construir un futuro donde la dignidad y la sostenibilidad sean una realidad tangible. Al invertir en los bancos se transforma la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y se envía un mensaje al mundo: el

Pacífico colombiano tiene la capacidad de emerger como un modelo global de equidad y desarrollo sostenible.

En este capítulo de cierre se busca superar la mera exposición de estrategias y transitar hacia una propuesta integradora, sintética y contundente, que brinde herramientas prácticas para transformar las potencialidades del Pacífico colombiano en realidades tangibles. La acumulación de ideas desarrolladas en capítulos anteriores cobra aquí un nuevo sentido: no basta con enunciar las riquezas y desafíos de la región, se requiere articularlas en proyectos viables, con metas claras y actividades concretas que permitan materializar el horizonte de desarrollo sostenible. Este ejercicio responde a la necesidad de que el libro no solo sea una reflexión académica, sino también una hoja de ruta práctica, capaz de dialogar con las comunidades, los gobiernos locales y los aliados internacionales.

El rescate de lo valioso en el Pacífico colombiano exige una ruptura radical con el paradigma de la acción fragmentada. Las diversas estrategias planteadas a lo largo de este análisis desde la bioeconomía y la economía azul hasta el uso de plataformas digitales, la infraestructura verde y la consolidación de la Marca Región no pueden ser entendidas como proyectos aislados; son, de hecho, nodos interconectados de un mismo y complejo sistema territorial. La región no necesita una dispersión de recursos, sino un entramado de acciones sinérgicas diseñado para reforzar la cohesión social y potenciar la inmensa diversidad cultural y natural como su motor fundamental de desarrollo.

La experiencia comparada global es contundente al respecto: las iniciativas más efectivas son aquellas que logran integrarse en una visión compartida y coherente. Esto demanda un diseño institucional robusto que articule todos los actores Estado, cooperación y comunidades y, sobre todo, garantice una participación activa y vinculante de los pueblos locales en la planificación y la ejecución. Cuando el sistema opera como

un todo, la conectividad digital apoya la trazabilidad del cacao, la Marca Región legitima la inversión en infraestructura verde, y la capacitación se traduce en autonomía.

En conclusión, el camino hacia la sostenibilidad en el Pacífico pasa por el pensamiento sistémico. Solo cuando las comunidades, la tecnología y el medioambiente se refuerzan mutuamente, la región dejará de ser una suma de vulnerabilidades para convertirse en un modelo integrado de resiliencia y autonomía. La capacidad de escalar estas experiencias dependerán de que se mantenga esta visión compartida, garantizando que el desarrollo sea tan diverso, interconectado y robusto como la propia geografía del Pacífico.

Bajo esta premisa, la propuesta final se organiza en una matriz de viabilidad que traduce las estrategias en proyectos y los proyectos en actividades. Por ejemplo, la estrategia de economía azul sostenible puede concretarse en un proyecto de “Cooperativas de Pesca Responsable”, con metas verificables como reducir en un 30 % la pesca ilegal en cinco años y generar 500 empleos locales. De manera similar, la bioeconomía podría transformarse en un “Centro de Innovación en Bioproductos”, con actividades específicas de capacitación comunitaria, laboratorios de prototipado y certificaciones internacionales. En el ámbito social, la estrategia de plataformas digitales para el comercio sostenible se traduce en proyectos piloto de e-commerce comunitario, con metas de aumentar en un 20 % los ingresos de productores de cacao y café en Tumaco y Guapi.

Este enfoque responde a la recomendación del evaluador: demostrar el potencial de las ideas a través de proyectos concretos. La oportunidad no está solo en reclamar mayor reconocimiento para el Pacífico, sino en construir mecanismos claros de ejecución que hagan viable cada propuesta. Así, el libro no se limita a un inventario de sueños, sino que entrega una arquitectura estratégica fundamentada en evidencia, participación y

proyección territorial. El capítulo de cierre, entonces, no es un epílogo contemplativo, sino un llamado a la acción: convertir las ideas en resultados, las estrategias en políticas y los proyectos en transformaciones palpables para el bienestar colectivo del Pacífico colombiano.

La construcción de una Matriz de Viabilidad Estratégica constituye un paso fundamental para transformar los planteamientos del capítulo 7 en un instrumento operativo y verificable. En lugar de quedarse en el plano de las ideas o de la retórica del reconocimiento del Pacífico colombiano, esta matriz traduce las estrategias propuestas en proyectos concretos, metas medibles y actividades específicas que permiten evaluar su alcance y factibilidad. De este modo, el libro no solo se convierte en un aporte académico, sino también en una hoja de ruta para la acción territorial.

La importancia de esta matriz radica en que vincula la visión estratégica con la acción práctica, garantizando que las apuestas sobre bioeconomía, economía azul, conectividad, turismo, gobernanza e identidad regional puedan implementarse con claridad y seguimiento. En otras palabras, la matriz permite pasar de la inspiración a la ejecución, demostrando que el Pacífico no es únicamente un territorio con potencial, sino una región con capacidad real de liderar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo.

Tabla 3. Matriz de Viabilidad Estratégica – Pacífico Colombiano

Estrategia	Proyecto Propuesto	Metas (5 años)	Actividades Clave
Economía Azul Sostenible	Cooperativas de Pesca Responsable	Reducir en 30 % la pesca ilegal; generar 500 empleos dignos en comunidades costeras.	- Creación de cooperativas pesqueras.
			- Implementación de certificaciones ecológicas.
			- Capacitación en técnicas de pesca sostenible.
			- Monitoreo comunitario de áreas marinas.
Bioeconomía y Bioproductos	Centro de Innovación en Bioproductos (Tumaco–Quibdó)	Incrementar en 20 % el PIB regional en bioeconomía; capacitar a 2.000 jóvenes y mujeres.	Laboratorios de biotecnología.
			Escuelas de campo climáticas.
			Desarrollo de aceites, suplementos y biocombustibles.
			Certificación internacional de bioproductos.
Plataformas Digitales para el Comercio Sostenible	E-commerce Comunitario del Pacífico	Aumentar en 20 % ingresos de productores de cacao, café y pesca artesanal.	Desarrollo de plataforma digital.
			Capacitación en marketing y trazabilidad blockchain.
			Conexión con operadores logísticos sostenibles.
			Campañas internacionales de comercio justo.

Estrategia	Proyecto Propuesto	Metas (5 años)	Actividades Clave
Infraestructura Verde y Conectividad Digital	Red de Conectividad Territorial y Energías Limpias	Conectar al 80 % de cabildos indígenas y consejos comunitarios; reducir en 25 % la dependencia de diésel.	Instalación de energía solar y mareomotriz.
			Ampliación de redes de internet comunitario.
			Talleres de alfabetización digital.
			Evaluación de impactos para evitar dependencia tecnológica.
Marca Región Pacífico	Estrategia de Identidad Territorial y Comercio Justo	Posicionar al Pacífico como referente de biodiversidad y cultura; aumentar en 25 % exportaciones con denominación de origen.	Creación de narrativa regional.
			Certificación de cacao, pesca artesanal y artesanías.
			Campañas digitales internacionales.
			Ferias culturales y gastronómicas globales.
Zonas Francas de Innovación Azul	Clúster Marino de Investigación y Desarrollo	Atraer inversiones por USD 500 millones; crear 5.000 empleos especializados.	Incentivos fiscales a empresas sostenibles.
			Alianzas con Noruega y universidades locales.
			Investigación en bioplásticos y energías oceánicas.
			Formación técnica en economía azul.

Estrategia	Proyecto Propuesto	Metas (5 años)	Actividades Clave
Turismo Sostenible y Comunitario	Rutas del Pacífico Vivo (Ballenas, Manglares y Cultura)	Incrementar en 20 % el turismo sostenible anual; generar 1.500 empleos locales.	Diseño de rutas ecoturísticas.
			Capacitación de guías comunitarios.
			Infraestructura de alojamientos ecológicos.
			Campañas de turismo responsable con la OMT.

Fuente: Esta investigación.

La matriz de estrategias presentada en el cierre de este capítulo no es un simple anexo metodológico; se constituye como el instrumento clave y el mandato final para traducir en acciones concretas la visión de transformación del Pacífico colombiano. Su importancia radica en su poder para superar el plano discursivo y la frustración de las promesas incumplidas, al organizar de manera clara y estructurada las propuestas en proyectos, metas e indicadores verificables. En un contexto históricamente marginado, contar con esta hoja de ruta tangible es fundamental, ya que permite alinear los esfuerzos dispares de las comunidades, los gobiernos locales, la cooperación internacional y el sector privado bajo un mismo horizonte estratégico. Esta matriz es el pacto de acción que exige coherencia, garantiza la rendición de cuentas y asegura que la resiliencia y la innovación del Pacífico se conviertan, finalmente, en una realidad financiada y medible.

Cada uno de los proyectos consignados en esta matriz final constituye un mandato de integralidad, buscando romper con el paradigma de la acción fragmentada en el Pacífico. El diseño de estas iniciativas es deliberado, buscando atender de manera simultánea las dimensiones económica,

social, cultural y ambiental del desarrollo territorial. Así, por ejemplo, las propuestas de economía azul y bioeconomía no solo están enfocadas en generar ingresos sostenibles, sino que, de manera intrínseca, promueven la conservación de ecosistemas marinos y terrestres. La rentabilidad se subordina al principio de la sostenibilidad.

De forma similar, las estrategias de infraestructura verde y conectividad digital trascienden su función técnica (mejorar la movilidad o el acceso a internet). El propósito central es garantizar que estas inversiones estén activamente al servicio del bienestar colectivo. La inversión es concebida como una herramienta para evitar la reproducción de desigualdades históricas y promover la inclusión real de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes. La infraestructura se convierte en un vehículo de equidad, donde la tecnología y el cemento son evaluados por su capacidad de cimentar la justicia social y la autonomía en el territorio.

La convergencia de estas dimensiones (economía, equidad y ecología) es la clave de bóveda de la matriz. Al asegurar que la bioeconomía promueva el liderazgo femenino y que la infraestructura digital se use para el monitoreo ambiental comunitario, se crea un sistema que se refuerza a sí mismo. El desarrollo territorial deja de ser una suma de proyectos sectoriales para convertirse en una visión coherente y resiliente. La matriz es la herramienta que garantiza que el crecimiento económico y la inversión en la dignidad de los pueblos sean dos caras inseparables de la transformación del Pacífico.

El valor agregado más significativo de la matriz de estrategias radica en su capacidad para priorizar los proyectos en función directa de su impacto esperado en la calidad de vida de las comunidades del Pacífico. Las iniciativas, como el turismo comunitario, la creación de centros de innovación en bioeconomía o las zonas francas de innovación azul, son seleccionadas no solo por su rentabilidad, sino por su potencial para generar

empleo digno, fortalecer la cohesión social y abrir mercados internacionales con valor ético. La matriz garantiza que la inversión se oriente hacia donde la necesidad y el potencial de prosperidad son mayores.

Estos proyectos no se limitan a dinamizar la economía local; su impacto social y político es fundamental para la dignificación de los territorios. Al ofrecer alternativas reales de subsistencia frente a las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal) que han marcado la historia de la región, estas iniciativas contribuyen directamente a la construcción de paz territorial. La matriz asegura que la inversión sirva para reemplazar la violencia económica con el desarrollo justo, demostrando que la innovación y el emprendimiento comunitario son las herramientas más poderosas para transformar la historia del Pacífico.

Finalmente, la matriz ofrece un enfoque integral que combina indicadores de corto plazo, como la generación de empleo directo, con impactos de largo plazo, como la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental. Este balance entre resultados inmediatos y transformaciones estructurales es lo que garantiza que las estrategias propuestas no se conviertan en intervenciones aisladas, sino en un modelo de desarrollo endógeno y replicable. En este sentido, la matriz no solo es un mecanismo de planificación, sino también un pacto de futuro para que el Pacífico colombiano deje de ser visto como una periferia y se posicione como un actor clave en la agenda nacional y global de sostenibilidad.

Agradecimientos

La gestación de este libro ha sido un proceso intrincado y profundo, anclado en la intersección de saberes comunitarios, experiencias individuales y el rigor de la investigación académica. En ese contexto, deseamos expresar un agradecimiento que trasciende lo personal, un reconocimiento dirigido a actores esenciales en la construcción de este proyecto. Nuestra primera gratitud va dirigida a las comunidades negras e indígenas, cuyo legado cultural, conocimiento ancestral y resiliencia constituyen la esencia misma de este trabajo. Su historia de resistencia frente a siglos de exclusión y sus aportes al tejido social son una inspiración permanente que nutre cada palabra de este libro.

Las comunidades negras, especialmente aquellas asentadas en el litoral Pacífico son depositarias de una riqueza cultural que desafía la homogeneidad de los discursos dominantes. Su capacidad para transformar adversidades en oportunidades y para construir identidad en contextos de marginación es un testimonio de fortaleza que merece reconocimiento y análisis académico riguroso. Este trabajo busca ser una plataforma para visibilizar sus narrativas, al explorar su historia, su rol contemporáneo en la lucha por la equidad, la justicia y el reconocimiento en la esfera política y social.

De igual manera, las comunidades indígenas representan un pilar insustituible en la construcción de este proyecto. Su relación simbiótica con el territorio y su cosmovisión holística ofrecen una alternativa epistemológica invaluable frente a las crisis globales actuales. Dichas comunidades resisten los embates del extractivismo, la homogenización cultural y también plantean un modelo de desarrollo sostenible que demanda ser escuchado con mayor rigor desde las esferas académicas y políticas. Este libro es un intento por recoger esas voces y posicionarlas como interlocutoras legítimas en los debates referidos a sostenibilidad y justicia social.

El agradecimiento se extiende también a los líderes y lideresas sociales, quienes operan en los márgenes de la visibilidad mediática y, muchas veces, en contextos de violencia estructural. Esas personas representan una fuerza transformadora cuya labor tiene impacto en sus comunidades inmediatas, pero también en el fortalecimiento de la democracia y el tejido social nacional. Reconocer su trabajo en estas páginas es más que un acto de gratitud; es un compromiso ético con la legitimación de sus luchas en la arena pública.

Así mismo, queremos expresar nuestra gratitud hacia los movimientos sociales y las organizaciones que han trabajado incansablemente para visibilizar y dignificar las luchas de las comunidades vulnerables. Sus esfuerzos han sido esenciales para la construcción de puentes entre las comunidades y las estructuras de poder. Este libro busca aportar a esa labor, al proporcionar herramientas narrativas y analíticas que permitan profundizar en la comprensión de las dinámicas sociopolíticas y económicas que moldean sus realidades.

La academia ocupa también un lugar destacado en este agradecimiento. Las instituciones educativas y los investigadores que han acompañado este proceso han sido catalizadores de un diálogo crítico y constructivo. En un contexto donde el conocimiento tiende a fragmentarse, su apertura para incorporar saberes comunitarios en los marcos teóricos y metodológicos ha sido crucial para el desarrollo de este libro. Trabajo que es un homenaje a esa simbiosis entre lo académico y lo popular, una convergencia que enriquece tanto la teoría como la praxis.

Es imperativo reconocer el papel transformador de los maestros y maestras en los territorios rurales y marginados. Su labor, muchas veces realizada en condiciones precarias, es un acto de resistencia y esperanza. Este libro busca ser una herramienta que potencie su misión educativa, al proporcionar insumos que promuevan una pedagogía crítica y liberadora, capaz de empoderar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del siglo XXI.

Así también, nuestro agradecimiento resalta la contribución de las mujeres en las comunidades negras e indígenas. Su labor, muchas veces invisibilizada, ha sido fundamental para la conservación de las prácticas culturales, el sostenimiento de las economías locales y la cohesión comunitaria. Este libro busca honrar su rol y resaltar su capacidad de liderar procesos de cambio en sus territorios.

De igual forma, agradecemos a las entidades gubernamentales y no gubernamentales que han apoyado este proyecto. Su participación, aunque muchas veces limitada por restricciones institucionales, ha demostrado ser fundamental para generar espacios de interacción donde convergen distintos saberes y perspectivas. La investigación también genera un llamado a fortalecer esas alianzas y a expandir su alcance hacia comunidades que aún permanecen en los márgenes del desarrollo.

Especial agradecimiento a los lectores de esta obra, que está pensada como una invitación a reflexionar críticamente acerca de las realidades complejas que enfrentan nuestras comunidades. Mi esperanza es que estas páginas informen, pero que también movilicen a la acción, a fomentar el compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible.

Este agradecimiento es una prueba viva de que el conocimiento, cuando se construye desde la colaboración y el respeto mutuo, tiene la capacidad de cambiar vidas y reconfigurar realidades. Un profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones y comunidades que, de una u otra forma, hicieron parte de este proyecto. La obra no solo rinde homenaje a sus luchas y su resiliencia, además, refleja las lecciones que he tenido el privilegio de aprender a su lado. Es, además, un compromiso renovado: seguir caminando juntos hacia un horizonte más justo, donde cada voz sea escuchada y cada esfuerzo encuentre su lugar en la historia que juntos estamos construyendo.

Apreciaciones finales

Pacífico Invisible es una obra que ofrece un diagnóstico profundo y estructurado de la exclusión histórica que ha enfrentado el Pacífico colombiano. Desde sus primeras páginas, los autores demuestran cómo las políticas centralistas han perpetuado desigualdades estructurales, relegando a la región a los márgenes del desarrollo nacional. Esta exclusión afecta la economía, al igual que la identidad cultural y política del territorio. Con un enfoque que combina datos cuantitativos y testimonios cualitativos, el libro posiciona al lector frente a una realidad que exige ser vista con nuevos ojos. Además, la narrativa conecta de manera efectiva el contexto local con dinámicas globales, al ofrecer un marco amplio para la reflexión.

El análisis histórico del libro resalta las contribuciones invisibilizadas del Pacífico al desarrollo de Colombia, especialmente desde su riqueza cultural y biodiversidad. Por ejemplo, se subraya cómo las comunidades afrodescendientes e indígenas han sido guardianes de prácticas sostenibles, como la pesca artesanal y la conservación de manglares, que hoy son referencia para políticas ambientales en otras regiones. Ese enfoque reivindica la historia del Pacífico y plantea una pregunta crucial, ¿por qué las políticas nacionales no han integrado esos saberes como base para un desarrollo inclusivo y sostenible?

La obra también destaca el papel transformador de la educación como herramienta para romper ciclos de pobreza y marginación. Los autores presentan casos emblemáticos de iniciativas locales, como programas educativos que combinan saberes ancestrales con tecnología, para abordar los desafíos específicos de la región. Dichas experiencias ilustran cómo la educación puede ser un motor de cambio estructural, si se diseñan políticas que respondan a las necesidades territoriales. Al respecto, el libro invita al lector a reflexionar, ¿es posible transformar el Pacífico sin una reforma profunda del sistema educativo nacional?

Las dinámicas de violencia en la región son abordadas con un rigor que combina estadísticas con narrativas personales, al mostrar cómo el abandono estatal ha facilitado la expansión de actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería no regulada. Sin embargo, los autores no se limitan a la denuncia; proponen estrategias concretas para fortalecer la gobernanza local, como el empoderamiento de los consejos comunitarios y la creación de economías alternativas. Ese enfoque refleja un compromiso ético con las comunidades del Pacífico, al posicionarlas como agentes de cambio en lugar de víctimas pasivas.

El análisis económico del libro es igualmente relevante, ya que destaca las oportunidades desaprovechadas en sectores como el ecoturismo y la bioeconomía. Los autores argumentan que, con inversiones sostenibles y políticas inclusivas, el Pacífico podría convertirse en un eje estratégico para el desarrollo nacional. Además, presentan ejemplos de proyectos exitosos liderados por comunidades locales, demostrando que el cambio es posible cuando se prioriza la participación de los habitantes del territorio.

Por último, el libro enfatiza la importancia de las alianzas entre el sector público, privado y comunitario para superar los desafíos históricos de la región. A través de testimonios de líderes locales, se evidencia cómo esas alianzas han permitido la creación de proyectos innovadores, como cooperativas de economía solidaria y programas de conservación ambiental. Ese enfoque inclusivo es una de las fortalezas del texto, pues analiza los problemas y ofrece soluciones viables y aplicables.

En el contexto actual, donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han convertido en una guía global, *Pacífico Invisible* resalta cómo la región podría ser un ejemplo de desarrollo sostenible si se gestionan adecuadamente sus recursos. Los autores plantean que la invisibilización del Pacífico representa una injusticia histórica y también una oportunidad perdida para construir un modelo económico y social equitativo.

Ese planteamiento conecta las luchas locales con las tendencias globales, al evidenciar cómo los desafíos del Pacífico son un microcosmos de problemas globales.

El libro muestra que la narrativa referente a la biodiversidad y sostenibilidad es particularmente inspiradora. A través de ejemplos concretos, como los proyectos de restauración de manglares liderados por comunidades locales, es posible equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico. Ese enfoque contradice la narrativa tradicional que presenta la sostenibilidad como un obstáculo para el progreso, al demostrar que ambos conceptos pueden y deben ser complementarios.

El análisis de la educación adquiere un tono aún más crítico, al abordar la desconexión entre las políticas nacionales y las necesidades locales. Por ejemplo, se evidencia cómo los planes educativos centralizados han ignorado las especificidades culturales y geográficas del Pacífico, perpetuando desigualdades intergeneracionales. Este punto invita a una reflexión profunda: ¿qué tipo de conocimiento debería priorizarse en una región donde los saberes ancestrales son tan vitales como la educación formal?

En el ámbito económico, los autores proponen estrategias claras para diversificar la economía del Pacífico, enfocándose en sectores como el turismo sostenible y la producción de biocombustibles. Esas propuestas responden a las necesidades locales y alinean la región con las demandas de los mercados globales. Sin embargo, el libro advierte que esas iniciativas solo tendrán éxito si se basan en un modelo de gobernanza inclusivo que priorice la participación comunitaria.

El apartado relacionado con gobernanza territorial es uno de los más contundentes del texto. Los autores argumentan que la descentralización es clave para superar las barreras históricas que han marginado al Pacífico. Proponen un modelo de gobernanza que combine el liderazgo local

con el apoyo técnico y financiero del Estado, al subrayar que la autonomía no debe confundirse con aislamiento. Ese enfoque ofrece una visión equilibrada que reconoce tanto las fortalezas como las limitaciones de las comunidades locales.

El análisis del libro destaca un aspecto fundamental que trasciende la simple visibilización de los problemas del Pacífico: la necesidad de entender la región como un modelo alternativo de desarrollo que desafía las premisas extractivistas predominantes en Colombia. Los autores argumentan que las comunidades del Pacífico han demostrado una capacidad extraordinaria para generar soluciones locales basadas en la sostenibilidad y la solidaridad, lo cual contrasta con las políticas nacionales y, de paso, las supera en eficacia. Ese planteamiento es un llamado a la acción, pero también una denuncia de las oportunidades perdidas por un Estado que insiste en priorizar intereses externos de las necesidades locales.

En la dimensión cultural, *Pacífico Invisible* profundiza en cómo las expresiones artísticas y los saberes ancestrales del Pacífico no son únicamente manifestaciones de identidad, sino herramientas para la resistencia y la transformación social. Ejemplos como los festivales de música y danza, los encuentros gastronómicos y las prácticas espirituales muestran cómo la cultura actúa como un eje integrador que conecta a las comunidades y las fortalece frente a las adversidades. Ese enfoque invita a una reflexión crítica: ¿es posible construir un desarrollo integral sin reconocer y empoderar esas expresiones culturales como pilares fundamentales?

Otro de los puntos relevantes del libro es la atención al papel de la mujer en las comunidades del Pacífico. Los autores destacan cómo las mujeres han sido agentes clave en la preservación de saberes tradicionales, la defensa del territorio y la construcción de redes solidarias que enfrentan las consecuencias de la violencia y el abandono estatal. Ese análisis visibiliza sus aportes y plantea la necesidad de incorporar una perspectiva

de género en las políticas públicas diseñadas para la región. La pregunta subyacente es evidente: ¿puede haber una verdadera transformación sin garantizar la equidad de género?

El tema ambiental adquiere una relevancia central al conectar la lucha por la conservación con la justicia social. Los autores analizan cómo los ecosistemas del Pacífico son no solo recursos naturales, sino también bases de subsistencia para las comunidades locales. Iniciativas como la reforestación de manglares y la pesca sostenible se presentan como ejemplos de prácticas que combinan el cuidado del medioambiente con beneficios económicos directos. Sin embargo, dichas iniciativas enfrentan constantemente la amenaza de megaproyectos extractivistas, lo que subraya la urgencia de fortalecer las políticas de gobernanza ambiental desde una perspectiva local.

El libro también aborda la dimensión educativa como un eje articulador del desarrollo en el Pacífico. Al analizar las brechas existentes en el acceso a la educación, los autores destacan iniciativas comunitarias que buscan cerrar esas disparidades. Un caso emblemático es el de programas educativos que integran tecnologías digitales con saberes ancestrales, al demostrar que la modernidad y la tradición no son opuestos, sino complementos. Ese enfoque resalta la importancia de diseñar currículos que respondan a las realidades del territorio y promuevan una educación contextualizada.

Los autores argumentan que la exclusión del Pacífico no es un caso aislado, sino un reflejo de patrones estructurales que afectan a muchas zonas periféricas en el continente. Ese enfoque comparativo permite al lector identificar paralelismos y pensar en soluciones que trasciendan el contexto local, al establecer conexiones con dinámicas globales, como la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

El libro plantea la necesidad urgente de transformar las narrativas mediáticas del Pacífico. Los autores critican cómo los principales medios de comunicación refuerzan estereotipos negativos que presentan a la región como un espacio de conflicto y pobreza, al ignorar sus aportes culturales, ambientales y sociales. Ese análisis subraya la importancia de promover narrativas más equilibradas y representativas, que resalten la riqueza y la resiliencia del Pacífico. Una propuesta concreta es la creación de plataformas mediáticas comunitarias que permitan a las comunidades contar sus propias historias y desafiar las representaciones estigmatizantes.

En términos económicos, el análisis de la economía informal en el Pacífico es uno de los aportes más originales del libro. Los autores destacan cómo, en ausencia del Estado, las redes de economía informal han sido esenciales para la subsistencia de las comunidades. En lugar de criminalizar esas prácticas, el texto propone que se reconozcan como estrategias legítimas de supervivencia y se integren en los planes de desarrollo económico. Ese enfoque invita a repensar los marcos normativos y a diseñar políticas más inclusivas que respeten las dinámicas locales.

El libro culmina con una serie de propuestas concretas que integran desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, sugiere la creación de centros de innovación territorial que combinen tecnología moderna con saberes tradicionales para abordar problemas como la inseguridad alimentaria y el acceso al agua potable. Esas propuestas no solo son aplicables al Pacífico, sino que también ofrece un modelo replicable para otras regiones con características similares.

Finalmente, *Pacífico Invisible* culmina con un llamado a la acción profundamente resonante. Los autores invitan al lector a replantear su percepción del Pacífico, no como una región problemática y marginada, sino como un territorio lleno de posibilidades y riquezas culturales, ambientales y humanas. El cierre destaca la importancia académica del

análisis y apela a la humanidad del lector, al recordarle que el futuro del Pacífico no depende únicamente de las políticas públicas, sino también de la voluntad colectiva para reconocer y valorar su potencial transformador.

En ese marco, los autores plantean un desafío ético y político crucial: asumir la deuda histórica con el Pacífico como el punto de partida para una verdadera transformación. Ese reconocimiento no puede quedarse en lo simbólico, sino que debe materializarse en acciones concretas, tales como inversiones significativas en infraestructura social, la implementación de programas de reparación económica y el diseño de un modelo de gobernanza descentralizado que priorice la participación de las comunidades. Solo a través de esas medidas será posible garantizar un desarrollo equitativo e inclusivo que permita al Pacífico ocupar el lugar que merece en la narrativa nacional y global.

Conclusiones

El Pacífico colombiano se configura como un territorio de contrastes: por un lado, su extraordinaria riqueza biocultural y ecosistémica; por otro, las profundas desigualdades históricas que han limitado su participación en el desarrollo nacional. Este libro ha mostrado cómo la región no debe seguir siendo vista únicamente desde el prisma de la carencia o el conflicto, sino como un espacio estratégico para la innovación social, la bioeconomía, la gobernanza descentralizada y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, para que este potencial se traduzca en transformaciones tangibles, las conclusiones no pueden quedarse en declaraciones generales: requieren ser operacionalizadas en criterios de priorización, mecanismos de implementación y modelos replicables que fortalezcan el bienestar de las comunidades.

En primer lugar, la gobernanza descentralizada requiere ser operacionalizada a través de la creación de Consejos Regionales de Desarrollo con capacidad decisoria en inversión pública. Estos consejos deberían integrar a autoridades locales, consejos comunitarios, organizaciones étnicas y academia, con el fin de garantizar que la planeación territorial refleje las prioridades de las comunidades. Para dar sostenibilidad al proceso, se propone iniciar programas piloto en Tumaco, Buenaventura y Quibdó, territorios donde la institucionalidad ya ha avanzado en procesos participativos.

En segundo lugar, la educación contextualizada debe ir más allá de la retórica y materializarse en el diseño de currículos locales que integren saberes ancestrales, tecnologías modernas y competencias para la sostenibilidad. Un modelo replicable es el de las *escuelas de campo climáticas*, que pueden capacitar a jóvenes en agricultura resiliente al cambio climático y gestión de recursos hídricos, mientras fortalecen su sentido de pertenencia territorial. Su implementación gradual permitiría priori-

zar a comunidades altamente vulnerables y, posteriormente, escalar la experiencia a toda la región.

Otro criterio de priorización es la viabilidad económica y social de los proyectos. Iniciativas como las Zonas Francas de Innovación Azul o los Centros de Innovación en Bioeconomía deben comenzar como laboratorios territoriales con inversiones piloto, de modo que se validen resultados antes de su expansión. Este enfoque incremental reduce riesgos y permite ajustar los modelos según el aprendizaje colectivo. Ejemplos en marcha, como los programas de acuicultura sostenible en Guapi y las cadenas de cacao orgánico en Tumaco, ya demuestran que es posible combinar desarrollo económico con conservación ambiental.

Por último, la implementación de estas estrategias demanda mecanismos de articulación multiactor. Las alianzas público-privadas, la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades comunitarias constituyen la base para garantizar la sostenibilidad. La experiencia de los talleres realizados en Chocó, Tumaco y Buenaventura confirma que cuando las comunidades son protagonistas en el diseño de políticas, aumenta la legitimidad de las intervenciones y se optimiza su impacto en la calidad de vida.

En síntesis, las conclusiones de este libro no se limitan a denunciar las brechas históricas, sino que ofrecen un mapa estratégico viable para transformar el Pacífico colombiano. La clave está en priorizar, pilotear y escalar proyectos que integren justicia social, sostenibilidad ambiental y equidad económica. De este modo, el Pacífico puede dejar de ser percibido como periferia para convertirse en un referente global de innovación territorial y resiliencia comunitaria.

Recomendaciones

1. Fortalecer la gobernanza descentralizada con mecanismos de participación comunitaria.

La descentralización efectiva requiere la creación de consejos territoriales de gobernanza que integren a líderes afrodescendientes, indígenas, mujeres y jóvenes. Según talleres realizados en Tumaco y Buenaventura (2024), el 62 % de los participantes identificó la falta de incidencia política como un obstáculo estructural. Se recomienda establecer indicadores como el número de plataformas comunitarias activas y la proporción de decisiones presupuestales con participación ciudadana. Actores responsables: gobiernos locales, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y organizaciones comunitarias. Fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Inversión Social y cooperación internacional (PNUD, BID).

2. Diseñar un plan educativo regional contextualizado.

La educación debe integrar saberes ancestrales con tecnologías modernas. Una encuesta realizada en Guapi reveló que el 74 % de los jóvenes desea currículos que incluyan historia afrocolombiana y gestión sostenible de recursos. Se sugiere como indicador el porcentaje de instituciones educativas con programas adaptados al contexto local. Actores responsables: Ministerio de Educación, universidades regionales y consejos comunitarios. Financiamiento: OCAD Paz, recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) y becas internacionales.

3. Impulsar la bioeconomía como motor económico.

El Pacífico alberga más de 9.000 especies de flora y fauna (Instituto Humboldt, 2022). El 55 % de los productores encuestados en talleres de Tumaco consideró la bioeconomía como el sector de mayor proyección. Se recomienda implementar centros de innovación en bioproductos y medir

el número de emprendimientos verdes formalizados. Actores responsables: MinCiencias, universidades y asociaciones productivas. Financiamiento: BID, Fondo Verde del Clima y alianzas público-privadas.

4. Desarrollar el ecoturismo comunitario sostenible.

Experiencias en Nuquí y Bahía Málaga demuestran que el turismo comunitario genera ingresos del 25 % superiores a los modelos tradicionales. Se propone crear rutas de ecoturismo lideradas por comunidades afro e indígenas, con indicadores como número de visitantes y empleos generados localmente. Actores responsables: ProColombia, alcaldías y cooperativas comunitarias. Financiamiento: FONTUR, cooperación internacional y programas PDET.

5. Modernizar infraestructura verde y conectividad digital inclusiva.

El 68 % de los hogares en el litoral pacífico carece de internet de alta velocidad (MinTIC, 2023). Se recomienda priorizar proyectos de fibra óptica comunitaria y carreteras verdes, con indicadores como % de cobertura digital y kilómetros de vías sostenibles construidas. Actores responsables: MinTIC, Inviás y gobiernos locales. Financiamiento: alianzas con empresas TIC, Fondo de Acceso Universal y OXI (Obras por Impuestos).

6. Formalizar redes de economía popular y solidaria.

El 47 % de los ingresos rurales en el Pacífico provienen de actividades informales (DANE, 2024). Se sugiere implementar programas de formalización que respeten la estructura comunitaria, con indicadores como número de unidades productivas registradas y acceso a microcréditos. Actores responsables: MinTrabajo, alcaldías y cooperativas. Financiamiento: Bancoldex, microfinancieras y cooperación internacional.

7. Crear programas de reparación histórica y económica.

El rezago en infraestructura social es evidente: solo el 52 % de la población tiene acceso a agua potable (DANE, 2024). Se recomienda un programa de inversión priorizada en hospitales, escuelas y carreteras, con indicadores como % de cobertura en servicios básicos. Actores responsables: Presidencia de la República, ministerios sectoriales y gobernaciones. Financiamiento: Fondo Nacional del Pacífico, regalías y cooperación bilateral.

8. Establecer Zonas Francas de Innovación Azul.

Inspiradas en modelos europeos, estas zonas pueden impulsar acuicultura sostenible, biotecnología marina y energías oceánicas. El 59 % de los pescadores de Tumaco encuestados manifestó interés en diversificar ingresos mediante proyectos acuícolas. Indicadores: número de empresas instaladas y empleos especializados generados. Actores responsables: Min-Comercio, Invemar y alcaldías costeras. Financiamiento: Banco Mundial, inversión extranjera y alianzas público-privadas.

9. Promover liderazgo juvenil y emprendimiento social.

La juventud representa el 34 % de la población del Pacífico (DANE, 2024). Se recomienda la creación de incubadoras de emprendimiento juvenil, con indicadores como número de proyectos liderados por jóvenes y acceso a financiamiento semilla. Actores responsables: ICBF, alcaldías y universidades regionales. Financiamiento: programas de USAID, fondos de cooperación europea y recursos locales.

10. Transformar narrativas mediáticas sobre el Pacífico.

El 71 % de los participantes en talleres comunitarios señaló la estigmatización mediática como un obstáculo para la autoestima regional. Se

sugiere crear observatorios de medios y campañas de comunicación comunitaria, con indicadores como número de contenidos positivos difundidos y alianzas con medios nacionales. Actores responsables: MinCultura, medios comunitarios y universidades. Financiamiento: MinCultura, cooperación internacional y alianzas con medios privados.

5. Autores

William Ballesteros Possú

PhD en Recursos Naturales con énfasis en ecología aplicada, como becario de la Comisión Fulbright de Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos. Ingeniero Agroforestal, con maestrías en Agroforestería para el desarrollo sostenible, y en Ciencias agrarias con énfasis en producción de cultivos. Investigador categorizado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-Minciencias, con diferentes publicaciones científicas y académicas, y director del Grupo de Investigación Agroforestería y Recursos Naturales. Es docente titular en la Universidad de Nariño en las áreas de Agroforestería, Recursos Naturales y Estadística. Antes de su ingreso a la Universidad de Nariño trabajó en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, convenio Holanda, CRC y CONIF.

José Evelio Aguiño Borja

PhD en Economía y Gestión Empresarial con mención internacional. Economista especializado en Economía agrícola y econometría. Magíster en Mercadeo agroindustrial. Especialista en Finanzas, y autor del libro *La perspectiva de desarrollo agroindustrial y empresarial de los productores de cacao en Tumaco*. Tiene más de 20 años de experiencia como líder proyectos de desarrollo sostenible y fortalecimiento de cadenas productivas. Entre otros, ha publicado los artículos *Evaluating the Merit of Carbon Credits*, *Evaluación Económica y Sostenible de la Producción de Cacao en Colombia*, y *Perspectivas del Desarrollo Regional Agroindustrial*, que se destacan por su enfoque en la sostenibilidad y el impacto social. Exploring the Role of Community Organisations as Environmental Vulnerability Insurance for Cacao Smallholders in Colombia. Evaluación económica y financiera para la comercialización de la concha en la Costa Pacífica Nariñense. Exploring the Role of Community Organizations as Environmental Vulnerability

Insurance for Cacao Smallholders in Colombia: Strategies for Achieving Equitable Prices Through Spatial Analysis. Analysing post-conflict policies to enhance socio-ecological restoration among black communities in Southern Colombia: Cacao cropping as a win&-win strategy

Carlos David Aguiño Mosquera

Economista y experto en análisis económico, quien se destaca por su capacidad para abordar problemáticas complejas desde una perspectiva estratégica y fundamentada en datos. Su amplia trayectoria en investigación y consultoría le ha permitido contribuir al diseño de soluciones innovadoras para impulsar el desarrollo económico sostenible en diferentes sectores. Su enfoque analítico y su compromiso con la excelencia lo posicionan como un referente en la evaluación de políticas públicas y proyectos de impacto económico, por su dedicación al progreso integral de las comunidades.

6. Referencias Bibliográficas

- Acevedo Agudelo, H. y Hurtado Sarmiento, Y.** (2022). *Hàbitats rurales dignos e integrados al territorio colombiano: reflexiones sobre los factores que favorecen su generación*. *Bitàcora Urbano Territorial*, 32(1), 107–119.
- Acosta, A.** (2012). *Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición*. Abya Yala. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion
- Agencia de Renovación del Territorio (ART).** (2022, febrero). *Informe implementación PDET 2021 [Informe de implementación]*.
- Alcaldía Distrital de Buenaventura.** (2020). *Plan de desarrollo distrital 2020-2023: Buenaventura con dignidad*.
- Almario, Ó. y Rojas, A.** (2004). *Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y “multiculturalismo” de Estado e indolencia nacional*. En E. Restrepo y A. Rojas (Eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia* (pp. 71–118). Editorial Universidad del Cauca.
- Arocha, J.** (1998). *La inclusión de los afrocolombianos: ¿Meta inalcanzable?* En J. Arocha (Ed.), *Geografía humana de Colombia. Los afrocolombianos* (Vol. 6, pp. 333–395). Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Arocha, J.** (1999). *Ombliados de Ananse: hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano*. CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Asprilla-Córdoba, K. L. y Montenegro-Martínez, G.** (2022). *Desigualdades sociales en salud: análisis de la región pacífica colombiana*. *Salud UIS*, 54(1), 1–13. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/11979>

- Asprilla-Panesso, E., Posso-Asprilla, J., Restrepo-Escobar, Y.** (2023). Consejos comunitarios como eje central para la gobernanza territorial contra la deforestación en el departamento del chocó. *Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo*, 15(30), 340-359. <https://doi.org/10.32997/10.32997/2256-2796-vol.15-num.30-2023-4253>
- Banco Interamericano de Desarrollo.** (2023). *Informe de sostenibilidad 2023*. IADB Publications. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-Informe-de-Sostenibilidad-2023.pdf>
- Banco Mundial.** (2024). *Puentes de gobernanza entre los pueblos étnicos y la nación*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062524192518397/pdf/P500562-0521ebf1-4006-433b-9fe1-4eaebc3b1273.pdf>
- Bebbington, A.** (2020). *Gobernanza en industrias extractivas: política, historia, ideas*. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
- Borges-Huanca, A., Zárate Vargas, J., Coca Flores, R. V. y Osorio Zamora, R.** (2025). Integración de saberes ancestrales en el desarrollo de tecnologías sostenibles: estrategias participativas y su impacto en comunidades rurales. *Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias*, 2(2), 208–224.
- Bourdieu, P.** (1986). *The forms of capital*. En J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bowen, G. A.** (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Calderón, J.** (2019). Política de vivienda y gestión de suelo urbano: casos de Corea, Colombia y Perú (1990-2015). *Territorios*, (40), 201–226.
- Calderón, M.** (2023a). Narrativas del Pacífico y justicia histórica en Colombia. *Revista Estudios Políticos*, 64, 75–92.

- Calderón, M. y Gómez, P. (2023b).** *Turismo comunitario y fortalecimiento del tejido social.* *Revista Estudios Sociales*, 85, 65–83.
- Cardoso, F. H. y Faletto, E. (2002).** *Dependencia y desarrollo en América Latina: ensayo de interpretación sociológica.* Siglo XXI.
- Castillo Guzmán, E. (2016).** *Etnoeducación afropacífica y pedagogías de la dignificación.* *Revista Colombiana de Educación*, (71), 343–360. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413646667012>
- Chambers, R. (1994).** *Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm.* *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Coleman, J. S. (1988).** *Social capital in the creation of human capital.* *American Journal of Sociology*, 94(Suplemento: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure), S95–S120.
- Congreso de Colombia. (1993).** *Ley 79 de 1993, por la cual se dictan normas para el fomento de las asociaciones mutuales.* *Diario Oficial No. 41.178 del 3 de noviembre de 1993.* <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=332>
- Cornwall, A. (2008).** *Unpacking “participation”: Models, meanings and practices.* *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Cornwall, A. y Jewkes, R. (1995).** *What is participatory research?* *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667–1676.
- Corte Constitucional de Colombia. (2016).** *Sentencia T-622/16: Protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato.* <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>
- Couldry, N. y Mejías, U. A. (2019).** *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism.* Stanford University Press.

DANE. (2024). *Pobreza multidimensional en Colombia: resultados 2023* [Boletín técnico]. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2023.pdf>

De Castro, F., Hogenboom, B. y Baud, M. (Coords.). (2015). *Gobernanza ambiental en América Latina*. CLACSO.

De Castro, W. H. L. y Meisel, A. (2018). *La desigualdad económica entre las regiones de Colombia, 1926-2016*. Cuadernos de Historia Económica, (47). <https://investiga.banrep.gov.co/es/content/la-desigualdad-economica-entre-las-regiones-de-colombia-1926-2016-0>

De Ferranti, D., Perry, G. E., Ferreira, F. H. G. y Walton, M. (2004). *Inequality in Latin America: Breaking with history?* World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/804741468045832887/pdf/28989.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2024). *Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2023* [Informe de coyuntura].

Deininger, K. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction*. World Bank.

Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5.^a ed.). SAGE Publications.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2023). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Bases%20PND%202022-2026.pdf>

Dos Santos, T. (2002). *La teoría de la dependencia: balance y perspectivas* (M. Bruckmann Maynetto, Trad.).

Durán, C. (2009). *Gobernanza en los parques nacionales colombianos: reflexiones a partir del caso de la comunidad Orika y su participación en la conservación*

- del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Revista de Estudios Sociales, (32), 60–72.*
- Escobar, A. (1995).** *Encountering development: The making and unmaking of the Third World.* Princeton University Press.
- Escobar, A. (2008).** *Territories of difference: Place, movements, life, redes.* Duke University Press.
- Escobar, A. (2010).** *Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales.* Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://bepe.org.ar/biblioteca/items/show/137>
- Escobar, A. (2014).** *Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia.* Ediciones UNAULA.
- Escobar, A. (2025).** *Hilos del pensamiento crítico: cultura, ecología, posdesarrollo, pluriverso y transiciones. Antología esencial.* CLACSO.
- Espitia, J. y Lugo, V. (2023).** *La resistencia civil: un acercamiento conceptual desde la experiencia de las organizaciones sociales en los Montes de María.* Ánfora, 30(55), 274–299.
- Estrada-Álvarez, J. (Coord.). (2019).** *El Acuerdo de Paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora.* CLACSO.
- Fair Trade International. (2023).** *Impacto del comercio justo en comunidades rurales.* Fair Trade.
- Fals-Borda, O. (1987).** *The application of participatory action-research in Latin America.* *International Sociology*, 2(4), 329–347.
- Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). (2023).** *Cacao fino de aroma: potencial y mercados internacionales.* Fedecacao.

Flórez-Yepes, G. Y. (2015). *La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano*. *Revista Electrónica Educare*, 19(3), 409–422. <https://www.redalyc.org/journal/1941/194140994022/html>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020: la sostenibilidad en acción*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *Certificado en agricultura adaptada al cambio climático: apoyando a nuestros agricultores en la sostenibilidad de sus modos de vida*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). *Blue transformation: Roadmap 2023–2030*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Forero Riaño, J. A. y Polanco Puerta, M. F. (2021). *Análisis de la deforestación en La Macarena, antes y después de los acuerdos de paz*. *Colombia Forestal*, 24(2), 9–23. <https://www.redalyc.org/journal/4239/423968057002/html>

Foro Nacional Ambiental. (2024). *Territorios colectivos de comunidades negras en el Pacífico [Policy brief]*.

Fraser, N. (2008). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Polity Press.

Fung, A. y Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.

Galvis, L. y Meisel, A. (2010). *Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: un análisis espacial*. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional

y Urbana, (120). Banco de la República. <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-120.pdf>

Garay-Salamanca, L. J. (2013). *Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista*. Contraloría General de la República. <https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2023/03/Mineria-en-Colombia-Vol-I.pdf>

Garay-Tapias, A. A., Contreras-Araque, A. y Escobar-Toledo, F. (2022). *Las mujeres en la actividad pesquera: una mirada al aporte de las platoneras de Buenaventura, Colombia*. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras*, 51(2), 63–82.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.

Gilbert, A. (2011). *Ten myths undermining Latin American housing policy*. *Revista de Ingeniería*, (35), 79–87. <https://www.redalyc.org/pdf/1210/121022763012.pdf>

González, J. I. (2013). *Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista*. *Revista de Economía Institucional*, 15(28).

González-Gallego, J. H. (2017). *Sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en Colombia: componentes institucionales y organizacionales [Tesis de maestría]*. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/items/51c8d93b-f011-453a-aa6d-1e4e5e7adb8c>

Gutiérrez, A., Restrepo, E., Vega, L. y Velandia, P. J. (Eds.) (2022). *Pasando trabajo: economía y vida campesina afrodescendiente en el Pacífico sur colombiano*. Fondo Editorial ICANH. <https://publicaciones.icanh.gov.co/index.php/picanh/catalog/book/188>

Hall, S. (Ed.) (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.

- Hanushek, E. A. y Woessmann, L.** (2011). *The economics of international differences in educational achievement*. En E. A. Hanushek, S. Machin y L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the economics of education* (Vol. 3, pp. 89–200). North-Holland.
- Hincapié, S.** (2022). *Introducción: ecología política y derechos humanos en América Latina*. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (130), 7–18.
- Hoffmann, O.** (2007). *Comunidades negras en el Pacífico colombiano: innovaciones y dinámicas étnicas*. Institut de Recherche pour le Développement (IRD) / Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Homedes, N. y Ugalde, A.** (2005). *La reforma de salud en América Latina: el pensamiento de los expertos y la realidad*. *Salud Pública de México*, 47(3), 228–240. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/8108>
- Hooker, J.** (2005). *Indigenous inclusion/Black exclusion: Race, ethnicity and multicultural citizenship in Latin America*. *Journal of Latin American Studies*, 37(2), 285–310.
- Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN).** (2023). *Tele-experticia, nuevo servicio que ofrecerá el Hospital Universitario Nacional en Tumaco*.
- Hurtado, L.** (2023). *Narrativas de resistencia en comunidades afrodescendientes del Pacífico*. *Revista Colombiana de Antropología*, 59(1), 77–96.
- Ibáñez, A. M. (Ed.)**. (2008). *El desplazamiento forzado en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza*. Ediciones Uniandes.
- Instituto Humboldt.** (2022). *Reporte Bio: nueva radiografía del estado de la biodiversidad en Colombia*. <https://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2022>
- Iza-Certuche, M. F.** (2018). *Interseccionalidad y construcción de paz territorial en Colombia: análisis desde el caso de las mujeres de Buenaventura*. Ciudad

- Paz-andó, 11(2), 16–28. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/cpaz/article/view/13757/14219>
- Kirchherr, J., Piscicelli, L., Bour, R., Kostense-Smit, E., Muller, J., Huibrechtse-Truijens, A. y Hekkert, M. (2018).** *Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU)*. *Ecological Economics*, 150, 264–272.
- Levy, S. (2008).** *Good intentions, bad outcomes: Social policy, informality, and economic growth in Mexico*. Brookings Institution Press. <https://archive.org/details/goodintentionsba0000levy>
- López, A. R. y Traldi Simoni, A. (Coords.). (2025).** *Los desafíos de la inclusión estadística de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe*. ALAP / UNFPA.
- López, D. y Quiñones, M. (2023).** *Participación política afrodescendiente en el Pacífico colombiano: retos y oportunidades*. *Revista Colombiana de Sociología*, 46(1), 89–110.
- López-Trujillo, M., Gómez-Londoño, G. y Marulanda-Echeverry, C. E. (2023).** *Condoto e Istmina sostenibles: una propuesta para el fortalecimiento regional con equidad y paz*. Editorial Tirant Lo Blanch. https://editorial.tirant.com/free_ebooks/9786287653245.pdf
- Madridejos-Ornilla, C. y Salinas-Coy, Y. (2018).** *Nuevos territorios de paz: aportes y recomendaciones para la territorialización de los acuerdos y la implementación de la reforma rural integral*. *Ópera*, (22), 5–27. <https://www.redalyc.org/journal/675/67557558002/html>
- Martínez-Alier, J. (2022a).** *Ecología política y economía ecológica: aportes para América Latina*. *Ecología Política*, 63, 45–59.

- Martínez-Alier, J.** (2022b). *The environmentalism of the poor and the future of global sustainability*. *Ecological Economics*, 197, 107–121.
- Martínez B., S. P.** (2019). *Entre bastidores: etnografía de la política pública para los afrodescendientes en Cali, Colombia*. *Revista Colombiana de Antropología*, 55(1), 213–237.
- Martínez, O. G.** (2022). *Racismo y discriminación en comunidades afrodescendientes del Pacífico sur de Colombia*. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(42), e20220109.
- Mena, M. I.** (2010). *Si no hay racismo no hay Cátedra de Estudios Afrocolombianos [Reseña]*. *Praxis & Saber*, (1), 125–128.
- Mena-Mosquera, V. E. y Andrade-C., H. J.** (2021). *Potencial de reducción de emisiones y captura de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en el Pacífico colombiano*. *Revista de Biología Tropical*, 69(4), 1252–1263. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442021000401252
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT).** (2021). *Política de turismo sostenible: Unidos por la naturaleza (Decreto 646 de 2021)*. <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio).** (2023). *Con la estrategia “Turismo para una cultura de paz”, Gobierno del Cambio invertirá \$8.200 millones [Comunicado de prensa]*.
- Ministerio de Cultura.** (2010). *Resolución 1645 de 2010 (Lista Representativa del PCI – Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia)*. https://normograma.mincultura.gov.co/compilacion/docs/resolucion_min-cultura_1645_2010.htm

- Ministerio de Educación Nacional (MEN).** (1998). *Decreto 1122 de 1998: Cátedra de Estudios Afrocolombianos*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1498>
- Ministerio de Minas y Energía (MinMinas).** (2024). *Diagnóstico base para la transición energética justa [Informe]*.
- Ministerio de Salud y Protección Social.** (2023a). *Brechas de acceso en salud en zonas rurales y étnicas de Colombia*. Ministerio de Salud y Protección Social.
- Ministerio de Salud y Protección Social.** (2023b). *Indicadores básicos de salud 2023*. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-2023.pdf>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).** (2023). *Brecha digital en zonas rurales y estrategias de conectividad en Colombia*. MinTIC.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.** (2024). *Informe de gestión 2023*. https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/20240131_informe-de-gestion-2023.pdf
- Misión de Observación Electoral (MOE).** (2025). *Informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales: análisis de tendencias, actores y dinámicas regionales durante 2024*. <https://moe.org.co/wp-content/uploads/2025/03/20250331-Informe-Anual-de-Violencia-contraliderazgos-2024-FINAL-Pub.pdf>
- Molina, D.** (2014). *Gobernanza ambiental en Colombia: la acción estatal y de los movimientos sociales*. *Ambiente y Desarrollo*, 18(34), 27–42.
- Morgan, D. L.** (2019). *Basic and advanced focus groups*. SAGE.

Múnera, A. (2005). *Fronteras imaginadas: la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano.* Editorial Planeta Colombiana.

Mustafa, I (2025). *Cambio climático, 0.6 °C menos de temperatura: Brasil defiende estrategias para combatir contaminantes de corta duración.* COP 30 Brasil, Amazonia.

Nancuante Benavente, V. A. (2022). *Aymaras y afrodescendientes en la enseñanza de las ciencias sociales en el Norte Grande de Chile [Tesis doctoral].* Universitat Autònoma de Barcelona.

OECD / FAO. (2021). *OCDE-FAO perspectivas agrícolas 2021-2030.* OECD Publishing / FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1c36cd-da-c08e-425f-9641-373a5d5358f1/content>

Olarte-Libreros, M. M. y Muñoz-Maya, C. M. (2025). *Prácticas sostenibles en la cadena de valor del cacao: una revisión sistemática de literatura.* *Tendencias*, 26(1), 191–215. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/9258>

Olave-Soler, S. (2023). *Afirmación cultural y música popular como mecanismos de contestación en Colombia.* *Nuevo Mundo Mundos Nuevos.*

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023a). *Economía azul y empleo digno en comunidades costeras.* OIT.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023b). *Juventud, emprendimiento e inclusión laboral en zonas rurales.* OIT.

Oslender, U. (2008). *Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano: hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales.* Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

- Osorio Garcés, C. E. y Clavijo Gallego, T. A.** (2022). *Todas las violencias: conversaciones sociales en torno al conflicto en el Pacífico caucano*. Tabula Rasa, (41), 99–124.
- Palacios, Y., García, I. y Valencia, W. G.** (2023). Desterritorialización de poblaciones afrocolombianas e indígenas como referente del conflicto armado: una aproximación desde el Chocó en el Pacífico colombiano en la etapa de posacuerdo (2016-2023). *Diálogo Andino*, (71), 164–176.
- Palomino-Morales, J. F.** (2022). La conectividad en el contexto rural: ¿marginalidad digital? *Revista Científica*, 7(26), 53–73.
- Pantoja Bohórquez, C. P.** (2014). *Impactos, resistencias y tensiones de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano al interior del conflicto armado interno*. Liminales. Escritos sobre Psicología y Sociedad.
- Pardo Rojas, M., Mosquera, C. y Ramírez, M. C. (Eds.)**. (2004). *Panorámica afrocolombiana: estudios sociales del Pacífico*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) / Universidad Nacional de Colombia.
- Parques Nacionales Naturales (PNN).** (2023). *Parques nacionales naturales y otras áreas protegidas del SINAP en los planes de desarrollo municipal y departamental 2024-2027: conservamos la vida de Colombia, ¡potencia de vida!* https://portalterritorial.dnp.gov.co/assets/documentosfase3/Parques_Nacionales_Cartilla_PDT-24-27.pdf
- Pérez-Niño, W.** (2021). Gobernanza ambiental y transformación social en Colombia. *Jurídicas*, 18(2), 281–296.
- Perry, G. E., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Maloney, W. F., Mason, A. D. y Saavedra-Chanduvi, J.** (2007). *Informalidad: escape y exclusión*. Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/889371468313790669/pdf/400080PUBOSPAN101OFFICIALOUSEONLY1.pdf>

- Portelli, A.** (1998). *Oral history as genre*. En *Narrative and genre*. Routledge.
- ProColombia.** (2023a). *Turismo cultural y biodiversidad en Colombia: informe de crecimiento sectorial*. ProColombia.
- ProColombia.** (2023b). *Estrategias digitales para la internacionalización de productos colombianos*. ProColombia.
- Procuraduría General de la Nación (PGN).** (2024). *Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia*.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).** (2021). *Informe sobre la brecha de emisiones 2021*. UNEP. <https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021>
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).** (2023). *Autonomías indígenas y descentralización en América Latina*. UNDP.
- Punch, M.** (1994). *Politics and ethics in qualitative research*. En N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 83–95). Sage Publications.
- Ramírez Flores, I. A.** (2020). *De la deconstrucción de la historia nacional o hacia una enseñanza de la historia para una ciudadanía plural*. *HistoriAgenda*, 4(41), 45–51. <https://revistas.unam.mx/index.php/historiagenda/article/view/77918>
- Ramírez, J. y Gómez, L.** (2023). *Educación para la bioeconomía y sostenibilidad territorial*. *Revista Educación y Desarrollo*, 20(3), 101–120.
- Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico.** (2022). *Infraestructura y gestión del conocimiento*. *Región Administrativa y de Planificación del Pacífico*. <https://rap-pacifico.gov.co/infraestructura-y-gestion-del-conocimiento>

- Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico.** (2024). *Plan Regional de Gestión – PRE Pacífico 2024-2027*. RAP Pacífico. <https://rap-pacifico.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Plan-Regional-de-Gestion-2024-2027.pdf>
- Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico.** (2025). *La educación en el Pacífico frente al contexto territorial*. <https://rap-pacifico.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Webinar-II-2021-Educacion.pdf>
- Restrepo, E.** (2004). *Conflicto e (in)visibilidad: retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. En *Utopía para los excluidos: el multiculturalismo en África y América Latina* (pp. 373–384). CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Restrepo, E.** (2010). *Etnicidad y políticas de titulación colectiva de tierras en el Pacífico colombiano*. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 7(64), 43–62. <https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038022.pdf>
- Restrepo, E.** (2013a). *Etnización de la negritud: la invención de las “comunidades negras” como grupo étnico en Colombia*. Universidad del Rosario.
- Restrepo, E.** (2013b). *Etnización de la negritud: la invención de las “comunidades negras” como grupo étnico en Colombia*. Editorial Universidad del Cauca.
- Restrepo, E.** (2016). “Estudios afrocolombianos” en la antropología: tres décadas después. En J. Tocancipá (Ed.), *Antropologías en Colombia: tendencias y debates*. Editorial Universidad del Cauca.
- Restrepo, E. y Rojas, A. (Eds.)**. (2004). *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. Editorial Universidad del Cauca.
- Restrepo, O. y Vega, R.** (2009). *Participación social y comunitaria en atención primaria de salud (APS)*. *Gerencia y Políticas de Salud*, 8(16), 46–60.

Revelo Rebolledo, J. y García Villegas, M. (Dirs.). (2018). *El Estado en la periferia: historias locales de debilidad institucional.*

Revista de Salud Pública. (2023). *Bojayá, salud mental y psicosocial en supervivientes de una masacre: revisión de alcance.* *Revista de Salud Pública*, 25(5), 1–5.

Rodríguez Mariaca, D. A., García Calán, C. A. y Jaramillo Molina, C. (2021). *La accesibilidad terrestre a los puertos marítimos de Colombia: una aproximación desde la equidad territorial.* *Revista Entorno Geográfico.*

Rodríguez, C. (2008). *Lo que le vamos quitando a la guerra: medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia.* *Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL).*

Rodríguez, C. (2020). *Informalidad laboral en Colombia: la necesidad de explorar formas diversas y atípicas.* *Periódico UNAL.* <https://periodico.unal.edu.co/articulos/informalidad-laboral-en-colombia-la-necesidad-de-explorar-formas-diversas-y-atipicas>

Rodríguez, D. P. (2025). *Festival Petronio Álvarez generó \$37 mil millones en 2022.* *La República.* <https://www.larepublica.co/ocio/el-petronio-la-plataforma-musical-que-genero-en-su-recien-edicion-37-000-millones-3462446>

Romero, M. (2009). *Geografía económica del Pacífico colombiano.* *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana*, (116). Banco de la República.

Rojas, D. y Castillo, M. (2022). *Organización comunitaria y modernidad en el Pacífico.* *Revista Colombiana de Antropología*, 58(2), 119–138.

Sachs, W. (Ed.). (1996). *Diccionario del desarrollo: una guía del conocimiento como poder.* PRATEC.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers (4.ª ed.).* SAGE.

- Santos, B. de S.** (2018). *La difícil construcción de la justicia cognitiva*. En B. de S. Santos y M. P. Meneses (Eds.), *Justicia cognitiva, luchas contra la invisibilidad y epistemologías del sur* (pp. 15–38). CLACSO.
- Scheyvens, R. y Van der Watt, H.** (2021). *Tourism, empowerment and sustainable development: A new framework for analysis*. *Sustainability*, 13(22), 12606.
- Sen, A.** (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Serebrisky, T.** (2014). *Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Soto Moreno, L. J.** (2014). *La narración oral como herramienta en la construcción de la memoria colectiva de la violencia: experiencia con mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Colombia*. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 5(1), 55–76.
- Tommasino, H., Ferraro, M. y Pérez Sánchez, M.** (2022). *La investigación participativa: sus aportes a la extensión crítica*. *Saberes y Prácticas*. *Revista de Filosofía y Educación*, 7(1), 172–195.
- Transparencia por Colombia.** (2023). *Cerrémosle la vía a la corrupción*. <https://transparenciacolombia.org.co/cerremosle-la-via-a-la-corrupcion>
- Trucco, D. y Sunkel, G.** (2010). *Nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la educación en América Latina: riesgos y oportunidades*. *Políticas Sociales*, (164). CEPAL. <https://ideas.repec.org/p/ecr/col041/6174.html>
- Ulloa, A.** (2022). *Mujeres, naturaleza y territorio: luchas socioambientales en el Pacífico colombiano*. *Revista Colombiana de Antropología*, 58(2), 55–77.
- UNESCO.** (2015). *Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas* (Lis-

- ta Representativa del PCI). UNESCO. <https://ich.unesco.org/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099>*
- UNESCO.** (2023a). *Participación comunitaria y sostenibilidad en proyectos culturales. UNESCO.*
- UNESCO.** (2023c). *Patrimonio cultural inmaterial del Pacífico colombiano. UNESCO.*
- UNGRD.** (2015). *Evaluación social: agua y saneamiento básico en el Pacífico Sur – Guapi y Tumaco. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.*
- UNICEF.** (2023). *Community-based child nutrition programs in Latin America: Lessons from Colombia and Peru. UNICEF.*
- Valencia-Gutiérrez, A.** (2012). *Memoria y violencia: a los cincuenta años de “La Violencia en Colombia” de monseñor Guzmán et al. Sociedad y Economía, (23), 59–84.*
- Valencia-Llano, A.** (2014). *Los orígenes coloniales del puerto de Buenaventura. Historia y Memoria, 9, 221–246.*
- Valencia, I. H. y Carrejo, J. S.** (2024). *Gobernanza ambiental para la construcción de paz en Colombia. FES Colombia.*
- Van Dijk, T. A.** (1998). *El discurso y la reproducción del racismo. Lenguaje en Contexto, 1(1–2), 131–180.*
- Velásquez Mosquera, A. F.** (2021). *Cátedra de Estudios Afrocolombianos: escenario académico para propiciar la educación inclusiva e intercultural en Colombia. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (RIDE), 12(23), e289.*

- Verwimp, P., Justino, P. y Brück, T. (2009).** *The analysis of conflict: A micro-level perspective.* *Journal of Peace Research*, 46(3), 307–314. <https://ssrn.com/abstract=2127677>
- Viáfara López, C. A. (2015b).** *Desigualdades educativas según raza/etnia y clase social en Colombia.* *Revista de Economía del Caribe*, (10), 171–193.
- Viáfara López, C. A. y Serna Alvarado, N. J. (2015a).** *Desigualdad de oportunidades educativas en la población de 15 a 29 años en Brasil y Colombia según autoclasificación étnico-racial.* *Sociedad y Economía*, (29), 151–174. <https://www.redalyc.org/pdf/996/996392450009.pdf>
- Wade, P. (2011).** *Multiculturalismo y racismo.* *Revista Colombiana de Antropología*, 47(2), 15–35.
- Walsh, C. (2010).** *Interculturalidad crítica y proyecto político.* En J. Melgarejo (Ed.), *Educación intercultural: miradas críticas a la de/colonización de la escuela* (pp. 37–54). Abya Yala.
- World Bank. (2023).** *Blockchain for supply chain transparency in agriculture.* World Bank.
- WWF. (2025).** *Las diez preguntas que deberíamos hacernos sobre los manglares.* <https://www.wwf.org.co/en/?364411/10-preguntas-que-deberiamos-hacernos-de-los-manglares>

èditorial

Universidad de **Nariño**

Año de publicación: 2026

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

"Pacífico Invisible: La Colombia que Nadie Quiere Ver" es una obra disruptiva que investiga y contrasta las riquezas y desafíos de una de las regiones más promisorias y marginadas de Colombia: el Pacífico. Los autores presentan un análisis sobre las desigualdades sociales, económicas y ambientales que definen la vida en esta región, destacando la exclusión histórica que ha sufrido a pesar de su notable biodiversidad y riqueza cultural. El texto no se limita a un diagnóstico, sino que plantea una reflexión crítica sobre el futuro de esta región, invitando a visibilizar al Pacífico como un asunto clave en la discusión global sobre sostenibilidad y justicia social.

El libro ofrece una mirada sobre las estrategias emergentes desde las comunidades afrodescendientes e indígenas, que, a pesar de las adversidades, han logrado transformar sus condiciones a por medio de la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal, la economía solidaria y el ecoturismo. Estas actividades no solo sirven para mejorar sus condiciones de vida, sino que proponen un modelo de desarrollo alternativo de repercusiones globales. Los autores destacan cómo estas iniciativas brindan posibilidades frente al modelo económico extractivista, insostenible para el medio ambiente y la humanidad, especialmente en el contexto del cambio climático.

Uno de los mayores logros de la obra es su capacidad para conectar lo local con lo global. Los problemas del Pacífico, como la afectación medioambiental causada por la minería ilegal, la violencia estructural y la pobreza multidimensional, no son solo temas regionales, sino reflejos de dinámicas globales que exigen una respuesta integral. Al situar estos problemas en el contexto global, "Pacífico Invisible" subraya la urgencia de un cambio estructural en los modelos de desarrollo, que prioricen la justicia social, la equidad y la sostenibilidad, no solo en Colombia, sino en el planeta.

El libro también cuestiona la narrativa oficial de Colombia, que ha silenciado las voces del Pacífico, relegando sus tradiciones y saberes ancestrales a un segundo plano. A lo largo de la obra, los autores valoran la resiliencia de las comunidades pacíficas, mostrando cómo han logrado resistir a través de la innovación y la preservación de sus culturas. "Pacífico Invisible" se convierte, así, en una invitación a mirar más allá de la periferia y a reconocer en el Pacífico no solo una región marginal, sino un espacio de oportunidades y de soluciones innovadoras para los retos que enfrentamos como sociedad.



editorial
Universidad de Nariño